



PENSAMIENTO PROPIO

REVISTA BILINGÜE DE CIENCIAS SOCIALES DEL GRAN CARIBE

Antillas y Aruba ante los Países Bajos
GERT OOSTINDIE Y PETER VERTON

La sociedad civil transnacional y los desafíos de la globalización
ANDRÉS SERBIN

Centroamérica: ¿Qué será de nosotros?
ALVARO DE LA OSSA

México y el Gran Caribe:
Entre la tradición gubernamental y la alternancia ciudadana
ROSALBA ICAZA

NUEVA EPOCA

9

ENERO-JUNIO 1999 / AÑO 4

PENSAMIENTO PROPIO es una revista de análisis socioeconómico que divulga los estudios y las investigaciones de la red CRIES. Estimula estudios que enfoquen a la región en su totalidad, con el propósito de crear un foro intelectual abierto a las propuestas democráticas para Centroamérica y el Gran Caribe.

Las ideas expresadas en los textos aquí publicados son de la exclusiva responsabilidad de sus autores, y no reflejan necesariamente el punto de vista de

la revista. El Comité Editorial de *Pensamiento Propio* invita a todas las personas interesadas a enviar sus aportes a este foro de debate, pero se reserva el derecho de publicación de las colaboraciones recibidas. Se permite la reproducción de los contenidos de la revista, a condición de que se mencione la fuente y se envíen dos copias a la redacción.

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de ASDI.



LA COORDINADORA REGIONAL DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES (CRIES) es una red de centros de investigación en Centroamérica y el Caribe. Fue creada en 1982 y actualmente están afiliados más de 30 centros en toda la región. El objetivo principal de CRIES es contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo social para los países y territorios del Gran Caribe, que sea equitativo y sostenible en términos económicos, ambientales y humanos.

El Gran Caribe está integrado por todos los países y territorios de Centroamérica, el Caribe, México, Colombia y Venezuela. El sustento de esta concepción grancaribeña reside en la matriz económica y social que tienen en común las sociedades que lo integran, y que se refleja en sus problemas y retos, así como en la idea de que la viabilidad de las alternativas en estos tiempos de globalización y de megabloques, demanda la construcción de amplios e incluyentes espa-

cios regionales de concertación y coordinación, que posibiliten una activa y sana reinserción de la región en el entorno internacional.

Por otro lado, un modelo alternativo de desarrollo que beneficie a las grandes mayorías sólo puede construirse desde abajo y desde dentro de la sociedad, sustentado en la participación activa y democrática de las organizaciones sociales y populares, representativas de todos los sectores, principalmente de los más excluidos. CRIES se vincula a tales sectores y organizaciones para contribuir a su fortalecimiento interactuando y acompañándoles en el proceso de construcción de opciones viables y en la incidencia en las políticas económicas y sociales.

CRIES desarrolla actividades de investigación, participación en foros y actividades regionales, publicaciones, formación, difusión de información y promoción de las telecomunicaciones.



PENSAMIENTO PROPIO

REVISTA BILINGÜE DE CIENCIAS SOCIALES DEL GRAN CARIBE

NUEVA EPOCA

9

ENERO-JUNIO 1999 / AÑO 4

MEMBRESIA DE CRIES

BARBADOS

Caribbean Policy Development Centre (CPDC)
Women & Development Unit (WAND)

BELICE

Society for the Promotion of Education & Research (SPEAR)

COLOMBIA

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI)
Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Javeriana

COSTA RICA

Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE)
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
Fundación Centroamericana por la Integración (FCI)

CUBA

Centro de Estudios sobre América (CEA)
Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI)

EL SALVADOR

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)
Instituto para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (IDEESES)
Tendencias

GUATEMALA

Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO)

HAITI

Centre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour le Developpement (CRESFED)
Group Haitien des Recherches & D'Actions Pedagogiques (CHRAP)

HONDURAS

Centro de Documentación de Honduras (CEDOH)

Centro de Investigación y Estudios Nacionales (CIEN)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)

JAMAICA

Association of Caribbean Economists (ACE)
Consortium Graduate School of Social Sciences
Institute of Social & Economic Research (ISER)

MEXICO

Foro de Apoyo Mutuo (FAM)

NICARAGUA

Centro de Estudios e Investigaciones (Nitlapán-UCA)
Centro de Investigación de la Costa Atlántica (CIDCA)

PANAMA

Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Centro de Capacitación y Desarrollo Social (CECADES)
Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" (CELA)
Centro de Investigación y Docencia de Panamá (CIDPA)

REPUBLICA DOMINICANA

Centro de Investigaciones Económicas para el Caribe (CIECA)
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS)

PUERTO RICO

Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña (CEREP)

TRINIDAD Y TOBAGO

Caribbean Network for Integrated Rural Development (CNIRD)

VENEZUELA

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP)

**PENSAMIENTO
PROPIO**

ENERO-JUNIO 1999 / AÑO 4

Director: Andrés Serbin

Comité Editorial: Orestes Papi, Diego Ferreyra, Enrique Brito, Clara Arenas,
Alfonso Goitia, Neville Duncan, Judith Wedderburn, Hernán Yanes, Lillian Levi

Edición: Lillian Levi, Traducción: Judy Butler, Claudia Ferreira, Abbie Fields,

Diseño: Sorah Broder, Impresión: Imprimatur, ISSN:1016-9628

CRIES BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENTE

Andrés Serbin
*Instituto Venezolano de Estudios Sociales
y Políticos (INVESP), Venezuela*

DIRECTOR EJECUTIVO

Orestes Papi
*Coordinadora Regional de Investigaciones
Económicas y Sociales (CRIES), Nicaragua*

SECRETARIO

Alfonso Goitia
Concertación Centroamericana, El Salvador

VOCALES

Enrique Brito
Foro de Apoyo Mutuo (FAM), México

Clara Arenas

*Asociación para el Avance de las Ciencias
Sociales (AVANCSO), Guatemala*

Neville Duncan

*Department of Government, Faculty of Social
Sciences, University of the West Indies, Barbados*

Judith Wedderburn

*Association of Caribbean Economists (ACE)
Jamaica*

Hernán Yanes

Centro de Estudios sobre América, Cuba

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Victor Bulmer-Thomas
*Institute of Latin American Studies,
University of London, UK*

Alvaro de la Ossa
*Fundación Centroamericana por la Integración (FCI),
Costa Rica*

Rosario Espinal
Department of Sociology, Temple University, USA

Eduardo Gamarra
*Latin American and Caribbean Centre,
Florida International University, USA*

Norman Girvan
*Consortium Graduate School of Social Sciences,
University of West Indies, Jamaica*

Xabier Gorostiaga
Presidente Fundador de CRIES

Jorge Grandi
*Centro de Formación para la Integración Regional
(CEFIR), Uruguay*

Alfredo Guerra-Borges
*Instituto de Investigaciones Económicas,
Universidad Nacional Autónoma de México*

Rafael Hernández
Revista Temas, Cuba

Francine Jácome
*Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos
(INVESP), Venezuela*

David Lewis
Caribbean/Latin American Action (C/LAA), USA

Gilbert Merckx
Latin American Institute, University of New Mexico, USA

Gert Oostindie
*Royal Institute of Linguistics and Anthropology,
The Netherlands*

Laverne E. Ragster
University of the Virgin Islands

Socorro Ramírez
*Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales (IEPRI),
Universidad Nacional de Colombia*

Carlos Sojo
*Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Costa Rica*

Edelberto Torres Rivas
*Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Guatemala*

SOBRE LA PUBLICACION DE MATERIALES EN PENSAMIENTO PROPIO

CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales), a través de su Revista *Pensamiento Propio*, invita a la comunidad académica de las Américas y de otras regiones a presentar trabajos para su publicación.

Pensamiento Propio desea divulgar los aportes de la comunidad académica sobre los siguientes temas:

- Sociedad civil, democracia, gobernabilidad regional
- Impacto de la globalización y de la integración en la región
- Temas y problemas de la agenda emanada de estas prioridades

Además de estos temas, se acogerán textos que aborden otros asuntos de interés regional, continental o mundial en el área de las ciencias sociales. Todos los materiales serán sometidos al arbitraje de nuestro Consejo Asesor Internacional. La decisión última sobre su publicación compete exclusivamente a nuestro Comité Editorial.

En cuanto a la presentación y el formato, rogamos a las personas interesadas ajustarse a los siguientes requisitos:

- Original impreso en español o en inglés
- Versión en *Word* o *Wordperfect*, en disquete 3.5 HD
- Extensión máxima de 15 páginas
- Incluir un resumen del contenido
- Incluir una breve nota curricular

INFORMATION ABOUT PUBLISHING IN PENSAMIENTO PROPIO

CRIES (The Regional Coordinator of Economic and Social Research), through its journal *Pensamiento Propio*, invites the academic community from the Americas and other regions to submit their research works for publication.

Pensamiento Propio would like to spread contributions about the following themes:

- Governability, citizen security and civil society
- Follow up to regional integration processes
- Globalization and alternative development models

In addition to these themes, articles are being sought that address other issues of regional, continental or international interest in the social sciences arena. All materials will be subject to our International Advisory Board's peer review process. The final decision about publication will be made by the *Pensamiento Propio* Editorial Board.

Manuscripts should be submitted in the following format:

- Original printed copy in Spanish or English
- Copy in *Word* or *WordPerfect*, on 3.5 HD diskette
- Maximum length of 15 pages
- Include a summary of the text's content
- Include a brief author's note

REVISTA PENSAMIENTO PROPIO/CRIES

Apartado Postal 3516, Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 222-5217, 222-5137, 268-2364, Fax: (505) 268.15.65

Correo electrónico: ppropio@nicarao.org.ni

Índice

EDITORIAL	1
INVESTIGACION Y ANALISIS	
Dependencia ambivalente: Opiniones y expectativas antillanas y arubeñas sobre el Reino de los Países Bajos GERT OOSTINDIE Y PETER VERTON	3
La sociedad civil transnacional y los desafíos de la globalización ANDRÉS SERBIN	27
PUNTO DE VISTA	
Cómo la sociología del Norte se celebra a sí misma HEINZ R. SONNTAG	57
Centroamérica: ¿Qué será de nosotros? ALVARO DE LA OSSA	71
COYUNTURA	
México y el Gran Caribe: Entre la tradición gubernamental y la alternancia ciudadana ROSALBA ICAZA	83
DOCUMENTOS	
Declaración de Río de Janeiro	103
RESEÑA	
Sociedad civil e integración regional en el Gran Caribe SOCORRO RAMÍREZ	
Liberalización financiera y capital bancario en América Central MATEO AMBROSIO ALBALÁ	109
Reforma económica, Estado y sociedad en Centroamérica FRANCINE JÁCOME	115
PULSO BIBLIOGRAFICO	121
COLABORAN EN ESTA EDICION	127

En portada:

Detalle magnificado del Cantoral Kantule, Guillermo Trujillo (Panamá), 24" x 20" / 1981,
Oleo sobre tela, en Trujillo, Caracas: 1990



Publicaciones recientes de CRIES

LIBROS

La transformación neoliberal del sector público

Trevor Evans (coordinador) 1995, 292 p

La integración centroamericana ante el reto de la globalización

(Antología) Alfredo Guerra-Borges. 1996, 187 p

Hacia un proyecto nacional de desarrollo. Políticas económicas en Panamá

Juan Jované. 1996, 70 p

Transición política y reconversión militar en Nicaragua

Roberto Cajina. 1997, 383 p

Orden social y gobernabilidad en Nicaragua

Elvira Cuadra, Andrés Pérez Baltodano, Ángel Saldomando. 1998, 209 p (edición agotada)

Los Estados des-Unidos de América Central

Alcides Hernández. 1998. 60 p

Liberalización financiera y capital bancario en América Central

Trevor Evans. 1998, 136 p

Violencia social en Centroamérica. Ensayos sobre gobernabilidad y seguridad ciudadana

Varios autores. 1999, 168 p.

La unión centroamericana: condiciones y perspectivas

Alvaro de la Ossa

CUADERNOS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO

CUADERNOS CRIES 1 (1997)

**Ajuste estructural y sostenibilidad agrícola en Panamá:
el caso de las exportaciones no tradicionales**

Andrés Achong Pérez

La cuenca hidrográfica del Canal de Panamá: posibilidades de un desarrollo sustentable

Carmen A. Miró, Jorge Castillo y Álvaro Uribe, con Rubiel Cajar, Roberto Carrillo y Giulia De Sanctis

La economía de la explotación maderera en la región oriental de Panamá: Darién

Gersán Joseph, Álvaro Castillo y Ginella García Cano

CUADERNOS CRIES 2 (1997)

El impacto de las políticas de ajuste estructural sobre el medio ambiente en Honduras

Ian Walker (coordinador nacional), Jenny Suazo, Alison Thomas y Herold Jean-Pois

Deforestación y frontera agrícola en Nicaragua.

Cristóbal Maldidier y Tupac Antillón, con Ner Artola, Alfredo Ruiz y Karla Castillo

CUADERNOS CRIES 3 (1999)

La unión centroamericana: bases y requisitos constitucionales

Julio Icaza Gallard

Experiencias de la unión centroamericana y sus limitaciones (1821-1993)

Marco A. Valle Martínez

CUADERNOS CRIES 4 (1999)

Compendio estadístico del Proyecto Unión Centroamericana

Gabriela Lobo H.

CUADERNOS CRIES 5 (1999)

Democracia y seguridad ciudadana: Sistema de Justicia Penal en Nicaragua

Dora María Téllez

Solicítelos a CRIES

Apartado 3516, Managua, Nicaragua

Tels: (505) 222-5217, 222-5137 y 268-2362, Fax: (505) 268-1565

correo electrónico: cries@nicarao.org.ni



EDITORIAL

Los procesos de globalización e integración engendran una serie de relaciones e interacciones entre actores políticos, económicos y sociales caracterizadas por el dinamismo y la complejidad. El debate en torno a las múltiples dimensiones de estos procesos en el Gran Caribe ha expuesto, en los últimos años, la emergencia de actores y elementos de creciente influencia en la definición de estrategias regionales.

Los artículos reunidos en el presente número de Pensamiento Propio, noveno en su serie, *recogen reflexiones sobre temas centrales en estos procesos y su trascendencia en la evolución y redefinición de espacios de acción e incidencia en la región*. Así, Andrés Serbin analiza el fenómeno de la transnacionalización de la sociedad civil y su articulación como actor político frente a los múltiples retos de la globalización y regionalización, en un contexto en el cual el neoliberalismo se presenta como paradigma dominante. Los temas de sociedad civil y relaciones internacionales surgen como elementos centrales en los artículos de Rosalba Icaza sobre México y el Gran Caribe, y en el análisis sobre percepciones antillanas hacia el reino holandés, de Gert Oostindie y Peter Verton. En la sección *Documentos* presentamos la “Declaración de Río de Janeiro” preparada por el Foro de la Sociedad Civil para el Diálogo Europa – América Latina y el Caribe en su reunión paralela al encuentro de presidentes europeos, latinoamericanos y caribeños celebrada en julio del presente año.

En esta edición, Pensamiento Propio presenta una nueva sección titulada *Punto de Vista*, que se abre con un artículo de Heinz Sonntag y otro de Alvaro de la Ossa, quienes analizan respectivamente la “dependencia” intelectual en el área de la sociología, y una coyuntura centroamericana caracterizada por el relevo de la vieja oligarquía por parte de un nuevo grupo dominante ligado al mundo financiero internacional, y la fragmentación de la sociedad civil en un entorno internacional de profunda marginalidad y dependencia. Esta adición a Pensamiento Propio expondrá opiniones sobre la problemática del Gran Caribe que, como todos los otros artículos presentados en nuestra publicación, esperamos que estimulen el debate y el entendimiento sobre la región.

PENSAMIENTO PROPIO

REVISTA BILINGÜE DE CIENCIAS SOCIALES DEL GRAN CARIBE

Pensamiento Propio se publica dos veces al año (mayo y noviembre)
Pensamiento Propio is published two times per year (May and November)

Precios por suscripción anual

*(Prices for a one-year subscription) **

Centroamérica, México y El Caribe	US\$ 30.00
Estados Unidos, Canadá, América del Sur	US\$ 31.00
Europa	US\$ 36.00
Asia y Australia	US\$ 38.00

* Estos precios incluyen gastos de envío por vía aérea / *These prices include postage by air mail*

Números anteriores 50% descuento. *Back issues available at 50% discount.*

Para suscripciones o información sobre canjes de *Pensamiento Propio*
con instituciones y bibliotecas, escriba a:
*(To order your subscription, or for information about exchanging Pensamiento Propio
with institutions and libraries, write to:)*

CRIES

Pensamiento Propio

Apartado 3516, Managua, Nicaragua

Teléfono: (505)222-5217, (505)222-5137, (505)268-2362.

FAX: (505)268-1565, e-mail: cries@nicarao.org.ni

Use máquina o letra de imprenta / Please type or print

Adjunto cheque o giro bancario número: / *Number of enclosed check or money order:*

Del banco / *Bank* _____

Por la cantidad de / *Amount* _____ Fecha / *Date* _____

Nombre / *Name* _____

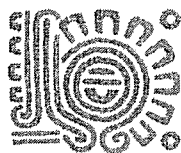
Dirección / *Address* _____

Ciudad / *City* _____ Estado / *State* _____

Código Postal / *Postal Code* _____ País / *Country* _____

Emita su cheque a nombre de CRIES, por su suscripción anual a Pensamiento Propio

Please make checks payable to: CRIES, for a one-year subscription to Pensamiento Propio



Dependencia ambivalente

Opiniones y expectativas antillanas y arubeñas sobre el Reino de los Países Bajos*

GERT OOSTINDIE Y PETER VERTON

Más de cuarenta años atrás, el Estatuto del Reino de los Países Bajos (1954) clasificaba a Surinam y a las Antillas Holandesas como socios autónomos del Reino de los Países Bajos. Dos décadas más tarde, en 1975, Surinam obtuvo su independencia. En 1986, a Aruba se le otorgó condición de país separado dentro del Reino, lo que no demostró ser un paso en el camino hacia la independencia, como lo habían anticipado los Países Bajos, pero que al final se cambió a la condición de país autónomo dentro del Reino (1996).¹ Ni las Antillas Holandesas ni Aruba quieren independencia. En los 90, Holanda aceptó que las seis islas con sus más de 300,000 habitantes continuaran perteneciendo al Reino por un periodo indefinido.² Al mismo tiempo, Holanda inició una política de estrecha participación en la administración de las islas. Esta nueva política, al igual que el asunto de las relaciones mutuas entre las islas, son tema de candentes debates entre políticos y administradores a ambos lados del océano.

A menudo, en estos debates se dan por sentadas las opiniones de los habitantes de las islas sobre estos temas, aun cuando poco se sabe lo que en realidad piensan. Dada esa falta de conocimiento, entre septiembre de 1997 y enero de 1998 se condujo una encuesta a gran escala en las seis islas. El sondeo abordó las opiniones y expectativas de los antillanos y arubeños con respecto al Reino, y en particular a Holanda. También se tomaron en cuenta las opiniones sobre las relaciones mutuas entre las islas. Es la primera vez que se examina, a tal escala, el asunto de las relaciones postcoloniales en el Caribe.

En otros documentos hemos señalado el contexto regional y el patrón de previos sondeos de opinión en las Antillas Holandesas y Aruba, y también hemos discutido con lujo de detalle los resultados de nuestra propia y amplia encuesta (Oostindie & Verton, 1998a, 1998b). En este breve artículo nos limitamos a hacer algunas observaciones generales, a presentar los resultados más sobresalientes de nuestra investigación y sus implicaciones.

REFERENDOS SOBRE LAS OPCIONES CONSTITUCIONALES EN EL CARIBE

Cerca de un 15 % de los 35 millones de habitantes del Caribe viven en países o islas que aún tienen un vínculo constitucional directo con el antiguo poder colonizador: Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, los departamentos franceses de ultramar, unos cuantos territorios británicos dependientes, y las Antillas Holandesas y Aruba. Contra lo que se esperaba anteriormente, no hay nada que sugiera que estos territorios e islas en el Caribe que “todavía” no son independientes optarán por su independencia constitucional en un futuro cercano. En términos generales, los habitantes de estos territorios disfrutan de un alto nivel de vida y mejores condiciones constitucionales y legales que las poblaciones de los países independientes; las democracias en estas áreas son relativamente estables, y en la mayoría de los casos los residentes de estas islas no independientes tienen derecho a vivir en la (ex) madre patria.³ El diseño de la relación postcolonial no es el mismo para todos los territorios, de tal manera que la pregunta sobre cuál es el modelo más eficaz y el más apreciado por las respectivas poblaciones no tiene una respuesta determinada.

A través de los años son muchos los referendos que se han hecho en el Caribe sobre condición y desarrollo constitucional. Llama

la atención que esto casi nunca se haya hecho en colonias o territorios que se estaban preparando para una independencia rápida. Sólo en Puerto Rico, Bermuda, Aruba y las Antillas Holandesas se han convocado plebiscitos oficiales. Fuera de ello, las encuestas de opinión han sido siempre en una escala mucho menor. El resultado de estos referendos y sondeos de opinión siempre ha sido y sigue siendo el mismo: allí donde a la población se le da la opción, la gran mayoría opta por mantener la situación de no independiente. Sin embargo, lo que nunca queda claro de estas consultas es exactamente qué motiva a las personas a expresarse como lo hacen. Los resultados de las investigaciones tampoco arrojan luz alguna sobre si la decisión de mantener una situación de no independencia implica que los ciudadanos están a favor de continuar con la estructura constitucional elegida.

En el caso de los departamentos de ultramar y de la mayoría de los territorios británicos dependientes, las decisiones sobre la situación constitucional fueron tomadas exclusivamente por políticos y funcionarios públicos en ambos lados del océano. En la práctica esto significa una fuerte voz europea en el gobierno local, lo que podría provocar resentimiento y una reacción política, pero no una oposición fundamental de mucho respaldo hacia el *statu quo*. En el caso de los departamentos de ultramar, a pesar de una cautelosa descentralización en los 80, el temor sobre las consecuencias de la unificación europea parece haber fortalecido, después de todo, la relación de los departamentos de ultramar con Francia.

En otros lugares la población local fue directamente consultada a través de un referendo. La independencia nunca alcanzó un apoyo significativo. El plebiscito en las Antillas Holandesas (1993-94) lo demostró claramente (cuadro 1).

A pesar de que en Bermuda los proponentes de la independencia presionaron por un referendo, los que se oponían estaban en clara mayoría (73.6 %), aunque la participación fue baja (59 %). Al mismo tiempo, estos referendos no han dado una idea muy clara sobre las opiniones y expectativas de los habitantes de esas islas en cuanto a la forma específica de la relación postcolonial. Esta pregunta no se planteó en el referendo de Bermuda, y en el caso de las Antillas Holandesas sólo se hizo en la medida que los antillanos también podían expresar sus opiniones sobre las relaciones mutuas entre las islas.

En cuatro ocasiones se preguntó a los puertorriqueños sus opiniones sobre el estado constitucional de su isla (1951, 1967, 1993,

1998). En los referendos de 1967 y 1993, a los puertorriqueños se les ofreció una opción en la se hicieron explícitas las diferencias cualitativas en la relación con los Estados Unidos. Además de independencia, también se les dio la opción por la categoría de Estado pleno, y de (mantener o ampliar) la condición de Estado Libre Asociado (ELA). Esta última opción suponía un grado considerable de autonomía para la isla. Con el transcurso del tiempo, el apoyo a favor de un ELA disminuyó (de 76.5 % en 1951 y 60.4 % en 1967 a 48.6 % en 1993), mientras que la opción por la total incorporación como un Estado de los Estados Unidos aumentó en popularidad (de 39 % en 1967 a 46.4 % en 1993). El problema, sin embargo, como ya se reconoce ampliamente, es que la manera en que la política partidaria presentó las tres opciones hizo que las preguntas en el referendo de 1993 fueran provocativas e insuficientemente claras.

Fue por esta razón que en diciembre de 1998 se realizó un nuevo referendo. Una vez más, éste demostró, más que cualquier otra cosa, ambivalencia y polarización. De las opciones tradicionales (condición de Estado, condición de ELA, independencia), la condición de Estado pleno alcanzó un 46%. Esta vez, sin embargo, los abanderados del Estado asociado, insatisfechos con la decisión de los Estados Unidos de no permitir la opción "irrealista" de una condición "mejorada" del ELA, aconsejaron a sus seguidores "no optar por ninguna de las opciones mencionadas", un consejo que de hecho siguieron el 49% de los votantes. Este resultado ambivalente no sólo demuestra las divisiones dentro de la población puertorriqueña (a excepción del rechazo virtualmente general a la independencia plena en este momento), sino también el papel decisivo del gobierno de los Estados Unidos. Después de todo, el hecho de que el congreso norteamericano se negara a considerar una "condición de ELA mejorada" fue decisivo en el resultado de este referendo. El asunto de la condición de Puerto Rico sigue, pues, en un punto muerto.

LA CONTINUACIÓN DEL REINO TRASATLÁNTICO

La posibilidad de la independencia para las Antillas Holandesas y el asunto de si las seis (y más tarde cinco) islas antillanas deberían permanecer juntas o no, dominó la agenda política del Reino en los 70 y los 80. En los 90 el tema de la independencia se archivó por tiempo indefinido en consulta con las partes involucradas. Sin embargo, la estructura interna de las Antillas Holandesas siguió siendo tema de

discusión. Aruba se convirtió en un país separado dentro del Reino. El debate sobre las Antillas Holandesas se centra no sólo en hasta qué punto la descentralización es funcional, sino cada vez más en la opción de una mayor fragmentación de las Antillas.

El reconocimiento por parte de los holandeses de que no podían obligar a las islas a aceptar la independencia significó que un tema de importancia quedaba fuera de agenda. Por otra parte, hay cada vez más debate, malestar y conflicto entre los socios con respecto a la autoridad y competencia dentro del Reino transatlántico, debido principalmente a problemas en la administración pública de las Antillas Holandesas y Aruba.

Sobre la base del Estatuto, el Reino debe garantizar los derechos humanos, la seguridad legal y el buen gobierno. Este artículo, sin embargo, está formulado de una manera muy vaga para que pueda servir como instrumento práctico en la formulación de políticas. También se plantean preguntas sobre el diseño institucional del Reino, las que incluyen el hecho de que el gobierno del Reino no rinda cuentas a un correspondiente parlamento del Reino. Existen, pues, muchos argumentos sobre la necesidad de “modernizar” las relaciones dentro del Reino. Otra razón por la cual cabe revisar estas relaciones es la creciente internacionalización y globalización de los asuntos de política nacional. Sobre la base de los acuerdos internacionales, las responsabilidades que antes estaban en manos de los países individuales ahora se están transfiriendo al Reino en un creciente número de áreas relacionadas con las políticas. En este contexto, la actualización de esas relaciones también significa buscar un nuevo equilibrio entre la autonomía de los países involucrados y la cooperación dentro de la asociación ampliada del Reino. Las relaciones con la Unión Europea también tendrán que tomarse cada vez más en cuenta para la formulación de políticas.

Hasta la fecha, los esfuerzos dirigidos a revisar las relaciones constitucionales no han tenido éxito. Holanda casi siempre toma la iniciativa en el nombre del Reino. En la práctica, el creciente número de casos en los que el Reino actúa en nombre de los países individuales implica una influencia cada vez mayor de Holanda en asuntos que antes eran del dominio exclusivo de la política antillana y/o arubeña. Administradores, funcionarios públicos y representantes de grupos de interés antillanos y arubeños frecuentemente expresan resentimiento hacia la creciente influencia de Holanda en los asuntos administrativos. Las posiciones holandesas por una parte y las

antillanas/arubeñas por la otra, tienen un grado de divergencia tal que impiden que prospere un diálogo sobre la modernización.

Hasta ahora, las discusiones sobre renovación dentro del Reino han ignorado a los ciudadanos en ambos lados del océano. Esta es una omisión sorprendente que el actual proyecto de investigación ha tratado de subsanar. El sondeo de opinión se realizó entre la población de las áreas caribeñas del Reino, bajo el supuesto de que cualquier cambio en la estructura del Reino probablemente tendría más importancia real para las poblaciones antillanas y arubeñas que para los holandeses europeos. Por consiguiente, es de esperarse que habrá debates más intensos sobre estos temas en las partes caribeñas del Reino.

Los resultados del referendo que se llevó a cabo en noviembre de 1993 reflejaron poco apoyo para la independencia (cuadro 1). A excepción de San Martín, la opción de la independencia parecía completamente archivada, y, excepto por una pequeña minoría en Curazao, la condición de departamento prácticamente parecía carecer de apoyo. Aún había un apoyo considerable a favor de mantener unas Antillas conformadas por cinco islas, aunque el apoyo por una condición separada era mucho menor de lo que sugerían previas encuestas y los principales partidos políticos. Un problema metodológico que se planteó con estos resultados fue el hecho de que los votantes solamente tenían una opción para expresar no sólo su opinión sobre una opción favorecida, sino también para indicar una prioridad en respuestas que no eran mutuamente excluyentes. Teóricamente ha-

CUADRO 1

Resultados del referendo realizado en las Antillas Holandesas en 1993-94 (en %)

	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Continuación de Antillas Holandesas	89.7	73.6	86.3	90.6	59.4
Condición separada	8.9	17.9	9.6	2.5	33.2
Departamento	1.3	7.7	3.6	2.5	1.1
Independencia	0.2	0.5	0.5	0.0	6.3

blando, la decisión de una inmensa mayoría a favor del *statu quo* se podía combinar con la opción de departamento y de independencia. La misma posibilidad teórica estaba abierta para la combinación de una situación separada con la de un departamento. Esta es la razón por la cual, en esta encuesta, las preguntas sobre la relación con Holanda se mantuvieron separadas de aquellas sobre las relaciones mutuas entre las islas.

OBSERVACIONES METODOLÓGICAS

En el informe original de la investigación se incluye una presentación detallada sobre la metodología, y también se ofrece información sobre el cuestionario y sus resultados, además de una descripción y análisis de los mismos desagregados por isla (Oostindie & Verton, 1998:53-61, respectivamente 65-216). Aquí nos limitamos a proporcionar al lector alguna información general.

El primer borrador del cuestionario fue concebido por los autores junto con Henk ten Napel, un metodólogo de la Oficina Nacional de Estadísticas de Curazao. Cambios posteriores se discutieron con una junta asesora conformada por representantes de la Universidad de las Antillas Holandesas (en Curazao), la Universidad de Aruba, y el Colegio de San Martín. El sondeo actual se llevó a cabo entre septiembre de 1997 y enero de 1998, después de que una serie de encuestas piloto en todas las islas realizadas en el transcurso de 1997, y posteriores discusiones en la junta asesora, resultaran en el mejoramiento y afinamiento de los cuestionarios originales.

Los cuestionarios estaban disponibles en holandés, inglés y papiamento. En la práctica, la mayoría de las entrevistas que tuvieron lugar en Aruba, Bonaire y Curazao se hicieron en papiamento, y en Saba, San Eustaquio y San Martín se condujeron en inglés. Al igual que en la práctica cotidiana en las islas, los cuestionarios en holandés se utilizaron muy poco. Todas las entrevistas se hicieron con entrevistadores locales.

Para alcanzar una confiabilidad óptima, los tamaños de las muestras que originalmente se contemplaron fueron 750 para Curazao y Aruba; 600 para San Martín; 400 para Bonaire, y para San Eustaquio y Saba 200 cada una. Eventualmente, el número de entrevistas que se realizaron fue un poco menor, aunque —según los criterios metodológicos actuales— lo suficiente para asegurar la

confiabilidad necesaria.⁴ En Aruba, la muestra se obtuvo de las listas de las empresas de servicios públicos, en Bonaire, Curazao y San Martín de la oficina del censo, y en Saba y Statia de las listas electorales utilizadas en las últimas elecciones. Las cifras sobre las personas que se negaron a cooperar variaban entre un 2% en Saba hasta un 10% en Curazao y 18% en Aruba; no hay indicaciones en cuanto a sesgos producto del rechazo.⁵

Antes de presentar los principales resultados de la encuesta, cabe señalar que prácticamente no se estableció ninguna diferencia en la encuesta entre el Reino y Holanda. Esto obviamente no es correcto en términos formales ya que, después de todo, el Reino está compuesto por Holanda, las Antillas Holandesas y Aruba. La decisión de reducir el sondeo de tal manera se hizo sobre la base de entrevistas de prueba que confirmaron la suposición de que antillanos y arubeños rara vez distinguen entre el Reino y Holanda. Por lo tanto, el uso del término “Reino” en el cuestionario sólo habría creado una confusión innecesaria.

En la siguiente presentación de los resultados generales se señalan las diferencias significativas donde es necesario. En la mayoría de los casos se redondearon las cifras. Para las estadísticas y los análisis más detallados referimos al lector a la publicación completa (Oostindie & Verton 1998a).

REINO Y ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DE LAS ANTILLAS HOLANDESAS

La primera pregunta tiene que ver con las preferencias sobre el futuro de las cinco islas de las Antillas Holandesas, la segunda sobre la relación deseada con Holanda (por supuesto que la primera pregunta no se planteó a los arubeños). Las respuestas de los antillanos a estas preguntas muy generales revelan un cambio de opinión comparado con los resultados del referendo de 1993-94. Cabe señalar, sin embargo, que el afinamiento de las preguntas en esta encuesta significa que los resultados no son directamente comparables con los del referendo. Sin embargo, las respuestas a la primera pregunta indican que el apoyo al modelo actual de las cinco islas de las Antillas ha perdido terreno ante la opción a favor de una condición separada. Aun así, una gran mayoría en cuatro de las cinco islas antillanas siguen a favor de mantener la asociación de las cinco islas. Este es incluso el caso de Curazao donde hay bastante apoyo por una condi-

CUADRO 2*Preferencias en cuanto a la condición de isla (en %)*

	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Continuación de las Antillas Holandesas	83.0	66.6	82.5	78.8	40.9
Condición separada	14.9	29.3	9.5	17.2	47.6
No sabe/no responde	2.1	4.0	7.9	4.0	11.5

CUADRO 3*Preferencias con respecto a la relación con Holanda (en %)*

	Aruba	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Independencia	5.2	1.8	6.6	0.0	1.5	15.3
Statu quo	65.2	36.6	50.4	39.7	25.8	40.9
Vínculos más cercanos	26.8	59.9	40.9	58.2	72.2	34.5
No sabe/no responde	2.8	1.6	2.1	2.1	0.5	9.3

ción separada. Los resultados en San Martín, por otra parte, indican una dramática desviación de este patrón: la mayoría de los que respondieron están ahora a favor de una condición separada (cuadro 2). Esto se confirmó a través de una pregunta de control que se planteó más adelante. La opción de estado separado para su isla es rechazada por una enorme mayoría de antillanos a excepción de San Martín. En Curazao considerablemente más personas apoyaron esta opción que en las otras islas.

Al preguntar sobre la relación preferida con Holanda, las preferencias variaban de manera considerable de una isla a otra (cuadro 3). Los arubeños son los que están más satisfechos con la situación actual de su isla, la que adquirió una condición separada en 1986, y en 1996 pasó permanentemente a la de país dentro del Reino. La mitad de la población de Curazao también está a favor de las rela-

ciones existentes con Holanda. En San Martín las opiniones están más divididas. La mayoría de la población de las tres islas más pequeñas optó por vínculos más estrechos con Holanda; en Aruba, esta opción fue la menos popular de todas. Fue poco el respaldo que hubo a favor de la independencia, aunque en Curazao, y especialmente en San Martín, las cifras fueron notablemente más altas de lo que se habría esperado, dados los resultados del referendo de 1993-94. Esta opción fue igualmente poco popular en Aruba. Una de las personas encuestadas comentó al respecto: “Si nos mester di ayudo, Hulanda tey. Ku independencia ken lo yuda nos? (Si necesitamos ayuda, Holanda está ahí. ¿Quién nos ayudará si somos independientes?).

El pequeño grupo de personas que se manifestaron a favor de la independencia constitucional fundamentalmente esgrimen argumentos tales como “debemos aprender a valernos por nosotros mismos”, indicando que la situación actual no funciona bien, y que existe resentimiento por la participación holandesa “Hulanda kier tin mucha di bisa”, (Holanda quiere hablar muy fuerte). En Bonaire y San Martín algunos de los encuestados que se pronunciaron a favor de la “independencia” parecen haber querido decir independencia de Curazao y no de Holanda.

Aquellos que están a favor de mantener el *statu quo* están satisfechos con las relaciones actuales y con la ayuda financiera holandesa, la cual les brinda una seguridad que muchos consideran esencial. “Pa nos haña tur sorto di yudansa. Korsou no para riba su mes. Falta hopi”. (Para que podamos recibir todo tipo de ayuda. Curazao no puede valerse por sí mismo. Nos falta prácticamente todo). También plantearon argumentos relacionados con la educación.

Los que propusieron vínculos más estrechos con Holanda enfatizan factores como la seguridad, más ayuda financiera, la esperanza de progreso y un mejor gobierno. En Aruba, un número relativamente alto de entrevistados mencionaron más control para su propio gobierno, el logro del progreso y el esfuerzo por lograr una sociedad igualitaria con Holanda. Las islas más pequeñas volvieron a referirse a lo que ellos sienten como dominación por parte de Curazao. “Nos no tin kompania di Antia mes; pa Ulanda para na nos fabor” (las Antillas no nos sirven para nada; que sea Holanda la que nos defienda), fue como lo planteó uno de los encuestados. En las Islas de Barlovento, otro entrevistado observó: “Deberíamos entendernos directamente con Holanda en lugar de hacer todo a través de Curazao”.

Más adelante en el cuestionario, se preguntó explícitamente a

CUADRO 4*Opinión sobre la condición de departamento (en %)*

	Aruba	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Positivo	11.6	37.4	24.4	40.2	54.5	19.0
Negativo	78.8	59.7	68.4	49.2	40.4	68.6
No sabe/no responde	9.6	2.9	7.2	10.6	5.1	12.4

los entrevistados sobre la posibilidad de una condición de departamento de ultramar, similar a la situación de los departamentos de ultramar franceses. Sólo en San Eustaquio se pronunciaron a favor de esta opción, mientras que en Aruba es donde la idea goza de menos popularidad (cuadro 4). Aparentemente los arubeños consideran que como país autónomo dentro del Reino, la isla tiene la situación constitucional ideal. Cabe señalar que una preferencia por “vínculos más estrechos” con Holanda no es lo mismo que una preferencia por la condición de departamento de ultramar. A los encuestados que habían indicado que querían tener vínculos más estrechos con Holanda, pero que ahora manifestaron que no estaban optando por la condición de departamento, se les preguntó exactamente qué entendían por vínculos más estrechos. Una vez más hubo altos puntajes para los argumentos sobre la ayuda financiera y económica, y la expectativa de que Holanda haría más por las islas. En las palabras de un residente de San Eustaquio: “Desde que nací siempre supe que Holanda se ocupaba de nosotros porque somos tan pequeños. Como han hecho un buen trabajo, yo quiero seguir estando cerca”.

Los arubeños en particular, indicaron que para ellos “vínculos estrechos” significaba una situación de confianza mutua que debería fortalecer las relaciones. Muchos encuestados indicaron que estaban a favor de relaciones más fuertes y de más ayuda holandesa, pero siempre querían que el gobierno de su país estuviera en manos de ellos mismos. Los opositores temían un retroceso en el tiempo.

Las preguntas que se plantearon más adelante en el cuestionario indicaban otros matices al igual que leves contradicciones, pero sin alterar la idea general. Una enorme mayoría considera que las islas

CUADRO 5

¿Está Holanda demasiado involucrada en el manejo de nuestro país? (en %)

	Aruba	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Si	40.9	38.0	37.6	12.7	18.7	40.4
No	48.7	52.4	50.7	73.5	75.8	47.9
No sabe/no responde	10.3	9.7	11.7	13.8	5.6	11.7

no se pueden manejar por sí mismas. Esta es la opinión del 78 % de los encuestados en Aruba, del 81 % en Curazao, y de mayores porcentajes en las otras islas; sólo San Martín tiene un porcentaje más bajo (58 %). La pregunta sobre qué pensaban las personas de la idea de vínculos directos y separados entre Holanda y cada una de las islas, tuvo una fuerte respuesta positiva por parte de los antillanos y también de los arubeños (53 %), quienes ya están en esa posición. En San Martín y Curazao, la mayoría que está a favor es más pequeña (45 % y 46 % respectivamente), pero aún es notablemente mayor que el grupo de oponentes (7 % y 17 % respectivamente).

Es asombroso el contraste entre preguntas anteriores sobre condición separada, a favor del cual está una minoría de antillanos, a excepción de la población de San Martín (cuadro 2). El caso es el mismo para las objeciones bastante generalizadas contra la condición de departamento que se expresaron anteriormente (cuadro 4). Tal vez la decisión explícita a favor de una condición separada y ciertamente de una condición de departamento es psicológicamente un paso demasiado adelantado. Sea como fuere, una considerable proporción de los antillanos encuestados aparentemente creen que un arreglo en el que Holanda mantiene relaciones directas con cada una de las islas todavía podría combinarse con la continuación de la asociación de las cinco islas.

Las respuestas a una pregunta posterior sobre si Holanda interfiere demasiado en el manejo de los distintos países, confirma la imagen de un grado de satisfacción bastante alto por un lado, y de fuertes reservas por el otro (cuadro 5). La mayoría de los antillanos y los arubeños respondieron que Holanda no interfiere demasiado en

CUADRO 6*Opinión general sobre la participación holandesa (en %)*

	Aruba	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Positivo	23.8	42.9	35.9	36.5	51.0	10.6
Neutral	67.2	48.8	55.4	50.8	44.9	75.6
Negativo	5.2	5.0	3.1	2.1	2.5	7.4
No sabe/no responde	3.8	3.7	5.5	10.6	1.5	6.3

el manejo de su países. Importantes minorías en las Islas de Sotavento y San Martín tienen una opinión distinta.

LOS DETALLES DE LA SITUACIÓN

En las encuestas, los entrevistados respondieron una gran cantidad de preguntas más específicas sobre temas tales como residencia y pasaporte, protección del territorio nacional, democracia y gobierno constitucional, y apoyo económico. No es de sorprender que en todos estos temas, una gran mayoría de antillanos y arubeños expresaron el deseo de que continúe la situación actual de libre acceso a la metrópolis, y a la protección y el apoyo de Holanda. Aparentemente, una importante mayoría considera que la situación actual es favorable. Entre las alternativas, la opción de vínculos más estrechos con Holanda recibe un mayor puntaje que la independencia.

Al mismo tiempo, existen claras reservas sobre las actitudes y posiciones holandesas. Éstas se expresaron en una serie de respuestas sobre la participación holandesa en la educación y la cultura locales (que no se discuten aquí), y en respuesta a otras preguntas más específicas. El grupo más grande de entrevistados consideran que la participación de Holanda en los asuntos de su país tiene ventajas y desventajas (cuadro 6). Sin embargo, el porcentaje de aquellos que expresaron una opinión negativa tajante fue pequeño en todas partes.

La pregunta sobre si Holanda demuestra a los antillanos y arubeños el suficiente respeto, suscitó una amplia gama de respuestas. La mayoría en Saba y San Eustaquio respondieron de manera afirmativa, en Bonaire y Curazao las opiniones estuvieron divididas,

OPINIONES Y EXPECTATIVAS ANTILLANAS Y
ARUBEÑAS SOBRE EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS

CUADRO 7

Opinión sobre el respeto que demuestran los holandeses (en %)

	Aruba	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Suficiente	41.1	45.3	42.8	63.0	50.5	21.4
Insuficiente	49.5	43.7	44.2	23.8	39.4	62.3
No sabe/no responde	9.4	11.0	13.0	13.2	10.1	16.3

CUADRO 8

Opinión sobre el grado de aceptación de la diferencia por los holandeses (en %)

	Aruba	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Suficiente	37.5	36.9	39.7	36.0	42.9	24.4
Insuficiente	49.8	47.6	43.4	48.7	45.5	63.9
No sabe/no responde	12.7	15.4	16.9	15.3	11.6	11.7

y la mayoría de los entrevistados en San Martín y Aruba consideran que Holanda no les muestra suficiente respeto (cuadro 7). Un número relativamente grande de encuestados no pudieron responder esta pregunta. Un patrón similar de división y duda emerge de las respuestas a la pregunta de si existe la suficiente aceptación por parte de Holanda de que los antillanos y los arubeños son “diferentes”, aunque las respuestas a esta pregunta a menudo fueron más negativas que afirmativas en cada isla (cuadro 8). Una vez más, San Martín es la más crítica.

La pregunta sobre si los administradores y políticos holandeses tienen una idea lo suficientemente general sobre la cultura local, suscitó dudas similares (cuadro 9). La mayoría de los entrevistados respondió de manera negativa. Este sentir es más fuerte en San Martín, seguido de las pequeñas islas anglófonas, lo que es aún más

CUADRO 9*Opinión sobre la noción que tienen los holandeses de la cultura local (en %)*

	Aruba	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Suficiente	26.5	25.9	29.9	18.5	15.7	6.5
Insuficiente	59.6	55.8	53.4	70.4	79.3	87.1
No sabe/no responde	13.9	18.3	16.6	11.1	5.1	6.3

sorprendente dado que estas últimas tienen por lo general una actitud bastante positiva sobre las relaciones con el Reino, aunque a lo mejor se deba a la percepción de que Saba y San Eustaquio están muy distanciados del mundo de los holandeses.

LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO PROPIO
Y LA RELACIÓN CON HOLANDA

Como un probable reflejo de su clara preferencia por vínculos más cercanos entre su país y Holanda, la mayoría de los entrevistados no tiene una muy buena impresión de la capacidad de sus políticos y administradores (cuadro 10), y sólo una pequeña minoría manifiesta tener mucha confianza en ellos (cuadro 11). Estas opiniones son un poco menos negativas en Aruba y en San Martín. No es sorprendente, por tanto, que sólo una muy pequeña minoría de encuestados

CUADRO 10*Opinión sobre la capacidad de los políticos antillanos/arubeños (en %)*

	Aruba	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Positiva	23.2	22.5	14.2	26.5	19.7	17.4
Neutral	58.8	32.7	46.7	36.5	36.4	58.9
Negativa	15.2	42.47	36.7	30.2	42.4	20.3
No sabe/no responde	2.8	2.4	2.4	6.9	1.5	3.4

CUADRO 11

Confianza en los políticos antillanos/arubeños (en %)

	Aruba	Bonaire	Curazao	Saba	San Eustaquio	San Martín
Mucha	16.0	10.2	6.1	27.0	18.2	18.5
Poca/cierta	63.9	61.3	57.0	53.4	44.9	59.1
Ninguna	15.5	25.7	33.2	11.1	35.9	15.8
No sabe/no responde	4.5	2.9	3.6	8.5	1.0	6.5

considera que la independencia ayudaría a que sus islas prosperaran; este porcentaje es más alto en San Martín.

ARUBA, LAS ANTILLAS Y EL REINO

La secesión de Aruba de las Antillas Holandesas ocurrió en 1986. A la isla se le concedió una condición separada bajo la promesa de una independencia plena diez años más tarde. Eventualmente, sin embargo, y para enorme satisfacción de los arubeños, en 1996 la condición separada se cambió a la de un país autónomo dentro del Reino. La inmensa mayoría de los arubeños cree que esta secesión ha sido beneficiosa para su isla. En cuatro de las otras cinco islas, la opinión de que la condición separada ha sido buena para Aruba es mucho menos común (entre el 44 y el 54 %). San Martín, donde una condición comparable es bastante popular en este momento, tiene una posición intermedia (66 %). Un número relativamente importante de entrevistados no respondió esta pregunta.

La pregunta sobre si la secesión de Aruba ha sido beneficiosa para el resto de las cinco islas fue respondida más a menudo de manera negativa. La posibilidad de un retorno de Aruba a las Antillas Holandesas es algo a lo que, en general, se oponen los arubeños (92 %). Mientras tanto, la gran mayoría de los encuestados está de acuerdo en la importancia de una coordinación más estrecha entre Aruba y las Antillas Holandesas en áreas como la salud, la educación, la lucha contra el crimen. Claras mayorías están también a favor de un parlamento en el que diputados de Holanda, de las Antillas Holandesas y de Aruba tomen decisiones conjuntas sobre asuntos de interés común.

ARGUMENTOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA

A cada encuestado se le pidió que seleccionara las cinco declaraciones más importantes de una lista de quince sobre la importancia de Holanda para las Antillas o para Aruba, y que luego las organizara por orden de importancia. Patrones relativamente claros emergen de esta parte del cuestionario. El pasaporte holandés es el elemento más importante en cada isla, seguido del acceso al estudio en Holanda, el derecho a vivir allá y en la Unión Europea, la ayuda económica holandesa y la protección militar. En Aruba y San Eustaquio se incluyó el argumento de que Holanda ofrece protección contra el crimen internacional, y, sorprendentemente, en San Eustaquio se agregó la afirmación de que Holanda les ayuda a mantener su propia cultura.

Es notable que tres de los cinco argumentos más populares (pasaporte, derecho a la residencia, y posibilidades de estudiar) están directamente relacionados con la posibilidad de residir en Holanda. Cabe señalar, sin embargo, que el pasaporte holandés probablemente equivale a una noción más amplia de seguridad. Los principales argumentos restantes tienen que ver con la protección económica y militar que en Aruba y San Eustaquio también incluye protección contra el crimen internacional.

Los argumentos asociados con la protección de Holanda para asegurar un buen gobierno, los derechos humanos y el orden público se mencionaron a menudo, pero aparentemente no son prioritarios. No se concede mayor importancia a argumentos inmateriales tales como el vínculo con la familia real holandesa y el contacto con la lengua y la cultura, aun cuando la mayoría había contestado que consideraba positivos estos aspectos.

PERFILES PERSONALES Y DE LAS ISLAS

En otra parte del documento hemos comparado en gran detalle los perfiles personales y los de las islas. Aquí, un par de observaciones pueden ser suficientes. Una comparación de los resultados de las seis islas revela que están de acuerdo en una serie de aspectos esenciales, pero que en cada isla hay diferencias, a veces considerables, en el énfasis. Aruba se distingue por una mayor confianza en sí misma y un correspondiente grado de independencia, aunque no exagerado, respecto de Holanda.

Los patrones que emergen de la encuesta entre las cinco islas antillanas indican una distinción bien clara entre San Martín y las

otras cuatro islas. San Martín parece ser mucho más directa que Aruba en muchos aspectos. En San Martín, una condición separada se considera predominantemente positiva (“quiero deshacerme de Curazao y relacionarme directamente con Holanda”), y los isleños no descartan tan tajantemente la opción de la independencia. Al mismo tiempo la confianza en su propio gobierno es mayor y la actitud hacia Holanda es obviamente más crítica que en otra parte.

Los resultados de las cuatro otras islas sugieren, comparados con San Martín y Aruba, un sentimiento aún más fuerte de independencia y menos confianza en su propia fuerza y sus propios administradores. Los encuestados en las diferentes islas están en gran medida de acuerdo sobre el significado de asuntos como el pasaporte, el derecho a residir en Holanda y el derecho de ciudadanos holandeses a residir en el Caribe holandés, la importancia de la ayuda económica y de garantías holandesas para la defensa, la salvaguarda de la democracia y el gobierno democrático. Dentro de este marco general, Bonaire presenta una imagen de conservatismo cauteloso pero también una cierta ambivalencia hacia Holanda. Los resultados para Curazao, la isla de mayor tamaño, coinciden en su mayoría con los de Bonaire. Sin embargo, es innegable que en ninguna otra parte hay una opinión más baja sobre la competencia de los políticos y administradores del propio país y sobre la confianza que inspiran.

Dado su tamaño, las dos Islas de Barlovento más pequeñas, Saba y San Eustaquio, son probablemente las más vulnerables y dependientes. Esto se refleja en la gran importancia que otorgan a sus vínculos con el Reino. La independencia no es una opción de importancia, mientras que la opción de mantener vínculos más cercanos y directos con Holanda tiene un amplio apoyo.

En la conclusión del cuestionario, a cada entrevistado le fueron formuladas una serie de preguntas personales. Los datos resultantes proporcionan información adicional sobre la situación socioeconómica, la familia y los patrones migratorios, así como el comportamiento de los encuestados en las elecciones. Sin embargo, algunos patrones claros resultaron del análisis de la relación entre estas variantes y las opiniones sobre las relaciones con Holanda y entre las islas.

Cabe anotar, sin embargo, que estos datos son evidencia de una alta movilidad tanto en el pasado como en la actualidad. El 83% y el 76% de los entrevistados en Curazao y Aruba respectivamente nacieron en la isla; minorías considerables son de otra parte. La migración es aún más significativa en San Martín. En San Martín, sólo el

35 % de los encuestados nacieron ahí; un número similar son originarios de otras islas en el Caribe Holandés y el 30 % son de otra parte. Aproximadamente el 40 % de todos los antillanos y arubeños tiene por lo menos un hermano o hermana que viven en Holanda. Más de la mitad han visitado Holanda y más del 40 % de éstos vivieron en Holanda durante dos años o más.

Este tipo de datos pueden no proporcionar una imagen inequívoca de la opinión pública sobre las relaciones entre las islas y su relación con Holanda. Ilustran, no obstante, que estas seis comunidades no son de ninguna manera islas literalmente aisladas o introvertidas. Sin embargo, su apertura y su fuerte tradición migratoria aparentemente no afectan de manera significativa las opiniones y expectativas en cuanto a las relaciones con Holanda o entre las islas.

CONCLUSIONES

En nuestros informes más extensos sobre el proyecto de investigación, discutimos las implicaciones de las tendencias reveladas en este estudio de manera bastante amplia. Sólo nos resta entonces concluir con algunas observaciones generales.

Si se les presentan diferentes opciones, los pueblos del Caribe, fundamentalmente por razones pragmáticas, no están dispuestos a cortar con los vínculos existentes. Esto explica la falta de cualquier respaldo serio por la opción a favor de la independencia en aquellas islas que aún no se han separado de su antiguo poder colonial, incluso si ello va acompañado de una persistente y a veces aguda frustración ante la noción de que siempre serán menos poderosos que un “benefactor” extranjero que considera que sus propios intereses y cultura son más importantes que los del remoto Caribe.

Los resultados de esta encuesta sitúan a las Antillas Holandesas y a Aruba en este contexto postcolonial, en el que los sentimientos de impotencia parecen ser tan comprensibles como difíciles de enfrentar. Una vez más, resulta obvio que las poblaciones de estas seis islas claramente optaron por un vínculo con Holanda; todas las alternativas parecen menos atractivas. Al mismo tiempo, hay ciertas reservas sobre una madre patria que, desde el punto de vista de la mayoría de antillanos y arubeños, no puede establecer el suficiente respeto y comprensión para su isla.

Al mismo tiempo, Holanda se ha visto obligada a aceptar que no es posible imponer la independencia a las islas. En respuesta, ha

adoptado una política de participación cercana en la administración de las islas. La preocupación sobre las repercusiones de los problemas antillanos y arubeños en la sociedad holandesa, y en la imagen del Reino, fue decisiva en este caso. Las consideraciones geopolíticas, particularmente la disposición a desempeñar un papel de “poder intermedio” en la región, tienen una importancia secundaria pero de ninguna manera insignificante.

Ahora que tenemos una mejor visión de las opiniones y expectativas de los antillanos y arubeños sobre el Reino y la relación con Holanda, el debate permanente sobre la estructura del Reino puede proseguir sobre una base más sólida. Grandes mayorías en todas las islas ven la opción como una que está entre el grado relativamente alto de autonomía para las áreas caribeñas del Reino, y una intensificación de las relaciones con Holanda. A primera vista, los resultados de esta encuesta parecerían confirmar la idea de que los ciudadanos de las Antillas y Aruba desean vínculos más cercanos con Holanda. Esto se aplica no sólo a los asuntos administrativos y financieros sino también a temas relacionados con la educación y la cultura. Claramente no comparten la misma opinión sobre estos temas con sus propios políticos y administrativos. Esto está vinculado a la limitada confianza que tienen en su propio poder y en la viabilidad de sus sociedades isleñas, así como al bajo nivel de confianza en sus políticos y administradores. La política holandesa de intensificación de la relación y la supervisión cercana del gobierno en el Caribe holandés parecen disfrutar de cierto grado de apoyo.

Por otra parte, los encuestados indican que tienen claras reservas en lo que respecta a la intensificación de la participación holandesa. El apoyo por la extrema opción de transformar las islas caribeñas en departamentos de ultramar es muy débil, aunque aumentaría si la asociación de las cinco islas antillanas se disolviera. Sin embargo, las repercusiones concretas de una política intensificada provocaron reacciones mixtas, como se puede observar a partir de las opiniones sobre la colocación de ejecutivos holandeses en varios sectores de la sociedad. Las objeciones al respecto han sido las más fuertes precisamente allí donde la participación holandesa ha sido especialmente intensa en los últimos años, como en San Martín y Aruba.

Una dimensión esencial de todo esto es el hecho de que existe un fuerte sentimiento en todas las islas de que Holanda no tiene la suficiente comprensión ni el suficiente respeto por la sociedad y la cultura local. Este descontento lo expresan los ciudadanos de las

Antillas y de Aruba, así como sus políticos y administradores. Este es un punto vital en un momento cuando Holanda está tratando de instaurar una política dirigida hacia una mayor participación. La combinación de una intensificación de las relaciones y el sentimiento de los isleños de que no son lo suficientemente comprendidos y respetados, lleva consigo las semillas del conflicto.

Es extraordinario que pocos antillanos o arubeños perciban la cultura holandesa como una amenaza. Tal vez esto se deba en parte a una cierta ingenuidad. Hasta hace poco a Holanda se le percibía como tan distante que la población aún no se ha dado plena cuenta de qué tan profundamente podrían verse afectadas las comunidades caribeñas por una participación más intensa de Holanda. Por otra parte, no debemos subestimar la capacidad de los antillanos y arubeños de evaluar la situación. Después de todo, para estas pequeñas sociedades isleñas, la alternativa de vínculos más estrechos con Holanda no es tanto algún tipo de “independencia” abstracta como una subordinación a países como los Estados Unidos o Venezuela. ¿Entre la espada y la pared? Aparentemente los antillanos y los arubeños están optando de manera deliberada por ese pequeño —pero a sus ojos grande— país europeo que por el momento parece ser el más confiable, flexible y generoso que está disponible, aun si no logra entenderlos como es debido.

*Una versión más larga de este artículo se publicó inicialmente en “Kisorto di Reino?/¿Qué Tipo de Reino? Opiniones y expectativas antillanas y arubeñas sobre el Reino de los Países Bajos”, *New West Indian Guide*, Vol. 72, Nos. 1 & 2 (1998): 43-75 (Oostindie & Verton, 1998a). Ambos artículos se basan en el informe de la investigación *Ki sorto di Reino/¿Qué tipo de Reino?* (Oostindie & Verton, 1998b). El autor agradece a Henk ten Napel y René Römer por sus contribuciones al proyecto de investigación original, al consejo editorial del *New West Indian Guide* (NWIG) por sus comentarios sobre el proyecto y por el permiso de utilizar partes del artículo publicado en la NWIG en la versión escrita para *Pensamiento Propio*, y en particular a los revisores anónimos de *Pensamiento Propio* por sus valiosos comentarios y sugerencias.

NOTAS

1. El Reino de los Países Bajos está conformado por tres socios nominalmente iguales: los Países Bajos (con una población de más de 15 millones de habitantes), las Antillas Holandesas (225,000), y Aruba (85,000). En virtud del Estatuto, cada uno de los países se gobierna a sí mismo de manera autónoma. Se hace una excepción en lo que respecta a las relaciones exteriores, la defensa y la garantía de buen gobierno, en cuyo caso la responsabilidad la tiene el Reino, es decir, el gobierno del Reino, que está conformado por el gabinete holandés y dos ministros plenipotenciarios de los otros dos países. En la práctica, los Países Bajos dominan el gobierno del Reino. No existe un parlamento único al que el gobierno del Reino tenga que rendir cuenta.

La ayuda económica holandesa a las seis islas asciende a unos 150 millones de dólares de los Estados Unidos por año, lo que equivale a unos \$500 per cápita. Los antillanos y los arubeños pueden vivir en los Países Bajos, pero no viceversa. La lengua vernácula en las Islas de Sotavento es el papiamentu, y en las Islas de Barlovento es el inglés. El idioma que más se habla en las escuelas en las Islas de Sotavento es el holandés, aunque el papiamentu está adquiriendo cada vez mayor importancia. En las Islas de Barlovento el idioma que predomina en las escuelas es el inglés. Para una introducción general ver Oostindie 1996.

2. Esta cifra se basa en las siguientes poblaciones: Aruba 85,000; Bonaire 13,000; Curazao 160,000; Saba 1,000; San Eustaquio 1,500; la parte holandesa de la isla franco-holandesa de San Martín, unos 50,000. La población antillana y arubeña en los Países Bajos se calcula en unos 90,000 habitantes de los cuales la mayoría son emigrantes de Curazao.
3. Esto no aplica para los residentes de los territorios británicos dependientes. En la actualidad se está revisando la situación de estos territorios.
4. A saber, 668 en Curazao, 638 en Aruba, 443 en San Martín, 382 en Bonaire, 198 en San Eustaquio y 189 en Saba.
5. No fue posible aislar la cifra de rechazos para San Martín a partir de la cifra global de no respuesta.

REFERENCIAS

- Oostindie, Gert (1996) "Ethnicity, Nationalism and the Exodus: The Dutch Caribbean Predicament", en: Gert Oostindie (ed.), *Ethnicity in the Caribbean*. London: Macmillan, pp. 206-31.
- Oostindie, Gert & Peter Verton (en colaboración con Henk ten Napel y René Römer), 1998a. *Ki sorto di Reino?/What Kind of Kingdom? Visies en verwachtingen van Antillianen en Arubanen omtrent het koninkrijk*. La Haya: SDU
- Oostindie, Gert & Peter Verton, 1998b. "Ki sorto di Reino?/What Kind of Kingdom? Antillean and Aruban Views and Expectations of the Kingdom of the Netherlands", *New West Indian Guide*, Vol. 72, No. 1 & 2 (1998) 43-75.

H O M I N E S

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

*EXPERIMENTOS GENOCIDAS EN PUERTO RICO, JOSÉ MANUEL TORRES SANTIAGO /
MICROHISTORIA AZUCARERA EN PUERTO RICO, PEDRO PABLO RODRÍGUEZ / DESARROLLO
ECONÓMICO, CAMBIO AMBIENTAL Y CÓLERA MORBO EN EL PUERTO RICO DEL SIGLO XIX,
RICARDO CAMUÑAS MADERA / MÉXICO Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, DIETER BORIS /
PUERTO RICO COMO MIEMBRO DEL NAFTA, ALINE FRAMBES-BUXEDA / LA REESTRUCTURACIÓN
DE LA ECONOMÍA ARGENTINA EN NUEVAS CONDICIONES POLÍTICAS (1989-1992), JORGE
SCHVARZER / LA CULTURA POPULAR BIEN PENSADA, MIRKO LAUER / JULIA DE BURGOS Y YOSANO
AKIKO: LA COMPARACIÓN DE DOS POETAS PRECURSORAS DE LA LIBERACIÓN DE LA MUJER EN
PUERTO RICO Y EN JAPÓN, SHIGAKI YOSHIKO.*

TARIFA DE SUSCRIPCIONES:

Puerto Rico / US \$15 El Caribe, EEUU, Centroamérica / US \$22
Suramérica, Europa, Africa, Asia / US \$25 Muestra un ejemplar / US \$8

Dra. Aline Frambes-Buxeda, Directora
Revista Homines
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Apartado Postal 191293,
Hato Rey, Puerto Rico 00919



La sociedad civil transnacional y los desafíos de la globalización

ANDRÉS SERBIN

Este artículo recoge, en forma muy resumida y tentativa, el estado actual del debate en torno a los temas de globalización y regionalización y a la emergencia, en este contexto, de una sociedad civil transnacional (SCT). En este sentido, es de señalar, en primer lugar, la propia complejidad y diversidad del debate sobre la globalización en tanto se desarrollan posiciones y enfoques diversos acerca de su alcance conceptual y empírico como proceso en curso, no obstante la imposición de un paradigma dominante a través del discurso neoliberal.

En el marco de esta complejidad, en segundo lugar, es de señalar la diversidad de interpretaciones acerca de su articulación con los procesos de regionalización, muy esquemáticamente apuntados en las

páginas siguientes, y del surgimiento y desarrollo de una sociedad civil transnacional con rasgos distintivos, que hace a una dinámica particular de la articulación transnacional de la trilogía Estado-nación/mercado/sociedad civil, en el marco de los intentos de establecer una gobernabilidad democrática a nivel global. En tercer lugar, apunta a señalar la diversidad de interpretaciones acerca de este fenómeno, en función de los diversos enfoques asumidos en torno a la globalización y a una serie de distintivas posiciones en torno a la composición de esta sociedad civil transnacional y su incidencia sobre la dinámica global. A su vez, en cuarto lugar, y en función de las diversas articulaciones de las concepciones acerca de la relación entre globalización, regionalismo y sociedad civil transnacional, postula como un debate políticamente relevante para nuestra región la discusión en torno a la emergencia de entramados regionales de sociedades civiles transnacionales, particularmente en relación al desarrollo y aceleramiento de los procesos de integración regional y hemisférica intersocietal, y a la necesidad de introducir, en este contexto, modalidades de gobernabilidad democrática y control ciudadano.

El siguiente cuadro de situación del debate no tiene solamente por objeto establecer las bases conceptuales del mismo, sino también situar un marco de referencia y abrir algunas interrogantes, sobre bases teóricas sólidas, acerca de la evolución actual de las perspectivas de la sociedad civil regional en nuestro hemisferio.

LA GLOBALIZACIÓN Y SUS ALCANCES CONCEPTUALES

El concepto de *globalización*, en sentido estricto, nace y se nutre en la década de los setenta con el análisis de la conformación de las corporaciones transnacionales a escala mundial, para dar lugar, posteriormente, al desarrollo de un enfoque basado en la globalización de los mercados, fundamentalmente en el ámbito de los estudios de economía internacional (Boyer, 1997).

Este enfoque más estrecho del concepto entra en contradicción, sin embargo, con una serie de aproximaciones que ubican históricamente el desarrollo de la globalización en el contexto de la expansión del capitalismo europeo y que, eventualmente, postulan diferentes fases de su evolución en el marco de una tendencia histórica de largo plazo¹.

Más allá del debate existente, sin embargo, hoy en día el con-

cepto permea y está presente en la mayoría de los discursos de políticos, periodistas y científicos sociales, si bien como referencia vaga y general.

En función de su acepción más estrecha, y más allá de las ambigüedades y confusiones a que da lugar el término, podemos precisar inicialmente tres presupuestos generalmente presentes en estos discursos: a) la globalización se entiende como un proceso *predominantemente económico*, articulado en torno a una reestructuración productiva a escala mundial (con el tránsito de las concepciones fordistas a las postfordistas o toyotistas, basadas en una producción más flexible), la revolución tecnoproductiva (especialmente en el campo de la informática y de las comunicaciones) y la globalización financiera²; b) la globalización conlleva una visión del sistema internacional como un *sistema interdependiente e interconectado*, proceso que se refuerza con el desarrollo de las comunicaciones y la liberalización y apertura comercial, y que afecta a los actores tradicionales del sistema internacional —los Estados-nación, en función del flujo global de bienes, capitales e ideas; c) la globalización, en esta perspectiva, postula una *visión unidimensional*, centrada en lo económico, la preeminencia de los agentes del mercado sobre las economías nacionales y sobre el rol del Estado-nación visto como un actor crecientemente debilitado, la acelerada permeabilidad y articulación entre las dinámicas domésticas y las internacionales³, y el papel crucial del mercado como autorregulador y actor protagónico del sistema.

Está de más decir que, desde esta perspectiva, la concepción imperante de la globalización remite y se asocia a un *paradigma* y a un *discurso ideológico* dominante a nivel mundial en función de un esquema privilegiado de interpretación económica y política: el *neoliberalismo* que legitima su emergencia y desarrollo (Bernal, 1995). Este discurso ideológico permea gran parte del debate contemporáneo validando los rasgos globales de la expansión actual del capitalismo; de la proyección global de un modelo de democracia representativa basado en el liberalismo político y de la difusión de valores asociados a los hábitos de consumo occidentales en el contexto de la eclosión de una masificación comunicativa facilitada y apuntalada por una serie de innovaciones tecnológicas que incluyen la comunicación satelital y el desarrollo de la informática.

En este marco, el análisis del fenómeno de la globalización, más allá del saber convencional y del paradigma actualmente dominante, ha dado lugar asimismo a un extenso debate, así como también

al surgimiento de diversos enfoques analíticos sobre el proceso, tanto en el sentido de afirmarlo y reconocerlo, como en el sentido de negar eventualmente su existencia alegando la aparición de un “mito” de la globalización que no se corresponde con la realidad de la actual economía internacional y que pone en cuestión la “ficción” de la dilución del rol del Estado-nación como actor protagónico del sistema internacional (Hirst y Thompson, 1996; Hirst, 1997)⁴.

Por otra parte, para una serie de analistas la globalización es crecientemente asumida como un *proceso multidimensional*, caracterizado por el *cambio acelerado* y la *creciente complejidad* de las interacciones y nexos de diverso orden que lo distinguen, en un entorno global de rasgos nuevos⁵. Este fenómeno se articula con un proceso de *compresión espacio-tiempo* (Giddens, 1998) inédito en la historia humana en sus alcances actuales y que hace a su peculiaridad, al acercar los lugares más remotos a través de la telecomunicación y de las innovaciones en transporte, y al generar una creciente conciencia global impulsada por diversos procesos paralelos, simultáneos y combinados entre sí, tanto en el plano específicamente económico, como en el político, cultural, social y ecológico. Al punto de que algunos autores consideran en realidad el despliegue de *varios procesos de globalización simultáneos en diversos planos y dimensiones*, con impactos diferentes en ámbitos distintos y, en particular, en las percepciones acerca del proceso por parte de diversas sociedades y sectores sociales. Como consecuencia, se incrementa la conciencia global en diferentes planos y se desarrollan planteamientos globales en torno a temas que exceden lo estrictamente económico, tales como la universalización de los derechos humanos o la importancia del medio ambiente.

A la vez, y desde esta perspectiva, la globalización no se percibe como un proceso uniforme, homogenizador en lo económico, cultural, ideológico, político y social, sino como el proceso generador de un espacio mundial frecuentemente fragmentado que engendra *contradicciones, desigualdades y conflictos* específicos, y que lleva a la emergencia de una sociedad mundial⁶, frecuentemente caracterizada más por sus fragmentaciones, exclusiones y divisiones, en distintos planos y dimensiones, que por una ficticia unidad.

En esta perspectiva, si bien los factores estructurales del proceso de globalización responden a cuatro elementos fundamentales — las transformaciones del Estado-nación; la globalización económica en torno al desarrollo de un mercado global para bienes, servicios y

capitales; la eclosión de las telecomunicaciones globales y la reestructuración del sistema político internacional luego del fin de la Guerra Fría—, las tensiones y contradicciones se incorporan tanto a nivel estructural como dinámico, en términos de los procesos de conformación de una sociedad global por parte de un conjunto de actores que cuestionan el proceso de globalización en sí, y, eventualmente, su propia participación en el mismo.

En este plano surge, a partir de la consideración del rol de los agentes, el debate acerca de los alcances de una “globalización desde arriba” promovida por las corporaciones transnacionales, los organismos multilaterales, la banca internacional y los países de mayor dinamismo económico, y una “globalización desde abajo” que aspira a regular y poner coto —a través de las acciones e iniciativas de diversos movimientos y organizaciones sociales de carácter asociativo— a los imperativos impuestos por los actores del mercado y los Estados-nación más poderosos (Falk 1995a y 1995b). Como consecuencia, se abre el debate acerca de quién toma las decisiones que conducen el proceso de globalización y en representación de quién lo hacen, introduciendo la necesidad de promover, asimismo, formas de gobernabilidad democrática global para regular el proceso de globalización en su vertiente actual (Held 1995; 1997) y superar tanto los “déficits democráticos” existentes, como los “déficits sociales” y las exclusiones que impone la “globalización desde arriba” en beneficio de algunas elites mundiales.

En este sentido, la percepción de que la globalización está beneficiando a algunos pocos a costa de otros muchos se refuerza cuando los procesos de globalización que ocurren en el plano de la economía, o de la transmisión de ideas o de valores y productos culturales, no se corresponde con una efectiva globalización de la institucionalidad internacional (Bissio 1997), ni con una participación efectiva o un control de los ciudadanos sobre las decisiones que se toman, muchas veces en forma cerrada y poco transparente, en organismos multilaterales o en foros intergubernamentales.

La creciente percepción de la globalización como un proceso que no es homogéneo ni unificado y que engendra sus propias contradicciones y conflictos en el contexto de marcadas desigualdades y exclusiones varía, sin embargo, con los distintos enfoques actualmente en boga más allá de la predominancia del discurso neoliberal y las prioridades analíticas que se establecen, a menudo en función de las perspectivas privilegiadas por distintos actores.

En este contexto, es de señalar que pese al surgimiento de diversas posiciones y enfoques en torno al tema, muchos autores coinciden en hacer notar una carencia generalizada de un enfoque teórico integrado para el análisis de la globalización, en especial en lo que a teoría política y ciencias sociales se refiere, en el marco de la crisis de paradigmas imperantes en este ámbito y la complejidad del proceso global. Carencia que no escapa a la multiplicación de prioridades y planteamientos por parte de una miríada de actores transnacionales actualmente involucrados en la dinámica internacional, como no escapa tampoco a la hegemonía del discurso neoliberal en la práctica de esos actores.

LA GLOBALIZACIÓN: CRÍTICOS Y APOLOGISTAS

Teniendo en cuenta esta significativa carencia, a partir de una revisión de la literatura contemporánea sobre el tema, McGrew (1998) postula la existencia de tres tendencias predominantes en el análisis actual de la globalización, que, pese a su heterogeneidad, plantean líneas de análisis similares, sin que ninguna aporte un paradigma cabal para interpretar la globalización.

Los llamados *globalistas* —paradójicamente tanto en sus versiones *neoliberales* como en las *marxistas* y *postmarxistas*— consideran la globalización como la fase culminatoria del desarrollo del capitalismo, en torno a la configuración de un mercado global que se impone a los Estados-nación. El proceso es fundamentalmente económico, tiene un alcance global y, según la filiación ideológica de los respectivos autores, puede ser percibido en una óptica optimista (el “fin de la historia” y la configuración de un mundo regido por la lógica del mercado, con sus correlatos políticos asociados al liberalismo, como en el caso de Fukuyama, Omaha o Guéhenno) o pesimista (se impone la lógica de la acumulación del capital a nivel mundial; se incrementan las contradicciones y desigualdades en el sistema internacional, como en el caso de los análisis de Robert Cox y de Stephen Gill o, en una perspectiva que enfatiza un enfoque de mayor profundidad histórica, en el caso de la evolución del “sistema-mundo” de Wallerstein).

Los *escépticos* consideran, en cambio, que no existe un proceso de globalización en curso, sino una profundización de la internacionalización de la economía mundial, donde las economías nacionales (particularmente las más poderosas) siguen hegemonizando la diná-

mica económica internacional. En esta perspectiva, la globalización es percibida como un mito, ya que la economía mundial sigue caracterizada por una división de poder y de trabajo (Ferrer, 1997) en una transición que va de la internacionalización a la transnacionalización, pero sin que se produzca una efectiva globalización de la economía internacional. Como ilustración, los escépticos invocan la reciente crisis financiera global, cuyas repercusiones impactan básicamente en las economías emergentes y, en última instancia, son favorable a las economías más desarrolladas (ibídem)⁷.

Finalmente, los denominados *transformacionistas* sostienen una visión más multidimensional y compleja del cambio radical que acarrea la globalización, concebida como un proceso nuevo en la historia de la humanidad, acelerado, plagado de incertidumbres y turbulencias, difícilmente sujeto a pronósticos, en el marco de articulaciones nuevas entre actores económicos, Estados-nación y actores sociales a nivel global (Rosenau 1991; 1997b). En esta perspectiva, la sociedad civil global (SCG), con matices diferentes según cada autor, es un actor emergente importante en el marco de la heterogeneidad y complejidad de un sistema internacional multicéntrico.

Escépticos y globalistas coinciden en privilegiar la dimensión económica de los procesos analizados por sobre cualquier otra, los primeros con un énfasis mayor en el desarrollo previo de una internacionalización económica, los segundos con una mayor priorización de las características noveles del proceso; los escépticos generalmente con énfasis en las economías nacionales en el marco de relaciones asimétricas y desiguales; los globalistas en función de privilegiar el mercado como mecanismo de regulación del sistema económico (*neoliberales*) o la producción en el marco de una desigual división internacional del trabajo (*marxistas y neomarxistas*)⁸.

A su vez, al analizar las contradicciones y conflictos que engendra la globalización, estos enfoques subrayan la importancia de ámbitos distintos. Para los escépticos, la consolidación de un sistema internacional hegemonizado por los países industrializados, da lugar al desarrollo reactivo de un conjunto de *fundamentalismos y particularismos* étnicos, religiosos y nacionales que ponen en cuestión la pretendida imposición de la civilización occidental en el proceso global (Huntington, 1996) en el marco de las crecientes desigualdades, exclusiones y asimetrías internacionales, y que contribuyen, más que a una homogeneización del sistema mundial y a la conformación de una sociedad global, a su creciente fragmentación en bloques. Para

los globalistas, el proceso de globalización o bien engendra la emergencia de un tercer sector —la sociedad civil global, en el marco de una nueva articulación de la trilogía Estado-mercado-sociedad civil en un ámbito mundial— o bien da lugar al despliegue de fuerzas sociales contrahegemónicas de alcance global. Finalmente, para algunos transformacionistas, la globalización desde arriba promovida por los Estados-nación y los actores del mercado, da pie para el desarrollo de una “globalización desde abajo” por parte de una sociedad civil global articulada en torno a las ONGs y a los movimientos sociales transnacionales (Falk 1995a y b) que exige la configuración de nuevas formas de gobernabilidad global (*global governance*).

Huelga decir que este breve y esquemático resumen de los tres principales enfoques en boga no da cuenta cabal de muchos elementos y matices presentes en cada uno de ellos, como tampoco de las superposiciones y articulaciones existentes entre las tres, y tiene por función tan sólo una presentación heurística a los efectos de la discusión ulterior en este artículo.

GLOBALIZACIÓN, REGIONALISMO Y SOCIEDAD CIVIL

Por otro lado, cada una de estas visiones articula particulares enfoques en la relación entre *globalización* y *regionalismo*.

Según los escépticos, más que frente a una globalización nos encontramos frente a un significativo proceso de regionalización, en tanto la economía mundial evoluciona en la dirección de diversos bloques comerciales y financieros en el marco de desigualdades y asimetrías y de crecientes tensiones entre los diferentes bloques emergentes. Situación que refuerza el rol de las economías nacionales y del desarrollo de procesos de regionalización con la amenaza de la emergencia de nuevas modalidades proteccionistas en el marco de la conformación de bloques regionales. Esta percepción es abonada por el hecho de que el grueso del intercambio comercial, del flujo de capitales y de transferencias tecnológicas se desarrolla en el marco de la tríada conformada por tres focos de dinamismo económico: América del Norte, la Unión Europea, y el Japón y el sureste asiático.

Según los globalistas, por otra parte, la regionalización es complementaria a la globalización ya que responde a su lógica, expandiendo la imposición del mercado según los neoliberales, o ampliando las relaciones de producción y la división internacional del traba-

jo en función de la reestructuración productiva, con ganadores y perdedores no sólo en lo social, sino también en lo geográfico, en una perspectiva postmarxista.

Siguiendo a los transformacionistas, en cambio, la regionalización se articula de una manera novedosa, a la vez complementaria y antagónica a la globalización, en el marco de la creciente complejidad del sistema internacional, que tiende no sólo a la homogeneización sino a un creciente intrincamiento que incluye tanto tendencias aglutinantes como fragmentarias⁹.

En suma, frente a la ficción de la globalización denunciada por los escépticos, tanto los globalistas como los transformacionistas asumen: a) el *carácter irreversible* del proceso de la globalización;¹⁰ b) la *multiplicación de actores internacionales* y la *permeabilidad entre las dinámicas domésticas y globales*; y c) sobre esta última base, la emergencia de una *sociedad civil global*¹¹ como un actor relevante en la dinámica del sistema internacional emergente y, particularmente, de la consolidación de una gobernabilidad democrática global.

Es de señalar que para los escépticos, en cambio, la sociedad civil global en general tiene un rol mínimo en este proceso, porque los actores más importantes siguen siendo los Estados-nación (los gobiernos) y de la misma manera que no se configuran procesos transnacionales que no estén controlados por éstos, no existe el desarrollo de una sociedad civil transnacional que desborde las fronteras de los Estados-nación y que, consecuentemente, tenga una influencia relevante sobre el sistema internacional.

Sin embargo, más allá de estos tres enfoques en torno a la globalización, esquemáticamente esbozados y a su vez caracterizados internamente por perspectivas diferentes, la permeabilidad creciente entre las dinámicas domésticas y las internacionales nos conduce a aceptar, al menos empíricamente y en el plano sociológico, el surgimiento y desarrollo de un entramado social de carácter transnacional en torno a temas y reivindicaciones globales; el despliegue de nuevas estrategias de incidencia política que trascienden a los Estados-nación, y la aparición de nuevas formas de relación y de articulación en el marco de la tríada Estado-nación/mercado/sociedad civil, en el entorno de la creciente complejidad y el multicentrismo que implica la presencia de nuevos actores en el sistema internacional. La ilustración más remanida de la emergencia de este entramado social, condensado conceptualmente en el término de sociedad civil global, está representado por los movimientos de paz, de mujeres y

de ambientalistas y por organizaciones no gubernamentales como *Greenpeace*, *Amnesty International* u *Oxfam*¹².

El debate acerca del surgimiento de una sociedad civil global sobre la base del desarrollo de este entramado (siguiendo conceptualmente los planteamientos sobre sociedad civil nacional) configura un elemento importante en torno a las discusiones acerca del desarrollo de las modalidades y formas de democracia y gobernabilidad global necesarias para la constitución de una comunidad política global, presupuesta en muchas de las consideraciones de globalistas y transformacionalistas.

Por otra parte, el hecho de que los flujos financieros sean crecientemente globales (en el marco de la tríada señalada en América del Norte, Europa y el sureste asiático) no obsta para que el comercio siga siendo predominantemente regional, como lo afirman los escépticos (Giddens 1998), generando espacios regionales no sólo en lo económico sino también en lo intersocietal. En este marco, el accionar de la sociedad civil global, con frecuencia, se articula o implica, asimismo, el desarrollo de tejidos sociales de carácter regional, con agendas y estrategias específicas en torno a la creación de zonas de libre comercio pero, a la vez, directa o indirectamente signadas por los procesos globales, dando lugar al surgimiento y desarrollo de complejos entramados de sociedades civiles regionales que trascienden los límites de la soberanía y de la territorialidad de los Estados-nación. Como ilustración de este fenómeno, baste citar algunas de las iniciativas a nivel subregional y regional que se despliegan en América Latina y el Caribe para enfrentar los déficits democrático y social presentes en los procesos de regionalización (Serbin 1997; Grandi y Bizzozero 1998).

LA SOCIEDAD CIVIL TRANSNACIONAL: CONCEPTUALIZACIONES Y ENFOQUES

En el marco del actual debate sobre globalización, la emergencia de una sociedad civil global, a través del desarrollo de redes, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales transnacionales, es un fenómeno relevante para la comprensión de la dinámica global desde una perspectiva multidimensional, en tanto trasciende los límites y la dinámica tradicional de las sociedades civiles domésticas. Más allá del redimensionamiento del Estado-nación y del surgimiento de una gama de actores transnacionales básicamente vinculados

al mercado global, la efectiva posibilidad de regular y acotar la acción de éste como la de un gobierno o un organismo intergubernamental pasa por el desarrollo y la consolidación de las redes de actores de la sociedad civil transnacional, en el marco de un proceso de transnacionalización que hace irrumpir con significativo impacto la incidencia de factores extranacionales¹³.

La posibilidad de establecer correcciones y rectificaciones al proceso de globalización “desde arriba”, donde un reducido conjunto de actores—a veces con una representatividad o legitimidad limitada o nula—toma una serie de decisiones que afectan al conjunto del proceso, implica necesariamente el desarrollo de una *gobernabilidad global* (*global governance*). Ésta implica a su vez el desarrollo de una sociedad civil transnacional que promueva y avance los intereses del ciudadano común, en el marco de un proceso de participación ciudadana que algunos asocian con la emergencia de una *democracia cosmopolita* (Archibugi y Held 1995; Held 1997).

Es evidente, en este contexto, que el planteamiento de una sociedad civil global o transnacional retoma a nivel transnacional muchos de los presupuestos de los enfoques políticos liberales, tanto en torno a la democracia como al rol de la sociedad civil. Particularmente en este último caso, tiende a trasladar acríticamente el discurso liberal de la sociedad civil y su función en el marco de la gobernabilidad democrática de un país, a un discurso de la sociedad civil global, frecuentemente permeado de posiciones anti-Estado (Pasha y Blaney 1998).

A este respecto, como hemos visto, también se diferencian los enfoques dominantes, sin dar lugar a una concepción definida acerca de qué es la sociedad civil global. Si bien globalistas y transformacionistas reconocen la importancia de este fenómeno, las posiciones varían en cuanto a su definición y caracterización, mientras que los escépticos tienden a negar el surgimiento de una sociedad civil transnacional, privilegiando el rol de los gobiernos y presumiendo la existencia de una conspiración neoliberal en su reconocimiento y promoción¹⁴.

Por un lado, Colás (1997) por ejemplo, en una vertiente más ligada a los enfoques escépticos, postula que, con anterioridad al despliegue actual del proceso de globalización, se ha ido conformando históricamente una *sociedad civil internacional*, configurada originalmente por movimientos sociales de viejo cuño, es decir, movimientos tales como el movimiento obrero o los movimientos campesinos,

que trascienden en su accionar las fronteras nacionales¹⁵, pero que originariamente surgen en ámbitos nacionales. En esta misma perspectiva, Peterson apunta a la existencia de una sociedad civil internacional configurada por una variedad de actores societales operando a través de las fronteras de varios países en el marco de un conjunto de países vinculados entre sí, y en donde los Estados y estos actores están fuertemente imbricados y la autonomía de los actores societales depende en gran parte de la práctica de los Estados (Peterson 1992).

Sin embargo, en la actualidad, este enfoque no ha estado desvinculado del desarrollo de un debate acerca de la progresiva transformación de estos movimientos, basados originariamente en la movilización de masas y con aspiraciones de transformar la estructura de poder existente, en “nuevos movimientos” con mayor énfasis en la reivindicación de su identidad, la promoción de nuevos estilos de vida (Bodemer 1998), o en su “ongización” en función de un cambio en sus tácticas y en sus objetivos estratégicos (Moncayo 1997), bajo el impacto de la globalización.

Por otra parte, los análisis más vinculados a la reivindicación de una globalización irreversible e inédita en curso, tienden a postular la emergencia de una *sociedad civil global*, con rasgos identificatorios novedosos, que privilegia el rol de las redes que surgen en torno a los “nuevos movimientos sociales” (ambientalistas, mujeres, organizaciones de derechos humanos, por la paz y la justicia internacionales) (Shaw 1994; Lipshutz 1996). Estos “nuevos movimientos” no están basados en clases sociales sino en otros ejes e intereses (Shaw 1996:14) orientados por temas globales más específicos y focales. A su vez están menos preocupados por la política tradicional pero no por el poder; menos vinculados a la movilización de masas y más estrechamente asociados con el cabildeo y el impacto sobre la opinión pública a través de campañas específicas¹⁶. Como tal, la sociedad civil global constituye, en consecuencia, un nivel de acción no estatal que ha incrementado su visibilidad e incidencia en el sistema internacional, que ha dado lugar al surgimiento de una conciencia global y que ha reconfigurado el espacio político global como un espacio crecientemente democrático (Pasha y Blaney 1998:425).

En esta perspectiva, y con los matices del caso, con frecuencia las concepciones de una sociedad civil global vienen asociadas a tres elementos: a) una *visión crítica del rol del Estado* frente al cual, inclusive en el ámbito global, la sociedad civil es concebida con dife-

rentes grados de autonomía y, eventualmente, de antagonismo; b) una *visión idealizada y optimista de la sociedad civil* que, con frecuencia, ignora sus contradicciones, fragmentaciones y tensiones internas, particularmente en el marco de un proceso de globalización caracterizado por la desigualdad y la exclusión social y geográfica, y de sus dificultades para articular e impulsar proyectos de carácter societal masivo; y c) la percepción de la *validez hegemónica de las modalidades de democracia liberal* en el marco de la irreversibilidad del proceso de globalización y de una visión acrítica de la estructura de poder mundial (Pasha y Blaney 1998).

Un aporte reciente en esta línea es el concepto surgido en torno a la emergencia de *redes de incidencia transnacional* (*transnational advocacy networks*), no necesariamente vinculadas o identificadas con movimientos sociales, y más bien vistas como estructuras comunicativas para el intercambio a partir de redes sociales en busca de estructurar oportunidades políticas, darles orientación (*framing*), a partir de políticas de información y de campañas modeladas en torno a ellas, en donde los medios masivos de comunicación tienen un papel relevante (Keck y Sikkink 1998)¹⁷. En esta perspectiva, la visión del rol de los organismos gubernamentales e intergubernamentales (y del Estado en general) se encuentra más matizada, en tanto postula, a partir de un análisis empírico, la posibilidad de desarrollo de una variedad de vínculos y alianzas entre las distintas agencias estatales y los actores transnacionales.

Finalmente, una concepción más asociada con las visiones transformacionistas postula la emergencia de una *sociedad civil transnacional* que incluye tanto a viejos como a nuevos movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, tomando en cuenta diferentes ámbitos y niveles de interacción, diferentes agendas y objetivos, y modalidades distintas de movilización y acción política en lo local, lo nacional, lo subregional y regional, y no sólo en lo global. En este marco se delimitan *nuevos espacios políticos* configurados por redes basadas en relaciones económicas, sociales y culturales que son ocupadas por la asociación consciente de actores, en localidades físicamente separadas, que se vinculan entre sí como redes con propósitos políticos y sociales particulares (Lipshutz 1996: 104)¹⁸ en el marco de la política mundial y no sólo del proceso de globalización económica.

Esta concepción articula la dinámica globalizadora con la regional, nacional y local y, especialmente con los ámbitos de regionaliza-

ción, postulando eventualmente como uno de los niveles existentes en el nuevo entramado social mundial el de la *sociedad civil regional*¹⁹ (Serbin 1997; Jacóme y Serbin 1998). En el caso de América Latina, este planteamiento se refiere a todo tipo de asociación, organización o red voluntaria tanto a nivel subregional, regional o hemisférica, como con proyección e impacto global, en interlocución con, pero con autonomía de, diferentes actores —gobiernos y sus organismos, parlamentos regionales, organismos intergubernamentales, corporaciones transnacionales y organismos multilaterales. En el caso de América Latina su origen se remonta, básicamente, a los movimientos y organizaciones comunitarias y de base surgidas en los años 70 y 80, y a las redes de derechos humanos en el marco de los procesos de democratización y actualmente en transición (Fernandes 1994; Wils 1995; Béjar y Oakley 1996)²⁰.

El problema fundamental de estas definiciones es que se basan en una visión predominantemente descriptiva de la sociedad civil nacional que, sin embargo, trasciende los ámbitos domésticos en su actual accionar. Asimismo, el planteamiento de la emergencia de una sociedad civil transnacional, con frecuencia se asocia con una visión optimista del rol de los agentes en la transformación social y la descalificación del rol del Estado, el que es visto en forma antagónica frente a la sociedad civil. En este sentido es necesario establecer algunas precisiones en torno a ¿qué es la sociedad civil transnacional en el marco de la globalización?, a partir del hecho evidente que no es dable, analíticamente, equiparar los procesos de las sociedades domésticas con los de la sociedad civil transnacional.

LA SOCIEDAD CIVIL TRANSNACIONAL EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN: ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES

Estas precisiones deben ser ubicadas, además, en dos contextos conceptuales específicos: uno, el de la dinámica sociopolítica global que asume la tradicional tríada Estado-nación/mercado/sociedad civil²¹ al trascender las fronteras del Estado-nación, y dos, el de las particularidades de la compleja dinámica de interconexión e interdependencia que impone la globalización. Veamos éstos con mayor detalle.

En primer lugar, particularmente en el marco de la dinámica global, la sociedad civil transnacional asume una serie de características inéditas en lo que concierne a la concepción tradicional de la sociedad civil doméstica como toda forma de organización social que

no es asociada ni al Estado ni a las empresas lucrativas. En este sentido, si bien despliega mayores potencialidades de contribuir a regular, junto al Estado, la dinámica del mercado, también contribuye a acotar la acción del Estado en el marco de un cuadro extremadamente complejo de interrelación de niveles, ámbitos de interacción y actores. La sociedad civil transnacional no es englobada por el Estado, a diferencia de la sociedad civil doméstica; no necesita tener por único objetivo e interlocutor al Estado-nación; no remite a una territorialidad o soberanía específica y, por lo tanto, *no es estadocéntrica* (Lipshutz). Sin embargo, pese al discurso antiestatal dominante y a las limitaciones de muchos Estados, particularmente en el Tercer Mundo, éstos y sus agencias siguen siendo interlocutores fundamentales de los actores de la sociedad civil transnacional.

Pero esta sociedad civil transnacional tampoco es englobada por el mercado, como un tercer sector privado no lucrativo y meramente filantrópico, como lo plantean ciertos enfoques neoliberales. En este sentido, la sociedad civil transnacional puede ser concebida como el entramado de redes de actividades organizadas por grupos o individuos, ya sea que proporcionen ciertos servicios o que traten de influir y mejorar la sociedad en su conjunto, sin ser parte del gobierno o de las empresas (Jorgensen 1996:36)²², pero en una necesaria interlocución con ambas.

En esta perspectiva, la sociedad civil transnacional no tiene por referente único al Estado o a los Estados, sino a múltiples referentes en el *marco multicéntrico* de los procesos globales, incluyendo a los actores económicos de los mercados regionales y global. En realidad, se caracteriza por una multiplicación de referentes con los que interactúa: por un lado, con diferentes interlocutores a nivel gubernamental (agencias de gobierno, organismos intergubernamentales diversos, decisores políticos, funcionarios, tecnócratas) y sobre los que trata de influir para incrementar su participación y para impulsar políticas públicas acordes con sus intereses, y a nivel del mercado (corporaciones transnacionales, organismos financieros multilaterales, banca internacional privada) en la búsqueda de acotarlo y regularlo, en el marco de la trilogía tradicional, y por otro, articulando el nivel local, nacional, subregional, regional y global. Pero predominantemente, los interlocutores de las expresiones regionales y globales de la sociedad civil son intergubernamentales cuando no supranacionales, como en el caso de los organismos de la Unión Europea.

A su vez, a diferencia de la dinámica de la sociedad civil doméstica, la SCT implica espacios y ámbitos de interacción diferentes, modalidades particulares de incidencia y de “hacer política” y formas diferenciadas de vincularse a partidos políticos, sindicatos, legislaturas nacionales y regionales en el marco de la democracia representativa. En esta perspectiva, si bien la SCT denota un mayor grado de autonomía frente a los espacios políticos domésticos y más específicamente frente al Estado, sigue teniendo por interlocutores privilegiados a los gobiernos y a los organismos intergubernamentales, como así también a diferentes expresiones de las sociedades políticas nacionales —parlamentos regionales, internacionales partidistas.

En segundo lugar, y en esta perspectiva, la SCT implica una *dimensión eminentemente sociopolítica* de acción de los ciudadanos en función de la interacción, el diálogo y la confrontación con otros actores políticos relevantes del sistema internacional en torno de temas transnacionales y de una agenda global de carácter social en el marco de la promoción de formas de gobernabilidad democrática global. En este sentido genera el desarrollo de espacios políticos interconectados que trascienden las fronteras nacionales y territoriales, y que, por lo tanto, no están contenidas —a diferencia de la sociedad civil doméstica— por el Estado nacional, ni por una territorialidad definida. Como espacios políticos interconectados a nivel global y regional, apuntan en su desarrollo a una *gobernabilidad democrática transnacional* en el marco del proceso de globalización, en función de promover formas de responsabilidad (*accountability*) política por parte de los actores transnacionales y nacionales involucrados en la dinámica del sistema internacional. Sin embargo, toda dimensión sociopolítica implica asimismo posiciones y estrategias distintivas frente a la estructura de poder existente, y significativas variaciones en sus posibilidades de incidencia política según la posición social o geográfica que ocupan.

En tercer lugar, la sociedad civil transnacional tampoco es homogénea, sino que está constituida por un entramado muy complejo de redes y actores, no necesariamente convergentes, que con frecuencia conducen a su fragmentación interna y a la existencia de tensiones y contradicciones en su seno. La SCT no está conformada solamente por movimientos sociales (“viejos” como los movimientos obrero o campesino; “nuevos” como los ambientalistas o las organizaciones de mujeres), ni se puede reducir a las ONGs²³. Entre otras razones porque hasta el movimiento sindical se ha *aggiornado*

y se ha vuelto “nuevo” con énfasis en la identidad, la lucha por nuevos estilos de vida y una búsqueda del poder más difusa, y llega a funcionar como una ONG (Munck 1998). Asimismo porque, con frecuencia, las agendas de estos actores sociales en el marco de los países desarrollados no necesariamente coinciden con aquellas de los países en vías de desarrollo.

La SCT incluye, por lo tanto, redes diversas, frecuentemente con contornos poco precisos: movimientos sociales “nuevos” y “viejos”, ONGs, comunidades epistémicas, comunicadores y medios de comunicación, etcétera. A la vez, es contradictoria, heterogénea y cargada de tensiones propias, ya que contiene a diversos actores y sectores (desde las ONGs de derechos humanos o desarrollo, a la criminalidad organizada transnacionalmente), que abordan objetivos que escapan a una negociación nacional. De hecho, no es dable considerar el proceso de surgimiento de la SCT fuera del contexto de desigualdades, exclusiones y contradicciones generadas por el propio proceso de globalización, tanto en términos sociales como geográficos, más allá de la aspiración de los movimientos y organizaciones que la configuran de promover los temas de una agenda global y de consolidar los mecanismos de gobernabilidad democrática a escala mundial.

En este sentido, con frecuencia y de una manera no excluyente, tienen como base a las ONGs, que, más que movilización de masas o sectores como en el caso de los movimientos sociales tradicionales, tienden a privilegiar como forma de acción política el cabildeo (*lobbying*) y la acción cupular (incidencia); no buscan acceder al poder, pero sí incidir sobre él; abordan temas (*issues*) específicos y son más cercanos a los nuevos movimientos sociales en su reivindicación de identidades²⁴. Proceso para el que requieren de una interlocución y de alianzas estratégicas múltiples que puedan incluir tanto a los actores del Estado y de la sociedad política, como a los actores del mercado en el desarrollo de las redes de incidencia transnacional ya citadas.

A su vez, un componente importante a tener en cuenta en la conformación de la sociedad civil transnacional es el de los medios de comunicación, en tanto canalizan y expresan muchas de las demandas de los diferentes sectores de la SCT y contribuyen a influir en los decisores políticos en torno a los temas de una agenda social regional o global (Shaw 1996).

En cuarto lugar, la SCT es más transnacional que global, porque incluye redes y entramados subregionales y regionales que no

necesariamente se asocian con planteamientos globales, y que articulan de manera particular lo global con lo transnacional, sea regional o sea global. En este sentido, la SCT con frecuencia refleja características propias de las sociedades civiles domésticas y locales involucradas en función de su relación con el Estado (culturas políticas), en tanto los procesos globales son procesados a través de culturas regionales, nacionales y locales de una manera que pone en cuestión toda visión homogenizadora. A su vez, en el marco de esta heterogeneidad, implican una “globalización desde abajo” en busca de regular y regimentar el desempeño de otros actores del sistema internacional, de ahí su vinculación predominante con lo que Falk (1995a y b) denomina las leyes de la humanidad y su imposición global.

En quinto lugar, esta articulación diferencial a distintos niveles y en distintos ámbitos da lugar también a la emergencia de una *sociedad civil regional* (SCR) como parte de la dinámica de la SCT y el sistema internacional, pero guiada por objetivos y temáticas regionales, en especial en lo que atañe a los procesos de integración subregionales y regionales, frecuentemente impulsadas en torno a la creación de áreas de libre comercio, pero orientadas a la búsqueda de participación e incidencia política sobre las agendas sociales. En este marco se plantean temas y agendas sociales regionales, no necesariamente articuladas con las agendas globales, que se promueven en contextos no siempre antagónicos a los gobiernos, buscando incidir sobre las agencias nacionales a cargo de la política exterior y sobre los organismos intergubernamentales, particularmente referidos a temas regionales en el contexto de los procesos de regionalización asociados a la globalización. Asimismo, es de señalar, en este marco, el mayor peso de las respectivas culturas políticas nacionales en torno a la definición de las respectivas estrategias y formas de “hacer política”.

ALGUNAS CONCLUSIONES TENTATIVAS

En su conjunto estas iniciativas intersociales —tanto las promovidas desde los diversos entramados regionales y subregionales de la sociedad civil como desde los organismos intergubernamentales— son muestra de la emergencia de una serie de redes de la sociedad civil regional, con características distintivas, que impulsan una mayor participación en los procesos intergubernamentales por encima o en articulación con los procesos nacionales. Sin embargo es de se-

ñalar que éste es un movimiento incipiente que comienza a articularse en torno a algunos temas de las agendas específicas con movimientos más amplios de la sociedad civil transnacional, y que no necesariamente sigue su dinámica y orientación en el ámbito global.

En esencia, el presente relevamiento conceptual postula básicamente la necesidad de un enfoque sociopolítico del análisis del surgimiento y desarrollo de la sociedad transnacional en el marco del actual proceso de globalización, en tanto: a) ésta última no es concebida exclusivamente como un proceso económico, sino que tiende a la configuración de un espacio político global, complejo y heterogéneo al punto de dar lugar a una articulación efectiva de diversos espacios políticos a nivel mundial (locales, nacionales, subregionales y regionales, hemisféricos y globales; b) que, en el marco de la democratización global (y más allá de las críticas en boga a su visión uniformadora y arraigada en los valores occidentales) requiere del desarrollo de formas de gobernabilidad democrática a nivel transnacional que incrementen la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, y c) que, desde esta perspectiva, debe tomar en cuenta la incidencia crucial de la sociedad civil transnacional en la regulación y acotamiento del desempeño tanto de los Estados-nación como de los agentes del mercado.

Para concluir, está de más señalar que este breve mapeo apunta más a ubicar conceptualmente el estado actual del debate que a señalar algún tipo de conclusiones definitivas. El aceleramiento de los cambios globales y regionales impone, no obstante, la necesidad de una progresiva sistematización de este debate, tanto en aras de la búsqueda de algunas precisiones conceptuales en el marco de la incertidumbre generada por la crisis de paradigmas que caracteriza a las actuales ciencias sociales, como de la necesidad de establecer algunos puntos de orientación en el accionar político de numerosas organizaciones que postulan demandas y reivindicaciones de carácter regional, asociadas a estrategias y modalidades particulares de incidir sobre la toma de decisiones tanto en el ámbito de las políticas públicas como de las políticas exteriores de los Estados latinoamericanos y caribeños en la nueva coyuntura mundial.

NOTAS

1. Cf. por ejemplo, el planteamiento de Tony Spybey, entre otros, al asociar la globalización básicamente con la expansión de la “sociedad de participación de masas” y su articulación con la producción y el consumo masivo, aceitado y promovido por las comunicaciones de masas, a partir del desarrollo de visiones globales que se arraigan en una originaria visión eurocéntrica, actualmente asociada con la promoción global del *American way of life*, sin que ello obste para una articulación particular de la globalización con diversas perspectivas nacionales y globales (Spybey 1996).
2. En otros trabajos hemos analizado con más detalle estos procesos en el caso de su impacto en el Caribe (Serbin 1996; 1998).
3. O, según plantea Robertson, en términos de un proceso doble que implica “the interpenetration of the universalization of particularism and the particularization of universalism” [“la interpenetración de la universalización del particularismo y la particularización del universalismo”] (1992: 100) en tanto refleja la interpenetración entre los flujos culturales globales y los patrones culturales locales.
4. Susan Strange, en cambio, señala: “although it is hard to measure the process of globalisation, it is no myth. It exists, and it changes things, on several levels” [“aunque es difícil medir el proceso de globalización, éste no es ningún mito. Existe, y en muchos niveles, cambia las cosas.”] (Strange 1996: xiii).
5. En este sentido, algunos autores señalan como un rasgo distintivo de la globalización del sistema internacional, el paso de un sistema estadocéntrico (centrado en el Estado-nación como actor protagónico) a uno multicéntrico, caracterizado por la multiplicación de actores relevantes en la dinámica del sistema internacional (Rosenau 1990; 1997^a y b).
6. Ver por ejemplo, el volumen de Spybey, *Globalization and World Society* (Cambridge: Polity Press, 1996).
7. Los escépticos postulan cuatro observaciones críticas básicas a la existencia de un proceso de globalización: 1) la actividad económica sigue significativamente basada en lo nacional; más de lo que lo estaría en el caso de existir efectivamente una economía globalizada; 2) el crecimiento de los flujos internacionales representa fundamentalmente una “internacionalización” de la economía, al incrementar las interacciones entre economías nacionales bien definidas más que la emergencia de una actividad económica global; 3) los actuales niveles de flujos globales son comparables o tal vez menores que los del período clásico del patrón oro (c. 1870-1914) y, como tal, el crecimiento de las transacciones internacionales en la postguerra es poco menos que un retorno al *statu quo ante* tras las crisis de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial; y 4) gran

parte del incremento de la actividad internacional refleja la emergencia de agrupaciones regionales, diferenciadas y crecientemente autocontenidas, que refieren más a un proceso de regionalización económica global (Perraton et al. 1997: 257-258).

8. Como señala Sidori: “Esta visión globalista satisface el liberalismo antipolítico de la derecha, en tanto el comercio, las compañías transnacionales y los mercados de capitales son liberados de las constricciones de la política y de las organizaciones laborales; las operaciones se hacen más seguras gracias a la emergencia de un mundo desmilitarizado, consecuentemente negando a la vez “la necesidad de una gobernabilidad internacional fuerte y la posibilidad de acciones a nivel nacional”. La visión globalista también satisface a la izquierda en tanto “la globalización prueba la realidad del sistema mundial capitalista y la naturaleza ilusoria de las estrategias reformistas nacionales, así sea que la certidumbre intelectual es comprada al precio de la impotencia política” (Sidori 1997:73).
9. Hettne ubica la regionalización en el marco de la transición entre un orden mundial “westphaliano” —cuya lógica asume que el Estado-nación es el garante tanto de la seguridad como del bienestar social de sus ciudadanos y lo que queda fuera de este Estado es percibido como caos y anarquía—, y un orden mundial “postwestphaliano”, cuya racionalidad se apoya en la idea de que el Estado-nación ha perdido su utilidad y que la solución de los problemas emergentes debe ser encontrada en estructuras transnacionales. En esta perspectiva, el enfoque regionalista puede ser visto como el compromiso entre la racionalidad política westphaliana y la postwestphaliana (Hettne 1997:84).
10. Beck plantea, con referencia a la irreversibilidad del proceso, ocho razones básicas: “1. El ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional, así como el carácter global de la red de mercados financieros y del poder cada vez mayor de las multinacionales; 2. La revolución permanente en el terreno de la información y las tecnologías de comunicación; 3. La exigencia, universalmente aceptada, de respetar los derechos humanos —también considerada como el principio de la democracia; 4. Las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura; 5. La política mundial postinternacional y policéntrica; junto a los gobiernos hay cada vez más actores transnacionales con cada vez mayor poder (multinacionales, ONGs, Naciones Unidas); 6. El problema de la pobreza global; 7. El problema de los daños y atentados ecológicos globales; 8. El problema de los conflictos transculturales en un lugar concreto” (Beck 1998:29-30).
11. En este marco y en relación con el Estado-nación los globalistas ven la soberanía de los Estados ir hacia arriba (supranacionalidad) o hacia abajo (subnacionalidad), con los peligros inherentes de contradicción entre la homogeneización que impone la globalización con la fragmentación

que pueden imponer los nacionalismos locales. En su versión neoliberal, la SCG emerge como respuesta funcional a la creciente dificultad de los Estados de asumir políticas de bienestar (tercer sector); en versión neomarxista, como una fuerza contrahegemónica a nivel global, articulada en torno a la emergencia de ONGs y movimientos sociales de nuevo cuño.

12. Como señala un artículo reciente de *Foreign Policy* "In general terms, NGOs affect national governments, multilateral institutions, and national and multinational corporations in four ways: setting agendas, negotiating outcomes, conferring legitimacy, and implementing solutions" ["En términos generales, hay cuatro maneras en que los ONG afectan a los gobiernos nacionales, a las instituciones multilaterales y a las corporaciones nacionales y multinacionales: estableciendo las agendas, negociando los resultados, confiriendo legitimidad e implementando soluciones."] (Simmons 1998:84).
13. En esta perspectiva, el concepto de *redes* es crucial para la comprensión del desarrollo de la sociedad civil transnacional (Castells 1996; Serbin 1998). Como señala Shaw "mientras que de manera amplia la sociedad civil puede ser definida como "la sociedad menos el Estado" —incluyendo de esta manera la economía—, una definición más focalizada y relevante es que la sociedad civil debe ser vista como una "red de instituciones" a través de las cuales los grupos en la sociedad se representan a sí mismos —tanto entre sí como ante el Estado" (Shaw 1994:647). De esta manera, el concepto, en función del énfasis en las redes, fácilmente puede ser extendido a la sociedad civil transnacional, más allá de que se amplíe el número de interlocutores.
14. Esto se hace particularmente evidente en las posiciones asumidas por los gobiernos de algunos países latinoamericanos con orientaciones fuertemente "estatistas" en el marco de la tradicional debilidad de las sociedades civiles nacionales en América Latina.
15. Colás señala, en esta perspectiva, que la sociedad civil internacional se constituye en el escenario de la política internacional, en tanto "international civil society is the international space created by the expansion of capitalist relations of production where modern social movements pursue their goals" ["la sociedad civil global es el espacio internacional creado por la expansión de las relaciones capitalistas de producción donde los movimientos sociales modernos persiguen sus objetivos."] (Colás 1997:269).
16. Lipshutz esgrime dos razones básicas para justificar la noción de sociedad civil global, concebida como "the self-conscious construction of networks of knowledge and action, by decentered, local actors, that cross the reified boundaries of States as though they were not there": "The first is that there is not one, but many heteronomous transnational political networks being established by and among actors within civil

society who themselves are, in a sense, 'imagined communities', and who are challenging and changing, from below, the nation-State system. The second reason is that the growth of global civil society represents an ongoing project of civil society to reconstruct world politics" ["la construcción consciente de redes de conocimiento y acción, por actores descentralizados y locales, que cruzan las fronteras formales de los Estados como si no existiesen": "Lo primero es que no hay una sino muchas redes políticas transnacionales heterónomas que están siendo establecidas por y entre los actores dentro de la sociedad civil, quienes a su vez son, en cierto sentido, "comunidades imaginadas", y quienes están desafiando y cambiando, desde abajo, el sistema nación-Estado. (Lipshutz 1996:102). En lo que coincide con Shaw, en tanto éste señala que lo que hace a la existencia de la sociedad civil global son las "global politics" (Shaw 1994:655).

17. Un elemento interesante en esta concepción de redes de incidencia es el hecho de que no se reduce a los activistas de las ONGs sino que pueden vincular, eventualmente, funcionarios de gobierno, políticos y actores de los medios de comunicación en una interacción en torno a temas relevantes que trasciende las divisiones entre sociedad civil y gobierno como tales (Keck y Sikkink 1998).
18. Y como añade el mismo autor "While the participants in the networks of global civil society interact with States and governments over particular policy issues, the networks themselves extend across levels of analysis and State borders, and are not constrained by the State system itself" ["Al mismo tiempo que los participantes en las redes de la sociedad civil global interactúan con los Estados y los gobiernos en torno a temas particulares sobre políticas, las redes como tales trascienden los niveles de análisis y las fronteras estatales y no se ven limitadas por el sistema estatal"] (Lipshutz 1996: 104).
19. Como apunta Fowler "Civil society is not a thing that can be found in the same form in different countries: dissimilarities in ecological and social preconditions, historical trajectories and their interruptions ensure a rich variation. At best one can talk of features which are similar between certain countries or within regions" ["La sociedad civil no es algo que tiene la misma forma en diferentes países: las disimilitudes en las condiciones ecológicas y sociales previas, las trayectorias históricas y sus interrupciones aseguran una rica variación. En el mejor de los casos se puede hablar de características que son similares entre ciertos países o dentro de regiones"] (Fowler 1996:15).
20. En función de esta perspectiva, en un reciente volumen sobre la sociedad civil en América Latina, ésta se caracteriza de la siguiente manera: "La sociedad civil (i) engloba el conjunto de actividades e iniciativas de tipo asociativo, (ii) relativamente autónomas con relación al Estado y al sistema político así como a la "sociedad económica", (iii) realizadas por

grupos primordialmente de incorporación voluntaria y organizados por sí mismos, (iv) que se orientan a la articulación de valores, a la reivindicación de intereses, al cultivo de la sociabilidad y de las manifestaciones de la cultura, a la promoción del intercambio de ideas y de los debates públicos” (Arocena 1999:467).

21. “Según esta interpretación, la sociedad moderna se distingue por tres esferas claramente definidas: Estado, mercado y sociedad civil. Suponiendo que sea evidente esta distinción, el espacio de la sociedad civil, un espacio institucionalizado y politizado, tiene la doble función de enfrentarse y de colaborar con las otras dos esferas. Se enfrenta cuando la expectativa central del Estado moderno, esto es la democracia, no se cumple, *generándose un déficit democrático*. Asimismo, se enfrenta cuando las condiciones del mercado y de la ausencia de políticas públicas adecuadas genera una desigualdad y una exclusión social, *produciéndose un déficit social*. Por el contrario, puede colaborar con el Estado, en calidad de participante en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en calidad de prestadora de servicios. De igual manera, puede colaborar con el mercado, en calidad de mecanismo de inclusión, ahí donde el poder adquisitivo es insuficiente o nulo” (García 1997:13). O como añaden De Oliveira y Tandon “en todo el mundo, la sociedad civil interactúa y ejerce ahora un poder para contrarrestar aquél de los mercados y el gobierno” (1995: 24), para lo cual la sociedad civil necesariamente requiere de la existencia de formas democráticas de gobierno (Walzer 1998).
22. Es necesario señalar, sin embargo, que la trilogía Estado, mercado y sociedad civil también ha sido extensamente criticada por caracterizarse por una visión ahistórica, culturalmente descontextualizada, que promueve un modelo de sociedad particular basada en las concepciones occidentales de democracia (Trivedy and Charya 1996:58). Como apuntan estos autores: “In one sense, the trinity framework is an ideological expression of the globalisation of market economy. In trying to undermine the positive side of the role of the State in the South, it undermines the sovereignty of less developed nations. In trying to subsume everything under the western-liberal notions of what is civil and democratic, it undermines local history, culture and alternative paths of development. In so far as it obfuscates the structural distinction between the different social groups—classes, castes, ethnic groupings, gender differences and other dimensions and by submerging these differences under the rubric of civil society—it tends to undermine the poverty-focused and rights based approaches which have been the avowed hallmark of many development agencies” [“En cierto sentido, la trilogía es una expresión ideológica de la globalización de la economía de mercado. Al tratar de socavar el lado positivo del papel del Estado en el Sur, debilita la soberanía de las naciones menos desarrolladas. Al tratar de subsumir todo bajo las nociones occidentales y liberales de lo que es civil y democrático-

co, mina la historia local, la cultura y las vías alternativas hacia el desarrollo. En la medida en que confunde la distinción estructural entre los diferentes grupos sociales, clases, castas, grupos étnicos, diferencias de género y otras dimensiones, y al sumergir estas diferencias bajo el rubro de sociedad civil, tiende a horadar los enfoques que se centran en la pobreza y los derechos y que han sido el sello de identificación de muchas agencias de desarrollo”] (ibidem).

23. Como señalan Trivedy y Acharya, las ONGs son parte del engranaje tendiente a fortalecer la sociedad civil, pero no la substituyen (1996: 57-78). De hecho, Uphoff (1996) diferencia claramente entre las ONGs, consideradas como un “subsector” del sector privado e identificado con el llamado “tercer sector”, y las organizaciones cooperativas y “de membresía” que están orientadas a la autoayuda y son responsables ante sus miembros. Asimismo, marca una clara diferencia entre las ONGs y las organizaciones de base (*grassroots organizations*) en tanto las primeras son concebidas en función de servicios a quienes no son miembros de ellas, y las segundas no son necesariamente equiparables a las primeras, ya que proveen servicios a sus propios miembros y, eventualmente, deben ser responsables ante ellos (19-20).
24. Scott apunta “A social movement can be defined in general as a collective actor constituted by individuals who understand themselves to have common interests and, for at least some significant part of their social existence, a common identity. Social movements are distinguished from other collective actors, such as political parties and pressure groups, in that they have mass mobilization, or the threat of mobilization, as their prime source of social sanction, and hence of power. They are further distinguished by other collectivities, such as voluntary associations or clubs, in being chiefly concerned to defend or change society, or the relative position of the group in society”. [En general, un movimiento social puede definirse como un protagonista colectivo conformado por individuos que se perciben con intereses comunes, y, al menos durante una parte importante de su existencia social, con una identidad común. Los movimientos sociales se distinguen de otros actores colectivos, como los partidos políticos y los grupos de presión, en que tienen movilización masiva o la amenaza de movilización como su principal fuente de sanción social, y por ende, de poder. Se distinguen además de otras colectividades, como las asociaciones o clubes voluntarios, por estar fundamentalmente preocupados por defender o cambiar la sociedad, o la posición relativa del grupo en la sociedad”] (citado por Shaw 1994:651-652).

BIBLIOGRAFÍA

- Arocena, Rodrigo (1999) "¿Cuál futuro para la sociedad civil de América Latina?", en Hengstenberg, Peter; Karl Kohut; Gunther Maihold (eds.) *Sociedad civil en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad*. Caracas: ADLAF/FES/Nueva Sociedad, pp. 465-473.
- Bissio, Roberto (1997) "Ciudadanía y globalización", en Bissio, Roberto et al.: *Las dimensiones del desarrollo*. Montevideo, SERPAJ/CLAES, Biblioteca de Marcha, pp. 50-55.
- Colás, Alejandro (1997) "The Promises of International Civil Society", en *Global Society* (Canterbury), vol. 11, No. 3, September, pp. 261-278.
- Beck, Ulrich (1998) *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Paidós. Buenos Aires.
- Bernal-Meza, Raúl (1995) "La globalización: ¿un proceso o una ideología?", en: *América Latina en la era de la globalización*. Caracas: Instituto de Altos Estudios de América Latina, pp. 19-38.
- Bodemer, Klaus (1998) "La globalización. Un concepto y sus problemas", en: *Nueva Sociedad* (Caracas), No. 156, julio-agosto, pp. 54-70.
- Boyer, Robert (1997) "Les mots et les réalités", en *Mondialisation au-delà des mythes*. Paris: La Découverte, pp 13-49.
- Castells, Manuel (1996) *The Rise of the Network Society*, Malden: Blackwell
- De Oliveira, Miguel Darcy y Rajesh Tandon (1994) "Una sociedad mundial emergente", en: De Oliveira, Miguel Darcy y Rajesh Tandon (coordinadores) *Ciudadanos en construcción de la sociedad civil mundial*. Washington: CIVICUS, pp. 21-49.
- Ferrer, Aldo (1997) *Hechos y ficciones de la globalización*. Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires.
- Falk, Richard (1995a) "The World Order between Inter-State Law and the Law of Humanity: the Role of Civil Society Institutions", en: Archibugi, Daniele and David Held (editors) *Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order*. Cambridge, UK: Polity Press, pp. 163-179.
- Falk, Richard (1995b) *On Humane Governance. Toward a New Global Politics. A Report to the World Order Models Project*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Fowler, Alan (1996) "Strengthening Civil Societies in Transition Economies: from Concept to Strategy: Mapping an Exit in a Maze of Mirrors", en: Clayton, Andrew (editor) *NGOs, Civil Society and the State*, Oxford: INTRAC, pp. 12-33.

- García, Sergio (coordinador) (1997) *Organizaciones No Gubernamentales. Definición, presencia y perspectivas*. México D.F.: Foro de Apoyo Mutuo/ IAP/ Demos.
- Giddens, Anthony (1994) *Consecuencias de la modernidad*, Madrid: Alianza Editorial.
- Giddens, Anthony (1998) *The Third Way. The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Grandi, Jorge y Lincoln Bizzozero (1997) "Mercosur: mercado en formación y sociedad civil en gestación", en: *Papel Político* (Bogotá), No. 6, noviembre, pp. 9-29.
- Goldblatt, David; David Held; Anthony McGrew and Jonathan Perraton (1997) "Economic Globalization and the Nation-State: Shifting Balances of Power", en: *Alternatives* (Boulder), vol. 22, No. 3, July-September, pp. 269-286.
- Guéhenno, Jean-Marie (1995) *The End of the Nation-State*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Held, David (1995) "Democracy and the New International Order", in Archibugi, Daniele and David Held (eds.) *Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order*. Cambridge: Polity Press.
- Held, David (1997) *La democracia y el orden global*. Buenos Aires: Paidós.
- Hirst, Paul (1997) "The global economy: myths and realities", en: *International Affairs* (London), vol. 73, No. 3, Julio 1997, pp. 409-426.
- Hirst, Paul and Grahame Thompson (1996) *Globalization in Question. The International Economy and the Possibilities of Governance*. Cambridge: Polity Press.
- Huntington, Samuel (1996) *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*. New York: Simon and Schuster.
- Jácome, Francine y Andrés Serbin (comps.) (1998) *Sociedad civil e integración regional en el Gran Caribe*. Caracas: Nueva Sociedad/CRIES/ INVESP.
- Jorgensen, Lars (1996) "What are NGOs Doing in Civil Society?", en: Clayton, Andrew (editor) *NGOs, Civil Society and the State*. Oxford: INTRAC, pp. 12-33.
- Keck, Margaret and Kathryn Sikkink (1998a) "Transnational Advocacy Networks in the Movement Society", en: Meyer, David and Sidney Tarrow (1998) *The Social Movement Society*. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers; pp. 217-238.
- Keck, Margaret and Kathryn Sikkink (1998b) *Activists Beyond Borders*. Ithaca: Cornell University Press.

- Kofman, Eleonore and Gillian Youngs (eds.) (1996) *Globalization. Theory and Practice*. London: Pinter.
- Lipschutz, Ronnie D. (1996) "Restructuring World Politics: The Emergence of Global Civil Society", en: Fawn, Rick and Jeremy Larkins (editors) *International Society after the Cold War*. London: MacMillan, pp. 47-61.
- McGrew, Anthony G. (1998) "The Globalisation Debate: Putting the Advanced Capitalist State in its Place", en: *Global Society* (Canterbury), vol. 12, No. 3, September, pp. 299-321.
- Moncayo, Héctor-León (1997) "Los movimientos sociales entre la condicionalidad y la globalización", en: *Nueva Sociedad* (Caracas), no. 148, marzo-abril, pp. 52-69.
- Munck, Ronaldo (1998) "Trabajadores y globalización. Resultados y perspectivas", en: *Nueva Sociedad* (Caracas), No. 158, noviembre-diciembre, pp. 64-76.
- Ohmae, Kenichi (1995) *The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies*. New York: The Free Press.
- Pacha, Mustapha Kamal y David Blaney (1998) "Elusive Paradise: The Promise and Peril of Global Civil Society", en: *Alternatives* (Boulder), vol. 23, No. 4, Oct.-Dec. 1998, pp. 417-450.
- Perraton, Jonathan; David Goldbaltt; David Held and Anthony McGrew (1997) "The Globalisation of Economic Activity", in *New Political Economy* (Sheffield), vol. 2, No. 2, pp. 257-277.
- Rosenau, James (1990) *Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity*. Princeton: Princeton University Press.
- Rosenau, James (1997) "The Complexities and Contradictions of Globalization", in: *Current History* (Philadelphia), vol. 96, No. 613, November, pp. 360-362.
- Rosenau, James (1998) "Hurricanes Are Not the Only Intruders. The Caribbean in an Era of Global Turbulence", en: Desch, Michael; Jorge Domínguez and Andrés Serbin (eds.) *From Pirates to Drug Lords. The Post-Cold War Caribbean Security Environment*. Albany: State University of New York Press, pp. 11-32.
- Scholte, Jan Aart (1996) "Beyond the Buzzword: Towards a Critical Theory of Globalization", en: Kofman and Youngs, *op. cit.*, pp 43-57.
- Serbin, Andrés (1996) *El ocaso de las islas. El Gran Caribe frente a los desafíos globales y regionales*. Caracas: Nueva Sociedad/INVESP.
- Serbin, Andrés (1997) "Globalización, déficit democrático y sociedad civil en los procesos de integración", en: *Pensamiento Propio* (Managua) año 1, No. 3, enero-abril, pp. 98-117.

- Serbin, Andrés (1998a) "Constitución práctica de una red regional", en *Cooperación internacional e integración regional: estrategias, gestión y generación de recursos*. Montevideo: CEFIR, pp. 37-68.
- Serbin, Andrés (1998b) *Sunset over the Islands. The Caribbean in an Age of Global and Regional Changes*. London: MacMillan.
- Serbin, Andrés (1998c) "La integración en el Gran Caribe", en *Pensamiento Propio* (Managua), año 3, No. 6, enero-abril, pp. 49-65.
- Shaw, Martin (1994) *Global Society and International Relations*. Cambridge: Polity Press.
- Sideri, Sandro (1997) "Globalisation and Regional Integration", en: *The European Journal of Development Research* (London), vol. 9, No 1, June 1997, pp. 38-81.
- Simmons, P.J. (1998) "Learning to live with NGOs", en *Foreign Policy* (Washington), No. 112, Fall 1998, pp. 82-95.
- Strange, Susan (1996) *The retreat of the state. The diffusion of power in the world economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strange, Susan (1997) "The Erosion of State" en: *Current History* (Philadelphia), vol. 96, No. 613, November, pp. 363-369.
- Trivedy, Roy and Jagabandhu Acharya (1996) "Constructing the Case for an Alternative Framework for Understanding Civil Society, the State and the Role of NGOs", en: Clayton, Andrew (editor) *NGOs, Civil Society and the State*. Oxford: INTRAC, pp. 12-33.
- Wahl, Peter (1997) "Tendencias globales y sociedad civil internacional: ¿una ongización de la política mundial?", en: *Nueva Sociedad* (Caracas), No. 149, mayo-junio, pp. 42-50.
- Walzer, Michael (1998) "The Concept of Civil Society" en: Walzer, Michael (editor) *Toward a Global Civil Society*. Providence: Berghahn Books, pp. 7-27.
- Whiting, Jr., Van R. (1996) "Regional Integration, Sustainable Development and Popular Participation", presentation for the *Working Group of the Americas*. Lima: Universidad de Lima.

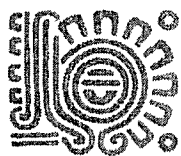
NODO NICARAO



- Conexión a Internet
Modo Gráfico
Modo Texto
- Cuentas de Correo Electrónico
- Herramientas para discusión y/o foros virtuales:
Listas de correo
Conferencias electrónicas
- Búsqueda de Información
- Diseño y Alojamiento de Páginas Web
- Cursos de Capacitación: Internet, Diseño en Web
- Soporte Técnico
- Cabinas Públicas de Lunes a Viernes, 8am a 12pm.

Iglesia El Carmen 1c. al norte, 1/2c. al Oeste
Apto. Postal 3516, Managua
Teléfonos: (505) 268-2362 - 222-5137
e-mail: nicarao@nicarao.org.ni
<http://nicarao.org.ni>

**LA COMUNICACION
AL SERVICIO
DEL PENSAMIENTO**



Cómo la sociología del Norte se celebra a sí misma*

HEINZ R. SONNTAG

La desigualdad o la asimetría es siempre un punto de debate, aunque no de la misma intensidad en cada campo. En lo que respecta a las relaciones económicas dentro del sistema mundial histórico, es ampliamente sabido y aceptado que su principal característica es su asimetría, la que beneficia al centro, perjudica la periferia y hace lo mismo (de manera simultánea y paralela) con la semiperiferia. También se reconoce de manera general que dicha asimetría, aunque cíclica, ha ido profundizándose cada vez más en el transcurso de la historia de este sistema, especialmente en estos tiempos de lo que a muchos les gusta llamar la “globalización”. De igual manera, se admite que el equilibrio del poder en el sistema interestatal siempre favorece a los países del centro, incluso en momentos de rivalidad cuando no existe una clara hegemonía de uno o varios países que pertenecen al

misimo, o incluso si las naciones semiperiféricas pueden ascender a posiciones de poder que les permiten competir por esa hegemonía.¹ Finalmente, se sabe también que la tendencia hacia la homogeneización cultural, especialmente fuerte hoy en día, está dominada por una cultura en particular: la cultura occidental, con su hasta ahora considerable éxito en presentarse como la *cultura universal*.

En el campo de la producción de conocimiento en las ciencias básicas, la tecnología y la ingeniería, tales asimetrías se han considerado y se consideran “normales”, en el sentido en que se acepta que algunos países o regiones participan en esa producción de manera más activa y con un mayor potencial para la innovación que otros. Esto se demuestra, en primer lugar, por el hecho de que las asimetrías sólo aparecen de forma marginal entre los temas trabajados por sociólogos e historiadores de la ciencia y la tecnología. En segundo lugar, dicha “normalidad” no se ve como el resultado eventual de una determinada división internacional del trabajo, aunque esta interpretación está teniendo cada vez más aceptación (lo cual tiene que ver con el creciente número de investigadores que provienen de países en desarrollo). Con algunas notables excepciones, aún se ve como un fenómeno casi natural, como si existieran pueblos, sociedades en general, naciones y otras conglomeraciones sociales (como la que Galbraith llamó *el complejo militar industrial*) innatamente más aptas que otras para la producción de conocimiento en este campo.

Donde el eje centro-periferia parece menos claro, aparte de los amplios contornos de la creación artística (literal, musical, etcétera),² es en el campo del pensamiento social y las ciencias sociales. Aquí, más que en los otros campos indicados, existe una cierta hipocresía: todos somos iguales. Al final lo que se observa es que unos son más iguales que otros, porque las representaciones sociales, los resultados de las investigaciones, las teorizaciones y las reflexiones de algunos se han diseminado más ampliamente que las de otros. A menudo, la línea divisoria es aquella que separa al Norte del Sur y de los países en transición, al centro de la periferia y de la semiperiferia. La excusa para ello ha sido (y es) la dificultad de la lengua: las conceptualizaciones y narrativas de las ciencias sociales, en teoría y metateoría, de la periferia y la semiperiferia, al menos las de las regiones latinoamericanas, árabes y asiáticas, y de los países en transición, son difíciles y costosas de traducir, tanto hacia nuestra *lingua franca*, el inglés, como hacia otras lenguas con mayor “prestigio” en esas áreas.³

Tal excusa no es del todo válida. Muchos de los que trabajan en ciencias sociales en esos países y regiones saben que los resultados de sus esfuerzos científicos sólo interesan a un círculo relativamente pequeño, a aquellos del mismo grupo lingüístico, (y a aquellos en una área más amplia interesados en sociología comparativa), razón por la cual a menudo procuran dar a conocer su trabajo a través del inglés y otros idiomas. Una práctica común es agregar resúmenes en inglés o francés a los artículos escritos en la lengua de origen. También se hacen intentos por publicar en éstos y otros idiomas con mayor prestigio en las ciencias sociales (italiano o alemán), y de dar conferencias en reuniones y congresos internacionales (frecuentemente con documentos traducidos a costa de un sacrificio económico personal). El objetivo de todo esto no es solamente la promoción del prestigio personal, sino también el deseo de contribuir a las discusiones sobre lo que es científicamente válido, actual, urgente y real.

Sin embargo, las formas institucionales y organizativas de nuestro empeño científico no son de mucha utilidad. Al igual que en las áreas políticas y económicas y en los contornos de la ciencia básica y la tecnología, existen profundas asimetrías en el campo del pensamiento social y las ciencias sociales, que se fomentan y se apoyan de manera silenciosa.

En la siguiente presentación mi objetivo es demostrar, a través de un análisis del programa del 14º Congreso Mundial de Sociología de la Asociación Sociológica Internacional (ISA),⁴ que los países del Norte dominan de manera abrumadora las presentaciones en las diferentes formas colectivas de trabajo asociadas con un evento de esta naturaleza. Para este análisis me baso fundamentalmente en los datos suministrados por el programa oficial del Congreso (ISA, 1998), intercalando mis reflexiones personales. Finalmente, presento una serie de propuestas sobre cómo introducir modificaciones en las estructuras de ISA y la organización de sus congresos, para que no se siga reproduciendo esta situación, que es inadmisible desde el punto de vista de la comunidad académica internacional,⁵ e intolerable desde el punto de vista de los científicos y pensadores de la periferia, la semiperiferia y los países en transición. No podemos seguir permitiendo que los congresos de ISA sean eventos en los que la sociología del Norte se celebra a sí misma.

Antes de presentar este análisis, sin embargo, es necesario hacer dos aclaraciones. La primera se refiere al uso de los conceptos “países del Norte”, “países del Sur”, y “países en transición”. En lo

sucesivo, seguiré la costumbre cada vez más común de las organizaciones internacionales (UNESCO, OMS, OIT, etcétera), y según la cual los países del Norte son aquellos que tienen un alto nivel de desarrollo, con estructuras económicas altamente diversificadas, con una estructura social *relativamente* igualitaria,⁶ por lo general con gobiernos democráticos o representativos, con un grado importante de cohesión sociocultural (aunque existen elementos que señalan hacia diferentes formas de multiculturalismo): desde Alemania hasta Nueva Zelanda, es decir los países del antiguo primer mundo. Los del Sur son los del tercer mundo,⁷ incluyendo aquellos recientemente industrializados y los que hoy pertenecen a lo que se ha llamado el cuarto mundo: toda la gama de países que van desde Afganistán hasta Zimbabwe y que incluye entre otros a Brasil, China, India, Chile, Corea del Sur, Indonesia, Venezuela, Nigeria, Argelia, Túnez, México, Sudáfrica y Zambia. Los países en transición son aquellos que pertenecen a lo que fue la Unión Soviética y el bloque dominado por ésta. El único criterio para la categorización de los diferentes presidentes de sesión, funcionarios de programa, autores, etcétera en uno de estos grupos es la afiliación institucional que ellos mismos indican.⁸

La segunda aclaración es de naturaleza personal. Quiero dejar claro que ni en lo macro ni en lo micro —y mucho menos en nuestros procedimientos intelectuales— creo yo en las *teorías de la conspiración*. Esto quiere decir que yo no creo que las cosas sean como son porque las personas conspiran; que, por ejemplo, el subdesarrollo existe porque algunos banqueros, capitalistas y ejecutivos internacionales han establecido (o permanentemente establecen) acuerdos para mantenerlo, o que en el Congreso de ISA existe la asimetría porque los colegas del Norte han conspirado para socavar los esfuerzos de aquellos de nosotros que trabajamos en los países del Sur o en transición. Pienso más bien (y trataré de demostrarlo) que es un asunto de mecanismos de comunicación y relaciones institucionales, de lenguaje, de vínculos personales, de orígenes intelectuales, de mecanismos que funcionan de una manera casi automática y por lo tanto inconsciente. Espero, por tanto, que nadie se sienta ofendido, y que lo que sigue se tome como una advertencia que debió hacerse mucho tiempo atrás, que Immanuel Wallerstein reconoció esto e hizo suyo el tema durante sus cuatro años como presidente de nuestra Asociación⁹ y que lo que sigue es una invitación a buscar maneras de superar la situación que subyace en todo esto.

LAS DESIGUALDADES EMPIEZAN DESDE MUY ARRIBA

Considero que todos nosotros, miembros de ISA, estamos conscientes de que las formas de elección de nuestras autoridades difícilmente podrían llamarse democráticas. El hecho de que, a) el presidente y los cuatro vicepresidentes sean seleccionados de manera indirecta por una asamblea conjunta de representantes de las asociaciones nacionales y de comités de investigación (CI), y que, b) ocho de los miembros del comité ejecutivo sean electos por una asamblea de asociaciones nacionales y otros ocho por delegados de los comités de investigación, haría que más de un colega, y no sólo los especialistas en la sociología de la democracia, protestaran si esto ocurriera en otros ámbitos, y sobre todo si agregamos que las asociaciones nacionales no pueden votar si no están al día con el pago de sus cuotas. Todos los esfuerzos por cambiar este anacrónico sistema electoral han sido en vano.

Según datos suministrados por la secretaría ejecutiva de ISA, en 1998 había 70 asociaciones nacionales afiliadas, de las cuales 53 estaban al día con el pago de sus cuotas anuales. De éstas, 24 eran de países del Norte, 16 del Sur y 13 de sociedades en transición. De los delegados de los 50 comités de investigación supuestamente electos de manera democrática, 47 directores provenían del Norte, tres del Sur y ninguno de los países en transición, y todos los delegados alternos en los comités donde existían, los 18, provenían del Norte. De los observadores sin derecho a voto, es decir de los ocho delegados de los grupos de trabajo y de los cuatro de los grupos temáticos, ni uno solo era del Sur o de un país en transición.

Al resultar electo como presidente de ISA un sociólogo norteamericano conocido por su compromiso con la sociología de la periferia y la semiperiferia,¹⁰ los organismos electorales de la Asociación le acompañaron —¿me atrevería a decir naturalmente?— con tres (de cuatro) vicepresidentes del Norte y 12 de los 16 miembros del comité ejecutivo (tres de los cuatro restantes provenían del Sur y el otro de un país en transición). Formalmente, por lo tanto, en el órgano rector más importante de ISA (presidente, vicepresidentes, y miembros del comité ejecutivo), comparado con 16 miembros del Norte, había cuatro del Sur y uno de un país en transición. Digo formalmente porque de hecho algunos de los representantes del Norte se mostraban abiertos hacia las ciencias sociales del Sur y de los países en transición, aunque a muchos otros se les conocía por su exclusiva inquietud hacia los asuntos del Norte, un tipo de “fundamentalistas nortños”.

La situación fue la misma en las dos ocasiones en que sociólogos del Sur ocuparon la presidencia. Entre 1990 y 1994, el presidente de ISA, el profesor, T.K. Oommen, de India, estuvo acompañado en el comité ejecutivo por 12 del Norte, 2 del Sur y 3 de los países en transición. Entre 1982 y 1986, el brasileño Fernando Henrique Cardoso trabajó con 14 colegas del Norte, dos del Sur y dos del entonces bloque socialista (Platt, 1998, 65 ss.).

En este contexto, es también significativo que ninguno de los editores de las publicaciones oficiales de ISA haya sido un colega del Sur, del antiguo bloque socialista o de los países en transición. *Current Sociology* desde 1953 en adelante, *Sage Studies in International Sociology* desde 1976 en adelante e *International Sociology* desde 1984 en adelante, sólo han tenido editores de países del Norte (Platt, 1998, 70-71).

La membresía del comité de programa para el 14º Congreso, al igual que en los anteriores, fue el resultado de complejas negociaciones entre el comité ejecutivo de ISA y el comité organizador del evento (compuesto, como debe ser, por representantes de los universidades de Montreal: *Université de Quebec à Trois-Rivières*, *Concordia University*, *Université de Montreal*, *McGill University* y la *University of Ottawa*). El comité del programa estaba conformado por nueve miembros del Norte, cinco del Sur y dos de los países en transición.

La composición de este comité, y quisiera reiterar que no se trata de personalizar el asunto, nos permite formular la hipótesis de que los organizadores de los seis simposios, los más importantes grupos de trabajo de alto perfil de los Congresos de ISA se seleccionaron de manera cuidadosa y política. Cinco de los seis simposios tenían coordinación conjunta Norte-Sur; sólo uno con tres del Norte y uno del Sur. Sin embargo, 63 presentadores eran del Norte, 29 del Sur y 4 de los países en transición.

Al presentar estas cifras, cabe señalar una primera ironía: al estar abordando temas tan actuales y apremiantes como "Orden social e identidades cambiantes"; "El trabajo y la tecnología"; "La calidad de la vida moderna: ventajas y desventajas"; "Desarrollo desigual: causas y consecuencias"; "Los parámetros sociales de la existencia social"; y "Las ciencias sociales y el poder: ¿Para qué el conocimiento?"*, parecería poco menos que sorprendente que casi el 65% de las contribuciones fueran del Norte, 30% del Sur y menos del 5% de los países en transición. Si en estas dos últimas regiones existe tan poca reflexión sobre temas tan centrales como esta distribución sugiere,

entonces ¿exactamente en qué estamos trabajando en términos de la investigación, la teorización y la conceptualización? ¿O es que la calidad de nuestro trabajo no cumple con las altas normas del rigor académico? ¿No sería más correcto pensar que *la selección por aproximación*, mecanismo que se discutirá más adelante, es lo que está operando aquí?

Otra ironía: a pesar de que desde el 13º Congreso celebrado en Bielefeld, Alemania, han tenido lugar diez seminarios regionales sobre el tema general del congreso (tres en el Norte, seis en el Sur y uno en una región en transición), y del hecho de que se han publicado los libros correspondientes (11, uno más desde una perspectiva de género) y un video sobre las deliberaciones del coloquio integrador celebrado en noviembre de 1997 en Montreal, ninguno de los aproximadamente 15 editores o más de 100 autores desempeñó un papel especial en el evento, a pesar de haberse dedicado al tema durante un periodo de tiempo significativo. ¿Los esfuerzos intelectuales, organizativos y financieros de muchas personas e instituciones que estuvieron involucradas en esta empresa sirvieron únicamente para el consumo privado de aquellos que compraron los libros y los videos, y no tuvieron importancia alguna en las deliberaciones públicas del Congreso?

LA "CARNE" DEL CONGRESO:

LAS SESIONES DE LOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN (Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y TEMÁTICOS)

Como ya se indicó, la ISA desarrolla sus actividades a través de 50 comités de investigación, cada uno de los cuales está presente en los congresos con entre 10 y 16 sesiones de trabajo (a veces más en casos excepcionales). Los grupos de trabajo sostuvieron un promedio de 10 sesiones y los cinco grupos temáticos realizaron cinco.

De los principales delegados de los 50 comités, 29 eran también coordinadores de programa y, por lo tanto, estaban a cargo de toda la serie de sesiones de sus respectivas unidades, sin tomar en cuenta que un número importante de delegados alternos estaban entre aquellos en posición de determinar el contenido del programa de su comité durante el Congreso. En otras palabras, los delegados (y los alternos) no sólo deciden sobre el programa de actividades de sus respectivos comités en el periodo entre congresos, sino que también en la mayoría de los casos (ya sea los delegados o sus alternos) sobre lo que se

discutirá en sus sesiones en el próximo congreso. Esto les da considerable poder para dar forma a la discusión sociológica prevaleciente, una discusión que difícilmente refleja la amplia gama de temas y preocupaciones que nos inspiran en nuestras áreas de interés.

Miremos un poco las cifras. Los 50 comités sostuvieron un total de 739 sesiones. Estas estuvieron conducidas por un total de 923 presidentes y copresidentes. De éstos, 781, no menos del 84.6% provenían del Norte; 109 o 11.8% del Sur, y 33, es decir, el 3.4%, de los países en transición.

Se presentó un total de 3927 ponencias. 74% de ellas (2766) eran de autores, individuales o colectivos, con sede en el Norte, mientras que el 19% (716) eran de colegas del Sur y el 7% (247) de participantes de los países en transición.

En medio de esta abrumadora presencia del Norte, hubo excepciones a la regla: comités de investigación (CI) con una distribución más equitativa. Dignos de mención son el CI 12 sobre *la sociología del derecho* con 13 organizadores o presidentes y 25 ponencias del Norte; 7 y 26 del Sur y 1 y 7 de los países en transición respectivamente; el CI 32 sobre *las mujeres en la sociedad*, uno de los pocos comités con una persona del Sur como delegada, con 16 presidentes y copresidentes y 48 ponencias del Norte, 10 presidentes y 38 presentaciones del Sur, con seis trabajos por presentadores de los países en transición. Otros comités que se esforzaron por lograr un mayor equilibrio fueron los comités 21 sobre *desarrollo urbano y regional*, 29 (*Desviación y control social*), 30 (*Sociología del trabajo*), 31 (*Sociología de la migración*), 34 (*Sociología de la juventud*), 40 (*Sociología agrícola*), y 41 (*Sociología poblacional*).

Por otra parte, ciertos comités tenían una "excesiva" preferencia por ponencias presentadas por colegas provenientes de los países del Norte. Son dignos de mención los comités 03 (*investigación sobre comunidades locales*), con 50 presidentes y copresidentes del Norte, 1 del Sur y 1 de un país en transición, con 105, 17 y 4 artículos respectivamente; comité 39 sobre *La sociología de los desastres* con una distribución de 12:1:0 de presidentes y 66:3:4 de ponencias; el comité 42 sobre *psicología social* con 14 de los 14 presidentes del Norte y una distribución de ponencias de 36:5:3; el comité 45 sobre *La teoría de la decisión (opción racional)* con 18 presidentes y 45 ponencias del Norte y sólo un artículo de un país en transición; el comité 48 sobre *movimientos sociales, acción colectiva y cambio social*, cuyas 17 sesiones no tuvieron ni un solo presidente que no fue-

ra del Norte y con una distribución de ponencias de 51:10:6; y el comité 49 (*salud mental y enfermedad mental*) con 11 presidentes del Norte y un desglose de ponencias de 47:5:1.¹¹

Es imposible creer (al menos yo me niego a hacerlo), que los coordinadores de programa de los comités de investigación, de los grupos de trabajo y temáticos y los presidentes y copresidentes de las sesiones de trabajo pudieran ignorar la investigación y la reflexión que en sus respectivos campos se está llevando a cabo en los países del Sur y en países en transición. Yo creo, por lo tanto, que es más un asunto del mecanismo de selección por proximidad: el coordinador de un programa sabe lo que se está haciendo y quién lo está haciendo en el área particular en su comunidad científica regional, razón por la cual selecciona a miembros de la comunidad para organizar y presidir la sesiones, los que a su vez a menudo nominan a colegas de la misma comunidad para las sesiones, incluyendo a alguien del Sur o de los países en transición, por su conocimiento “de paso” de lo que allí se está haciendo.

Otro mecanismo parecería ser la selección a través de la colaboración prolongada: ciertos comités de investigación están dominados por colegas quienes obviamente tienen una larga trayectoria de trabajo conjunto, razón por la cual es difícil entrar o ser invitado a formar parte del círculo.

Un aspecto que es especialmente sorprendente es la baja representación de colegas del Sur y de los países en transición en ámbitos en los que las contribuciones de esos países han alcanzado reconocimiento a nivel mundial en sociología y ciencias sociales en general. Por ejemplo, las teorías de desarrollo y dependencia asociadas con América Latina y el Caribe han contribuido de manera significativa desde su aparición a finales de los cuarenta y los sesenta respectivamente. Ha habido otras contribuciones importantes en las áreas siguientes: las fuerzas armadas y su papel en la sociedad moderna (CI 01), la relación entre economía y sociedad (CI 02), sociología de la educación (CI 04), relaciones étnicas, raciales y de minorías (CI 05), investigaciones futuras (CI 07), práctica social y transformación (CI 09), comunicación, conocimiento, y cultura (CI 14), teoría sociológica (CI 16), sociología política (CI 18), sociología comparativa (CI 20), desarrollo urbano y regional (CI 21), la sociología de la ciencia y la tecnología (CI 23), estratificación social (CI 28), sociología del trabajo (CI 30), sociología de la migración (CI 31), conceptos y terminología (CI 35), sociología agrícola (CI 40), sociología poblacional (CI 41), psico-

logía social (CI 42), movimientos obreros (CI 44), clases sociales y movimientos sociales (CI 47), acción colectiva y cambio social (CI 48). Estas contribuciones no se reflejan de ninguna manera en términos de la presencia cualitativa o cuantitativa de los colegas latinoamericanos o caribeños en los programas del comité de investigación. Estoy seguro de que afirmaciones similares, con igual justificación, podrían hacer los colegas en África, Asia (con particular énfasis en el subcontinente indio), Oceanía y numerosos países en transición.

Los seis grupos de trabajo sostuvieron un total de 47 sesiones con 45 presidentes y copresidentes de países en el Norte, seis del Sur y tres de los países en transición. Se presentaron 427 ponencias, 341 por colegas del Norte (un poco menos del 80%), 61 por autores del Sur (14%) y 25 de la región en transición (6%). Los cinco grupos temáticos tuvieron 18 sesiones con 14 presidentes y copresidentes del Norte y cinco de países en transición, durante las cuales se hicieron 95 presentaciones, 75 (80%) por colegas del Norte, 9 (9%) por colegas del Sur y 11 (11%) de países en transición. Estas cifras corroboran ampliamente lo que se encontró en el caso de los comités de investigación.¹²

No estoy proponiendo, por supuesto, una distribución mecanicista de autores en cada comité con una cuota particular de miembros de las tres regiones, ni tampoco una división del trabajo en la que de alguna manera ciertos subtemas se reserven para colegas de las regiones subprivilegiadas. Sugiero, más bien, una elaboración del programa en cada comité que debidamente tome en cuenta las contribuciones de los colegas del Sur y de las regiones en transición. Una medida podría ser que la solicitud de artículos (los resúmenes de una página y media) se hiciera con anticipación, por ejemplo hasta 24 meses antes del respectivo congreso, para que la versión completa estuviera lista 12 meses antes. Otra medida podría consistir en que los trabajos que se presenten a cada comité sean evaluados por alguno tipo de jurado conformado por un miembro de cada región, el que seleccionaría los artículos que finalmente pasarían a discusión en las diversas sesiones de los comités y grupos durante el congreso.

Aquellos que encabezan los comités de investigación y aquellos encargados de los programas de cada comité asegurarían que cada sesión tenga presidencias mixtas o dos organizadores: un colega del Norte y uno de un país en transición, por ejemplo; o uno de un país en transición y uno del Sur, para así asegurar el desarrollo de un intercambio y debate más dinámicos.

Finalmente es preciso tener cuidado con la selección de los panelistas. Deben provenir en iguales proporciones de las respectivas regiones y no deben ser ni presidentes, ni copresidentes ni coordinadores de programa.

REFLEXIONES FINALES

Uno de los argumentos que podría usarse en contra de lo que planteo en este artículo es que la enorme mayoría de las personas que participaron en el 14º Congreso, al igual que en congresos anteriores, provenían del Norte, es decir de América del Norte, de Europa y de otros países desarrollados. Este, sin embargo, es un argumento de dudosa validez, puesto que nuestro argumento es precisamente que ISA debe internacionalizarse verdaderamente para poder acomodar en sus más altos niveles a las diferentes corrientes y escuelas de pensamiento sociológico y a los numerosos frutos de la investigación y la reflexión que ella genera, sin privilegiar a ninguna región o país en particular. No menos dudoso sería el “argumento” de que la desproporción entre los países del Norte, del Sur y de aquellos en transición es el resultado de una menor disponibilidad de fondos en los dos últimos grupos de países para viajar a congresos internacionales. Una vez más, es obligación de ISA esforzarse por asegurar que la genuina internacionalización no fracase por razones financieras.

Entonces, ¿qué podría proponerse para que con el tiempo se reduzca esta asimetría claramente demostrada? Considero que podrían tomarse varias medidas, además de las ya propuestas por el comité de investigación y por los grupos de trabajo y grupos temáticos.

1. El inicio de una campaña en toda la comunidad social y científica a nivel internacional para que los colegas se afilien a ISA, más allá de su adhesión a una asociación nacional (que ahora es más fácil debido a la ponderación favorable o a las cuotas de membresía);
2. Una decisiva democratización de la elección de las autoridades de ISA, iniciando con la elección directa por todos los miembros que participen en cada congreso, del presidente y de los cuatro vicepresidentes, la elección de 8 miembros del comité ejecutivo por parte de las asambleas plenarias de las asociaciones nacionales y los 8 restantes por parte de la asamblea plenaria de los miembros de los comités de investigación;

3. La creación de un fondo especial, con financiamiento de un capital semilla por parte de la UNESCO para facilitar los subsidios a los colegas del Sur y de la región en transición, que les permita participar en los congresos;
4. Aceptar y hacer realidad todas las recomendaciones del *Bureau de Sociologie Internationale*, dirigido por Alain Touraine, sobre el asunto de los idiomas oficiales de ISA;
5. Asegurar la traducción simultánea, al menos en los idiomas oficiales de ISA, de todas las formas de trabajo colectivas durante los congresos;
6. Crear una serie de programas de investigación genuinamente internacionales como parte de la actividad de los comités de investigación, buscando financiamiento internacional para dicho fin;
7. Lograr una función editorial más significativa para los miembros de ISA provenientes del Sur y de los países en transición;
8. Estimular iniciativas e instalaciones físicas que permitan que los colegas de diferentes orígenes lingüísticos se reúnan en una organización de trabajo más informal, tanto entre congresos como durante los mismos (para lo cual pueden servir como paradigma los diez seminarios regionales celebrados antes del 14º Congreso con la participación de uno o dos colegas de otras regiones); y
9. La democratización (y por lo tanto diversificación) de la membresía del comité de programa central y de las coordinaciones de los simposios, comités de investigación, los grupos temáticos y de trabajo, grupos *ad hoc* y todas otras formas colectivas de trabajo, ya sea a través de consultas con asociaciones nacionales y comités de investigación o a través de consultas vía correo electrónico, para evitar la duplicación y acumulación de responsabilidades y poder en unas pocas manos.

Estoy consciente que estas propuestas así como las que se refieren a la manera como deberían funcionar los diferentes comités y grupos, sólo pueden implementarse de manera gradual. Estoy convencido, sin embargo, que debemos continuar y profundizar el debate sobre este tema y empezar a pensar cómo podemos poner en práctica soluciones que han sido anteriormente formuladas por otros y que aparecen aquí como un conjunto de propuestas. Es esta con-

vicción, a la luz de la experiencia del 14º Congreso, lo que me inspiró a escribir este artículo.

** Esta ponencia se presentó ante el XIV Congreso Mundial de Sociología, celebrado en julio de 1998 en Montreal, Canadá.*

NOTAS

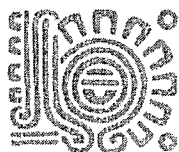
1. Aparte de la Unión Soviética entre 1940 y su implosión en 1991, buenos ejemplos son los Estados Unidos desde el inicio del siglo 19, Japón a finales del siglo 19 y el inicio de este siglo, y China desde mediados de los 70 en adelante.
2. No estoy seguro, pero planteo como una hipótesis de trabajo que dicho análisis no se ha hecho porque demostraría una creatividad innata aún mayor en los pueblos de la periferia y la semiperiferia.
3. Esta dominación no es cuantitativa; hasta donde sé, hay más personas alrededor del mundo que se comunican en chino e incluso en español que las que lo hacen en inglés.
4. El evento tuvo lugar en Montreal, Canadá, del 26 de julio al 1 de agosto de 1998. La organización fue excelente, excepto por la falta de interpretación simultánea en los simposios, los comités de investigación, grupos *ad hoc* y otras reuniones para el tercer idioma oficial de ISA, el español.
5. Aquí cabe parafrasear la famosa *máxima* de Hegel sobre la relación amo/esclavo, pero no es mi deseo llevar esas analogías y metáforas demasiado lejos.
6. Esto no quiere decir que no haya diferencias marcadas en el ingreso, en la seguridad, en el empleo, educación, seguridad social, etcétera, entre los sectores, clases, grupos y estratos. Sí las hay, pero lo importante es que esas diferencias no excedan un cierto límite.
7. Está más allá del alcance de este documento discutir si este término aún sigue vigente o no.
8. Obviamente existen colegas e instituciones en los países del Norte cuyos esfuerzos intelectuales se identifican con aquellos que estamos avanzando en el Sur y en los países en transición, así como hay colegas que

viven y trabajan en el Sur al mismo tiempo que *estructuralmente* siguen perteneciendo al Norte; yo conozco a algunos de ambos tipos. El no entrar a discutir ese tipo de sutilezas es el precio que se paga en el esfuerzo por preservar, al mismo tiempo, la claridad, la sencillez estadística y la equidad.

9. Hasta tal punto que dedicó una de sus cartas presidenciales a la “internacionalización de ISA”. (Wallerstein, 1996).
10. Immanuel Wallerstein no sólo había trabajado en asuntos de desarrollo en África en los sesenta, sino que además, desde los setenta en adelante, incorporó en su *sociología histórica* importantes elementos derivados de las ciencias sociales en América Latina, Asia y África, como él mismo lo ha reconocido en más de una ocasión.
11. Otro dato extraño que quisiera señalar es que en la mesa redonda sobre *globalización* dentro del CI 35 (análisis conceptual y terminología), había 13 participantes del Norte, dos del Sur y uno de un país en transición, a pesar de que tanto en el Sur como en las regiones en transición se ha hecho una buena cantidad de trabajo sobre este tema y los procesos que implica.
12. Algo que no parece lógico es la existencia simultánea de comités de investigación y de grupos de trabajo y temáticos sobre el mismo tema y de hecho con títulos muy similares. Considero que valdría la pena hacer un esfuerzo por integrar los formatos de trabajo institucionales a fin de unificar criterios y evitar la duplicación.

REFERENCIAS

- International Sociological Association, 1998, “Programa del XIV Congreso Mundial de Sociología”. Montreal (ISA).
- Platt, Jennifer, 1998, *A Brief History of the ISA: 1948-1997*. Montreal (ISA).
- Wallerstein, Immanuel, 1996, *On the Internationalisation of the ISA*. Madrid, (ISA).



Centroamérica: ¿Qué será de nosotros?*

ALVARO DE LA OSSA

Una parte de nuestras preocupaciones cotidianas consiste en reconocer que la vida y el quehacer diarios y las angustias del momento no dejan tiempo para apreciar el futuro y diseñar las acciones que deben realizarse para atender desde ahora el mañana. Más preocupante aún es el hecho de que ese porvenir es cada vez más incierto y excluyente. Muchos creen, además, que con lo que se hace en el presente es más que suficiente; están enamorados de sus logros de hoy. Esa actitud no les permite ver lo que puede acontecer, incluso en poco tiempo.

Finalmente, hay que reconocer que además de nuestra posición limitada, el fundamentalismo económico nos está arrinconando poco a poco, casi imperceptiblemente, tras haber pasado las dramáticas circunstancias que tuvimos que vivir en los años ochenta, para quedar aún mas pobres que en décadas anteriores. En otras palabras, pareciera que nuestra visión del mundo, nuestra ideología, está restringida a pocos aspectos de la realidad que nos rodea y del entorno que nos oprime.

Por estas y otras razones, CRIES y sus centros han iniciado ya un proceso de creación progresiva de una visión propia más comprensiva de la realidad que la que tenemos ahora. Esta serie de coloquios tiene el propósito de ampliar nuestra visión del mundo y poder así diseñar una política, estrategia e incidencias, más efectiva y adecuada a las circunstancias del violento fundamentalismo económico que nos rodea.

Estas notas tienen el propósito de aportar algunas ideas respecto de esta nueva visión del mundo, que tanta falta nos hace. Son apenas aportes para iniciar la discusión en torno a los aspectos que consideramos de entre los más sustantivos para su estudio y discusión.

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL ENTORNO EXTERNO CENTROAMERICANO

Dos elementos esenciales del ámbito externo influyen en la región centroamericana: una profunda marginalidad y una dependencia de corte absolutista. Estas características se han venido conformando con el tiempo, especialmente tras la situación bélica que finaliza en los años ochenta, y con el advenimiento del llamado neoliberalismo, que es, en esencia, un fundamentalismo económico.

Todos reconocen ya que la marginalidad en que se encuentra la región deviene de una pérdida sustantiva y creciente del interés del resto del mundo por esta región. Falta de interés en su desarrollo, en su evolución humana, en su perfeccionamiento político, incluso a pesar de las declaraciones oficiales de los terceros países o grupos de países.

Por un momento, la presencia del huracán Mitch devuelve a la región al interés internacional. Sería posible imaginar que en el futuro, la región será importante en función de las tragedias a que esté sujeta, ya sea por obra de la naturaleza o por obra humana.

En otras palabras, la región es una dolida franja de tierra que despierta el interés de terceros no por su relación humana ni por voluntad solidaria, sino por el escandaloso aprovechamiento de sus recursos.

La dependencia es un fenómeno que se consolida ya desde los años cuarenta con el desarrollo industrial basado en la tecnología de los países más ricos. En nuestra región no se ha logrado aún suficiente capacidad de invención y creación de tecnologías propias, ni es de esperarse que se logre en el futuro, por múltiples razones. Mucha de la tecnología existente en la región es propiedad privada de empre-

sas extranjeras y consorcios internacionales, por tanto, se utiliza como un recurso privado que no tiene ningún efecto multiplicador. Peor aún: la brecha tecnológica es de dimensiones tales que no es posible imaginar siquiera que llegara a reducirse ni a alcanzar un punto de equilibrio, y cualquiera que proponga esta idea en términos de política a seguir, es un iluso. En consecuencia, desde el punto de vista tecnológico estamos sometidos a la utilización de la técnica que podamos comprar, al costo que determine el país que la establece, la patenta y la regula.

Los otros elementos de dependencia consisten en la necesidad permanente de financiamiento externo, la falta de desarrollo de nuestros propios mercados, la dependencia de la demanda de terceros, la utilización de los servicios que otorgan —oligopólicamente— los terceros. Es decir, la dependencia no es solo tecnológica, sino también financiera, comercial, y de servicios.

Finalmente, consolidando un círculo vicioso de dependencia absolutista, los países centroamericanos han alcanzado una dependencia cultural asombrosa. Tal fenómeno no sólo se refleja en la pérdida de nuestros propios valores históricos, culturales y humanos, sino que se presenta, desafortunadamente en el desarrollo de una mentalidad de “yo necesito que me ayuden”, frente a una visión de “tenemos que aceptar lo que los fuertes dicen”. No hay ya reacciones de defensa ni de dignidad.

A ello se agrega, por el lado político, que los gobiernos han aceptado ya como valor común que el diseño y aplicación de la política de desarrollo se realice conjuntamente con los asesores de gobiernos extranjeros y con los técnicos de los organismos internacionales.

De los años ochenta a esta parte, ha aparecido un nuevo elemento en esta estructura de la dependencia absolutista, que es la presencia de México, Argentina, Chile y Brasil. Su creciente influencia en la economía de los países centroamericanos, su marcada capacidad de negociación frente a terceros, sus propuestas de “representar” a la región ante las nuevas modalidades de organización internacional hace de ellos no países hermanos de América Latina, sino sub imperios de nuevo cuño, a los que los países más desarrollados otorgan la autorización de controlar a Centroamérica. Es un fenómeno cuyos contornos aún no se delinean con precisión, pero tienden a fortalecerse con el tiempo. Acaso es un nuevo sistema de división del mundo, más allá del de las zonas de influencia, que abona a la marginalidad de la región.

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL ÁMBITO INTERNO CENTROAMERICANO

El ámbito interno es tan multifacético que no es posible, en el presente espacio, ahondar en todas sus características. Tampoco lo conocemos lo suficiente como para definirlo con precisión. En consecuencia, trataremos de alcanzar una visión general sobre algunos de sus principales elementos.

Aclaremos también que el siguiente análisis no está ligado a ninguno de los “ismos” consabidos (socialismo, comunismo, fundamentalismo, capitalismo). Hoy por hoy el análisis de la realidad centroamericana no tiene que ver con estos enfoques políticos, sino con su propio entorno interno. Se quiera o no, ideológicamente o no, la región tiene como característica fundamental una profunda división entre diversos estamentos humanos que componen sus sociedades, una divergencia importante respecto de los enfoques que se utilizan en el diseño y aplicación de políticas (en función de los intereses de los grupos dominantes por medio de sus representantes o servidores políticos) y una estructura funcional de la sociedad que limita las posibilidades de crítica y control de la función pública y facilita la presión de esos grupos dominantes. En consecuencia, vive la región un sistema social de inestabilidad permanente, cuyo funcionamiento recurrente entre la paz, la turbulencia y el caos, rige la vida cotidiana de los centroamericanos. Son los ciclos políticos —y no las ideologías en turno— los que determinan el proceso de inestabilidad constante.

Con este trasfondo en mente, puede decirse que conforman el entorno interno de la región centroamericana, entre muchos otros, los siguientes factores sustantivos: el grupo hegemónico y su transformación histórica reciente; la destrucción progresiva del Estado; la flexibilidad laboral; la apertura del mercado; y la debilidad de la presencia de la sociedad civil.

El grupo hegemónico

La antiguamente llamada oligarquía era el grupo hegemónico original, proveniente desde la Colonia, que ejercía su poder económico y político por medio del control y la posesión de la tierra y sus productos. Eran los terratenientes. Esta jerarquía sociopolítica ha cambiado radicalmente. Uno de los elementos que hizo posible este cambio fue la integración económica de la etapa de 1951 a 1979. La segunda generación del grupo dominante la constituye —con el apoyo de base de los terratenientes— la nueva conformación del grupo empresarial, que se consolida conforme se incrementa el comercio

intracentroamericano y se inicia la etapa de exportación a terceros mercados más allá de los tradicionales productos básicos agrícolas, especialmente en la época de los setenta.

Al morir la integración real en la década de los setenta, y entrar en vigor violentamente el fundamentalismo económico, en el contexto de la paz que generaron los Acuerdos de Esquipulas, el grupo dominante vuelve a tener una nueva mutación. Sobre la vieja clase oligárquica —ahora casi desprovista de poder— y el decadente grupo empresarial que devino de la integración, surge la tercera generación, caracterizada por el control del capital y por su fuerza financiera.

En la actualidad el grupo dominante —fuerte y unificado en torno al capital— impulsa desde su cúpula un sistema político “corresano” ajustado a sus propias necesidades. Queda así doblemente marginado el resto de la sociedad, y en particular la sociedad civil.

La destrucción progresiva del Estado

El fundamentalismo económico es en sí mismo una estrategia de control mundial por parte de la nueva etapa superior del capitalismo, que se consolida fuertemente a partir de la caída del muro de Berlín, pero que venía siendo objeto de desarrollo y aplicación ya desde los años 70 por parte de los siete países mas poderosos del mundo, especialmente a partir de la reunión de Helsinki. Es también característica de ese neoliberalismo el hecho de que no está basado en un desarrollo respetable y profundo de la ciencia económica, sino que es un sistema minimalista de fórmulas de consolidación del capitalismo, a partir de las prácticas keynesianas.

La libertad total de acción del capital, como expresión suprema de esta nueva etapa, se realiza mediante la eliminación progresiva y agresiva de todas aquellas normas, disposiciones y regulaciones que —establecidas por los gobiernos— habían orientado la inversión y el uso del capital. Con esa libertad de acción total y absoluta, el capital puede así movilizarse e invertirse en la forma requerida por los intereses particulares y propios de los dueños de ese capital. La presencia de aquellas normas regulativas y la del Estado como tal, son un estorbo para sus fines.

En estos países pobres y políticamente débiles la tarea de los organismos prestamistas internacionales, y de los representantes de los gobiernos de donde procede el capital, ha consistido básicamente en procurar que se eliminen las normas de regulación del capital mediante un sistema de presiones y exigencias llamadas “condicio-

nalidades”. Ya se ha logrado una parte sustantiva de esos propósitos, que, como es evidente, favorecen también a los inversionistas locales. El resto consiste en destruir la capacidad del Estado para regular el comportamiento del capital y la avidez de sus dueños por las ganancias que genera la inversión.

La destrucción del Estado se ha realizado de muy variadas maneras. Primero se eliminan sus capacidades de regulación del capital; con ello, las decisiones sobre inversión y sobre el comportamiento económico quedan en manos de los inversionistas, cuyos intereses particulares evidentemente no son los mismos que los de la sociedad en su conjunto.

En segundo término, se trasladan a manos privadas las actividades económicas eficientes que el Estado manejaba. Se establece un proceso llamado “privatización” que entrega al capital privado las empresas y los servicios que antes estuvieron en manos del Estado. Se pierde así para toda la sociedad en su conjunto, al menos tres elementos básicos de la estabilidad social: el apoyo de las ganancias de esas empresas en el financiamiento del Estado; el cambio sustantivo de las relaciones laborales en las mismas, sujetas ahora a grupos empresariales internacionales; y se pierde la garantía para la sociedad de que tales servicios se den obligatoria y permanentemente, se generen privilegios, ventajas o prebendas para personas o grupos de personas; establezcan los precios y se decida la extensión territorial de los servicios, y muchos otros aspectos más. No debe descartarse, por supuesto, otros manipuleos tanto en los mecanismos y modalidades de compra como en el otorgamiento posterior de los servicios. En todo caso, las ganancias de estas empresas quedan así en manos privadas, sin que signifiquen ventaja social alguna.

En tercer lugar, se eliminan progresivamente los servicios y costos del Estado para cumplir sus mínimas obligaciones de equilibrador social, como son los casos de la salud y salubridad pública, la educación, los servicios y prestaciones sociales, las pensiones y otras transferencias, y los servicios de apoyo y extensión para la producción y el otorgamiento de servicios para micro, pequeños o medianos productores. En algunos casos, tales servicios han sido sustituidos por otros por parte de empresas privadas, con lo cual se ha incrementado sustantivamente su costo. Por ello, muchos de estos servicios sustitutos ya no llegan a la mayoría de la población, que no los puede pagar. En todo caso se trata, por estos y otros medios, de disminuir la carga tributaria de los empresarios.

En cuarto lugar, se adopta una política fiscal y tributaria extensamente discriminatoria en contra de las personas que tienen menos ingresos. En efecto, además de reducir la presión sobre los gastos, el ajuste de los ingresos fiscales se ha estado realizando mediante varias estrategias que favorecen a los empresarios e inversionistas. De una parte, se reduce el impuesto sobre las ganancias (renta) a las empresas y a los accionistas. De otra, como se indicó en párrafos anteriores, se reduce el gasto público básico. Además, se eliminan los impuestos al comercio exterior, y se incrementan los impuestos indirectos internos. Como el Estado tiene que financiarse, entonces de hacen emisiones de papeles con atractivos intereses para vender en el mercado financiero, con ello, de hecho paga intereses a los inversionistas por un pago que debieron haber hecho como contribuyentes, y sin costo alguno para el Estado. La consecuencia adicional de todo ello es que los grupos humanos que menos servicios recibe son los que más tienen que aportar al financiamiento del Estado, que a su vez tiene el propósito de reducir el aporte de los que tienen más capacidad económica.

Es imposible dejar de mencionar que la utilización del Estado como instrumento del grupo dominante no se termina con el ingenuo reajuste de la política tributaria y su discriminación evidente. Lo más sorprendente es que se utilicen los mecanismos de subsidio directo, de exoneraciones y de franquicias, para apoyar y financiar a los empresarios a costa de los más desposeídos, que son los que influyen en los ingresos fiscales, a costa de proporciones crecientes de sus ingresos, y los que aportan a las empresas privatizadas con sus más altos precios, en proporciones importantes de sus ingresos.

La flexibilidad laboral

Otro de los elementos esenciales del fundamentalismo económico consiste en establecer en estas sociedades, ya de por sí pobres, un nuevo sistema de relaciones entre el capital y el trabajo, al que se ha dado en llamar la flexibilidad laboral. Se trata en esencia, de reducir sustantivamente el costo de la mano de obra (pero no su aporte) a fin de asegurar una mayor ganancia, ya sea a base de mayores ingresos o por la mayor venta a precios menores. En cualquier caso, el proceso que se está utilizando es el de reducir el pago por los servicios y el trabajo, más incrementar la eficiencia técnica y el perfeccionamiento alternativo.

En primer lugar, se reduce el aporte de la mano de obra tanto

en el sector privado como en el sector público, de modo de establecer un mecanismo de amplio desempleo. En segundo lugar, de destruyen progresivamente las modalidades diversas que los trabajadores tienen para organizarse y defender sus derechos; son muchas y muy variadas las formas que para ello se han observado. De esta manera, se reduce su capacidad de negociación. En tercer lugar, se transforma y debilita la legislación laboral vigente, o simplemente se viola ante la presencia indiferente del Estado, con el propósito de destruir todas las ventajas y beneficios que en los últimos 40 a 50 años se han logrado, en una larga y dolorosa lucha para alcanzarlos. Y por último se rompe con el esquema del empleo estable para pasar al de los esquemas de empleo precario o limitado. A ello se agrega la degradación que se observa en las pensiones, que reduce el ingreso de los jubilados. Se estimulan y establecen, bajo la indiferencia estatal, amplias zonas extra aduaneras y modalidades de maquila, cuyas normas laborales, como es sabido por los cientos de estudios al respecto, van contra las más elementales normas de trato humano. Además de todo lo anterior, las empresas que se privatizan inician el camino de su reestructuración —a la usanza de las empresas privadas— modificando sustantivamente la relación laboral.

En consecuencia, los países han venido pasando de condiciones laborales pactadas y constitucionalmente adoptadas, a formas más arbitrarias que tienen como propósito, según indica el Banco Mundial, que el trabajador pacte a solas frente a la empresa, se establezca una modalidad de trabajo de alto subempleo, y se asegure un amplio ejército de desempleados que permita a las empresas negociar salarios sustantivamente bajos.

La apertura del mercado

Cuando se habla de la apertura del mercado deben entenderse al menos dos aspectos: la eliminación de las barreras de protección a la producción interna —arancelarias o no—, y la eliminación de las regulaciones de precios. A este último aspecto se le denomina también desregulación de los precios.

En el primer caso, los efectos más sustantivos que se observan son: el acceso de la producción de terceros países al mercado nacional y regional, y precios más ligados a los que determinan las empresas exportadoras. En el segundo, se trata de dejar a criterio de la empresa productora la determinación del precio de su producto en el mercado, sin que medie influencia alguna del Estado.

Como consecuencia de ello, han ocurrido un conjunto de fenómenos entre los cuales cabe destacar al menos los siguientes: la eliminación (por venta a terceros o por quiebra) de empresas nacionales o regionales, y el incremento de precios de los bienes en función del grado de influencia que las empresas logren en el mercado. Uno de los impactos principales de estas circunstancias es que se reduce el empleo, se impulsa la producción en terceros países, se facilita la formación de estructuras monopólicas u oligopólicas, y se deja a libre criterio de las empresas la determinación de los precios de los bienes, sin incorporación de criterios sociales.

Tanto en el caso de las privatizaciones como en éste, se está impulsando el establecimiento de grandes consorcios internacionales controladores de la producción, distribución y mercadeo de bienes, y, a la vez, se está haciendo depender cada vez más de la inversión externa el funcionamiento interno de la economía. Además, por supuesto, se tienden a ajustar las relaciones laborales a los nuevos y más fuertes intereses de las empresas. La integración económica centroamericana se destruye y elimina. Por lo tanto, se pierde la capacidad de presencia conjunta y de negociación frente a terceros, que podía haberse consolidado si la integración hubiese continuado.

La debilidad de la sociedad civil

La fuerza que ejerce el grupo político que maneja el Estado para utilizarlo como un instrumento de sus intereses y los de sus representados, hace que el Estado en sí sea un instrumento del grupo dominante, no un instrumento de equilibrio de toda la sociedad para su propia subsistencia y estabilidad. Como consecuencia de ello, el Estado se transforma en el nuevo instrumento del grupo dominante contemporáneo, para someter al resto de la sociedad a sus intereses. Esta situación del Estado contra el pueblo, es la semilla de la impunidad del Estado en su quehacer discriminatorio respecto de la sociedad civil. Es, a su vez, el instrumento represor por excelencia del neoliberalismo. Así como en la etapa de la oligarquía terrateniente los mecanismos para mantener el sistema fueron en esencia, los ejércitos y la represión brutal contra el campesinado, y en la época del empresariado protegido dentro de la integración fueron las fuerzas combinadas del Estado y las paramilitares ejerciendo toda clase de mecanismos de terror, en este final de siglo se vislumbra un nuevo mecanismo de control directo de la sociedad civil, mucho más sofisticado y efectivo: la represión económica y la pobreza. Es necesario

ahondar más en estos conceptos sobre los mecanismos que se ejercerán en el siglo XXI para asegurar al nuevo estamento líder de la clase dominante —el grupo financiero— y su papel hegemónico en las sociedades centroamericanas.

La sociedad civil maneja una serie de vivencias conflictivas que no le permiten contar con mecanismos conjuntos y aglutinantes de poder para ejercer una influencia adecuada en la clase de estructura social que se construye en su contra. La lucha individualizada de cada centro u organización por los intereses inmediatos que persigue, por su propia supervivencia en el contexto social y financiero, y su generalizado concepto de que los éxitos que logra sobrepasan sus aspiraciones, hacen que la sociedad civil se encuentre sin capacidad de unión. La realidad nacional sigue pesando mucho.

Por su parte, terceros intereses influyen directa y permanentemente para que esta situación se mantenga en estas condiciones. Entre ellos se encuentran los partidos políticos, las organizaciones políticas internacionales, los organismos no gubernamentales externos que los apoyan financiera y técnicamente, y los propios gobiernos. No deben dejarse de señalar, como se ha visto en las organizaciones más antiguas de los países centroamericanos, las vanidades y preferencias personales, y no dejan tampoco de presentarse corrupciones que no se denuncian, o controles hegemónicos que no permiten la democratización interna.

ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES

Aun cuando lo anterior es apenas una selección de algunos de los principales elementos que constituyen la realidad del entorno que ahora rodea a la región centroamericana, bien pueden deducirse algunas consecuencias generales que es necesario considerar.

En primer lugar, el nuevo estilo de desarrollo, basado en el fundamentalismo económico, genera un nuevo círculo perverso que es el del crecimiento de la pobreza y el crecimiento de la riqueza, simultáneamente. De esta forma, lo que se está favoreciendo es un aumento desmedido de la concentración de la riqueza.

La concentración de la riqueza, a los extremos a que empieza a llegar —a causa de este nuevo estilo de sociedad deshumanizante— genera un nuevo poder en la clase dominante, que incita a la formación de posiciones sociales y políticas que podrían denominarse de *pre fascismo*, en el sentido de buscar —por algunas vías de control

cada vez más estricto del comportamiento social— la consolidación de este nuevo modelo tan favorable para ellos.

A ello se agrega que la destrucción del Estado como ente equilibrador social genera a su vez, no sólo un sistema mediante el cual el Estado se transforma en un instrumento inmediato y manipulable por parte del grupo dominante, sino que se muta en una herramienta de control social en favor del sistema. Aun cuando a simple vista pareciera que este no es un fenómeno nuevo, lo que sí es novedoso es el perfeccionamiento de los sistemas de represión social. En efecto, ahora van mas allá de las burdas formas utilizadas en el pasado. La reducción del empleo, la contracción del ingreso real, la eliminación de los servicios a la población, la contracción violenta de la educación y salud básicas y la continua destrucción de las modalidades de organización social, son algunos de esos otros elementos negativos.

Es así que ante semejante perspectiva del siglo XXI nos preguntamos qué será de nosotros.

CONCLUSIONES

Para efectos de iniciar una discusión sustantiva sobre el futuro de la sociedad civil en Centroamérica, las anteriores reflexiones pueden servir de aporte inicial. También lo pueden ser el diseño de posibles escenarios dentro de los cuales se espera que pueda conformarse una nueva forma de comportamiento e incidencia de la sociedad civil en el futuro.

En el pasado, un escenario fue el de la guerra civil. Es la alternativa de la llamada “vía armada”. El autor de estas notas considera que este escenario no es posible en las actuales y venideras circunstancias, por múltiples razones, entre las cuales cabe señalar la situación de reacomodo político de los grupos insurgentes, la búsqueda de nuevas formas de participación social en el contexto de la paz, y la necesidad colectiva de un retorno a la tranquilidad, para restaurar las dolorosas heridas que ha dejado la guerra. Además, a nivel internacional no existe ahora un clima de apoyo a este tipo de alternativas.

Un segundo escenario podría ser el de aceptar la situación tal y como es, sin reparo de ninguna naturaleza, acomodando la supervivencia a las alternativas que pueda ofrecer el fundamentalismo económico, en sus vaivenes cíclicos de comportamiento. Transitar por esta alternativa podría significar la aceptación tácita de una modalidad que podría denominarse de “servilismo colectivo” del siglo XXI.

Un tercer escenario podría construirse alrededor de algunas ex-

periencias que se han observado en la historia y que han resurgido en el presente. Se trata del manejo deliberado y calculado de la resistencia pacífica contra el sistema establecido. Hay muy variadas formas de lograrlo. Desde la sustantiva experiencia de la política de Mahatma Gandhi en la India, hasta los grupos separados de funcionamiento en Dinamarca y en Australia actualmente. Esta alternativa de desobediencia civil progresiva, y la consolidación de sistemas alternativos de supervivencia sin relación alguna con el sistema y el Estado, puede diseñarse y organizarse conforme a la idiosincrasia y posibilidades de la sociedad civil centroamericana. Su aplicación podría demorar en tanto se consolida la unidad regional de la sociedad civil y se construyen y proyectan los sistemas de fuerza y control del comportamiento social alternativo.

Un cuarto escenario, que se deduce del comportamiento actual de la mayoría de las organizaciones populares en la región, consistiría en la formación de un bloque de fuerza de la sociedad civil organizada regionalmente, para establecer mecanismos sustantivos de incidencia directa y eficaz ante el resto de la sociedad y el Estado. Aun en su estado incipiente, y limitado por un sinnúmero de problemas, ésta es —junto con la anterior— una alternativa razonable.

Sería interesante explorar la posibilidad de que se establezca o reconozca un posible escenario que esté formado, de un modo u otro, con características de estas dos últimas alternativas. En efecto, con un amplio espectro de posibilidades de resistencia y actuación alternativa, podrían a su vez ejercerse una diversidad de modalidades de presión e incidencia sustantivas para lograr objetivos específicos. Esta no sólo parece ser una alternativa más razonable, sino que con un mayor grado de viabilidad.

Lo importante ahora es que, ante cualquier escenario que se llegue a construir, se parta de dos elementos sustantivos indispensables: la unión de la sociedad civil a nivel regional; y la generación de una sustantiva capacidad de incidencia.

** Este documento fue presentado en la Reunión de Centros CRIES de Centroamérica, que tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala en julio de 1999.*



México y el Gran Caribe: Entre la tradición gubernamental y la alternancia ciudadana

ROSALBA ICAZA

Las relaciones internacionales entre México y las naciones del Gran Caribe en los últimos 70 años —esto es, el periodo post revolucionario— se han caracterizado por altas y bajas, aunque con un predominio de descuido por parte de México en su relación con estos países. En la definición de la agenda mexicana de política exterior tal descuido se consolida ante la prioridad que se le ha otorgado a la relación bilateral con los Estados Unidos, así como por la concentración de la actividad gubernamental hacia los países más fuertes de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

A pesar de que para México —en términos de potencia media en la región (González, 1983)— Centroamérica representa una zona de influencia y liderazgo natural para la integración (no solo en lo económico y comercial, sino también en lo social por sus antecedentes culturales e históricos comunes), es claro que la orientación y la

definición de la actividad gubernamental mexicana en la zona se ha establecido según los criterios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), primer eslabón del proyecto estado-unidense de integración comercial.

No hay, en cambio, muchos antecedentes culturales, políticos y económicos que hayan facilitado la relación de México con la totalidad de los países del Gran Caribe, aunque sí con Cuba y Haití, los cuales, al igual que los países de Centroamérica, comparten algunos antecedentes culturales y sociales.

Es preciso destacar que en la coyuntura actual las relaciones internacionales de México hacia el Gran Caribe se articulan dentro un contexto de formación de bloques, caracterizado por una polarización en términos del proceso de integración regional (Serbin, 1998). Tenemos por un lado el TLCAN, y por el otro MERCOSUR, como iniciativas básicamente gubernamentales y empresariales. De igual forma, a principios de la década, en la Cuenca del Caribe surge la Asociación de Estados del Caribe (AEC), como una iniciativa para ampliar y profundizar el proceso de integración en todo el Caribe, con Centroamérica y eventualmente con las potencias regionales: México, Venezuela y Colombia (Serbin, 1998).

Es precisamente la iniciativa de la AEC la que nos permite visualizar al Gran Caribe como la región natural en la cual México podría tener liderazgo y lograr la orientación del proyecto de integración regional. Situación que nos invita a reflexionar en el tipo de relaciones internacionales que ha desarrollado México hacia el Gran Caribe, pero sobre todo en las posibilidades futuras de acción ciudadana para la integración social de la región.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO HACIA EL GRAN CARIBE

Las relaciones internacionales, en tanto disciplina que estudia el contexto internacional y sus dinámicas a partir de una óptica y planteamientos globales, se distingue por que “ha nacido y se desarrolla directamente ligada al proceso de cambio de una sociedad internacional que progresivamente va perdiendo algunas de las características del pasado y va asumiendo otras distintas, para dar paso constantemente a una nueva sociedad internacional” (Del Arenal, 1993). En tal sentido —en esta dinámica de cambio— es posible desarrollar una caracterización de las relaciones internacionales de México

hacia el Gran Caribe, considerando las categorías básicas de análisis de esta disciplina: actores, procesos y resultados. En este artículo se distinguen dos variables principales: tiempo y actores, a partir de las cuales será desarrollada nuestra caracterización.

Con referencia a la variable tiempo, se presentarán los elementos que han determinado una esfera de relación tradicional, destacando la situación y presencia de los Estados Unidos en la región, las coyunturas nacionales de México y las dinámicas globales del contexto internacional.

Con respecto a la variable actores, resaltaremos dos espacios —dos actores— de confluencia paralela en la acción internacional: el Estado-Nación a través de su política exterior, y la sociedad civil internacional a través de la diplomacia ciudadana. Actores que, para efectos de este artículo, se ubicarán en las dos últimas décadas de la relación de México hacia el Gran Caribe. Cabe señalar que lo anterior no significa que sean los protagonistas únicos, ya que comparten el escenario con empresas transnacionales, grupos armados, partidos políticos; sin embargo son actores clave que contribuyen a dilucidar el reciente espacio alternativo que se ha gestado frente a la tradición gubernamental.

Una vez establecidos estos elementos, realizamos la caracterización de las relaciones internacionales de México hacia el Gran Caribe a partir de dos perspectivas teóricas distintas, de tal manera que a cada una de las variables identificadas les corresponderá un análisis desde un marco teórico particular.

Frente al análisis de las políticas gubernamentales de México hacia el Gran Caribe, la teoría clásica de las relaciones internacionales da una orientación precisa hacia el privilegiado espacio que se le brinda al Estado-Nación y a sus dinámicas de poder en la esfera internacional de la acción política.

Desde la perspectiva del realismo clásico, la historia de la acción estatal proyectada en la esfera de la política exterior será relevante, así como la distribución del poder entre los actores clave en las diversas coyunturas. A partir de este marco teórico será posible centrar nuestro análisis en el contexto interno y externo respecto del gobierno mexicano, lo que definirá las características de la relación desarrollada con el Gran Caribe.

Destaca de manera importante la influencia de la posición geopolítica de los Estados Unidos en la definición de criterios de acción de la política exterior mexicana. Posición mediante la cual

todo el poderío norteamericano, todo el peso de su interés nacional definido en términos de poder económico, político, militar e ideológico, así como su posicionamiento como potencia hegemónica serán proyectados en la relación bilateral con México, y por consiguiente, en la actuación del gobierno mexicano hacia el Gran Caribe.

Por otra parte, frente a la dinámica actual de las relaciones internacionales de México con el Gran Caribe, donde converge la presencia del Estado-Nación —representado por el gobierno— y de la sociedad civil internacional,¹ —ésta última en forma más relevante y marcada, aunque poco visible en el pasado de la relación— es posible emplear enfoques teóricos distintos de los del realismo clásico. El neoliberalismo institucional y la teoría crítica darán cabida a fenómenos internacionales —tales como la globalización de las interdependencias, la diversidad de intereses temáticos— frente a un interés nacional desdibujado, pero sobre todo permitirán comprender las acciones de la sociedad civil internacional, que se despliegan a través de la diplomacia ciudadana, en la creación de relaciones internacionales dentro de la esfera de acción transnacional.

De esta manera, en este artículo discurrirán en forma paralela dos esferas de caracterización de las relaciones internacionales de México hacia el Gran Caribe: la tradicional gubernamental y la alternativa ciudadana

LA ESFERA TRADICIONAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO HACIA EL GRAN CARIBE.

Desde el enfoque clásico de la teoría de relaciones internacionales, son el Estado-Nación y su política exterior los elementos fundamentales de análisis y definición de esta primera esfera de relación que identificamos como la esfera tradicional. Destaca en este momento la sombra dominante de los Estados Unidos en una perspectiva de política de poder hacia la región, que resultará fundamental en la dirección de la política exterior mexicana, característica que se evidenciará de manera más clara a partir de 1988, cuando se consolida el momento de la “no política exterior mexicana” (Garza Elizondo, 1990).

En este apartado nuestro análisis se centrará en las características de la política exterior mexicana como marco de acción hacia el Gran Caribe. Es importante señalar que en materia de relaciones internacionales, el gobierno mexicano comprende geográficamente como Caribe: “el arco insular formado por las Grandes Antillas y la

porción continental que integra la costa de Yucatán, Quintana Roo, Belice, América Central, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Islas Turcas y Caicos”;² postura que incorpora, además de la zona insular y Centroamérica, a las potencias regionales donde México y Cuba juegan un papel fundamental.

Esta percepción oficial del gobierno mexicano acerca del Caribe se contrapone con la que tienen los Estados Unidos, que consideran geográficamente tan sólo la Cuenca, es decir: Florida, la zona insular, Centroamérica, Guyana, Guyana Francesa y Surinam, y que excluye las potencias regionales: México, Colombia, Venezuela y Cuba.

En esta esfera tradicional, algunas de las características primordiales que han distinguido la política exterior mexicana a lo largo del tiempo son identificadas como “momentos de luz en la actividad gubernamental” (Pellicer), tales como: la expropiación petrolera, la postura hacia la revolución cubana, el liderazgo tercermundista y de no proliferación nuclear. Sin embargo, converge también un carácter reactivo a las dinámicas y coyunturas externas, un carácter pasivo, no propositivo y sin una línea de continuidad, más que en su dependencia hacia la orientación y dirección norteamericana, en las decisiones que involucran a la región. A todo esto debemos sumar un fuerte apego a los “principios fundamentales de la política exterior mexicana”: la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica entre las naciones, la autodeterminación de los pueblos, etcétera, que han caracterizado a la política exterior mexicana como retórica y discursiva.

Las características de las relaciones internacionales del gobierno mexicano hacia el Gran Caribe que hemos destacado, se fundamentarán en contextos históricos y coyunturales específicos, desarrollados a partir del periodo post revolucionario.

PRIMERA ETAPA DE LA RELACIÓN OFICIAL: 1930-1958

EL OLVIDO MEXICANO DEL GRAN CARIBE

Según Jurgen Buchenau (Buchenau, 1996) en 1930, con la salida de Sandino del puerto de Yucatán se pone fin a una época de gran interés del gobierno mexicano hacia el Caribe y Centroamérica, interés que había sido generado por el proceso revolucionario y por la consolidación de los Estados nacionales de la zona.

En las décadas subsecuentes, el gobierno mexicano no buscará

la oportunidad de jugar un papel activo en la región, al encontrarse involucrado en la construcción del consenso interno alrededor del proyecto nacional post revolucionario. Tal situación no respondía tan solo a una dinámica particular de México, sino también a un momento en el contexto internacional en el cual se generalizó el privilegio de los asuntos domésticos o nacionales (*domestic policies*), por encima de los externos o internacionales (*world politics*).

Los años de 1930 a 1944 son considerados por Buchenau “años de inactividad en la política oficial mexicana en la región”, caracterización que se le otorga debido a que la actividad en política exterior se orienta a la prioridad del momento: la relación bilateral con los Estados Unidos.

En estas décadas dominará en la política exterior mexicana el acercamiento —amistoso o no— con el gobierno de Estados Unidos en momentos específicos: la Gran Depresión, la expropiación petrolera en 1938, el marco ampliado de negociación comercial y migratoria proporcionado por la segunda guerra mundial y el renovado involucramiento en el sistema regional dentro del contexto de “la buena vecindad” norteamericana, con la que se proscribió el uso de la fuerza en América Latina por parte de Estado Unidos.

La política exterior mexicana sería diseñada conforme a la dinámica mundial y los requerimientos del contexto. Tal es el caso del presidente Lázaro Cárdenas, quien responde en forma acertada a la situación política mundial: el ascenso de las masas y los regímenes populares y socialistas en el mundo.

A nivel interno, en México la crisis del año 1929 había generado que las alianzas populares se erosionaran, por lo que en la administración cardenista resultaba imprescindible el restablecimiento de éstas. La expropiación petrolera, la reforma agraria y la política nacionalista —independientemente de su contenido social y de las consecuencias políticas e ideológicas que aportaron al México moderno— posibilitaron el proceso de sustitución de importaciones, la industrialización del país, pero sobre todo la restitución y generación de nuevas alianzas internas. Incluso autores como Javier García Diego y Lorenzo Meyer³ destacan la política exterior cardenista como un momento de rompimiento con los principios tradicionales de neutralidad, por su abierta crítica hacia la situación mundial.

A las condicionantes internas de la esfera tradicional en esta etapa, debemos sumar el uso que los Estados Unidos hicieron del conflicto global para promover la creación de un sistema panameri-

cano como consecuencia de la coyuntura de post guerra, promoviendo durante una serie de reuniones que involucraron a todos los países de la región, y que culminó con la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948. Este logro estadounidense dejaba fuera la intervención militar, pero prácticamente codificaba su hegemonía en todo el continente.

Esta iniciativa fue celebrada por el gobierno mexicano como la instrumentación del largamente deseado foro multilateral panamericano, donde se resolvieran disputas internacionales. Sin embargo, la OEA se constituyó como el vehículo norteamericano para las nuevas políticas intervencionistas durante la Guerra Fría, y por tanto, como eje del gran constreñimiento a las políticas e iniciativas mexicanas. Baste recordar la expulsión de Cuba y la solitaria defensoría del gobierno mexicano. A esto sumemos la existencia de dictaduras estables que obviaron la intervención armada de los Estados Unidos e “imposibilitaron” la acción del gobierno mexicano en términos de denuncia o defensa.

Durante estos años la posición de México y Estados Unidos se acercó cada vez más. Tal es el caso de la presidencia de Avila Camacho (1940-1946), la cual significó gran estabilidad para el capital norteamericano al disminuir el proceso de redistribución de la tierra, al frenar las políticas económicas nacionalistas impulsadas por Cárdenas y al eliminar la influencia del ala izquierda en el partido dominante. Todo lo anterior dentro de un contexto anticomunista que se vuelve en México política oficial. Posteriormente, el presidente Miguel Alemán (1946-1952) continuaría el discurso del presidente estadounidense Truman sobre contención, y proclama el comunismo como un proyecto incompatible con México.

En ninguna de estas dos administraciones se continúa el proyecto cardenista, ya que el contexto internacional que se desarrollaba, posterior a la segunda guerra mundial, no dejaba lugar para una política exterior mexicana propositiva o autónoma, excepto para aquella desencantada izquierda mexicana representada en los movimientos artísticos y sociales de la época.

Lo cierto es que el constreñimiento a las acciones mexicanas estaría determinado, en el ámbito externo, por la dinámica internacional donde Washington asumió el liderazgo de las instituciones panamericanas que había creado, y a nivel interno por la prioridad nacional en torno al desarrollo industrial. No había lugar para pensar en el Caribe y Centroamérica.

SEGUNDA ETAPA DE LA RELACIÓN OFICIAL (1960-1978):

EL RENOVADO "ACTIVISMO" GUBERNAMENTAL

En las décadas de los años 60 y 70, en un mundo caracterizado por fuertes agitaciones sociales y ante la perspectiva de dos proyectos de desarrollo que generaron una época de gran activismo internacional, ocurre una transformación en la política exterior del gobierno mexicano hacia el Gran Caribe.

En 1960 la administración de López Mateos (1958-1964) comienza a mandar un mensaje claro: Centroamérica y el Caribe eran importantes para México. Nos ubicamos en un momento en el cual se busca la diversificación de las relaciones comerciales de México en el mundo, e incluso se da la propuesta mexicana para promover la integración en América Latina⁴. Para 1967 el cambio en las políticas norteamericanas en Centroamérica y los cambios en las políticas nacionales facilitaron el resurgimiento de las iniciativas internacionales de México. En el ámbito interno, la administración de López Mateos comienza un período de reforma social y económica. De 1958 a 1964 tiene lugar un gran reparto de tierra, se instituye el voto de las mujeres y se compran compañías eléctricas extranjeras. En política exterior diversos autores señalan que se da un periodo asertivo, afirmativo y activo.

La política exterior es propositiva y activa en términos de que la posición de México mantuvo cierta autonomía al responder a las expectativas de sus gobernantes a pesar de la dependencia con Estados Unidos (Ojeda, 1990). Tal es el caso de la militancia tercermundista que consolidó el cambio de la "tradicional y conservadora diplomacia mexicana hacia una diplomacia multilateral" (Anguiano, 1977).

A mediados de la década de los 70 y principios de los 80 México se confirma como potencia media regional. Su política exterior se franqueaba intermedia entre el Norte y el Sur, y lograba inhibir políticas hegemónicas. Lo anterior fue posible debido a la distensión mundial ocurrida en los 70, pero también "porque existía la voluntad de ser potencia media en la región" (González, 1983). Un periodo "fácil de concebir, difícil de mantener" (Ojeda, 1990), sobre todo porque la política exterior mexicana en esta etapa busca en lo interno mantener la estabilidad y legitimidad política, y porque al mismo tiempo procura en lo externo evitar enfrentamientos directos con los Estados Unidos, quienes durante la administración de Luis Echeverría (1970-1976) son precisamente la potencia que pone límite a sus esfuerzos por promover la solidaridad en el mundo subdesarrollado y la diversificación del mercado para las exportaciones (Pellicer).

Dadas las condiciones antes señaladas, esa política exterior calificada como asertiva y activa se da tan sólo en términos de discurso. Lo anterior se confirma—por ejemplo—, durante la administración de López Mateos (1956-1964) cuando se identifica la simpatía mexicana hacia Fidel Castro y su revolución como un factor de riesgo para la relación bilateral con Estados Unidos. La postura mexicana a favor de la revolución cubana se transforma en una defensa de “los principios internacionales de la política exterior mexicana” (Buchenau, 1996).

Finalmente, “como había pasado tan seguido durante el porfiriato y la revolución, México había cambiado astutamente su diplomacia frente a la presión de Estados Unidos” (Buchenau, 1996, p.199), consolidando su dependencia de facto —aunque nunca discursiva o retórica— ante la dirección estadounidense en el Gran Caribe.

La política de Echeverría, al igual que la de López Mateos, estuvo fundada en la retórica imperante para la cohesión interna, nunca en la acción. Tal es el caso de las buenas relaciones con dictaduras como la de Somoza en Nicaragua, a pesar del discurso contrario.

Durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), se enfrentaría el auge de la crisis bipolar internacional; por lo que resultó necesaria la instrumentación de una diplomacia de dimensiones diferentes, pero sobre todo, que proyectara decisiones audaces e independientes de los Estados Unidos, para así dar cauce a las dinámicas sociales internas. Recordemos que en México ambos períodos presidenciales se caracterizaron por la represión y la censura frente a la agitación social, y que Luis Echeverría se ve en la necesidad de otorgar concesiones substanciales a los promotores de reformas —quienes deseaban un cambio más radical del que estaba dispuesto a ofrecer—, y al mismo tiempo procura, mediante su política exterior, brindar un escape para controlar los descontentos internos.

TERCERA ETAPA DE LA RELACIÓN OFICIAL (1978-1999):

DE LA POLÍTICA ACTIVA A LA CONSOLIDACIÓN

DE LA NO POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA

El año 1979 se caracteriza por la sonada ruptura entre el régimen dictatorial de Somoza en Nicaragua y la administración de José López Portillo (1976-1982). En ese momento el gobierno mexicano se encontraba en condiciones favorables para una política exterior ac-

tiva en la región, dada la coyuntura favorable que representaba el petróleo.

En esta década destaca el apoyo del gobierno mexicano a Centroamérica, al reconocer como legítimas las fuerzas sandinistas en Nicaragua; consolidando en una coyuntura geopolítica y geoeconómica favorable —gracias al petróleo— un bloque contra el intervencionismo norteamericano en la zona. La posición mexicana se vio favorecida también por el reconocimiento por parte del presidente estadounidense Jimmy Carter de las violaciones que en materia de derechos humanos había cometido el régimen de Somoza.

Con la administración del presidente Reagan, contextualizada en el marco de la segunda guerra fría que supuso el recrudecimiento del enfrentamiento bipolar, los sandinistas son visualizados como subversivos. En México la administración de José López Portillo financia y promueve las pláticas entre los sandinistas y los Estados Unidos. Una vez más, México era capaz de llevar a cabo una política propositiva.

Después de 1982 desaparecieron las condiciones que favorecían esa política exterior propositiva. Estados Unidos decidió presionar al gobierno sandinista en un momento en que los precios del petróleo lanzaban a la economía mexicana en una espiral descendente. Las condiciones internas contrajeron el activismo en política exterior, y con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia (1982-1988) terminaron por desaparecer los intereses y los principios de la política exterior activa antes promovida. “México inicia su camino de retorno a los límites tradicionales de la política exterior” (Castañeda, 1988, p. 183). Tal es el caso del Grupo Contadora, formado en un primer momento por México, Venezuela, Colombia y Panamá como mediador entre Estados Unidos y los sandinistas, que con el tiempo daría paso al proyecto de una zona de libre comercio: el G-3, o Grupo de los Tres.

Durante la administración de Miguel de la Madrid se enfrentaría una etapa de transición en el entorno internacional, donde los Estados Unidos y Centroamérica tendrían un papel fundamental.

La pacificación en Centroamérica representó el auge de la política multilateral de México hacia la región; característica que se desplomará con el tema de la deuda y la actitud “asustadiza” del gobierno mexicano.

El tema de la deuda y la iniciativa mexicana de negociación unilateral “generó aumento en la presencia del Fondo Monetario

Internacional (FMI) y del Banco Mundial para implantar un programa económico en América Latina —conocido como el Consenso de Washington—, centrado en políticas de estabilización de los medios de producción y de las grandes empresas públicas, en la liberación de los flujos de capital y del comercio internacional, auspiciando también la desregulación de las actividades privadas y la austeridad fiscal. Estas recetas serían aplicadas a lo largo de un proceso de negociaciones y renegociaciones” (Saxe, 1998, p. 109), de carácter unilateral provocado por la desbandada del gobierno mexicano.

CONSOLIDACIÓN DE LA NO POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA

El inicio de la liberalización económica promovida por Miguel de la Madrid, y su profundización con Carlos Salinas (1988-1994) colocó a México en una nueva fase respecto de la región.

Carlos Salinas desarrolla la posición del gobierno mexicano en política exterior a partir de una lectura errónea del escenario internacional (Golab, 1993). Argumenta que la integración económica —lógica, silenciosa y explícita— que ya se tenía con los Estados Unidos, suponía la necesidad de buscar su regulación y las garantías formales para el comercio común. Durante esta administración se plantea el TLCAN como única opción, y se precipita su aprobación⁵ sin negociar previamente sectores clave y formas de inversión, elementos que hubieran evitado involucrar la gran cantidad de capital político que fue requerido, y que al mismo tiempo hubieran abierto la posibilidad de adquirir un menor compromiso con respecto a la soberanía nacional y al proyecto de país.

Los resultados que arrojó la firma del TLCAN deben evaluarse en dos sentidos. En lo que respecta a la política exterior de México y de la caracterización de la esfera tradicional, representa la acentuación de la interdependencia —o dependencia— al generarse nuevos canales de intercambio y vulnerabilidad en la relación bilateral con los Estados Unidos. “Con el TLCAN pasamos de ser una esfera de influencia a la categoría de protectorado informal” (Saxe, 1998, p. 105). En lo que atañe a la relación, presente y futura, con el Gran Caribe, los costos deberán evaluarse con respecto al rompimiento de cualquier compromiso no comercial del gobierno mexicano hacia la región.

Actualmente el gobierno de Ernesto Zedillo “ha adoptado políticas en lo económico, y en la política internacional, que no solo pre-

servan los lineamientos estadounidenses aceptados durante el delamadrismo y el salinismo” (Saxe, 1998, p.106), sino que consolida una nueva relación, un nuevo énfasis y una nueva prioridad: la presencia económica de México en la zona a través del comercio, pero en dirección y a favor de los intereses de los Estados Unidos y su agenda de integración.

LA ESFERA ALTERNATIVA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO HACIA EL GRAN CARIBE.

La segunda esfera de las relaciones internacionales de México hacia el Gran Caribe se caracteriza y se evidencia ante las coyunturas y dinámicas actuales,⁶ mismas que han promovido los caminos de acción alternativa de la sociedad civil internacional.

Entre los elementos definitorios del nuevo orden internacional —como la globalización, las crecientes relaciones interdependientes, el ilimitado poder de los medios de comunicación masiva— que han logrado cuestionar la vigencia de las instituciones tradicionales como el Estado Nación, se consolidan nuevos actores que en el ámbito mundial conforman lo que identificamos como la sociedad civil internacional.

La sociedad civil internacional está conformada “por ciudadanos organizados como tales (en asociaciones voluntarias, movimientos sociales y grupos informales) para actuar en el campo de lo público y social en el ámbito nacional y/o internacional, por el bien común (con un objetivo común) sin ánimo de lucro personal, sin dependencia de las instituciones gubernamentales y sin adhesión a un partido político”.⁷

“No es un ente homogéneo ni unificado, es una fuerza transnacional no territorial que actúa a través de la acción diplomática ciudadana, es decir, aquellas acciones de los ciudadanos privados pertenecientes a un país y los grupos o asociaciones que éstos forman, respecto a otros países [y que] implica la apropiación de roles previamente considerados como de exclusivo dominio de actores gubernamentales y que se llevan a cabo en el campo exterior o transnacional”. (Thourup, 1993).

De esta manera, presentamos una esfera de acción alternativa con base en el protagonismo de la sociedad civil internacional, que converge en acciones de incidencia en políticas públicas, que se fortalece y consolida ante los elementos de la nueva realidad mundial.

La reestructuración de las instituciones tradicionales como el Estado y su soberanía, la reformulación del interés nacional como concepto definitorio de la acción gubernamental internacional hacia un interés temático dependiente de las nuevas prioridades —narcotráfico, integración, comercio, democracia— pero sobre todo el ajuste del gobierno mexicano a la nueva dinámica de las relaciones internacionales contemporáneas ha significado para México y su relación con el Gran Caribe un marcado énfasis en la cooperación con Estados Unidos, por razones no necesariamente definidas a partir de sus propias prioridades.⁸

En tal sentido, las presiones hegemónicas de Washington se han reforzado, dado que en principio toda América —latina y no latina— es la región por medio de la cual los estadounidenses intentarán hacer frente a los desafíos de los procesos de regionalización que se están gestando en otras latitudes, particularmente en Europa occidental.

Dadas las condiciones que determinan el actuar del gobierno mexicano y las características que sobre el contexto internacional se han señalado, en esta esfera de acción alternativa en manos de la sociedad civil, el enfoque tradicional de las relaciones internacionales de México hacia el Gran Caribe resulta por lo tanto insuficiente. Lo anterior se confirma al momento de incorporar, en el análisis de las relaciones internacionales de la región, a la sociedad civil internacional como un actor protagonista que se encuentra incidiendo en el establecimiento de regímenes internacionales⁹ —consensos y normas supranacionales de comportamiento social, político, económico y cultural.

A través de los regímenes internacionales que se generan a partir de marcos amplios y formales —tales como la Cumbre de la Mujer en Pekín, la Cumbre sobre Desarrollo Social en Copenhague, la Cumbre de Río sobre Medio Ambiente, la Cumbre de los Pueblos en Chile, el Foro de la Sociedad Civil del Gran Caribe— o a partir de marcos no formales —tales como la diplomacia ciudadana en Europa y Estados Unidos en torno a Chiapas, la consulta nacional en México sobre derechos indígenas con la participación de la sociedad civil de otros países, la diplomacia ciudadana latinoamericana y europea en torno al caso Pinochet—, la sociedad civil internacional despliega una lógica de interacción comunicativa¹⁰ basada en consensos sociales, pero en el ámbito supranacional.

Como contrapartida tenemos, en la esfera tradicional de las relaciones internacionales de México hacia el Gran Caribe, la ausencia de una participación activa o propositiva en un sentido autóno-

mo, ya que en su totalidad se inscribe dentro de una lógica pragmática e instrumental dictada por las prioridades comerciales.

En tal sentido, la agenda del Estado mexicano se caracterizaría por su desarticulación, por su dependencia y su orientación pasiva, por la consolidación de “la no política exterior” en las grandes temáticas que atañen a la región y a todo el continente: narcotráfico, migración, pobreza, desempleo, deuda externa; problemas frente a los cuales el Estado mexicano se ha mostrado incapaz de actuar en forma autónoma frente a las directrices o límites estadounidenses, pero sobre todo, al manifestar que su prioridad fundamental es el predominio comercial en la región deja claro que no le interesa hacerlo.¹¹

A esta lógica de acción en política exterior debemos sumar, según González Souza, una reacción claudicante de nuestra soberanía so pretexto de la modernización, que tiende a profundizar rezagos y polarizaciones (González Souza, 1998).

De esta manera se construyen dos agendas paralelas: la de la sociedad civil mexicana —ubicada en la incidencia hacia el cambio y la transformación mediante la creación de consensos a nivel internacional—, y la del gobierno mexicano, al servicio de los Estados Unidos. Dualidad de agendas que se articulan y orientan con posturas contrarias, no complementarias, en materia de integración, de condonación de deuda, de migración, medio ambiente, derechos humanos, desarrollo social, Chiapas, género.

Mientras el gobierno mexicano construye su estrategia a la luz de criterios pragmáticos, la sociedad civil de México y de otros países proyectan la posibilidad de transformación a través de su incidencia en los círculos internacionales y en los medios de opinión pública.

En la sociedad civil internacional encontramos, por tanto, esa capacidad de transformación y orientación crítica frente a las dinámicas avasalladoras y dominantes en el contexto internacional. Como agente de cambio y de transformación social plantea una globalización alternativa: “democrática, no elitista, humanista, no mercantilizada, ética y no descarnadamente inmoral. Una globalización desde abajo, una globalización ciudadana” (González Souza, 1998).

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Ante la tarea de caracterizar las relaciones internacionales de México hacia el Gran Caribe en un contexto que nos demanda comprender no solo el pasado y el presente, los elementos condicionantes del

gobierno mexicano y de los gobiernos de la región, sino también dilucidar escenarios y actores incidentes, es indispensable considerar los dos espacios de reflexión, las dos variables principales planteadas en este trabajo: *tiempo y actores*.

Ambas categorías permiten una lectura adecuada del rumbo de las relaciones internacionales en la región. De esta manera, podremos afirmar que mientras la relación tradicional tendrá que ser precisada a la luz del determinismo derivado de la situación y presencia de los Estados Unidos hacia México y el Gran Caribe, la posibilidad de una alternativa ciudadana se consolida ante el énfasis y la prioridad gubernamental actual: la presencia económica de México en la zona a través del comercio, en dirección y a favor de los intereses de los Estados Unidos y su agenda de integración.

Es entonces la sociedad civil nacional e internacional la que abre la posibilidad de una esfera alternativa de acción transnacional, y de repensar no solamente un tipo de relación que México debe generar hacia el Gran Caribe, sino que *amplía la dimensión de lo social en las relaciones internacionales* —un escenario tradicionalmente definido en términos de poder— y por lo tanto posibilita la articulación de un proyecto de integración y de región centrado en nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras culturas, y recreando consensos locales a nivel internacional.

NOTAS

1. Desde el concepto clásico de sociedad civil, por ejemplo, desde el marco teórico gramsciano, la posibilidad de teorizar acerca de una sociedad civil de carácter internacional supondría la existencia de una sociedad política de la misma índole. Sin embargo, el adjetivo o el carácter internacional con el que se califica aquí a la sociedad civil debe ser entendido en dos sentidos: a) desde la perspectiva amplia de lo internacional, que supone las relaciones entre todos los actores de la realidad internacional (territoriales y no territoriales), a diferencia de la visión tradicional, que enfocaría las relaciones entre Estados (sociedades políticas) definidos en términos de territorio. b) En segundo lugar, pensamos a la sociedad civil desde la postura teórica —también de Gramsci— en términos del consenso que genera en la opinión pública. Acto seguido, la equiparamos en términos de régimen internacional —consenso internacional— como promotora del cambio y la transformación en las relaciones internacionales.
2. Secretaría de Relaciones Internacionales. Protocolo de Actividades de México y el Gran Caribe. México, D.F., 1997.
3. Historia Mínima de México. COLMEX.
4. Lo anterior en un contexto de competencia y no complementariedad que sustentara la cooperación para promover la integración regional.
5. Recordemos el interés personal del presidente Salinas de Gortari para lograr la firma del TLC con un propósito principal y uno alternativo: buscar la reelección en México o la presidencia de la OMC.
6. Aunque no por ello ausente en el pasado, para efectos de este trabajo se sitúa en los últimos tiempos, dada su relevancia reciente.
7. Definición presentada por el Dr. Enrique Brito en el Seminario Integración Regional y Sociedad Civil en Centroamérica y el Caribe, México, marzo, 1998.
8. Citemos el ejemplo de la necesidad de un acuerdo marco sobre migración en el TLCAN, totalmente excluido en las negociaciones.
9. Los autores del neoliberalismo institucional conciben la existencia de regímenes internacionales como un conjunto de relaciones de interdependencia que a menudo ocurren dentro de redes de reglas, normas y procedimientos que regulan los comportamientos y controlan sus efectos. También señalan que los regímenes internacionales son un conjunto de normas, de reglas, de procedimientos de toma de decisiones, implícitas o explícitas, alrededor de las cuales las expectativas de los actores convergen en un área de las relaciones internacionales. Finalmente destacan que los regímenes internacionales tienen la función de restringir y guiar a los Estados y su conducta, según normas y reglas comunes; por lo cual hacen posible una conducta ordenada.

Véase: Baldwin, David A (Edit) (1993): *Neorealism and Neoliberalism. The contemporary debate*. N.Y. Columbia University Press. Los artículos siguientes: Stein, Arthur: *Coordination and Collaboration: regimes in an anarchic world*. Axelrod, Robert: *Achieving cooperation under anarchy: strategies and institutions*. Minler Helen: *The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A critique*.

10. Esta lógica se inscribe en el marco conceptual de la teoría de la comunicación de Jurgen Habermas, donde la acción instrumental y la interacción comunicativa constituyen los planos a partir de los cuales se entienden las diferentes relaciones sociales. En la acción instrumental predomina una racionalidad funcional, es decir, una racionalidad orientada por un determinado medio hacia la obtención de un fin específico. Dentro de la acción instrumental se entiende la esfera del Estado y el mercado, orientados hacia el poder y las utilidades respectivamente, con la finalidad de lograr la integración del sistema donde interactúan y así garantizar su reproducción. La interacción comunicativa, guiada por una lógica de entendimiento y acuerdo, desarrolla una racionalidad donde las expectativas recíprocas de conducta, entendidas y reconocidas intersubjetivamente, generan la integración social. Es en la lógica de esta acción donde se ubica a la sociedad civil internacional, atendiendo al objetivo de la integración social a través de sus organizaciones que actúan con una racionalidad consensual.
11. Baste recordar el despliegue estratégico y económico durante la administración de Carlos Salinas en torno a la firma de acuerdos y tratados de libre comercio de México con el Gran Caribe, el Pacífico, los Estados Unidos y Europa:

Acuerdos firmados durante la administración salinista:

- Acuerdo de complementación económica entre México y Chile 1991.
- Acuerdo de liberalización económica con Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia en 1994.
- Banco de Desarrollo del Caribe.
- Acuerdo Marco de Tercera Generación sobre Cooperación con la Unión Europea en 1991.
- Tratado General de Amistad y Cooperación con España.
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992.
- Socio de la OCDE en 1994.
- País miembro del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico y del Foro de Cooperación Asia-Pacífico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alponte, Juan María (1993): *La política exterior de México en el Nuevo Orden Mundial. Antología de principios y tesis*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Anguiano, Eugenio (1977): "México y el Tercer Mundo: racionalización de una posición", en: *Foro Internacional*, vol. XVIII, 1 (69), julio-septiembre de 1977, pp. 32-53.
- Axelrod, Robert (1993) "Achieving cooperation under anarchy: strategies and institutions", en: Baldwin, David A., (ed.) *Neorealism and Neoliberalism. The contemporary debate*. N.Y. Columbia University Press.
- Baldwin, David A.,(ed.) (1993) *Neorealism and Neoliberalism. The Contemporary Debate*. N.Y. Columbia University Press.
- Buchenaus, Jurgen (1996). *In the shadow of the giant. The making of Mexico's Central America Policy, 1876-1930*. University of Alabama.
- Castañeda, Jorge G., & Pastor, Robert A. (1988) *Limits to friendship. The United States and Mexico*. New York, p. 183.
- Castañeda, Jorge G., (1996) "América Latina y la terminación de la guerra fría: un ensayo sobre la frustración", en: Lowenthal, Abraham F. y Treverton, Gregory F (comp). *América Latina en un mundo nuevo*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Del Arenal, Celestino (1993) *Introducción a las Relaciones Internacionales*. REI, México, D.F.
- Golab, Stephanie R., (1993) "¿Un nuevo orden internacional? La decisión de México respecto al libre comercio". Informe Trimestral, CIDE, vol. III, núm. 1. Estados Unidos.
- Garza Elizondo, Humberto (1990) *Política Exterior de México*. El Colegio de México.
- González, Guadalupe (1983) "Incertidumbres de una potencia media regional: las nuevas dimensiones de la política exterior mexicana". En: Olga Pellicer (comp.) *La política exterior de México: desafíos en los ochenta*. México. CIDE.
- González, Guadalupe (1989) "Tradiciones y premisas de la política exterior de México". En: Rosario Green y Peter H. Smith (comps.) *La política exterior y la agenda México - Estados Unidos*. FCE, México.
- González Souza, Luis (coord) (1998) *Reconstruir la soberanía. México en la Globalización*. Instituto de Estudios de la Revolución Democrática/ Fundación Demos, México.

- Heller, Claude (1990) "Tendencias generales de la política exterior del gobierno de Miguel de la Madrid", en *Foro Internacional*, vol. XXX, núm. 3, enero-marzo de 1990, pp. 380-397.
- Méndez, José Luis (comp) (1998) *Organizaciones civiles y políticas públicas en México y Centroamérica*. Miguel Angel Porrúa, México.
- Minler Helen (1993) "The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A critique". En: Baldwin, David A., (ed.) *Neorealism and Neoliberalism. The contemporary debate*, N.Y. Columbia University Press.
- Palmer, Ransford (ed.) (1997) *The repositioning of US-Caribbean Relations in the New World Order*, US.
- Ojeda, Mario (1990) *Principios de la Política Exterior de México*, Colmex, México.
- Pellicer de Brody, Olga. *Luces y Sombras de la Política Exterior de México. Diversas fuentes*.
- Rosas, María Cristina (1996) *México ante los procesos de regionalización económica en el mundo*. UNAM, México, p.153.
- Saxe Fernández, Carlos (1998) "Redefinición de los vínculos con Estados Unidos". En: González Souza, Luis. (coord.) *Reconstruir la soberanía. México en la Globalización*. Instituto de Estudios de la Revolución Democrática/ Fundación Demos. México, p.109.
- Secretaría de Relaciones Exteriores (1997) *Protocolo de Actividades de México y el Gran Caribe*. México, D.F.
- Serbin, Andrés (1998) "Situación actual en el proceso de integración regional. Visión general y perspectivas". Ponencia presentada en el seminario "Sociedad Civil y Gobierno. México, mayo de 1998.
- Serbin, Andrés y Jácome, Francine (1998) *Sociedad civil e integración regional en el Gran Caribe*. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos /Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales / Nueva Sociedad. Caracas, Venezuela.
- Stein, Arthur (1993) "Coordination and Collaboration: regimes in an anarchic world". En: Baldwin, David A., (ed.) *Neorealism and Neoliberalism. The contemporary debate*, N.Y. Columbia University Press.
- Thourup, Cathryn L., (1993) *Redefining Governance in North America: The impact of Cross Border Networks and Coalitions on Mexican Immigration into the United States*. Rand Corporation, DRU-219, March, 1993.
- Valero, Ricardo (1985) "Contadora: la búsqueda de la pacificación centro-americana". *Foro Internacional*, vol. XXVI, núm. 2 (102) octubre-diciembre de 1985, pp. 468-480.

JULIO-AGOSTO 1999

NUEVA SOCIEDAD

162
CONTENIDO

Director: Dietmar Dirmoser
Jefe de Redacción: S. Chejfec

COYUNTURA: **Gerardo Caetano**. Uruguay. Nuevas reglas y apertura del calendario electoral. **Pedro Planas**. Perú. Algo se mueve en la República autocrática.

APORTES: **Mary Louise Pratt**. Lucha-libros. Rigoberta Menchú y sus críticos en el contexto norteamericano. **Mabel Bellucci / Flavio Rapisardi**. Alrededor de la identidad. Las luchas políticas del presente.

FOCO: **Juan Gabriel Tokatlián**. La guerra en Yugoslavia y América Latina. **Jürgen Habermas**. Bestialidad y Humanidad. Una guerra en el límite entre derecho y moral.

TEMA CENTRAL: INTEGRACION REGIONAL ¿POLITICA VERSUS ECONOMIA? **Martín Buxedas**. El desarrollo sustentable en las negociaciones del Mercosur. **Gabriel Sánchez Avendaño**. Treinta años de integración andina. **Jorge Schvarzer**. Un bloque exitoso en crisis. El Mercosur y un socio demasiado grande. **Andrés Serbin**. El Caribe y la integración continental. **Antonio Daher**. Las transnacionales chilenas y la integración regional. **Alfredo Guerra-Borges**. La integración centroamericana en el umbral del siglo. Una evaluación económica y política. **Shiguenoli Miyamoto**. Integración y seguridad regional. **Martin Roy**. Canadá y el ALCA. Estrategias de negociación.

SUMMARIES .

SUSCRIPCIONES (Incluido flete aéreo)	ANUAL (6 núms.)	BIENAL (12 núms.)
América Latina	US\$ 50	US\$ 85
Resto del mundo	US\$ 80	US\$ 145

PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD. Rogamos no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. Dirección: Apartado 61712- Chacao-Caracas 1060-A. Venezuela. Telfs.: (58-2) 267.31.89/265.99.75/265.53.21/266.16.48/265.18.49, Fax:267.33.97; @: nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoc.org.ve. Página digital: www.nuevasoc.org.ve



Declaración de Río de Janeiro

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA
EL DIÁLOGO EUROPA – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Foro de la Sociedad Civil para el Diálogo Europa-América Latina y el Caribe, reunido los días 28 y 29 de junio de 1999 en la ciudad de Río de Janeiro, aprobó la siguiente declaración, que representa la posición de las organizaciones sociales y laborales de países de América Latina frente a la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado:

1. Repitiendo el modelo de encuentros anteriores, la Conferencia de Jefes de Estado de Europa, América Latina y el Caribe, realizado en estas mismas fechas, redujo a los pueblos de nuestra región a la condición de meros espectadores de las decisiones oficiales. No se puede justificar que en eventos de tanta importancia internacional no se incorporan las entidades representativas de la Sociedad Civil. Las bases de cualquier acuerdo entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea deben estar enraizados en la transparencia, participación e información a la opinión pública como condición para la co-

operación entre nuestros pueblos. Las declaraciones oficiales con relación a temas como educación, erradicación de la pobreza, cooperación para el desarrollo y protección de los derechos sociales, normalmente adoptadas en los encuentros gubernamentales, permanecen como letra muerta, mientras que las negociaciones comerciales avanzan según los intereses de los inversionistas y de las corporaciones multinacionales.

2. La verdadera cooperación internacional constituye un patrimonio de las sociedades democráticas y debe validarse en la promoción de los derechos humanos, económicos y sociales, promovidos con la ampliación y la profundización de la democracia participativa. El derecho internacional a la libre organización y a la negociación colectiva debe ser respetada. Nuestros pueblos, quienes preservan una fuerte identidad histórica y cultural, consideran que el fin de la exclusión social y de la pobreza es el objetivo principal a ser



alcanzado. La cooperación internacional debe promover el desarrollo sustentable, exigir la protección al medio ambiente y la profundización y ampliación de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. La racionalidad económica debe estar sometida a la justicia social. Este modelo de cooperación y solidaridad internacional necesita considerar los aspectos siguientes:

El libre comercio viene ampliando la exclusión social y económica. La propiedad intelectual y los servicios son los nuevos sectores cotizados por los capitales internacionales. Cualquier acuerdo entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe debe considerar en primer lugar el derecho al desarrollo económico y social. Las asimetrías existentes entre los diversos países deben ser levantadas, previendo mecanismos efectivos para superarlas. Las políticas comerciales deben ser instrumentos de promoción de desarrollo y venir acompañados de mecanismos destinados a proteger los derechos laborales, sociales y ambientales. El bienestar y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos no se pueden someter a la lógica de la competencia comercial, condenando nuestra región a la condición de exportadora eterna de productos primarios agrícolas y minerales, al costo del desarrollo sustentable. En ninguna condición, la super-explotación de la mano de obra, como la utilización del trabajo infantil y la discriminación de las mujeres, puede constituirse en factor de la competencia comercial. Los pueblos de la Unión Europea, de América Latina y del Caribe no tienen nada a ganar con negociaciones que pretenden lanzar bloques de países contra bloques de países.

La creación de mecanismos que minimicen la inestabilidad económica internacional debe ser la prioridad en la agenda de la cooperación interregional e internacional. La reversión de la liberalización financiera y la implementación de controles sobre los flujos de capitales internacionales pueden ser alcanzados a través de impuestos destinados a controlar los inversionistas internacionales en beneficio de nuestros pueblos. La cooperación debe rechazar esquemas multilaterales de desregulación financiera, como es el caso del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, sea en el ámbito de la OCDE, o sea en el ámbito de la OMC. Otras formas de control democrático deben ser definidas. La reducción del peso de la deuda externa de los países menos desarrollados es la condición indispensable a la verdadera cooperación entre nuestros pueblos. Consideramos positiva la conversión de una parte de esta deuda en financiamiento de programas de becas escolares destinados a la erradicación del trabajo infantil. De la misma forma, la Unión Europea debe cumplir el compromiso de destinar 0.7% del PIB a la cooperación para el desarrollo, observando el carácter social y solidario de debe tener la destinación de estos recursos. Es necesario definir controles rigurosos sobre las corporaciones multinacionales en los acuerdos interregionales.

Las bases del diálogo y de la cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe deben estar situadas en los principios de la democracia, la participación, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la paz entre los pueblos. Procesos de integración son incompatibles con la violen-



cia y la guerra, como el que la OTAN desencadenó en Yugoslavia. La paz y la seguridad internacional deben ser reguladas y negociadas en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, cuya Consejo de Seguridad necesita ser reformado en bases democráticas. En el mismo sentido, se queda inaceptable el bloqueo a Cuba. La ley Helms-Burton es contradictoria con la autodeterminación de los pueblos.

Es necesario, pero insuficiente, incluir cláusulas democráticas en los acuerdos con la Unión Europea, como es por ejemplo el caso de México. Esas cláusulas deben estar acompañadas de mecanismos eficaces de promoción de los derechos humanos. Los mecanismos del diálogo social no pueden ser utilizados como mero instrumentos para legitimar acuerdos que carecen de participación eficaz de nuestras sociedades en el proceso de tomar decisiones. La construcción de instituciones democráticas de participación ciudadana deberá ser el punto de partida de cualquier acuerdo. Los ciudadanos y las ciudadanas debe tener el derecho de participar en las decisiones y también en el proceso de la formular e implementar las decisiones y las políticas de cooperación. Los parlamentos y gobiernos locales deben ser incluidos en todas las etapas de las negociaciones.

El apoyo al desarrollo debe considerar a los grupos más vulnerables de la sociedad. La erradicación del trabajo infantil debe ser una meta prioritaria basada en instrumentos y plazos definidos. La discriminación de género no es compatible con la justicia social y el desarrollo. Las mujeres constituyen uno de los sectores más expuestos

a las consecuencias perversas de la globalización. La cooperación debe tener como objetivo la definición de mecanismos capaces de promover la igualdad de género en nuestras sociedades. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes deben tener asegurado el acceso a los derechos laborales dondequiera que se encuentran.

El respecto a la autodeterminación de los pueblos indígenas debe ser un compromiso de nuestras sociedades.

La preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas vitales se encuentra amenazada por la lógica del crecimiento económico y por la desregulación comercial, en la medida en que ésta facilita el acceso al consumo irracional de los recursos naturales. El libre comercio es contradictorio con la promoción del desarrollo sustentable y la seguridad alimentaria. La concentración de la propiedad de la tierra y de los recursos vitales como la biodiversidad y el agua amenazan al capital natural del cual dependen no solamente las generaciones futuras, sino también numerosas comunidades y culturas locales. El comercio de productos alimentarios debe considerar la seguridad alimentaria y eliminar la producción de alimentos transgénicos. La pequeña producción familiar, que es la base de culturas locales tradicionales, debe merecer la atención específica frente a los impactos de la integración. La cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe necesita establecer límites sociales y ambientales para el crecimiento, basados en la sustentabilidad y en la igualdad.

El Foro de la Sociedad Civil para el Diálogo Europa-América Latina y el Caribe



es parte de la construcción de una articulación entre organizaciones sociales y laborales de Brasil y demás países de las Américas, denominada la Alianza Social Continental. Esta experiencia inédita nació y va consolidándose frente a los acuerdos de libre comercio en las Américas. Estamos convencidos de que las organizaciones representativas de la sociedad civil necesitan formular agendas y propuestas alternativas que son el contrapeso a estos procesos, ubicando la dimensión social como prioridad fundamental.

Estamos convencidos de que la ausencia de canales de participación en los acuerdos oficiales reduce la legitimidad de las decisiones adoptadas en los encuentros oficiales. Los parlamentos y los propios gobiernos nacionales, se han sometido hasta ahora ante la supuesta inevitabilidad de la globalización; necesitan reaccionar y afirmar la soberanía nacional. La sociedad civil debe continuar presionando y formulando alternativas enraizadas en la justicia social, en la solidaridad internacional y en la paz.

*Río de Janeiro, 29 de junio de 1999
Foro de la Sociedad Civil para el Diálogo Europa – América Latina y el Caribe
Encuentro de Parlamentarios Latinoamericanos*



Sociedad civil e integración regional en el Gran Caribe

Francine Jacome y Andrés Serbin (coords.). Alvaro de la Ossa, Neville Duncan, Francine Jácome, David E. Lewis, Andrés Serbin, Carlos Sojo. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESEP), Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Editorial Nueva Sociedad, Caracas 1998. ISBN 980-317-146-1

Que la presentación del libro *Sociedad civil e integración regional en el Gran Caribe* se realice al concluir el segundo Foro de la Sociedad Civil del Gran Caribe, es un hecho significativo. Significativo porque el libro recoge el esfuerzo inicial de quienes comenzaron a darle forma a este proceso. Contiene justamente buena parte de los primeros documentos que ayudaron a impulsar el debate, a acercar a las organizaciones sociales, a estimular la vinculación de centros académicos y a comenzar la interlocución con las entidades intergubernamentales y multilaterales. Los seis artículos del libro, de autores que hacen parte de las entidades organizadoras, abordan desde distintas dimensiones los tres ejes que han articulado este proyecto.

El primer eje ha sido el concepto mismo de integración. Si se revisan con detenimiento los artículos se podría encontrar un esfuerzo por mostrar que si bien la dimensión comercial constituye un motor de arranque de cualquier proceso de integración, ésta no se agota en negociaciones arancelarias o en acuerdos de libre comercio. Implica un esfuerzo de concertación de políticas, de elaboración conjunta de estrategias de inserción, de actuación común en espacios multilaterales y de construcción de instancias supranacionales. Conlleva también una interpenetración social y tiene efectos y costos diferenciados. No es solo asunto de los gobiernos, de los empresarios y de los negociadores. Tampoco se reduce a relaciones entre las capitales.



Encontramos entonces esta concepción amplia de la integración en las referencias a la fragmentación de las iniciativas gubernamentales que hacen los artículos de Serbin y de Lewis, a ese complejo entramado de acuerdos firmados por los gobiernos en los años noventa pero que, en algunos casos, no ha tenido consecuencias prácticas porque para incrementar el comercio no sólo hacen falta decisiones políticas.

El segundo eje que articula el libro es la relación del tema de la democracia y la gobernabilidad con el de la integración. Para Francine Jácome, las consecuencias sociales de los acuerdos de libre comercio pueden afectar la capacidad de gestión gubernamental y el incremento de los intercambios comerciales o de los flujos financieros. Con ejemplos de cada subregión, Jácome muestra, además, una estrecha relación entre la estabilidad, la concertación, el consenso a nivel nacional o regional y el dinamismo de los procesos de integración. Para Carlos Sojo, pensar la gobernabilidad y su relación con la integración remite a una revisión del tipo de régimen político y de actores que participan. Estos referentes ayudan a explicar las implicaciones de la integración en la construcción democrática.

Neville Duncan, en cambio, muestra que el tema de la gobernabilidad está más referido al desarrollo comunitario. Por eso insiste en que una buena gobernabilidad, en el caso del Caribe de habla inglesa, estaría relacionada con el tipo de las organizaciones existentes y de las relaciones

que mantienen esas comunidades con los gobiernos locales. Puede tratarse de relaciones dirigidas a buscar solo crecimiento, o bienestar, o capacidad de respuesta, o una de carácter más realista que incluya todas las anteriores.

El tercer eje articulador del libro es el referido a las características y al alcance de participación de la sociedad civil en estos procesos de integración. Serbin muestra la amplia gama de actores y sus crecientes lazos transnacionales, al tiempo que De la Ossa estudia los principios y objetivos que podrían adoptarse para impulsar una mayor y mejor participación de agentes sociales, en particular, en la nueva regionalización del Gran Caribe, así como las formas de coordinación más eficaces.

Pero más que la contribución al conocimiento y debate sobre estos ejes, este libro y el proceso desatado han hecho una contribución mayor. Han ayudado a pensar nuevas categorías para entender este nuevo y complejo mundo en transición. Han estimulado la construcción de una red de entidades sociales y académicas que, aunque incipiente, ya ha empezado a tomar impulso. Han dado herramientas para que la respuesta de la sociedad civil popular a la globalización no sea de pánico y huida. Más bien para que se aproveche en la conexión entre actores sociales, en la relocalización de sus reivindicaciones y la identificación de sus agendas.

SOCORRO RAMÍREZ



Liberalización financiera y capital bancario en América Central

Trevor Evans, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Managua, 1998. 136 p.

Esta nueva obra de Trevor Evans se centra en el estudio de los procesos de liberalización financiera desarrollados en los países de la región centroamericana durante los últimos diez años, continuando así con sus trabajos sobre los efectos de las políticas de ajuste estructural en tal región. Según el autor, estos procesos tuvieron su detonante en la confluencia de unos capitales bancarios regionales contrarios a cualquier tipo de control o intervención oficial sobre sus actividades intermediadoras, de unos gobiernos anuentes a la implantación de medidas liberalizadoras y de unas condiciones impuestas por los organismos financieros internacionales para facilitar el acceso de estos países a recursos financieros externos.

A partir de una breve descripción his-

tórica, se identifican hasta la fecha tres fases en el desarrollo de los sistemas financieros en América Central. En una primera etapa, comprendida entre mediados del siglo XIX y finales de la década de los veinte, las necesidades de financiamiento para la producción cafetalera resultaron determinantes para el surgimiento y fortalecimiento del sector financiero. Esto llevó a una concentración de la mayor parte de los recursos bancarios en el sector agrario, situación que provocó ciertas tensiones en los sistemas financieros ante la caída en los precios agrícolas a final de esta etapa, y que a su vez, dificultó el desarrollo de nuevos sectores de la economía a través de unos recursos bancarios que se encontraban monopolizados en el sector primario.

Los avances en la creación de los bancos centrales nacionales y de los marcos regulatorios correspondientes marcan el comienzo de la segunda etapa, la cual se extiende hasta principios de los años ochenta. Con la expansión en la economía mundial de los años cincuenta se promueve el establecimiento de unas bases sobre las que la banca comercial de la región podrá crecer y diversificar el crédito concedido hacia otros rubros productivos, aun cuando el sesgo agrario sigue siendo considerable. En esta etapa se hace patente el enorme peso que el Estado ha jugado en el desarrollo de los sistemas financieros centroamericanos, a través de las políticas establecidas por los bancos centrales y con la creación de los bancos estatales de desarrollo. En algunos países se llegó más lejos aún, mediante procesos de nacionalización bancaria que perseguían la desarticulación de los grandes bloques de poder económico y la democratización del acceso al crédito. Este fue el caso de Costa Rica —como un elemento más dentro del modelo socialdemócrata de desarrollo adoptado por el país—, y de Nicaragua y El Salvador, como parte de las decisiones tomadas por sus respectivos gobiernos en la década de los ochenta.

En la tercera y última etapa, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y los avances de los movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala provocarán una salida inmediata de los capitales de la región. Unido esto a los problemas que afronta la economía mundial a comienzos de los ochenta, se comprenderán las dificultades de los países de la región para la obtención de recursos del exterior, lo que originó un aumento de los déficits externos y dificultades para el pago de la deuda externa. El único recurso

serán las instituciones financieras internacionales, las cuales impondrán su doctrina financiera y monetaria a estos países como condición para acceder a nuevos recursos externos.

En el siguiente capítulo, Evans plantea una brillante síntesis sobre la doctrina clásica de la liberalización financiera establecida por McKinnon y Shaw a principios de los setenta, y que es asumida como propia por los organismos financieros internacionales (entiéndase: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo) en sus programas de estabilización y ajuste estructural. La doctrina liberalizadora se fundamenta básicamente en el crecimiento de la intermediación financiera y la monetización de la economía (mayor *profundización financiera*); en la desaparición del control estatal sobre el crédito (menor *represión financiera*); y por último, en la eliminación de los topes sobre las tasas de interés. Todo ello debe conducir en última instancia al desarrollo económico. Sin embargo, las críticas planteadas por el autor a dicha doctrina están fundamentadas precisamente en el contrastado fracaso de las experiencias liberalizadoras en el cono sur de América Latina; en la existencia de estudios económicos que coinciden en la falta de evidencia definitiva sobre las proposiciones de McKinnon y Shaw; y sobre todo, en la contradicción que implica desde una perspectiva de la economía política y desde una posición keynesiana el que unas mayores tasas de interés promuevan un aumento en los ahorros, tal y como propugna la teoría económica neoclásica.

A pesar de la fuerte polémica que se mantiene en torno a estos paradigmas de la doctrina liberalizadora, las necesidades



de financiamiento externo de los países centroamericanos les ha obligado a asumir dichos lineamientos como parte de unos programas de estabilización y ajuste estructural impuestos desde los organismos financieros internacionales y que han proliferado en la región desde mediados de la década de los ochenta. No ha sido ésta la única razón que ha influido en la adopción de las políticas de liberalización financiera, aunque sí quizás la más decisiva por el momento en que se implementaron las medidas.

En un ámbito en el cual la actividad financiera estaba fuertemente regulada y controlada desde el Estado, el propio capital financiero nacional vino desarrollando fuertes instituciones financieras que quedaban fuera del control de los bancos centrales. Ya fuera mediante la creación de "financieras" o mediante los bancos *off-shore*, los grupos bancarios conseguían evadir cualquier control que viniera impuesto desde las autoridades monetarias de la nación. De esa forma, se conformaron fuertes grupos económicos y financieros, muy anuentes a la adopción de políticas que eliminaran cualquier tipo de intervención financiera estatal. En muchos casos, estos mismos grupos han venido defendiendo sus intereses desde posiciones en unos gobiernos civiles que compartían la misma doctrina proempresarial y proliberalizadora.

Estos factores condujeron a la aplicación de programas de liberalización financiera, con diferentes medidas según el país, y en un orden de ejecución dependiente de la situación específica de cada uno de ellos. El paquete de medidas liberalizadoras comprende reformas institucionales y medidas de política financiera y monetaria. Por el lado de las reformas

institucionales, básicamente se propugna una mayor independencia de los bancos centrales; un fortalecimiento de organismos de supervisión y control (caso de las superintendencias de bancos); reformas a las leyes de bancos; privatización de los bancos comerciales y apertura del sistema a nuevas entidades privadas; redimensionamiento de los bancos estatales de fomento y apoyo a instituciones que promuevan la desintermediación financiera (caso de las bolsas de valores). Por el lado de las medidas de política financiera, se persigue la desregulación en las tasas de interés; la eliminación de los controles sobre los tipos de cambio; legalización de las cuentas en moneda extranjera (en la práctica, de los depósitos en dólares), y lo más fundamental, una completa eliminación de los controles sobre los movimientos de capital. En el cuarto capítulo de la obra el autor procede a describir detalladamente la secuencia seguida en la aplicación de estas medidas en cada uno de los países del área.

Antes de exponer los resultados de la liberalización financiera en la región, se introducen en el estudio unas breves reflexiones en torno a las incipientes tendencias de integración financiera centroamericana, fortalecidas en los últimos años por el nuevo impulso que ha adquirido la integración comercial y política en la región. Superadas las dificultades existentes en los años ochenta (principalmente desbalances estructurales entre países, crisis en los precios agrícolas e impacto de los conflictos armados en alguno de los países) este renovado impulso surge de un nuevo contexto internacional, en el cual la desregulación e internacionalización de los mercados financieros estadounidenses y de otros países capitalistas influyen



profundamente en los flujos de capital que reciben los países centroamericanos, situación que resulta aún más grave si se considera la política de apertura que se ha venido implementando en la región en los años noventa.

Junto a este nuevo contexto, se han dado una serie de iniciativas oficiales que en su momento implicaron un fuerte empuje hacia la integración financiera regional, promoviendo el establecimiento de sucursales bancarias en otros países de la región, el libre uso de las monedas nacionales, la integración de los mercados de valores y seguros, y la unificación de normas prudenciales para la supervisión de los bancos y las bolsas de valores.

Por último, es ahora el capital privado el que ya está apostando claramente por la integración financiera en el área centroamericana, si bien de forma muy limitada todavía. Desde iniciativas para la creación de títulos valores centroamericanos, hasta inversiones directas en otras entidades bancarias de la región, pasando por acuerdos de cooperación entre las bolsas de valores y las compañías de seguros de la región. Es claro el consenso en torno a que la integración debe servir para un fortalecimiento de las instituciones financieras centroamericanas de cara a una mejor preparación para enfrentar el mercado internacional.

En el siguiente capítulo, Trevor Evans nos ofrece un análisis sobre los resultados de la liberalización financiera, centrándose en tres aspectos fundamentales: los grupos económicos, las tasas de interés, y el ahorro y la inversión. Partiendo de una revisión a la concepción neoliberal del sistema financiero como unos meros intermediarios neutrales que canalizan recursos entre las unidades económicas con aho-

rrros y las unidades económicas con necesidad de crédito, concepción que no se corresponde en absoluto con la realidad, Evans llega al punto de que cualquier análisis del impacto de la liberalización financiera requiere del conocimiento de las estructuras actuales de las instituciones (bancarias sobre todo) y sus relaciones con las principales empresas no financieras y con los propios gobernantes. Aun cuando existen estudios para los cuales la función de los bancos es captar depósitos al menor costo posible para financiar las actividades de empresas no financieras del mismo grupo —lo cual distorsiona el funcionamiento de una economía de mercado, al introducir criterios no mercantiles en la asignación de recursos crediticios—, en Centroamérica los bancos han apoyado fuertemente el proceso liberalizador por cuanto se ha producido un cambio significativo en la acumulación de capital, desde la producción agroexportadora y la industria, hacia los servicios financieros. Este desplazamiento en la acumulación de capital dentro de los grupos económicos se debió a que el incremento de las tasas de interés originó un aumento en las ganancias bancarias y una reducción en las ganancias de las empresas no financieras.

En cuanto a las tasas de interés, vuelve a plantear el debate teórico sobre las diferentes concepciones de las teorías neoclásica y las teorías marxista y keynesiana en la determinación de las mismas. Utilizando el enfoque de Galbis, (Evans, pág. 78) quien propone el estudio del comportamiento de las tasas de interés en función de las expectativas inflacionarias, el riesgo cambiario, la política monetaria y el mal funcionamiento del sector financiero, Evans llega a las siguientes conclusiones para el caso de América Central:

(a) se han eliminado las tasas pasivas reales muy negativas y las tasas activas reales son relativamente altas en todos los países; (b) el alto costo real del crédito se debe sobre todo al elevado nivel de los márgenes de intermediación, el cual se explica (c) por el alto nivel de encaje legal, mantenido por la necesidad de financiar el déficit fiscal y la falta de utilización de otros instrumentos de política monetaria, y (d) por la concentración de los activos bancarios en unas pocas entidades del sistema y los préstamos a empresas del mismo grupo económico-financiero.

Por último, el efecto sobre el ahorro y la inversión de las políticas de liberalización financiera se justifican —según los defensores de dicha doctrina— en que la eliminación de las tasas de interés provoca un aumento en las mismas, lo cual fomenta el ahorro, y una mayor disponibilidad de recursos para la inversión. Las críticas planteadas a esta concepción se centran, en primer lugar, en el perjuicio que supondría para la disposición de fondos en los mercados monetarios informales en los países en vías de desarrollo, quienes financian en mayor medida a pequeñas empresas y productores, aunque la eficiencia en el sistema informal global sea muy reducida. Una segunda crítica va dirigida a la idea neoclásica de que el ahorro debe preceder a la inversión y ésta al crecimiento económico; estudios del propio BID argumentan que las políticas económicas deben enfocarse a eliminar los obstáculos del crecimiento en vez de promover directamente el ahorro —desde una perspectiva keynesiana, el ahorro viene determinado por el nivel de ingresos, y por lo tanto un aumento en el ahorro requiere del crecimiento económico. La última crítica va referida al papel de los ban-

cos: para la doctrina ortodoxa, el sistema financiero funciona como un intermediario entre ahorrantes e inversionistas, concepción muy limitada de las funciones que desempeña un sistema bancario. Este mismo estudio del BID presentado en el trabajo de Evans pone de manifiesto que en los países del área centroamericana, los sistemas bancarios se encuentran mucho más desarrollados, y desde esa perspectiva, “las políticas derivadas de un modelo teórico que corresponde a una etapa muy básica en la evolución de la banca son de dudosa pertinencia para las economías con sistemas bancarios más desarrollados” (pág. 92).

El análisis empírico realizado por Trevor Evans en su estudio demuestra que no existe una relación clara entre la liberalización financiera y el ahorro en América Central. Más interesante aún, el aumento en el ahorro se inició a mediados de la década de los ochenta, antes de la introducción de las políticas liberalizadoras y parece que tendría mayor relación con el crecimiento económico. En cuanto al uso de crédito, se observa un cambio notable de los rubros relacionados con producción hacia el comercio, sector éste en el que la rentabilidad resulta suficiente para hacer frente a las elevadas tasas de interés inducidas por la liberalización financiera. Ello sin olvidar que la apertura comercial ha llevado a un crecimiento en las importaciones y un mayor déficit comercial, sostenible solamente mediante flujos de capital procedente del exterior.

Dentro de este nuevo régimen financiero liberalizado, el autor identifica varias debilidades subyacentes. De un lado, la provisión del crédito para los pequeños productores debido a los altos costos de los recursos financieros. De otro, la falta



de crédito a largo plazo, indispensable para la producción y para la construcción de viviendas, problema ante el cual la solución oficial viene de la mano de bancos estatales de segundo piso y de un fortalecimiento del mercado de capitales a través de las bolsas de valores. Y por último, en lo que Evans viene a llamar “selección adversa”, referido a que elevadas tasas de interés, permitirán financiar aquellos proyectos de mayor rentabilidad. Estos proyectos también son los que corren con mayores riesgos, lo cual implicaría un aumento en la vulnerabilidad de los bancos.

Entre las conclusiones a que llega el autor cabría resaltar que este proceso de liberalización financiera se ha debido fundamentalmente al papel de las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, el resultado de dicho proceso no ha sido un mercado competitivo, sino unos sistemas en los cuales los bancos forman parte de poderosos grupos económicos y donde los mayores bancos concentran el mayor volumen de activos, a la vez que juegan el papel de *líderes del mercado* en la fijación de las tasas de interés. Esto los convierte en las entidades bancarias y financieras más rentables. En este sentido, la liberalización financiera ha originado un importante alza en los márgenes de intermediación, acompañado de un crecimiento en la proporción del crédito otorgado al sector comercial. Desde un punto de vista macroeconómico, el efecto del aumento en las tasas pasivas sobre el ahorro es bastante ambiguo, existiendo evidencias de que el factor principal para aquellos

países en los hubo un mayor ahorro no fue tanto la tasa pasiva real como el crecimiento económico. Para terminar, Evans afirma rotundamente que las políticas de liberalización financiera, fomentando procesos de acumulación de capital en grupos económicos-financieros y *redimensionamientos* de los bancos estatales de desarrollo que perjudican al pequeño y mediano productor, no han hecho sino contribuir a una mayor polarización social de la región durante los últimos años.

Con claridad expositiva encomiable y un enorme esfuerzo recopilador, el estudio de Trevor Evans expone un exhaustivo resumen sobre las discusiones teóricas que se plantean en torno a la liberalización financiera, a la par que una revisión histórica del proceso de formación y fortalecimiento del capital bancario centroamericano hasta la actualidad, cuando los procesos de ajuste estructural del ámbito financiero no han hecho sino discriminar aún más el acceso a los recursos financieros necesarios para el financiamiento de actividades productivas en cada uno de los países. A pesar de la falta de actualización en algunos de los aspectos planteados, la mayor virtud de este trabajo se apoya en la excepcional capacidad analítica y de síntesis que demuestra su autor, quien lejos de cerrar las discusiones en torno a sus análisis, nos brinda un aporte metodológico sumamente útil como punto de partida para desarrollar y profundizar las líneas de investigación planteadas.

MATEO AMBROSIO ALBALÁ



Reforma económica, Estado y sociedad en Centroamérica

Carlos Sojo, *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)*,
San José de Costa Rica, 1998. 142 p. ISBN 9977-68-099

La más reciente publicación de Carlos Sojo refleja una continuidad con respecto a sus trabajos anteriores presentados por el Programa de Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). En 1995, en el marco de la serie *La gobernabilidad en Centroamérica*, presentó un estudio en el cual analizaba las consecuencias del programa de ajuste en Costa Rica. En él examinó minuciosamente los impactos tanto económicos como políticos de las reformas en ese país. Dos años más tarde, en *Los de en medio*, concentró su atención en la problemática de la pobreza también en Costa Rica, viéndola no solamente desde una perspectiva socioeconómica, sino acercándose a su significación para la cultura política.

En la introducción, el autor señala

que “Los procesos sociales son el resultado de la conjunción de factores políticos, económicos y culturales que se engarzan en una experiencia histórica particular.” (p. 7). Bajo esta perspectiva aborda su estudio, cuyos tres capítulos centrales se refieren a: reforma económica-cambio estatal; reforma económica-exclusión social, y actores sociales-ciudadanía política.

Partiendo de la problemática de la gobernabilidad, aunque el autor alude a este concepto solamente una vez en la conclusión, aborda tres déficit: el económico, el social y el político. El análisis de dichos déficit está presente en el contenido de estos tres capítulos. En este sentido, es importante la relación entre lo económico, político y social que logra en cada uno de ellos; entre las contribuciones impor-

tantes de su análisis es el haber logrado esta interrelación.

La novedad de este trabajo es que amplía la cobertura de la investigación, pues estos temas son abordados en el marco de una comparación entre Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Selección hecha, acota el autor, justamente por las posibilidades comparativas que brindan tales países dadas sus divergencias y similitudes. Cabe destacar la utilización acertada de una metodología comparativa. Su análisis y los múltiples cuadros que incluye examinan los tres casos según los diferentes indicadores utilizados para el estudio. No cede a la tentación, muy común por cierto, de realizar estudios de caso por separado y considerarlo como una comparación.

En la introducción ofrece un breve marco teórico donde discute fundamentalmente la relación Estado-sociedad civil en el contexto de los cambios actuales. Difícil no concordar con él en las dos críticas básicas acerca de las concepciones de dicha relación. En primer término, a lo que pueden llamarse las posiciones "románticas" o "idealistas" con respecto a la sociedad civil, que ven en ella la sustitución del Estado, de los partidos políticos y de las organizaciones corporativas. En segundo lugar, a la concepción de la necesidad de reducir el Estado a su mínima expresión. De lo que se trata, como bien lo señala, es de redefinir el Estado y su relación con la sociedad civil.

La concepción usual de gobernabilidad la define, básicamente, como la relación demandas-respuestas entre el Estado y la sociedad civil. El asumir una visión alternativa, la gobernabilidad democrática, parte de su concepción como la coordinación de variables económicas, políti-

cas, sociales, culturales e internacionales en función de un proyecto nacional que cuente con el respaldo y la participación de amplios sectores de la población en el proceso de toma de decisiones. La construcción de una nueva gobernabilidad tendría que contar con mecanismos e instituciones que garanticen una amplia participación; una relación horizontal entre Estado, partidos y sociedad civil, y no una relación vertical como la actual. Una relación que se caracterice por la complementariedad y cooperación y no por la confrontación, como en el presente. En vez de delegar, se deben construir consensos a través de una amplia participación.

El estudio de Sojo muestra lo lejos que se está de esta alternativa. Las tres hipótesis que plantea para analizar las transformaciones en Costa Rica, Honduras y Nicaragua parecieran presagiar más bien retrocesos hacia situaciones de ingobernabilidad. En primer lugar, debido a que los cambios sociales, producto en gran medida del proceso de globalización, llevan a que aparezca una nueva elite que maneja los mismos códigos excluyentes de las elites anteriores. En segundo término, porque el espacio de influencia de los diversos actores sociales se restringe aún más como consecuencia del proceso de debilitamiento de sus representantes tradicionales: los partidos y las organizaciones corporativas.

Por lo tanto, se transita hacia una especie de gobernabilidad autoritaria, que si bien no es producto de una regresión hacia gobiernos militares, sí refleja formas de democracia autoritaria, o lo que se ha denominado *democraduras*. La democratización política no ha tenido como resultado la democratización social ni económica; los sectores excluidos son cada vez mayores.



El primer capítulo tiene como hipótesis "que el Estado en Centroamérica ha cambiado menos por el influjo de ese intercambio interno y más por el desarrollo del proceso de modernización vía internacionalización." (p. 13). Con tal fin, desarrolla dos puntos fundamentales: una discusión comparativa sobre la reforma del Estado, y el análisis de las cuatro iniciativas políticas aplicadas.

Lo interesante del análisis es la forma en que muestra cómo, en los tres casos estudiados, las reformas del Estado han sido eminentemente economicistas, puesto que son producto de las necesidades y políticas desarrolladas en el entorno internacional. Así, su aplicación es más resultado de la imposición de los organismos financieros internacionales que de decisiones elaboradas por las elites económicas y políticas locales.

En función de la gobernabilidad democrática, esto muestra claramente la inexistencia de un proyecto nacional, por lo que no puede esperarse el establecimiento de consensos en torno a aquél. Simplemente, no existe un proyecto económico, político y social, sino la aplicación de políticas públicas concretas diseñadas para cualquier realidad, sea ésta centroamericana, africana o asiática. No obstante, los tres casos analizados sirven para ejemplificar, en el caso particular de Centroamérica, la relación entre las reformas económicas y los procesos políticos. Sojo muestra cómo en esta subregión los modelos utilizados para la aplicación de reformas económicas están supeditados a condicionantes políticos. Concluye que la "política tiene primacía" (p. 30).

Para adelantar la reforma del Estado, señala que las iniciativas aplicadas son: las medidas fiscales; las medidas de libe-

ralización; la desregulación y la privatización. Lo importante de esta sección es que no solamente caracteriza la aplicación de estas políticas en los tres casos, sino que también identifica los impactos sociopolíticos de éstas. Este tipo de análisis contribuye a desenmascarar el discurso economicista y tecnocrático predominante con respecto a dichas reformas.

Con respecto a estas iniciativas, cabe destacar la fuerte dependencia existente con respecto al financiamiento externo para la aplicación de políticas fiscales. Estas políticas, en la mayor parte de los casos, están asociadas a un recorte en los gastos del Estado y no a un aumento en sus ingresos, lo que da lugar a un incremento del desempleo, especialmente entre las mujeres, un debilitamiento de la capacidad de movilización y reivindicación de los sindicatos, así como la erosión de las capacidades del Estado para mantener y desarrollar sus funciones administrativas, especialmente en las áreas educativas, sociales y de infraestructura social.

Las políticas de liberalización han llevado básicamente a la eliminación de los monopolios estatales así como de los subsidios, los controles de precios y las trabas a las importaciones, entre otros. La desregulación ha suprimido las trabas a las exportaciones y ha conducido a que el Estado tenga un papel más de supervisión que de ejecución. Las privatizaciones han tomado tres caminos: la transferencia de entes públicos a los trabajadores, la venta de acciones o entrega en concesiones y, en menor medida, la venta directa de empresas estatales.

No obstante las similitudes y diferencias encontradas con respecto a los impactos sociopolíticos de estas reformas,

Sojo concluye que “el hallazgo más significativo es que la aplicación de las reformas económicas del Estado tiene lugar en un ámbito fuertemente politizado.” (p. 65)

La lectura de este capítulo lleva a la conclusión que el impacto social fundamental de estas políticas —promovidas “desde el exterior” y “desde arriba”— ha sido que favorecen a una pequeña elite y empobrecen a sectores cada vez más numerosos de la población. Por lo tanto, en vez de fomentar un mayor grado de inclusión han agudizado el proceso de exclusión social. Independientemente de la perspectiva desde la cual se parte para analizar la gobernabilidad, podría pensarse que esta situación generará, en el corto plazo, problemas de gobernabilidad.

Dada la conclusión anterior, es importante constatar que el autor enfoca este segundo capítulo desde la perspectiva de la integración social vista en función de los límites de la ciudadanía civil y social. Dicha integración, definida a partir de indicadores sociales, económicos y políticos, plantea que la ciudadanía no puede concebirse en términos dicotómicos y, por lo tanto, “la población se divide en tres estratos disímiles: los incluidos, los vulnerables y los excluidos.” (p. 69). Busca demostrar la hipótesis de que “el cambio económico se orienta a la formación de una nueva hegemonía menos dependiente de las redes tradicionales de explotación agropecuaria y más cercana a las demandas especulativas del entorno externo.” (pp. 13-14).

A tal fin, esta sección del libro está orientada a ofrecer, en primer término, el marco en el cual se desarrollan las actividades económicas, cada vez más marcadas por la internacionalización. La industria y la agricultura han decrecido con res-

pecto al sector del comercio y los servicios financieros. Por tanto, los grupos relacionados con los capitales financieros son los más dinámicos y los que más se relacionan con la globalización. Concluye que pese a la complejización del panorama social, consecuencia en gran medida del desplazamiento de la oligarquía tradicional por una elite empresarial muy heterogénea, no se han producido avances con respecto a una mayor equidad. Un aspecto importante que él señala es la integración de estas elites a través de la transnacionalización del capital centroamericano.

En segundo lugar, este capítulo está dedicado a una evaluación de las restricciones existentes con respecto a la ciudadanía social —la pobreza— y a la ciudadanía civil —el empleo. La valoración de dichas restricciones, unidas a las limitaciones de la ciudadanía política examinadas en el tercer capítulo, se hace “en el marco más general de la transformación de los antagonismos sociales en la región” (p. 71). Aquí surgen diferencias notables con respecto a los resultados de la comparación al observar que en Costa Rica los excluidos y vulnerables llegan a 32% mientras que en Honduras son 77% y en Nicaragua 72%. ¿Por qué existen estos índices alarmantes de excluidos y vulnerables con respecto a la pobreza?

El problema del desempleo es esencial y se señalan tres causas fundamentales. En primer término, el sector comercial y de servicios financieros genera poco empleo y, generalmente, es muy especializado. En segundo lugar, la reducción del tamaño del Estado, que anteriormente fue una importante fuente de empleo y, por último, la contracción en el sector agrícola y el industrial. Los índices de vulnerabilidad y exclusión presentados con res-



pecto al empleo son de 62.4 % en Costa Rica, 72.2% en Honduras y 77.3% en Nicaragua. Salta a la vista la diferencia entre los excluidos y vulnerables en términos de pobreza y de empleo en el caso de Costa Rica; una elaboración más amplia al respecto sería una importante contribución.

De este marco puede concluirse que se produce una integración regional de las elites —una internacionalización de las elites— fruto de la globalización, mientras que internamente este proceso conduce a mayores niveles de desintegración social, producto de altos índices de vulnerables y excluidos en cuanto a pobreza y a desempleo. Si bien es cierto que en el caso de Costa Rica, en términos comparativos únicamente, la situación no es tan grave, parece reiterarse un panorama poco propicio para el desarrollo de una gobernabilidad democrática en la región. Por el contrario, las perspectivas parecen ser la profundización de los problemas de gobernabilidad, pues debe recordarse que el Estado está cada vez menos capacitado para dar respuesta a estos vastos sectores vulnerables y excluidos, así como el hecho de que el modelo económico que se está desarrollando tiene poca capacidad para incluirlos; el aumento de la economía informal es un buen ejemplo.

¿Cómo construir una ciudadanía sustantiva ante esta realidad de exclusión? Sojo plantea que este es uno de los retos fundamentales que se tienen por delante. En este sentido, no hace falta solamente una redefinición del Estado y de su relación con la sociedad civil, sino también una evaluación de la actuación de dicha sociedad civil ante las realidades que refleja este estudio.

El tercer capítulo examina los lími-

tes de la ciudadanía política. La hipótesis planteada es que “existe un desarrollo desequilibrado de recursos organizativos entre los distintos sectores que favorece a las elites modernizantes permitiéndole[s] un acceso ‘directo’ a las instancias estatales decisorias” (p. 14). Esto ocurre debido a la debilidad de los partidos políticos y otras organizaciones corporativas, básicamente sindicatos y organizaciones campesinas, para transmitir las necesidades e intereses de los sectores populares.

A pesar de la creciente importancia de las organizaciones sociales en la representación de los intereses y necesidades de las sociedades civiles, éstas no llenan este vacío. Tienen una limitación fundamental: en la mayoría de los casos representan intereses sectoriales—movimientos ambientalistas, grupos de mujeres, organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre otros— y por tanto no tienen capacidad de agregación de intereses en el contexto nacional. Las ONG, con sus fuertes vínculos con actores externos y su sesgo eminentemente técnico y asistencialista, tampoco llenan este vacío.

Esta situación también es peligrosa para la gobernabilidad, pues puede pensarse en una especie de “anarquía” de organizaciones, cada una presionando por obtener sus objetivos. La inexistencia de espacios que posibiliten la elaboración de consensos sobre la base de las similitudes y diferencias de esta heterogénea sociedad civil pueden ser un factor que, a la larga, atente contra los procesos de democratización. La redefinición de las relaciones entre Estado y sociedad civil amerita una reflexión en torno a este punto.

Ante la debilidad de actores que puedan agregar intereses y tengan representación social, una de las consecuencias más

visibles es la violencia, como bien acota Sojo. Su análisis del aumento de la violencia —doméstica, criminal, política y la corrupción— parece apoyar el planteamiento anterior sobre los problemas de la ingobernabilidad y las amenazas a los procesos de democratización en la región. En suma, debe tomarse como un indicador fundamental del proceso de desintegración social.

Como consecuencia, ante este vacío de actores que representen intereses sociales colectivos, los excluidos y vulnerables adolecen también de graves déficit políticos. Son las nuevas elites, con sus estrechos vínculos transnacionales, las que tienen capacidad de influir y determinar el proceso de elaboración de políticas públicas.

Desafortunadamente, el espacio dedicado a esta última parte del libro no guarda proporción con los dos anteriores y, por lo tanto, no se desarrolla en la extensión y profundidad que ameritaría. Es la única debilidad de este libro.

En conclusión, la verificación de estas tres hipótesis en los casos de Costa Rica, Honduras y Nicaragua —con sus similitudes y diferencias—, muestra los cambios generados por las reformas económicas implementadas. Las transformaciones han sido producto no tanto de factores internos, como había sucedido históricamente, sino de aquellos que se están operando en el ámbito internacional. Surge, así, una nueva elite modernizante que depende más del entorno externo que del interno. Esta nueva elite parece estar de-

sarrollando un control casi monopólico sobre el Estado, facilitado tanto por la debilidad de los actores políticos tradicionales así como la de los nuevos actores sociales.

La década que está por terminar se ha caracterizado, en la mayor parte de los países de la región, por procesos de democratización *política* y de reformas económicas. No obstante, la lectura de este libro muestra que estos procesos de ninguna manera han llevado a adelantos en la democratización económica y social. Todo lo contrario, los déficit sociales, civiles y políticos señalados por Sojo son de proporciones alarmantes. Ante esta situación es de prever que enfrentarán nuevas situaciones de ingobernabilidad, que según este estudio ya se ven reflejadas en el aumento de la violencia. Una violencia, en el contexto centroamericano, distinta a la de décadas pasadas, pero que hará peligrar la incipiente democratización.

¿Cómo evitarlo? El mismo autor nos ofrece un primer indicio para ir construyendo alternativas:

La superación de la exclusión en último término requiere, antes que cualquier esquema compensatorio de corto plazo, la formación de una conciencia de la iniquidad. Esto significa que el paso transcendental es reconocer la riqueza de recursos disponibles y la posibilidad de un bienestar creciente basado no en la acumulación sino en la distribución. Nada nuevo, pero siempre urgente. (p. 127)

FRANCINE JÁCOME



LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

ACTIVIDAD ELECTORAL Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Jacqueline Jiménez Polanco

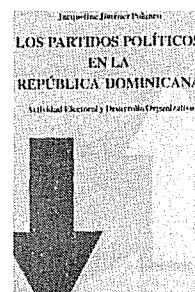
Prólogo de Manuel Alcántara Sáez

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(FLACSO), Santo Domingo, 1999, 593 p.;

23 x 15 cm. ISBN: 84-605-7684-1

Este libro estudia los partidos políticos en la República Dominicana desde la perspectiva externa: el sistema político y la competencia interpartidista, y en su dimensión interna: el desarrollo organizativo de partidos. Es un volumen único en su género, que analiza con rigor científico la política dominicana desde la primera mitad del siglo XIX hasta el presente. Se estudia el faccionalismo caudillista durante la construcción de la República, la ocupación norteamericana de 1916-1924 y sus efectos en la consolidación de la dictadura antipartidista de Trujillo, el paulatino proceso de pluralización iniciado con el ensayo democrático de Juan Bosch y el PRD, y su frustración por el golpe militar de 1963 y la intervención norteamericana de 1965 que permitió la implantación del autoritarismo de nuevo cuño de Joaquín Balaguer con el PR. Se analizan también los cambios políticos que se han producido desde las elecciones de 1978 y que han permitido la vigencia de los gobiernos casi poliárquicos del PRD con Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, la cuasipoliarquía gerontocrática y delegativa encarnada por el liderazgo carismático de Joaquín Balaguer en el PRSC y la cuasipoliarquía consultiva del PLD basada en el liderazgo contingente de Leonel Fernández.



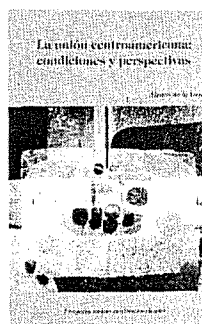


INVADIENDO AL INVASOR

Juan Manuel García Passalacqua
Editorial Cultural, Colección Ambos Mundos
Río Piedras, Puerto Rico, 1999, 262 p.; 23 x 15 cm.

¿Qué significó el 25 de julio de 1998? ¿Qué le espera a Puerto Rico en el siglo XXI?

En este libro se encuentra la explicación de los eventos que se suceden en Puerto Rico en 1998 y las implicaciones que ello tendrá para el próximo milenio. Inspirado en planteamientos del grupo juvenil musical *Fiel a la Vega*, el decano de los analistas políticos puertorriqueños, García Passalacqua, describe en detalle los eventos ocurridos desde 1898 hasta 1998 en los Estados Unidos y en el globo que han tenido influencia en el destino de Puerto Rico.



LA UNIÓN CENTROAMERICANA: CONDICIONES Y PERSPECTIVAS

Álvaro de la Ossa
CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales), Managua, 1999. 258 p.; 21 x 13 cm. ISBN: 99924-31-03-2

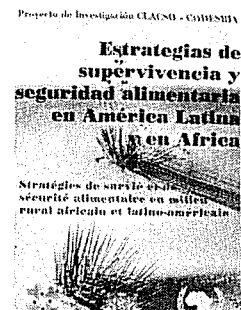
Este libro forma parte de un estudio sobre la unión centroamericana coordinado por el autor y solicitado a CRIES por el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana a fin de contar con un instrumento de análisis para formular su propia posición y construir consensos alternativos frente a la visión oficial sobre este tema expresada en la Declaración de Nicaragua del 2 de septiembre de 1997, en la cual los presidentes del istmo reavivaron el interés por la unión política centroamericana.

Los resultados del estudio están contenidos en cinco importantes documentos, cuya primera parte es este volumen. Comprende un amplio y profundo enfoque sobre las posibilidades reales de la unión en las actuales circunstancias de la región centroamericana.



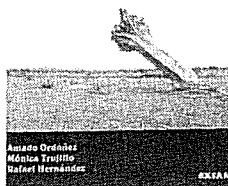
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN AMÉRICA LATINA Y EN ÁFRICA

Jaime Espín Díaz, Freddy Rivera Vélez,
Gioconda Herrera, Enrique Rodríguez Doig,
Boubié Bassolet, Faustino Imbali, Ibrahima
Songore, Mamadou Dansokho, Ndéye Coura
Ndoye. Proyecto de Investigación CLACSO-
CODESRIA. (Edición bilingüe español- francés:
Stratégies de survie et de sécurité alimentaire
en milieu rural africain et latino-américain).
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales /
Ministerie van Buitenlandse Zaken / Council
for the Development of Social Science Research
in Africa. Buenos Aires, 1999. 440 p.;
22.5 x 19 cm. ISBN: 950-9231-44-4



Estas investigaciones han permitido cubrir en parte una gran carencia de información sobre aspectos concretos de la vida cotidiana de la población rural y sus relaciones con los núcleos urbanos en África y en América Latina. Los trabajos tratan de responder a una serie de preguntas: ¿Qué modalidad o tipo de estrategia de vida han desarrollado los campesinos frente a la dinámica del mercado y la acción interventora del Estado, especialmente en los aspectos vinculados a la alimentación? ¿Cómo se han modificado esas estrategias frente a la dinámica mencionada? ¿Qué procesos de diferenciación social están presentes en la racionalidad campesina? ¿Qué tipo de situaciones ha generado la intervención estatal en las economías campesinas?

En este libro se compilan los resultados obtenidos desde América Latina y una selección de algunos de los informes producidos en África, en lengua francesa, pues ofrecen un contrapunto comparativo sumamente enriquecedor. La serie completa de los artículos africanos será publicada por CODESRIA.



**MAPEO DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD
EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO**

**ESTUDIO DE CAPACIDADES LOCALES PARA TRABAJAR
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA**

*Amado Ordóñez, Mónica Trujillo, Rafael
Hernández. OXFAM Gran Bretaña.
Managua, Nicaragua, 1999.
189 p; 10 mapas; 23.5 x 16.5 cm.*

Esta investigación analiza globalmente las amenazas y riesgos de desastre a una escala regional, con un enfoque en el que se amalgaman las interacciones socioeconómicas y políticas y se encuentran con las dinámicas naturales para mapear una realidad donde los límites y fronteras de la vulnerabilidad son responsabilidad humana. Este es quizás uno de los aportes más importantes del estudio, pues acceder a las imágenes visuales de una cartografía en la que se muestran patrones regionales de riesgos y vulnerabilidad, permite apreciar nítidamente la importancia de la gestión de los riesgos para reducir la vulnerabilidad en beneficio de la seguridad y el desarrollo sostenible.

DEMOCRACIAS CON FRATURAS:
GOBERNABILIDAD, REFORMA ECONÓMICA
Y TRANSICIÓN EN CENTROAMÉRICA



**DEMOCRACIAS CON FRATURAS:
GOBERNABILIDAD, REFORMA ECONÓMICA
Y TRANSICIÓN EN CENTROAMÉRICA**

*Carlos Sojo
FLACSO Costa Rica. San José de Costa Rica
1999. 278 p; 21.5 x 14 cm. ISBN 9977-68-103-1*

Las reformas estructurales aplicadas en Centroamérica desde 1990 han inducido debates y acciones efectivas en lo concerniente al tamaño y las funciones del Estado. Tratándose de sociedades en transición democrática, la discusión en torno a la participación del Estado en la vida social adquiere particular relevancia porque no se trata de aparatos hipertrofiados, sino más bien de instituciones reducidas en sus funciones más importantes desde el punto de vis-



ta de la gobernabilidad, esto es: sus funciones *redistributivas* y sus funciones *legitimatorias*.

Partiendo de las anteriores consideraciones, la pregunta que ha orientado esta investigación se plantea como sigue: ¿Cuáles son los términos de la relación democracia-mercado en Centroamérica a partir del momento en que se generalizan políticas económicas de ajuste estructural (1990) con reformas democráticas en el régimen político? Se trata de observar tanto avances como dificultades, esto es, de identificar puntos de ruptura o continuidad del proceso de transición política hacia sociedades más estables económica y socialmente.

DEMOCRACIA EN GUATEMALA: LA MISIÓN DE UN PUEBLO ENTERO

IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), *Informe de la Misión. Serie sobre Capacitación 6*
Estocolmo, Suecia, 1999. 363 páginas; 24.5 x 17 cm. ISSN 1402-6279, ISBN 91-89098-23-4



Como resultado de consultas y diálogos con representantes del Estado, de la sociedad civil y del sector privado, el presente informe ofrece una perspectiva de mediano y largo plazo para la consolidación de la democracia en Guatemala, y sugiere recomendaciones para impulsar y acelerar la oportunidad originada con la firma de la paz en 1996. Es parte de un proceso en el que se ha buscado facilitar el diálogo y la creación de consensos entre los guatemaltecos acerca de los desafíos que enfrenta el país en los albores del próximo milenio.

REVISTA DEL CEID

Publicación semestral editada por el
Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo

Volumen I, n° 1, mayo de 1999

Irak: caminando sobre la cuerda floja internacional por Kofi Annan
Globalización, regionalización y déficit democrático en los procesos de integración: el rol de la sociedad civil por Andrés Serbin
Cooperación o conflicto en la posguerra fría: choque de civilizaciones o libre comercio por Alfredo Bruno Bologna
La iniciativa Cascos Blancos por Oscar Andrés De Masi
La compleja trama de la reunificación: evolución de las relaciones entre China y Taiwán por Sergio Cesarin
¿Cómo Taiwán ha podido resistir la crisis financiera de Asia? por Chien-jen Chen
Perspectivas sobre las relaciones a través del Estrecho de Taiwán por Vincent C. Siew
Ritos, normas y leyes de China por Susana Vittadini Andrés
Chile y la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial por María de Montserrat Llairó
Islam y petróleo en el Cáucaso y las Repúblicas Centrales Asiáticas por Isabel Stanganelli
¿Es viable un sistema regional árabe? por Magdalena Carrancio
Neoliberalismo y ajuste estructural en América Latina por Juan Manuel Gigli
Cambios, ajustes y continuidades en la política exterior del actual gobierno australiano por Raúl Tempesta
La política exterior turca de cara al siglo XXI por Luciano Zaccara

Suscripción anual: Argentina \$28 más gastos de envío
Exterior US\$ 38 incluidos gastos de envío

CEID

Av. Juan Bautista Alberdi 6043, 8° A
1440 Buenos Aires – Argentina
Telefax (5411) 4686-0212 – E-mail: jreyes@feedback.net.ar



Colaboran en esta edición

ALVARO DE LA OSSA es economista costarricense. Ha sido funcionario de la ONU, (CEPAL, UNCTAD, PNUD) en América Latina, en el Caribe y en África, y profesor universitario en Costa Rica, Guatemala, México y Colombia. Actualmente es miembro de la Fundación Centroamericana por la Integración (FCI), de la que también ha sido presidente.

ROSALBA ICAZA es una joven profesora de relaciones internacionales en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana de México. Autora de diversos artículos acerca de la sociedad civil y su concepción teórica en las relaciones internacionales. Actualmente colabora en el área de investigación del Foro de Apoyo Mutuo, donde tiene a su cargo el proyecto "Integración regional y sociedad civil" de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.

BRIAN LINNEKER obtuvo un doctorado en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, donde se desempeña como profesor, director de investigaciones y consultor. Actualmente se encuentra en Nicaragua trabajando para la Comisión de Información y Evaluación de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción de Nicaragua.

GERT J. OOSTINDIE estudió historia y ciencias sociales en la *Vrije Universiteit* de Amsterdam y se graduó en Utrecht. Dirige el Departamento de Estudios del Caribe de la KITLV/Instituto Real de Lingüística y Antropología de Leiden, y dirige la cátedra de estudios del Caribe en la Universidad de Utrecht. Es director administrativo de la *New West Indian Guide*.

HEINZ R. SONNTAG es profesor de sociología en la Universidad Central de Venezuela; investigador superior del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) y ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS.

ANDRÉS SERBIN es antropólogo y doctor en ciencias políticas. Es presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), y del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), y profesor titular de ciencias políticas y económicas de la Universidad Central de Venezuela. Ha pu-

blicado numerosos artículos y libros sobre temas de seguridad, relaciones internacionales y relaciones interétnicas en el Caribe y en América Latina.

PETER VERTON es sociólogo y autor de varios libros y artículos académicos sobre política en Curazao. Anteriormente se desempeñó como catedrático en la Universidad de las Antillas Holandesas. En la actualidad ejerce su profesión como consultor en el campo de la administración de los recursos humanos, fundamentalmente en el Caribe y en América Latina. Ha realizado numerosos proyectos de investigación en las Antillas Holandesas y en Aruba.

rrollo, CENDES. Past president of the Latin American Sociological Association (*Asociación Latinoamericana de Sociología*, ALAS.

PETER VERTON is a sociologist. The author of several scholarly books and articles on politics in Curaçao and previously a professor at the University of the Netherlands Antilles, he has since continued his career as a consultant in the field of human resource management, working particularly in the Caribbean and Latin America. He has conducted many research projects in the Netherlands Antilles and Aruba.

SUSCRIBASE HOY Y AHORRE... RECIBA 6 POR EL PRECIO DE 3

☐ Renovación ☐ Nueva A partir de _____

Use máquina o letra de imprenta / Please type or print

Adjunto cheque o giro bancario número: / Enclose check or money order Number: _____

Del banco / Bank _____

Por la cantidad de / Amount _____ Fecha / Date _____

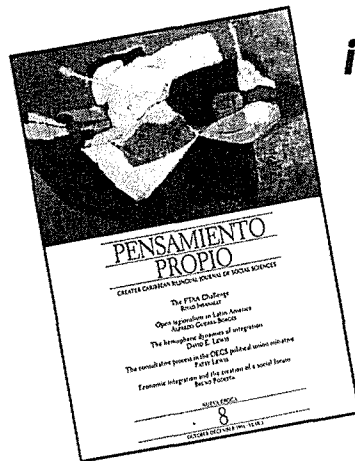
Nombre / Name _____

Dirección / Address _____

Ciudad / City _____ Estado / State _____

Código Postal / Postal Code _____ País / Country _____

blicado numerosos artículos y libros sobre temas de seguridad, relaciones internacionales y relaciones interétnicas en el Caribe y en América Latina.



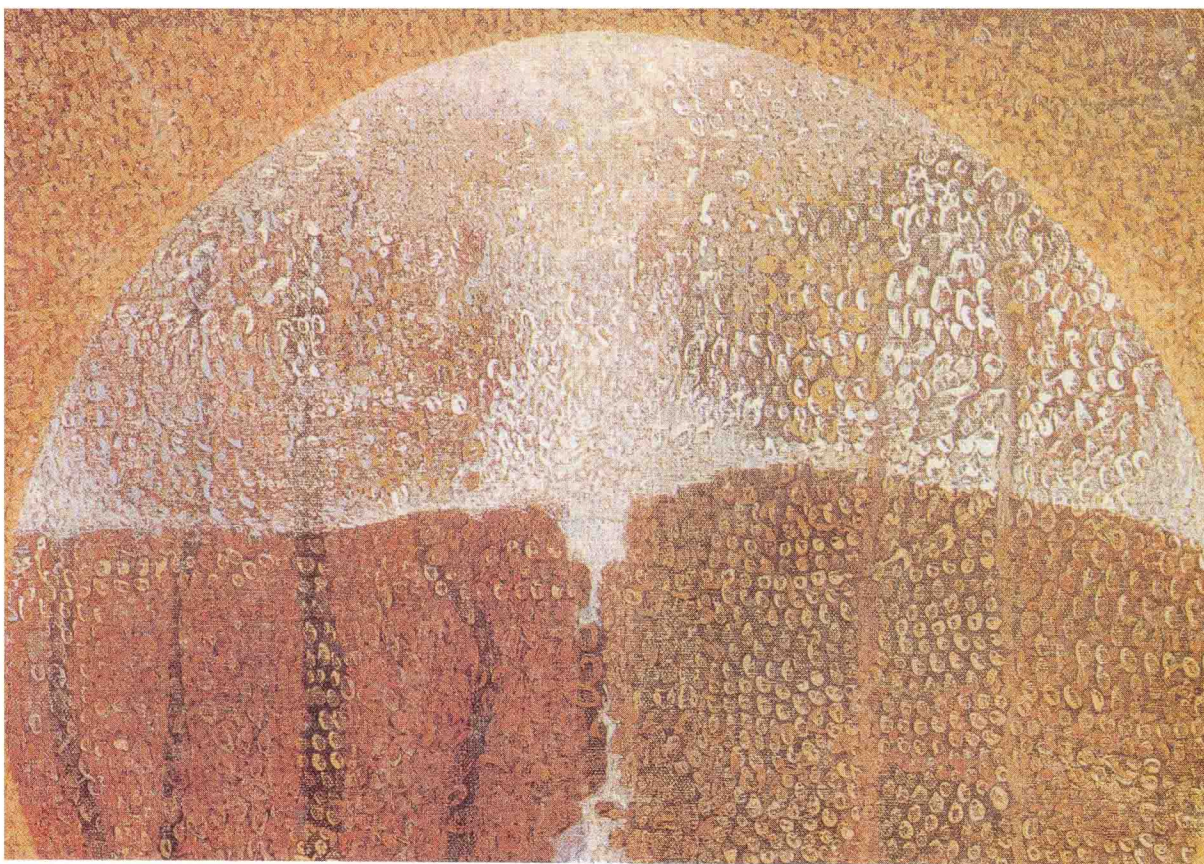
CRIES / Pensamiento Propio
Apartado 3516
Managua, Nicaragua
Tels: (505)268- 2362, 268-2367
Fax: (505)268-1565
cries@nicarao.org.ni

¡No lo piense más! ¡Piense con Pensamiento Propio!

Pensamiento Propio, la revista bilingüe de análisis socioeconómico sobre la región del Gran Caribe, es una publicación semestral de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)

Suscripción anual, incluyendo gastos de envío
Centroamérica, México y el Caribe US\$ 30
EEUU, Canadá y América del Sur US\$ 31
Europa US\$ 36
Asia y Australia US\$ 38

***SUSCRIBASE HOY Y AHORRE . . .
RECIBA 6 POR EL PRECIO DE 3***



PENSAMIENTO PROPIO

GREATER CARIBBEAN BILINGUAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

Antilles, Aruba and the Netherlands
GERT OOSTINDIE & PETER VERTON

Transnational Civil Society and Globalisation
ANDRÉS SERBIN

Central America: What is in Store for Us?
ÁLVARO DE LA OSSA

Mexico and the Greater Caribbean:
Traditional Governmental Arenas and the Citizen Alternative
ROSALBA ICAZA

NUEVA EPOCA

9

JANUARY-JUNE 1999 / YEAR 4

PENSAMIENTO PROPIO is a journal of socioeconomic analysis that publishes the studies and investigations of the CRIES network. It stimulates studies focusing on the region as a whole, with the aim of creating an intellectual forum open to democratic proposals for Central America and the Greater Caribbean.

The ideas expressed in the texts published here are the exclusive responsibility of their authors, and do not necessarily reflect the journal's viewpoint. *Pensamiento*

Propio's Editorial Committee invites all those who are interested to collaborate in this debate forum, but reserves publication rights to any contributions it receives. Reproduction of the contents of this magazine is permitted on the condition that the source is mentioned and two copies of the article are sent.

This publication was made possible thanks to the support of SIDA (Swedish International Development Agency).



THE REGIONAL COORDINATOR OF ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH (CRIES) is a network of research centers in Central America and the Caribbean. It was created in 1982 and now has more than 30 affiliated centers around the region. CRIES' main objective is to contribute to the construction of an equitable social development model for the countries and territories of the Greater Caribbean that is sustainable in economic, environmental and human terms.

The Greater Caribbean is made up of all countries and territories of Central America, the Caribbean, Mexico, Colombia and Venezuela. The foundation for this Greater Caribbean concept resides in the shared economic and social matrix of the societies comprising it, as well as in the idea that the viability of alternatives in these times of globalization and mega-blocs demands the creation of

broad and inclusive regional spaces for harmonizing and coordinating, to make possible the region's active and healthy reinsertion into the international setting.

On the other hand, an alternative development model that benefits the great majorities can only be fashioned from below and within society, based on active and democratic participation by social and grassroots organizations that are representative of all sectors, particularly the most excluded ones. CRIES is linked to such sectors and organizations to help strengthen them and to accompany them in the process of building viable options and advocating social and economic policies.

CRIES develops research activities, participation in forums and regional activities, publications, formation, dissemination of information and promotion of telecommunications.



PENSAMIENTO PROPIO

GREATER CARIBBEAN BILINGUAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

NUEVA EPOCA

9

JANUARY-JUNE 1999 / YEAR 4

CRIES MEMBERS

BARBADOS

Caribbean Policy Development Centre (CPDC)
Women & Development Unit (WAND)

BELIZE

Society for the Promotion of Education & Research (SPEAR)

COLOMBIA

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI)
Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Javeriana

COSTA RICA

Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE)
Departamento Ecueménico de Investigaciones (DEI)
Fundación Centroamericana por la Integración (FCI)

CUBA

Centro de Estudios sobre América (CEA)
Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI)

EL SALVADOR

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)
Instituto para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (IDEESES)
Tendencias

GUATEMALA

Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO)

HAITI

Centre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour le Developpement (CRESFED)
Group Haitien des Recherches & D'Actions Pedagogiques (GHRAP)

HONDURAS

Centro de Documentación de Honduras (CEDOH)

Centro de Investigación y Estudios Nacionales (CIEN)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)

JAMAICA

Association of Caribbean Economists (ACE)
Consortium Graduate School of Social Sciences
Institute of Social & Economic Research (ISER)

MEXICO

Foro de Apoyo Mutuo (FAM)

NICARAGUA

Centro de Estudios e Investigaciones (Nitalapán-UCA)
Centro de Investigación de la Costa Atlántica (CIDCA)

PANAMA

Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Centro de Capacitación y Desarrollo Social (CECADES)
Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena" (CELA)
Centro de Investigación y Docencia de Panamá (CIDPA)

DOMINICAN REPUBLIC

Centro de Investigaciones Económicas para el Caribe (CIECA)
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS)

PUERTO RICO

Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña (CEREP)

TRINIDAD & TOBAGO

Caribbean Network for Integrated Rural Development (CNIRD)

VENEZUELA

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESEP)

**PENSAMIENTO
PROPIO**

JANUARY-JUNE 1999 / YEAR 4

Director: Andrés Serbin

Editorial Committee: Orestes Papi, Diego Ferreyra, Enrique Brito, Clara Arenas, Alfonso Goitia, Neville Duncan, Judith Wedderburn, Hernán Yanes, Lillian Levi

Production Editor: Lillian Levi, *Translation:* Judy Butler, Claudia Ferreira, Abbie Fields,

Graphic design: Sorah Broder, *Printing:* Imprimatur, ISSN:1016-9628

CRIES BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENTE

Andrés Serbin
*Instituto Venezolano de Estudios Sociales
y Políticos (INVESP), Venezuela*

DIRECTOR EJECUTIVO

Orestes Papi
*Coordinadora Regional de Investigaciones
Económicas y Sociales (CRIES), Nicaragua*

SECRETARIO

Alfonso Goitia
Concertación Centroamericana, El Salvador

VOCALES

Enrique Brito
Foro de Apoyo Mutuo (FAM), México

Clara Arenas

*Asociación para el Avance de las Ciencias
Sociales (AVANCSO), Guatemala*

Neville Duncan

*Department of Government, Faculty of Social
Sciences, University of the West Indies, Barbados*

Judith Wedderburn

*Association of Caribbean Economists (ACE)
Jamaica*

Hernán Yanes

Centro de Estudios sobre América, Cuba

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Victor Bulmer-Thomas
*Institute of Latin American Studies,
University of London, UK*

Alvaro de la Ossa
*Fundación Centroamericana por la Integración (FCI),
Costa Rica*

Rosario Espinal
Department of Sociology, Temple University, USA

Eduardo Gamarra
*Latin American and Caribbean Centre,
Florida International University, USA*

Norman Girvan
*Consortium Graduate School of Social Sciences,
University of West Indies, Jamaica*

Xabier Gorostiaga
Presidente Fundador de CRIES

Jorge Grandi
*Centro de Formación para la Integración Regional
(CEFIR), Uruguay*

Alfredo Guerra-Borges
*Instituto de Investigaciones Económicas,
Universidad Nacional Autónoma de México*

Rafael Hernández
Revista Temas, Cuba

Francine Jácôme
*Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos
(INVESP), Venezuela*

David Lewis
Caribbean/Latin American Action (C/LAA), USA

Gilbert Merks
Latin American Institute, University of New Mexico, USA

Gert Oostindie
*Royal Institute of Linguistics and Anthropology,
The Netherlands*

Laverne E. Ragster
University of the Virgin Islands, USA

Socorro Ramírez
*Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales (IEPRI),
Universidad Nacional de Colombia*

Carlos Sojo
*Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Costa Rica*

Edelberto Torres Rivas
*Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Guatemala*

SOBRE LA PUBLICACION DE MATERIALES EN PENSAMIENTO PROPIO

CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales), a través de su Revista *Pensamiento Propio*, invita a la comunidad académica de las Américas y de otras regiones a presentar trabajos para su publicación.

Pensamiento Propio desea divulgar los aportes de la comunidad académica sobre los siguientes temas:

- Sociedad civil, democracia, gobernabilidad regional
- Impacto de la globalización y de la integración en la región
- Temas y problemas de la agenda emanada de estas prioridades

Además de estos temas, se acogerán textos que aborden otros asuntos de interés regional, continental o mundial en el área de las ciencias sociales. Todos los materiales serán sometidos al arbitraje de nuestro Consejo Asesor Internacional. La decisión última sobre su publicación compete exclusivamente a nuestro Comité Editorial.

En cuanto a la presentación y el formato, rogamos a las personas interesadas ajustarse a los siguientes requisitos:

- Original impreso en español o en inglés
- Versión en *Word* o *Wordperfect*, en disquete 3.5 HD
- Extensión máxima de 15 páginas
- Incluir un resumen del contenido
- Incluir una breve nota curricular

INFORMATION ABOUT PUBLISHING IN PENSAMIENTO PROPIO

CRIES (The Regional Coordinator of Economic and Social Research), through its journal *Pensamiento Propio*, invites the academic community from the Americas and other regions to submit their research works for publication.

Pensamiento Propio would like to spread contributions about the following themes:

- Governability, citizen security and civil society
- Follow up to regional integration processes
- Globalization and alternative development models

In addition to these themes, articles are being sought that address other issues of regional, continental or international interest in the social sciences arena. All materials will be subject to our International Advisory Board's peer review process. The final decision about publication will be made by the *Pensamiento Propio* Editorial Board.

Manuscripts should be submitted in the following format:

- Original printed copy in Spanish or English
- Copy in *Word* or *WordPerfect*, on 3.5 HD diskette
- Maximum length of 15 pages
- Include a summary of the text's content
- Include a brief author's note

REVISTA PENSAMIENTO PROPIO/CRIES

Apartado Postal 3516, Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 222-5217, 222-5137, 268-2364, Fax: (505) 268.15.65

Correo electrónico: ppropio@nicarao.org.ni

Index

EDITORIAL	1
INVESTIGATION & ANALYSIS	
Ambivalent Dependency: Antillean and Aruban Views and Expectations of the Kingdom of the Netherlands GERT OOSTINDIE & PETER VERTON	3
Transnational Civil Society and the Challenges of Globalisation ANDRÉS SERBIN	25
VIEWPOINT	
How the Sociology of the North Celebrates Itself HEINZ R. SONNTAG	53
Central America: What is in Store for Us? ALVARO DE LA OSSA	
CURRENT TRENDS	67
Mexico and the Greater Caribbean: Traditional Governmental Arenas, and the Citizen Alternative ROSALBA ICAZA	79
DOCUMENTS	
Rio de Janeiro Declaration	97
BOOK REVIEW	
Elements of Regional Integration: The Way Forward <i>Critical Issues in Caribbean Development, Number 6</i>	101
CONTRIBUTORS FOR THIS ISSUE	109

Cover:

Magnified Detail of the Kantule Book of Chants, *Guillermo Trujillo (Panama)*, 24" x 20" /
1981, Oil on canvas, from Trujillo, Caracas: 1990



Publicaciones recientes de CRIES

LIBROS

La transformación neoliberal del sector público

Trevor Evans (coordinador) 1995, 292 p

La integración centroamericana ante el reto de la globalización

(Antología) Alfredo Guerra-Borges. 1996, 187 p

Hacia un proyecto nacional de desarrollo. Políticas económicas en Panamá

Juan Jované. 1996, 70 p

Transición política y reconversión militar en Nicaragua

Roberto Cajina. 1997, 383 p

Orden social y gobernabilidad en Nicaragua

Elvira Cuadra, Andrés Pérez Baltodano, Ángel Saldomando. 1998, 209 p (edición agotada)

Los Estados des-Unidos de América Central

Alcides Hernández. 1998. 60 p

Liberalización financiera y capital bancario en América Central

Trevor Evans. 1998, 136 p

Violencia social en Centroamérica. Ensayos sobre gobernabilidad y seguridad ciudadana

Varios autores. 1999, 168 p.

La unión centroamericana: condiciones y perspectivas

Alvaro de la Ossa

CUADERNOS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO

CUADERNOS CRIES 1 (1997)

Ajuste estructural y sostenibilidad agrícola en Panamá:

el caso de las exportaciones no tradicionales

Andrés Achong Pérez

La cuenca hidrográfica del Canal de Panamá: posibilidades de un desarrollo sustentable

Carmen A. Miró, Jorge Castillo y Álvaro Uribe, con Rubiel Cajar, Roberto Carrillo y Giulia De Sanctis

La economía de la explotación maderera en la región oriental de Panamá: Darién

Gersán Joseph, Álvaro Castillo y Ginella García Cano

CUADERNOS CRIES 2 (1997)

El impacto de las políticas de ajuste estructural sobre el medio ambiente en Honduras

Ian Walker (coordinador nacional), Jenny Suazo, Alison Thomas y Herald Jean-Pois

Deforestación y frontera agrícola en Nicaragua.

Cristóbal Maldidier y Tupac Antillón, con Ner Artola, Alfredo Ruiz y Karla Castillo

CUADERNOS CRIES 3 (1999)

La unión centroamericana: bases y requisitos constitucionales

Julio Icaza Gallard

Experiencias de la unión centroamericana y sus limitaciones (1821-1993)

Marco A. Valle Martínez

CUADERNOS CRIES 4 (1999)

Compendio estadístico del Proyecto Unión Centroamericana

Gabriela Lobo H.

CUADERNOS CRIES 5 (1999)

Democracia y seguridad ciudadana: Sistema de Justicia Penal en Nicaragua

Dora María Téllez

Solicítelos a CRIES

Apartado 3516, Managua, Nicaragua

Tels: (505) 222-5217, 222-5137 y 268-2362, Fax: (505) 268-1565

correo electrónico: cries@nicarao.org.ni

EDITORIAL

Both the globalisation and integration processes are shaped by a series of interactions among political, economical and social actors characterised by their complexity and dynamism. The current debate on the multiple dimensions of these processes in the Greater Caribbean has exposed the emergence in the last few years of elements and actors of increasing influence in the definition of regional strategies.

The articles included in the current issue of *Pensamiento Propio* present reflections on issues central to these processes and their influence on the evolution and redefinition of spaces of action in the region. The article published by Andrés Serbin analyses the transnationalisation of civil society and its articulation as a political actor before the multiple challenges presented by globalisation and regionalisation in a context in which neoliberalism represents the dominant paradigm. Civil society and international relations are primary themes in the article by Rosalba Icaza on Mexico and the Greater Caribbean, and the analysis of perceptions of the Dutch Kingdom in the Antilles by Gert Oostindie and Peter Verton. The *Documents* section presents the "Declaration of Rio de Janeiro" drafted by the Civil Society Forum for the European-Latin American and Caribbean Dialogue during their meeting parallel to the summit of European, Latin American and European presidents celebrated in July of this year.

In this issue of *Pensamiento Propio* we introduce a section titled *Viewpoint* with articles by Heinz Sonntag and Alvaro de la Ossa. In them Sonntag opines on intellectual dependency in the sociology field, and De la Ossa reflects on a Central American reality distinguished by the replacement of the old oligarchy from the power centers by a rising dominant group linked to the international financial markets and the fragmentation of civil society in an international context of deep alienation and dependency. This addition to *Pensamiento Propio* will present perspectives on the problems and issues affecting the Greater Caribbean which we trust will stimulate, as all other articles published in this journal, debate and understanding of the region.

PENSAMIENTO PROPIO

REVISTA BILINGÜE DE CIENCIAS SOCIALES DEL GRAN CARIBE

Pensamiento Propio se publica dos veces al año (mayo y noviembre)
Pensamiento Propio is published two times per year (May and November)

Precios por suscripción anual

(Prices for a one-year subscription) *

Centroamérica, México y El Caribe	US\$ 30.00
Estados Unidos, Canadá, América del Sur	US\$ 31.00
Europa	US\$ 36.00
Asia y Australia	US\$ 38.00

* Estos precios incluyen gastos de envío por vía aérea / These prices include postage by air mail

Números anteriores 50% descuento. *Back issues available at 50% discount.*

Para suscripciones o información sobre canjes de *Pensamiento Propio*
con instituciones y bibliotecas, escriba a:
(To order your subscription, or for information about exchanging *Pensamiento Propio*
with institutions and libraries, write to:)

CRIES

Pensamiento Propio

Apartado 3516, Managua, Nicaragua

Teléfono: (505)222-5217, (505)222-5137, (505)268-2362,
FAX: (505)268-1565, e-mail: cries@nicarao.org.ni

Use máquina o letra de imprenta / Please type or print

Adjunto cheque o giro bancario número: / Number of enclosed check or money order:

Del banco / Bank _____

Por la cantidad de / Amount _____ Fecha / Date _____

Nombre / Name _____

Dirección / Address _____

Ciudad / City _____ Estado / State _____

Código Postal / Postal Code _____ País / Country _____

Emita su cheque a nombre de CRIES, por su suscripción anual a Pensamiento Propio

Please make checks payable to: CRIES, for a one-year subscription to Pensamiento Propio



Ambivalent Dependency¹⁰

Antillean and Aruban Views and Expectations of the Kingdom of the Netherlands

GERT OOSTINDIE & PETER VERTON

More than forty years ago the Statute of the Kingdom of the Netherlands (1954) classified Suriname and the Netherlands Antilles as autonomous partners in the Kingdom of the Netherlands. Two decades later, in 1975, Suriname gained independence. In 1986 Aruba was given a separate status within the Kingdom that proved not to be a step on the way to independence, as the Netherlands had anticipated, but was ultimately changed to the status of an autonomous country within the Kingdom (1996).¹ Neither the Netherlands Antilles nor Aruba wants independence. In the 1990s the Netherlands accepted that the six islands with their 300,000-plus inhabitants will continue to belong to the Kingdom for an indefinite period of time.² At the same time, the Netherlands initiated a policy of close involvement in the administration of the islands. This new policy, as well as the question of mutual relations between the islands, is the subject of heated debates among politicians and administrators on both sides of the ocean.

The views of the island populations on these matters are often taken for granted in these debates, even though there is little knowledge of what these views actually are. In light of this insufficient knowledge, a large-scale opinion poll was carried out on the six islands between September 1997 and January 1998. The survey covered the views and expectations of the Antilleans and Arubans with regard to the Kingdom, and in particular the Netherlands. Attention was also paid to opinions on mutual relations between the islands. It is the first time ever that an inquiry into the question of post-colonial relations has been carried out on this scale in the Caribbean.

In a separate publication we have outlined the regional context and the pattern of previous opinion polls in the Netherlands Antilles and Aruba, and discussed in great detail the results of our own, extensive poll (Oostindie & Verton 1998a, 1998b). In this short article, we only present some general observations, the most outstanding results from our research, and their implications.

REFERENDUMS ON CONSTITUTIONAL OPTIONS IN THE CARIBBEAN
An estimated 15 percent of the 35 million inhabitants of the Caribbean live in countries or islands that still have a direct constitutional link with the former colonizer: Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands, the French *Départements d'Outre-Mer* (DOMs), a handful of British Dependent Territories (BDTs), and the Netherlands Antilles and Aruba. Contrary to previous expectations, there is nothing to suggest that these remaining "not yet" independent Caribbean territories and islands will opt for constitutional independence in the near future. Generally speaking, the inhabitants of these territories enjoy a higher standard of living and better constitutional and legal guarantees than the populations of the independent countries; the democracies in these areas are relatively stable, and in most cases the residents of these non-independent islands are entitled to settle in the (former) mother country.³ The constitutional design of the post-colonial relationship is not the same for all territories, and so the question as to which construction is the most effective and the most appreciated by the population concerned is not a foregone conclusion.

Over the years various referendums on the constitutional status and development have been held in the Caribbean. It is striking that this has almost never been the case in colonies or territories that were preparing for a rapid independence. Official referendums have

been held only in Puerto Rico, Bermuda, Aruba, and the Netherlands Antilles. Aside from these, opinion polls have been regularly conducted on a smaller scale. The outcome of these referendums and opinion polls have always been and remain the same: where the population is given the option, a vast majority choose to maintain non-independent status. However, what never emerges clearly from these inquiries is precisely what motivates people to speak out the way they do. Nor do the research results offer any insight into the question as to whether the decision to maintain a non-independent status implies that citizens are in favour of continuing the chosen constitutional structure.

In the case of the DOMs and the majority of the BDTs, decisions on constitutional status were made exclusively by politicians and civil servants, on both sides of the ocean. In practice this means a strong European voice in local government, which may provoke resentment and political reaction, but not widely supported fundamental opposition to the status quo. In the case of the DOMs, despite a cautious decentralisation in the 1980s, on balance apprehension concerning the consequences of European unification seems to have strengthened the relation of the DOMs with France.

Elsewhere local populations were directly consulted by means of referendums. Independence never achieved significant support. The referendum on the Netherlands Antilles (1993-94) provided clear proof of this (Table 1).

Despite the fact that proponents of independence in Bermuda pressed for a referendum, opponents of independence there were in a clear majority (73.6 percent) while the turnout was low (59 percent). In the meantime these referendums have hardly provided any insight into the views and expectations of the people of the islands regarding the specific form of the post-colonial relationship. This question was not addressed in the Bermuda referendum, and in the case of the Netherlands Antilles only in so far as the Antilleans could also express their views on mutual relations between the islands.

Puerto Ricans were asked for their views on their island's constitutional status on four occasions (1951, 1967, 1993, 1998). In the 1967 and 1993 referendums the Puerto Ricans were actually offered a choice in which qualitative differences in the relationship with the United States were made explicit. Besides independence, they were also given the option of full statehood, and of (maintaining or broadening) the status of *Estado Libre Asociado* (ELA)-Commonwealth

Associated with the United States. The latter option entailed a considerable degree of autonomy for the island. In the course of time support for the ELA status declined (from 76.5 percent in 1951 and 60.4 percent in 1967 to 48.6 percent in 1993), while the option of full incorporation as a state into the United States gained in popularity (from 39 percent in 1967 to 46.4 percent in 1993). The problem, however, as is generally recognised by now, is that the way in which party politics coloured the three options in the 1993 referendum made the questions suggestive and insufficiently clear.

For this reason a new referendum was held in December, 1998. Again, the referendum demonstrated, more than anything else, ambivalence and polarisation. Of the traditional options included (statehood, ELA-status, independence), full statehood again attained 46%. This time however, the champions of the associated status, angry with the U.S. decision not to allow for the "irrealistic" option for an "enhanced" ELA-status, had advised their following to opt for "none of the above", an advice indeed followed by 49% of the voters. This ambivalent outcome not only demonstrates the divisions within the Puerto Rican population (except for the virtually general refusal to become fully independent at this moment), but also the decisive role by the U.S. government. After all, the U.S. Congress refusal to consider an "enhanced ELA-status" was decisive in the outcome of this referendum. Thus, the Puerto Rican status question remains a stalemate.

THE CONTINUATION OF THE TRANSATLANTIC KINGDOM

The possibility of independence for the Netherlands Antilles and the question as to whether the six (and later five) Antillean islands should stay together or not dominated the political agenda of the Kingdom in the 1970s and 1980s. In the 1990s the question of independence was shelved indefinitely in consultation with the parties concerned. The internal structure of the Netherlands Antilles, however, remained a point of discussion. Aruba became a separate country within the Kingdom. The discussion on the Netherlands Antilles centres not only on the extent to which decentralisation is functional, but increasingly on the option of a further fragmentation of the Antilles.

Recognition by the Dutch that they could not force independence upon the islands meant that a major issue was off the agenda. On the other hand, there is an increasing amount of debate, irritation, and conflict between the partners regarding authority and com-

petence within the transatlantic Kingdom, the main cause of which is problems in the public administration of the Netherlands Antilles and Aruba.

On the basis of the Statute, the Kingdom is responsible for guaranteeing human rights, legal security, and good government. However, this article is formulated too vaguely to be of use as a practical tool in policy-making. Questions are also raised regarding the institutional design of the Kingdom, which includes the government of the Kingdom not being accountable to a corresponding Kingdom parliament. There is therefore much discussion about the need to "modernise" relations within the Kingdom. Another reason to revise these relations is the increasing internationalisation and globalisation of national policy issues. On the basis of international agreements, responsibilities that previously belonged to individual countries are now being transferred to the Kingdom in an increasing number of policy areas. In this context, updating these relations also means searching for a new balance between the autonomy of the countries concerned and cooperation within the larger association of the Kingdom. Relations with the European Union will also have to be taken increasingly into account in policy-making.

Attempts to revise constitutional relations have not been successful to date. The Netherlands almost always takes the initiative in the name of the Kingdom. In practice, the growing number of cases in which the Kingdom acts on behalf of the individual countries entails an increasing influence of the Netherlands in matters which were previously the preserve of Antillean and/or Aruban policy. Antillean and Aruban administrators, civil servants, and representatives of interest groups regularly express resentment at the growing influence of the Netherlands on administrative affairs. Dutch standpoints on the one hand and Aruban/Antillean on the other are divergent to such a degree that it hampers successful dialogue on modernisation.

So far discussions of renewal within the Kingdom have overlooked citizenries on both sides of the ocean. This is a remarkable lacuna, which the present research project has attempted to fill. The opinion poll was carried out among the population of the Caribbean parts of the Kingdom, on the assumption that any changes in the structure of the Kingdom would in all likelihood have more real importance for Antilleans and Arubans than for the European Dutch. As a consequence we may also expect that more intensive discussions on these issues will take place in the Caribbean parts of the Kingdom

CUADRO 1

Results of referendum held in the Netherlands Antilles in 1993-94 (in %)

	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
Continuation of Netherlands Antilles	89.7	73.6	86.3	90.6	59.4
Separate status	8.9	17.9	9.6	2.5	33.2
Province	1.3	7.7	3.6	2.5	1.1
Independence	0.2	0.5	0.5	0.0	6.3

The results of the referendum held in November 1993 suggested little support for independence (Table 1). With the exception of St. Maarten, the option of independence appeared to have been shelved completely; with the exception of a small minority on Curaçao, the status of province seemed to have virtually no backing either. The support for maintaining a five-island Antilles was still considerable, while support for a separate status was much lower than previous inquiries and the leading political parties had suggested. One methodological problem raised by these results, however, was the fact that the voters only had one choice with which not only to state their view on a favoured option but also to indicate a priority in replies that were not mutually exclusive. Theoretically, the choice of the overwhelming majority in favour of the status quo could be combined with both province and independence. The same theoretical possibility was open for the combination of a separate status with a province. This is the reason why the questions on the relationship with the Netherlands were kept separate from those on mutual relations between the islands in the present survey.

METHODOLOGICAL REMARKS

A full methodological exposition is included in the original research report, which also provides full information on the questionnaire and its results as well as a description and analysis of the results per island (Oostindie & Verdon 1998:53-61, respectively 65-216). Suffice here to provide the reader with some general information.

The first draft of the questionnaire was devised by the authors with Henk ten Napel, a methodologist at the government Bureau of Statistics in Curaçao. Subsequent changes were discussed with an Advisory Board consisting of representatives of the University of the Netherlands Antilles (in Curaçao), the University of Aruba, and the College of St. Martin. The actual survey was carried out between September 1997 and January 1998, after a series of test polls in all islands in the course of 1997 and subsequent discussions in the Advisory Board had resulted in the improvement and refinement of the original questionnaires.

The questionnaires were available in Dutch, English and Papiamentu. In practice, most of the interviews in Aruba, Bonaire and Curaçao were conducted in Papiamentu, and in English in Saba, St. Eustatius and St. Maarten. True to daily practice in the islands, the Dutch questionnaire was little used. All interviews were conducted by local interviewers.

To acquire optimal reliability, the originally planned sample sizes were 750 for Curaçao and Aruba, 600 for St. Maarten, 400 for Bonaire, and 200 each for St. Eustatius and Saba. Eventually, the number of interviews actually conducted was slightly lower, yet according to current methodological criteria sufficient to warrant the required reliability.⁴ In Aruba, the sample was drawn from the listings for public utilities, on Bonaire, Curaçao and St. Maarten from the census office, and in Saba and Statia from the electoral lists used for the last elections. Figures for refusal to cooperate varied from 2% in Saba to 10% in Curaçao and 18% in Aruba; there are no indications for bias through refusal.⁵

Before presenting the main findings of the survey, we should point out that virtually no distinction was made in the survey between the Kingdom and the Netherlands. Of course, this is not correct in formal terms; after all, the Kingdom consists of the Netherlands, the Netherlands Antilles, and Aruba. The decision to narrow things down was made on the basis of test interviews that confirmed the supposition that Antilleans and Arubans rarely distinguish between the Kingdom and the Netherlands. The use of the term "Kingdom" in the questionnaire would therefore only have created unnecessary confusion.

Significant differences between the islands are pointed out where necessary in the following presentation of the general results. In most cases the figures have been rounded off; for more detailed

statistics and analyses we refer to the complete publication (Oost-indie & Verton 1998a).

KINGDOM AND CONSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE NETHERLANDS ANTILLES

The first question concerns the preferences regarding the future of the five islands of the Netherlands Antilles, the second the desired relationship with the Netherlands (of course, the first question was not put to the Aruban respondents). The Antillean responses to these very general questions reveal a change of opinion compared with the results of the 1993-94 referendum. However, it should be noted that the refinement of the questions in the present survey means that the results are not directly comparable with those of the referendum. Nonetheless, the answers to the first question indicate that support for the present construction of the five islands of the Antilles has lost some ground to the option in favour of a separate status. Still, a large majority on four of the five Antillean islands are still for maintaining the association of the five islands. This is even the case in Curaçao where there is a good deal of support for a separate status. The results on St. Maarten, however, indicate a dramatic deviation from this pattern: the majority of the respondents are now in favour of a separate status (Table 2). This picture was confirmed by a control question that was later administered. The option of a separate status for their island was rejected by the vast majority of Antilleans with the exception of St. Maarten; there were substantially more supporters in Curaçao than in the other islands.

TABLE 2

Preferences regarding status of island (in %)

	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
Continuación de Netherlands Antilles	83.0	66.6	82.5	78.8	40.9
Separate status	14.9	29.3	9.5	17.2	47.6
Don't know/No answer	2.1	4.0	7.9	4.0	11.5

TABLE 3*Preferences with respect to the relation with the Netherlands (in %)*

	Aruba	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
Independence	5.2	1.8	6.6	0.0	1.5	15.3
Status quo	65.2	36.6	50.4	39.7	25.8	40.9
Closer ties	26.8	59.9	40.9	58.2	72.2	34.5
Don't know/no answer	2.8	1.6	2.1	2.1	0.5	9.3

When asked about the preferred relationship with the Netherlands, the preferences varied considerably from one island to another (Table 3). The Arubans are the most satisfied with the present status of their island, which acquired a separate status in 1986 and the permanent status of a country within the Kingdom in 1996. Half of the people of Curaçao are also in favour of existing relations with the Netherlands. Opinions were more divided on St. Maarten. The majority of the population of the three smallest islands opted for closer ties with the Netherlands; this option was by far the least popular on Aruba. Independence received little backing although the figures for Curaçao and especially for St. Maarten were appreciably higher than the results of the 1993-94 referendum would lead one to expect. This option was equally unpopular in Aruba. One respondent commented on this connection: "Si nos mester di ayudo, Hulanda tey. Ku independencia ken lo yuda nos?" (If we need help, the Netherlands is there. Who will help us if we are independent?).

The small group of supporters of constitutional independence mainly adduce arguments like "we must learn to stand on our own," indicating that the present situation is not running smoothly, and resentment over Dutch involvement ("Hulanda kier tin mucha di bisa" —The Netherlands wants too much of a say). In Bonaire and St. Maarten the choice of some respondents for "independence" seems to have actually meant independence from Curaçao, not from the Netherlands.

Those in favour of maintaining the status quo are content with present relations and with Dutch financial aid, which provides security that many consider essential. "Pa nos haña tur sorto di yudansa.

Kòrsou no para riba su mes. Falta hopi." (So that we can get all kinds of help. Curaçao cannot stand on its own. There is a shortage of everything.) They also brought up arguments related to education.

Proponents of closer ties with the Netherlands emphasise factors such as security, more financial aid, the hope of progress, and better government. In Aruba a relatively large number of respondents mention more control for their own government, the achievement of progress, and the endeavour to obtain an equal partnership with the Netherlands. The smaller islands once again refer to what they experience as domination by Curaçao. "Nos no tin kompania di Antia mes; pa Ulanda para na nos favor" (The Antilles are no use to us; let the Netherlands stand up for us), was how one respondent put it. Another, on the Windward Islands, remarked: "We should deal directly with Holland, instead of doing everything through Curaçao."

Later in the questionnaire the respondents were explicitly asked about the possibility of a status as an overseas province, comparable to that of the French DOMs. Only the respondents on St. Eustatius were in favour of this option, while it enjoyed least popularity on Aruba (Table 4). Apparently the Arubans considered that as an autonomous country within the Kingdom the island has attained the ideal constitutional situation. It should be noted that a preference for "closer ties" with the Netherlands is not the same as a preference for the status of an overseas province. The respondents who had indicated that they wanted closer ties with the Netherlands, but who now indicated that they were not opting for the status of a province, were asked exactly what they understood by closer ties. Once again there were high scores for arguments such as financial and economic aid and the expectation that the Netherlands would do more for the islands. In the words of one resident of St. Eustatius: "From the time I was born, I always knew that Holland was taking care of us for we are so small. It did a good job, so I want to be and stay close."

Arubans in particular indicated that by "closer ties" they meant a situation of mutual trust that should strengthen relations. Many respondents stated that they were in favour of stronger relations and more Dutch aid, but that they still wanted the government of their country to be in their own hands. Opponents were afraid that the clock would be turned back.

Questions put later in the questionnaire indicated further nuances as well as mild contradictions, but without altering the general picture. An overwhelming majority considered that the islands

TABLE 4*Opinion on province status (in %)*

	Aruba	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
Positive	11.6	37.4	24.4	40.2	54.5	19.0
Negative	78.8	59.7	68.4	49.2	40.4	68.6
Don't know/no answer	9.6	2.9	7.2	10.6	5.1	12.4

cannot manage by themselves. This is the view of 78 percent of the respondents in Aruba, of 81 percent in Curaçao, and of even higher percentages in the other islands; only St. Maarten has a lower percentage (58 percent). The question as to what people think of the idea of direct, separate ties between the Netherlands and each of the islands met with a strong positive response by Antilleans, and also by Arubans (53 percent), who already are in this position. The majority in favour is smaller in St. Maarten and Curaçao (45 percent and 46 percent respectively), but is still appreciably larger than the group of opponents (7 percent and 17 percent respectively).

The contrast with the earlier questions on separate status, which is preferred by a minority of the Antilleans with the exception of the people of St. Maarten, is striking (Table 2). The same is true of the fairly general objections to province status that were raised earlier (Table 4). Perhaps the explicit choice of separate status and certainly province status is psychologically one step too far. Be that as it may, a significant proportion of the Antillean respondents apparently believe that a construction in which the Netherlands maintains direct relations with each of the islands could still be combined with the continuation of the association of five islands.

Responses to a later question as to whether the Netherlands interferes too much in the running of their country confirm the picture of a fairly high degree of satisfaction on the one hand, and with strong reservations on the other (Table 5). A majority of the Antilleans and Arubans answered that the Netherlands does not interfere too much in the running of their country. Substantial minorities on the Leeward Islands and St. Maarten take a very different view.

ANTILLEAN AND ARUBAN VIEWS AND EXPECTATIONS
OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

TABLE 5

Is the Netherlands too much involved in running our country? (in %)

	Aruba	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
Yes	40.9	38.0	37.6	12.7	18.7	40.4
No	48.7	52.4	50.7	73.5	75.8	47.9
Don't know/no answer	10.3	9.7	11.7	13.8	5.6	11.7

DETAILING THE PICTURE

In the poll, the respondents answered a great deal of more specific questions regarding issues such as residence and passport; protection of national territory, democracy, and constitutional rule; and economic support. Small wonder, on all of these issues, a vast majority of Antilleans and Arubans expressed a desire for continuation of the present situation of free access to the metropolis, and Dutch protection and support. Apparently, a considerable majority view the present situation in a relatively favourable light. Among the alternatives, the option of closer ties with the Netherlands scores higher than independence.

All the same, there are clear reservations about Dutch attitudes and positions. These were expressed in a series of replies regarding Dutch involvement in local education and culture (not discussed here), and in response to some more specific questions. The largest group of respondents regard Dutch involvement in the affairs of their country as having both advantages and disadvantages (Table 6). However, the percentage of those who voiced a clear-cut negative opinion was small everywhere.

The question as to whether the Netherlands show Antilleans and Arubans sufficient respect evoked a very wide range of responses. The majority on Saba and St. Eustatius answered in the affirmative, opinions are divided in Bonaire and Curaçao, and the majority of the respondents in St. Maarten and Aruba felt that the Netherlands do not show them enough respect (Table 7). A relatively large number of respondents were unable to answer this question. A similar pattern of division and doubt emerges from the answers to the question

TABLE 7*Table 7. Opinion on Dutch respect (in %)*

	Aruba	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
Sufficient	41.1	45.3	42.8	63.0	50.5	21.4
Insufficient	49.5	43.7	44.2	23.8	39.4	62.3
Don't know/no answer	9.4	11.0	13.0	13.2	10.1	16.3

TABLE 8*Opinion on degree of Dutch acceptance of difference (in %)*

	Aruba	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
Sufficient	37.5	36.9	39.7	36.0	42.9	24.4
Insufficient	49.8	47.6	43.4	48.7	45.5	63.9
Don't know/no answer	12.7	15.4	16.9	15.3	11.6	11.7

TABLE 9*Opinion on Dutch understanding of the local culture (in %)*

	Aruba	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
Sufficient	26.5	25.9	29.9	18.5	15.7	6.5
Insufficient	59.6	55.8	53.4	70.4	79.3	87.1
Don't know/no answer	13.9	18.3	16.6	11.1	5.1	6.3

whether the Netherlands sufficiently accepts that Antilleans and Arubans are "different," although the answers to this question were more often in the negative than in the affirmative in every island (Table 8). Once again St. Maarten is the most critical.

The question as to whether Dutch administrators and politicians have a sufficient general understanding of the local culture elic-

ANTILLEAN AND ARUBAN VIEWS AND EXPECTATIONS
OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

TABLE 10

Opinion on the ability of Antillean/Aruban politicians (in %)

	Aruba	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
Positive	23.2	22.5	14.2	26.5	19.7	17.4
Neutral	58.8	32.7	46.7	36.5	36.4	58.9
Negative	15.2	42.47	36.7	30.2	42.4	20.3
Don't know/no answer	2.8	2.4	2.4	6.9	1.5	3.4

TABLE 11

Confidence in Antillean/Aruban politicians (in %)

	Aruba	Bonaire	Curaçao	Saba	St. Eustatius	St. Maarten
A lot	16.0	10.2	6.1	27.0	18.2	18.5
Little/some	63.9	61.3	57.0	53.4	44.9	59.1
None	15.5	25.7	33.2	11.1	35.9	15.8
Don't know/no answer	4.5	2.9	3.6	8.5	1.0	6.5

ited similar hesitations (Table 9). The majority of the respondents replied in the negative. This feeling was strongest in St. Maarten, followed by the small English-speaking islands—which is all the more remarkable since the latter are generally very positive on relations with the Kingdom. Perhaps this is due to the awareness that Saba and St. Eustatius are very far removed from the world of the Dutch.

CONFIDENCE IN OWN GOVERNMENT,
AND THE RELATIONSHIP WITH THE NETHERLANDS

Probably reflecting their clear preference for closer ties between their country and the Netherlands, the majority of respondents did not have a very good impression of the ability of their politicians and

administrators (Table 10), and only a small minority claimed to have a lot of confidence in them (Table 11). These opinions are somewhat less negative on Aruba and St. Maarten. It is therefore hardly surprising that only a very small minority of the respondents felt that independence would help their island to get ahead; this percentage is higher on St. Maarten.

ARUBA, THE ANTILLES AND THE KINGDOM

The secession of Aruba from the Netherlands Antilles became a reality in 1986. The island was given a separate status on the condition of full independence ten years later. Eventually, however, to the great satisfaction of the Arubans, the separate status was changed to the status of an autonomous country within the Kingdom in 1996. The vast majority of Arubans believe that this secession has been beneficial for their island. In four of the five other islands, the view that the separate status has been good for Aruba is much less common (44 to 54 percent). St. Maarten, where a comparable status is rather popular at the moment, occupies an intermediate position (66 percent). A relatively large number of respondents did not answer this question.

The question as to whether the secession of Aruba has been beneficial to the remaining five islands was most often answered in the negative. The possibility of a return of Aruba to the Netherlands Antilles is generally opposed by Arubans (92 percent). Meanwhile, the vast majority of respondents are in agreement on the importance of closer cooperation between Aruba and the Netherlands Antilles in such domains as health care, education, and the fight against crime. Clear majorities are also in favour of a parliament in which delegates from the Netherlands, the Netherlands Antilles, and Aruba make joint decisions on matters of common concern.

ARGUMENTS IN ORDER OF IMPORTANCE

Each respondent was asked to select the five most important statements from a list of fifteen on the importance of the Netherlands for the Antilles or Aruba, and then to arrange them in order of importance. Relatively clear patterns emerge from this part of the questionnaire. The Dutch passport is the most important element on every island, followed by affordable facilities to study in the Nether-

lands, the right to settle in the Netherlands and the European Union, Dutch economic aid, and military protection. In Aruba and St. Eustatius the argument that the Netherlands offers protection against international crime was included, and surprisingly, also the claim in St. Eustatius that the Netherlands helps them to retain their own culture.

It is striking that three of the five most popular arguments (passport, residence rights, and affordable study facilities) are directly connected with the possibility of settling in the Netherlands. It should be noted, however, that the Dutch passport probably stands for a broader notion of security. The remaining principal arguments concern economic and military protection, which on Aruba and St. Eustatius also include protection against international crime.

Arguments associated with Dutch safeguarding of good governance, human rights, and public order were often mentioned, but these are apparently not top priorities. No priority is attached to immaterial arguments such as the link with the Dutch Royal Family and contact with the Dutch language and culture, even though the majority of the respondents had already stated that they viewed these aspects in a positive light.

ISLAND AND PERSONAL PROFILES

Elsewhere we have compared the island and personal profiles in great detail. Here, a couple of remarks may suffice. A comparison of the results from the six islands reveals that they are in agreement on a number of essentials, but that there are differences of emphasis — sometimes remarkable ones — in each island. Aruba is distinguished by greater self-confidence and a corresponding, though not exaggerated measure of independence with regard to the Netherlands.

The patterns that emerge from the survey on the five Antillean islands indicate a clear-cut distinction between St. Maarten and the other four islands. St. Maarten seems to be even more outspoken than Aruba in a number of respects. A separate status is viewed in a predominantly positive light in St. Maarten ("I want to get rid of Curaçao and deal directly with Holland"), and the islanders are also somewhat less dismissive of the option of independence. At the same time confidence in their own government is stronger and the attitude towards the Netherlands is noticeably more critical than elsewhere.

The results of the other four islands suggest, in comparison to St. Maarten and Aruba, an even stronger sense of dependency and less confidence in their own strength and their own administrators. The respondents from the different islands are largely in agreement on the significance of matters such as the passport, the right to reside in the Netherlands and the right of Dutch citizens to reside in the Dutch Caribbean, the importance of economic aid and Dutch guarantees for defence, safeguarding democracy, and constitutional rule. Within this general framework, Bonaire presents a picture of cautious conservatism, but also a certain ambivalence toward the Netherlands. The results for Curaçao, the largest island, mostly coincide with those for Bonaire. However, it is undeniable that nowhere else is the opinion of the competence of the country's own politicians and administrators and the confidence that they inspire so low.

In view of their size, the two smallest Windward Islands, Saba and St. Eustatius, are probably the most vulnerable and dependent islands. This is reflected in the great importance that they attach to their links with the Kingdom. Independence is not an option of any importance, while the option of closer and direct links with the Netherlands receives great backing.

At the conclusion of the questionnaire, every respondent was asked a number of personal questions. The resulting data provide additional information on the socioeconomic situation, family and migration patterns, and voting behaviour of the respondents. However, analysis of the relationship between these variables and views on the relations with the Netherlands and between the islands yielded few clear patterns.

It should be noted that this data is evidence of high mobility both in the past and in the present. Eighty-three percent and 76 percent of the respondents in Curaçao and Aruba respectively were born on the island; appreciable minorities are from elsewhere. Migration is even more significant in St. Maarten. Only 35 percent of the respondents in St. Maarten were born there; an equal number originally come from the other islands in the Dutch Caribbean, and 30 percent from elsewhere. Roughly 40 percent of all Antilleans and Arubans have at least one brother or sister living in the Netherlands. More than half have visited the Netherlands, and more than 40 percent of the latter lived in the Netherlands for two or more years.

Data of this kind may not provide an unambiguous picture of public opinion regarding relations between the islands and their re-

lationship with the Netherlands. They do illustrate though that these six communities are not in any literal sense isolated and inward-looking islands. However, this openness and strong migratory tradition apparently does not significantly affect views and expectations regarding the Netherlands or inter-island relations.

CONCLUSIONS

In our more extensive reports on the research project, we have discussed the implications of the trends revealed in this study at some length. Suffice here to conclude with a few general observations.

Given a choice, the peoples of the Caribbean, for largely pragmatic reasons, are not inclined to cut existing life-lines. This accounts for the lack of any serious support for the option of independence on those islands that have not yet broken with their former colonial ruler—even if this is accompanied by a gnawing and sometimes acute frustration at the awareness that they will always be less powerful than an overseas “benefactor” that considers its own interests and culture to be more important than those in the remote Caribbean.

The results of the present inquiry situate the Netherlands Antilles and Aruba in this postcolonial context, in which feelings of impotence appear to be as understandable as they are difficult to cope with. Once again it is obvious that the people of these six islands clearly opt for the link with the Netherlands; all alternatives seem less attractive. At the same time there are reservations about a mother country that, from the point of view of most Antilleans and Arubans, is unable to summon up enough respect and understanding for their island.

In the meantime the Netherlands has been forced to accept that independence cannot be forced upon the islands. In response, it has now adopted a policy of closer involvement in the administration of the islands. Concern about repercussions of Antillean and Aruban problems on Dutch society and on the image of the Kingdom played a decisive role in this respect. Geo-political considerations, particularly the readiness to play the role of a “middle power” in the region, are of secondary importance but by no means insignificant.

Now that we have a better picture of the views and expectations of the Antilleans and Arubans regarding the Kingdom and the relationship with the Netherlands, the ongoing debate on the structure of the Kingdom may proceed on a more solid basis. Large majorities

on all the islands see the choice as one between the present relatively large degree of autonomy for the Caribbean parts of the Kingdom, and an intensification of relations with the Netherlands. At first sight the results of this survey would seem to confirm the idea that the citizens of the Antilles and Aruba would welcome closer ties with the Netherlands. This applies not only to administrative and financial matters, but also to issues related to education and culture. They clearly do not have the same opinion on these issues as their own politicians and administrators. This is tied to the limited confidence they have in their own power and the viability of their island societies, and to a low level of confidence in their own politicians and administrators. The Dutch policy of intensification of the relationship and closer supervision of government in the Dutch Caribbean thus seem to enjoy a measure of support.

On the other hand, the respondents indicate that they entertain clear reservations when it comes to intensification of Dutch involvement. Support for the extreme option of transforming the Caribbean islands into overseas provinces is very weak, although it would increase if the association of the five Antillean islands were to be dissolved. Concrete repercussions of an intensified policy, however, provoked mixed reactions, as can be seen from views on the deployment of Dutch executives in various sectors of society. It is precisely where Dutch involvement has been especially intensive over the last few years, as in St. Maarten and Aruba, that objections to it are the strongest.

An essential dimension to all this is the fact that there is a strong feeling on all the islands that the Netherlands does not have enough understanding of, and respect for, local society and culture. This grievance is expressed by both Antillean and Aruban citizens and their politicians and administrators. This is a crucial point at a time when the Netherlands is trying to implement a policy aimed at greater involvement. The combination of an intensification of relations and the islanders' feeling that they are insufficiently understood and respected carries the seeds of conflict.

It is remarkable that few Antilleans or Arubans view Dutch culture as threatening. Perhaps this is partly due to a certain naiveté; until recently the Netherlands was perceived as so distant that people have not yet fully realized how deeply the Caribbean communities could be affected by more intense Dutch involvement. On the other hand, we should not underestimate the capacity of the Antilleans and

Arubans to evaluate the situation. After all, for these small island societies, the alternative to closer ties with the Netherlands is not so much some kind of abstract "independence," as subordination to countries like the United States or Venezuela. The devil or the deep blue sea? The Antilleans and Arubans are apparently deliberately opting for that small, but in their eyes large, European country which for the time being seems to be the most reliable, flexible, and generous on offer, even if it fails to understand them properly.

** A longer version of this article was first published as "Ki sorto di Reino?/What Kind of Kingdom? Antillean and Aruban Views and Expectations of the Kingdom of the Netherlands", New West Indian Guide vol. 72, no. 1&2 (1998):43-75 (Oostindie & Verton 1998a). Both articles are based on the research report Ki sorto di Reino / What kind of Kingdom? (Oostindie & Verton 1998b). The author thank Henk ten Napel and René Römer for their contributions to the original research project, the editorial board of the New West Indian Guide for comments on the project and for permission to use parts of the NWIG article in the version written for Pensamiento Propio, and particularly the anonymous reviewers of Pensamiento Propio for useful comments and suggestions.*

NOTES

1. The Kingdom of the Netherlands consists of three nominally equal partners: the Netherlands (with a population of more than 15 million), the Netherlands Antilles (225,000), and Aruba (85,000). By virtue of the Statute, each of the countries governs itself autonomously. An exception is made for foreign relations, defense, and guaranteeing good government; responsibility for these affairs is borne by the Kingdom, i.e. the government of the Kingdom, consisting of the Dutch cabinet plus two plenipotentiary ministers from the two other countries. In practice the Netherlands dominates the government of the Kingdom. There is no overarching parliament to which the government of the Kingdom is accountable.

Dutch economic aid to the six islands amounts to approximately 150 million US dollars per annum, the equivalent of almost US\$ 500 per capita. Antilleans and Arubans are free to settle in the Netherlands; the reverse is not true. The vernacular language on the Leeward Islands is Papiamentu, and on the Windward Islands English. The language spoken in schools on the Leeward Islands is for the most part Dutch, although Papiamentu is gaining in importance. The language spoken predominantly in schools on the Windward Islands is English. For a general introduction, see Oostindie 1996.

2. This number is based on the following population figures: Aruba 85,000; Bonaire 13,000; Curaçao 160,000; Saba 1,000; St. Eustatius 1,500; the Dutch part of Franco-Dutch St. Maarten approximately 50,000. The Antillean and Aruban population in the Netherlands is estimated at 90,000 of which the majority are migrants from Curaçao.
3. This does not apply to the residents of the BDTs. A review of the status of the BDTs is currently in preparation.
4. Namely, 668 in Curaçao, 638 in Aruba, 443 in St. Maarten, 382 in Bonaire, 198 in St. Eustatius and 189 in Saba.
5. It was not possible to isolate the actual refusal figure for St. Maarten from the overall figure of non-response.

REFERENCES

- Oostindie, Gert (1996) "Ethnicity, Nationalism and the Exodus: The Dutch Caribbean Predicament". In Gert Oostindie (ed.), *Ethnicity in the Caribbean*. London: Macmillan, p. 206-31.
- Oostindie, Gert & Peter Verton (in collaboration with Henk ten Napel & René Römer), 1998a. *Ki sortu di Reino?/What Kind of Kingdom? Visies en verwachtingen van Antillianen en Arubanen omtrent het Koninkrijk*. The Hague: SDU.
- Oostindie, Gert & Peter Verton, 1998b. 'Ki sortu di Reino?/What Kind of Kingdom? Antillean and Aruban Views and Expectations of the Kingdom of the Netherlands', *New West Indian Guide* vol. 72, no. 1&2 (1998):43-75.



Transnational civil society and the challenges of globalisation

ANDRÉS SERBIN

In a very summary and tentative manner, this article pulls together the current state of the debate around the issues of globalisation and regionalisation and the emergence in this context of a transnational civil society (TCS). The first thing that should be pointed out in this regard is the complexity and diversity of the debate on globalisation itself in that diverse positions and approaches are developing with respect to its conceptual and empirical scope as a process underway, notwithstanding the imposition of a dominant paradigm through the neoliberal discourse.

The second thing that should be pointed out in the framework of this complexity is the diversity of interpretations about its articulation with the regionalisation processes, which are very schematically noted in the following pages, and about the emergence and

development of a transnational civil society with distinctive features, which makes for a particular dynamic of the transnational articulation of the nation-State/market/civil society trilogy in the framework of attempts to establish democratic governance at a global level. In the third place is the diversity of interpretations about this phenomenon, in accordance with the diverse approaches taken up around globalisation and a series of distinctive positions about the composition of this transnational civil society and its influence on the global dynamic. In the fourth place, the diverse articulations of conceptions regarding the relationship between globalisation, regionalism and transnational civil society postulate as a politically relevant debate four our region the discussion around the emergence of regional structures of transnational civil societies, particularly with respect to the development and acceleration of the processes of intersocietal regional and hemispheric integration and the need to introduce modalities of democratic governance and civic control in this context.

The following chart of the state of the debate has more than the single object of establishing its conceptual foundations. It also aims to set up a frame of reference and open up some questions, on solid theoretical bases, about the current evolution of the perspectives of regional civil society in our hemisphere.

GLOBALISATION AND ITS CONCEPTUAL SCOPE

The concept of *globalisation*, in its strict sense, was born and enriched in the seventies with the analysis of the creation of transnational corporations on a world scale, to later give way to the development of an approach based on the globalisation of markets, fundamentally in the sphere of studies of international economy (Boyer, 1997).

The narrowest focus of the concept, however, enters into contradiction with a series of approximations that historically place the development of globalisation in the context of the expansion of European capitalism, which occasionally postulate different phases of its evolution in the framework of a historical long-term trend.¹

Beyond the existing debate, however, the concept now permeates and is present in the majority of the discourses of politicians, journalists and social scientists, even if as a vague and general reference.

In accord with its more narrow acceptance, and moving beyond the ambiguities and confusions to which the term gives rise, we can

initially specify three presuppositions generally present in these discourses: a) globalisation is understood as a *predominantly economic* process, articulated around a productive restructuring on a world scale (with the move from Fordist conceptions to post-Fordist or Toyotist ones based on a more flexible production), the techno-productive revolution (especially in the field of information processing and communications) and financial globalisation;² b) globalisation entails a vision of the international system as *interdependent and interconnected*, a process that is reinforced with the development of communications and liberalisation and trade opening, and which affects the traditional actors of the international system—the nation-States, in accordance with the global flow of goods, capital and ideas; c) globalisation, in this perspective, postulates a *unidimensional vision*, centred in economic aspects, the preeminence of the market agents over national economies and over the role of the nation-State seen as an increasingly weakened actor, the accelerated permeability and articulation between domestic and international dynamics,³ and the crucial role of the market as self-regulator and lead actor of the system.

Needless to say that, from this perspective, the reigning conception of globalisation refers to and is associated with a dominant *paradigm* and *ideological discourse* at a world level in accordance with a favoured scheme of economic and political interpretation: the *neoliberalism* that legitimates its emergence and development (Bernal, 1995). This ideological discourse permeates much of the contemporaneous debate, validating the global features of the current expansion of capitalism; of the global projection of a model of representative democracy based on political liberalism and of the spread of values associates with Western consumer habits in the context of the eclosion of a massifying of communication facilitated and shored up by a series of technological innovations that include satellite communication and the development of information processing.

In this framework, the analysis of the globalisation phenomenon, beyond conventional wisdom and the currently dominant paradigm, has also given way to an extensive debate, as well as to the emergence of diverse analytical approaches to the process, both in the sense of acknowledging and affirming it and in the sense of possibly denying its existence, alleging the apparition of a “myth” of globalisation that does not correspond to the reality of the current international economy and calling into question the “fiction” of the

diluting of the nation-State's role as lead actor of the international system (Hirst and Thompson, 1996; Hirst, 1997).⁴

For another series of analysts, globalisation is increasingly assumed as a *multidimensional process* characterised by a *accelerated change* and *growing complexity* of the interactions and nexuses of diverse sorts that distinguish it in a world setting of new features.⁵ This phenomenon is articulated to a process of *time-space compression* (Giddens, 1998) previously unknown in human history in its current scope whose peculiarity is to reach the most remote places through telecommunication and innovations in transport, and to generate growing global awareness promoted by diverse parallel, simultaneous processes that combine with each other on both the specifically economic plane and on the political, cultural, social and ecological one. This to the point that some authors see in reality the deployment of *various simultaneous globalisation process on diverse planes and dimensions*, with different impacts in distinct spheres, and in particular in the perceptions about the process by diverse societies and social sectors. As a consequence, global awareness is growing on different planes and global proposals are being made regarding themes that exceed the strictly economic, such as the universalisation of human rights or the importance of the environment.

At the same time, globalisation from this perspective is not seen as a uniform, homogenising process in economic, cultural, ideological, political and social terms, but as a process that generates a frequently fragmented world space that engenders specific *contradictions, inequalities and conflicts*, and leads to the emergence of a world society,⁶ frequently characterised more by its fragmentation, exclusions and divisions on various planes and dimensions than by a fictitious unity.

In this perspective, the structural factors of the globalisation process respond to four fundamental elements—the transformations of the nation-State; economic globalisation around the development of a world market for goods, services and capital investment; the eclosion of global telecommunications and the restructuring of the international political system after the end of the Cold War—but, in terms of the processes of creating a global society, tensions and contradictions are incorporated at both a structural and a dynamic level by a set of actors who question the globalisation process *per se* and, possibly, their own participation in it.

Based on this consideration of the role of agents, it is on this

plane that the debate emerges about the scope of a “globalisation from above” promoted by the transnational corporations, the multilateral institutions, the international banking system, and the countries with greater economic dynamism, and that of a “globalisation from below” which aspires to regulate and hobble—through activities and initiatives of various social movements and organisations of an associative nature—the imperatives imposed by the actors of the market and the most powerful nation-States (Falk 1995a and 1995b). As a consequence, the debate is opened about who makes the decisions that guide the globalisation process and in representation of whom, introducing the need to also promote forms of global democratic governance to regulate the globalisation process in its current aspects (Held 1995; 1997) and surmount both the existing “democratic deficits” and “social deficits” and the exclusions that “globalisation from above” is imposing to the benefit of some world elite.

In this regard, the perception that globalisation is benefiting only a few at the cost of many of others is reinforced when the globalisation processes occurring on the economic plane, or in the transmission of ideas and cultural values and products do not correspond to an effective globalisation of international institutionalality (Bissio 1997), or to an effective participation or control by the public over the decisions being made, often in a closed and hardly transparent manner, in multilateral institutions or inter-governmental forums.

The growing perception of globalisation as a process that is neither homogeneous nor unified and that engenders its own contradictions and conflicts in the context of market inequalities and exclusions varies, however, with the distinct approaches currently in vogue, beyond the predominance of the neoliberal discourse and the analytical priorities that are established, often on behalf of the privileged perspectives of different actors.

In this context it should be noted that, despite the emergence of diverse positions and approaches around the issue, many authors agree in pointing out the general lack of an integrated theoretical approach for analysing globalisation, especially with respect to political and social sciences theory in the framework of the crisis of paradigms that prevails in this sphere and the complexity of the global process. This lack does not escape the multiplication of priorities and proposals by a myriad of transnational actors currently involved in the international dynamic, nor does it escape the hegemony of the neoliberal discourse in the practice of these actors.

GLOBALISATION: CRITICS AND APOLOGISTS.

Taking into account this significant lack, McGrew (1998), based on a contemporaneous literature review on the theme, postulated the existence of three predominant trends in the current analysis of globalisation. Despite their heterogeneity, they propose similar lines of analysis, though none contributes a full-blown paradigm for interpreting globalisation.

What are called *globalists*—paradoxically in both their *neoliberal* and their *marxist* and *postmarxists* versions—view globalisation as the culminating phase of the development of capitalism, around the configuration of a global market imposed on the nation-States. The process is fundamentally economic, has a global reach, and, according to the ideological affiliation of the respective authors, it can be perceived through an optimistic prism (the “end of history” and the configuration of a world governed by the logic of the market with its political correlates associated with liberalism, as in the case of Fukuyama, Omaha or Guéhenno) or a pessimistic one (the logic of the accumulation of capital is imposed at a world level; the contradictions and inequalities in the international system are increased, as in the cases of the analyses of Robert Cox and Stephen Gill) or in a perspective that emphasises the approach of greater historic profundity (as in the case of the evolution of the “world system” of Wallerstein).

The , on the other hand, believe that there is no globalisation process underway, but rather an intensification of the internationalisation of the world economy, in which the national economies (particularly the most powerful ones) are still hegemonising the international economic dynamic. In this perspective, globalisation is perceived as a myth, since the world economy is still characterised by a division of power and of labour (Ferrer, 1997) in a transition that is going from internationalisation to transnationalisation, but without this producing an effective globalisation of the international economy. As illustration, the sceptics invoke the recent global financial crisis, whose repercussions basically impacted on the emerging economies, and in the final analysis, are favourable to the more developed economies (ibid).⁷

Finally, what are called *transformationalists* hold a more multi-dimensional and complex vision of the radical change that globalisation is bringing, conceived of as a new process in the history of humanity that is rapid, plagued by uncertainties and turbulence, not

easily susceptible to prognostics, in the framework of new articulations among economic actors, nation-States and social actors at a global level (Rosenau 1991; 1997b). In this perspective, global civil society, with different nuances according to each author, is an important emerging actor in the framework of the heterogeneity and complexity of a multi-centric international system.

Sceptics and globalists agree on emphasising the economic dimension of the processes analysed over any other, the first with a greater emphasis on the prior development of an economic internationalisation, the second giving greater priority to the novel characteristics of the process; the sceptics generally with an emphasis on the national economies in the framework of asymmetric and unequal relations; the globalists in accord with their emphasis on the market as a regulatory mechanism for the economic system (*neoliberals*) or production in the framework of an unequal international division of labour (*Marxists and neo Marxists*).⁸

In turn, by analysing the contradictions and conflicts that globalisation engenders, these approaches underscore the importance of distinct spheres. For the sceptics, the consolidation of an international system hegemonised by the industrialised countries makes way for the reactive development of a set of ethnic, religious and national *fundamentalism* and *particularisms* that call into question the intended imposition of Western civilization in the global process (Huntington, 1996) in the framework of the growing international inequalities, exclusions and asymmetries, and that contribute more to a growing fragmentation of the world system into blocs than to its homogenisation and the creation of a global society. For the globalists, the globalisation process is either engendering the emergence of a third sector—global civil society, in the framework of a new articulation of the State-market-civil society trilogy in a world sphere—or is giving way to the deployment of counterhegemonic social forces of a global scope. Finally, for some transformationalists, the globalisation from above promoted by the nation-States and market actors is making way for the development of a “globalisation from below” by a global civil society articulated around the NGOs and the transnational social movements (Falk 1995a and b) that the configuration of new forms of global governance requires.

It goes without saying that this brief and schematic summary of the three main approaches in vogue do not provide a full account of the many elements and nuances each one contains, nor of the

superimposition and articulation among the three; its function is only to make a heuristic presentation for purposes of the later discussion in this article.

GLOBALISATION, REGIONALISM AND CIVIL SOCIETY

On the other hand, each one of these visions articulates particular approaches to the relationship between *globalisation* and *regionalism*.

According to the sceptics, we find ourselves less in the presence of a globalisation than in the presence of a significant regionalisation process, in that the world economy is evolving in the direction of diverse trade and financial blocs in the framework of inequalities and asymmetries and of growing tensions among the different emerging blocs. This situation reinforces the role of the national economies and of the development of regionalisation processes with the threat of the emergence of new protectionist modalities in the framework of the creation of regional blocs. This perception is encouraged by the fact that the bulk of commercial exchange, of capital flows and of technological transfers is developed in the framework of the triad made up of three focal points of economic dynamism: North America, the European Union, and Japan and Southeast Asia.

According to the globalists, on the other hand, regionalisation is complementary to globalisation since the former responds to the logic of the latter, expanding the imposition of the market, according to the neoliberals, or, in the post-Marxist perspective, expanding the relations of production and the international division of labour in accordance with the productive restructuring, with winners and losers not only in the social aspects, but also geographically.

Moving on to the transformationists, in contrast, regionalisation is articulated in a new way, that is both complementary and antagonistic to globalisation, in the framework of the growing complexity of the international system. This system leans not only toward homogenisation but also to a growing intricacy that includes both agglutinating and fragmenting tendencies.⁹

In sum, faced with the fiction of globalisation denounced by the sceptics, both the globalists and the transformationists assume: a) the *irreversible character* of the globalisation process;¹⁰ b) the *multiplication of international actors* and the *permeability between the domestic and global dynamics*; and c) based on this last point, the emergence of a *global civil society*¹¹ as a relevant actor in the dynamic

of the emerging international system and, particularly, of the consolidation of global democratic governance.

It should be said that for the sceptics, in contrast, global civil society in general has a minimal role in this process, because the most important actors are still the nation-States (the governments) and in the same way in which no transnational processes are configured that they do not control, there is no such thing as the development of a transnational civil society that overflows the borders of nation states and could consequently have any relevant influence on the international system.

Beyond these three schematically outlined approaches to globalisation which are internally characterised by different perspectives, however, the increasing permeability between domestic and international dynamics leads us to accept, at least empirically and on the sociological plane, the emergence and evolution of a transnational social framework of global themes and demands; the deployment of new strategies of political advocacy that transcend the nation-States; and the appearance of new forms of relationships and of articulation in the framework of the nation-State/market/civil society triad, set within the growing complexity and multi-centrism implied by the presence of new actors in the international system. The most widely known illustration of the emergence of this social framework, conceptually condensed into the term global civil society, is represented by the peace movements, women's movements and environmental movements and by non-governmental organisations such as Greenpeace, Amnesty International or Oxfam.¹²

The debate about the arising of a global civil society based on the development of this framework (conceptually following the approach regarding national civil society) configures an important element for the discussion about the development of the modalities and forms of democracy and global governance needed for the creation of a global political community, which is a presupposition in many of the considerations by globalists and transformationists.

Furthermore, the fact that the financial flows are increasingly global (in the framework of the triad mentioned in North America, Europe and Southeast Asia) is no obstacle to trade continuing to be predominantly regional, as the sceptics state (Giddens 1998), generating regional spaces not only in the economic sphere but also in the intersocietal one. In this framework, the activities of global civil society are frequently articulated, or in like manner, imply the devel-

opment of regional social fabrics with specific agendas and strategies regarding the creation of free trade zones, but which are at the same time directly or indirectly marked by the global processes, giving rise to the emergence and development of complex frameworks or structures of regional civil societies that transcend the limits of the sovereignty and territoriality of nation-States. As an illustration of this phenomenon, it is sufficient to cite some of the regional and sub-regional initiatives that are spreading in Latin America and the Caribbean to deal with the democratic and social deficiencies present in the regionalisation processes (Serbin 1997; Grandi and Bizzozero 1998).

TRANSNATIONAL CIVIL SOCIETY: CONCEPTUALISATIONS AND APPROACHES

In the framework of the current debate on globalisation, the emergence of a global civil society through the development of transnational networks, non-governmental organisations and social movements is a relevant phenomenon for understanding the global dynamic from a multidimensional perspective, in that it transcends the limits and the traditional dynamic of domestic civil societies. Beyond the downsizing of the nation-state and the emergence of a gamut of transnational actors basically linked to the global market, the effective possibility of regulating and fencing in its action like that of a government or an intergovernmental institution requires the development and consolidation of networks of actors of transnational civil society in the framework of a transnationalisation process that gives the influence of extranational factors substantial impact.¹³

The possibility of establishing corrections and rectifications to the globalisation process "from above," where a small group of actors—at times with limited or nil representation or legitimacy—make a series of decisions that affect the whole process necessarily implies the development of *global governance*. This in turn implies the development of a transnational civil society that promotes and advances the interests of the ordinary citizen, in the framework of a public participation process that some associate with the emergence of a *cosmopolitan democracy* (Archibugi and Held 1995; Held 1997).

In this context, it is obvious that the proposal of a global or transnational civil society takes up at a transnational level many of the presuppositions of the liberal political approaches around both democracy and the role of civil society. Particularly in this latter case,

it tends to uncritically transfer the liberal discourse about civil society and its function in the framework of the democratic governance of a country to a discourse about global civil society, frequently permeated with anti-state positions (Pasha and Blaney 1998).

In this respect, as we have seen, the dominant approaches also contain differences, and thus do not lead to a defined conception of what global civil society is. Although globalists and transformationists recognise the importance of the phenomenon, their positions vary with respect to definition and characterisation, while sceptics tend to deny that a transnational civil society is arising; they put more emphasis on the role of governments and presume the existence of a neoliberal conspiracy in acknowledging and promoting them.¹⁴

Colás (1997), for example, on the side more linked to the sceptics' approaches, postulates that, prior to the current spread of the globalisation process, an *international civil society* had been forming over history, originally made up of the old style social movements such as the workers' movement or the peasant movements, whose activities transcend national borders,¹⁵ but originally arose in national spheres. In this same perspective, Peterson points to the existence of an international civil society made up of a variety of societal actors operating across the borders of various countries in the framework of a set of interlinked countries, in which the States and these actors are strongly interwoven and the autonomy of the societal actors depends largely on the practice of the states (Peterson 1992).

This approach, however, has not been separated from a debate taking place currently regarding the progressive transformation of these movements, originally based on mass mobilisation and aspiring to transform the existing power structure, into "new movements" that put more emphasis on fighting for their identity, promoting new life styles (Bodemer 1998), or "NGO-ising" in accordance with a change in their tactics or their strategic objectives (Moncayo 1997) under the impact of globalisation.

Furthermore, the analyses most linked to the claim that an irreversible and previously unseen globalisation is underway tend to postulate the emergence of a *global civil society*, with new identifying features that emphasise the role of the networks that are arising around the "new social movements" (international environmentalists, women, human rights organisations, peace and justice) (Shaw 1994; Lipshutz 1996). These "new movements" are not based on social classes but on other focal points and interests (Shaw 1996:14) geared

to more specific and focused global themes. They are in turn less concerned about traditional politics but not about power, less linked to mass mobilisations and more closely associated with lobbying and having an impact on public opinion through specific advocacy campaigns.¹⁶ As such, global civil society consequently constitutes a non-State level of action that has increased its visibility and influence on the international system, making way for the upsurge of global awareness and that has reconfigured the global political space into one that is increasingly democratic (Pasha and Blaney 1998:425).

With all the nuances of the case, the conceptions of a global civil society are frequently associated with three elements in this perspective: a) a *critical vision of the role of the State* in relation to which civil society is conceived of with different degrees of autonomy and, on occasion, of antagonism, even in the global arena; b) an *idealised and optimistic vision of civil society* that frequently ignores its internal contradictions, fragmentation and tensions, particularly in the framework of a globalisation process characterised by inequality and social and geographic exclusion, and of its difficulties articulating and promoting massive societal projects; and c) the perception of the *hegemonic validity of the modalities of liberal democracy* in the framework of the irreversibility of the globalisation process and a non-critical vision of the structure of world power (Pasha and Blaney 1998).

A recent contribution along this line is the concept that has arisen around the emergence *transnational advocacy networks*, not necessarily linked to or identified with social movements, and rather seen as communicative structures for interchange based on social networks seeking to structure political opportunities, provide them *framing* that grow out of information policies and campaigns modelled around them in which the mass media have a relevant role (Keck and Sikkink 1998).¹⁷ In this perspective, the vision of the role of governmental and inter-governmental institutions (and of the State in general) has ever more nuances in that it postulates, based on an empirical analysis, the possibility of developing a variety of links and alliances among the various State agencies and transnational actors.

Finally, a conception more associated with the transformationist visions postulates the emergence of a *transnational civil society* that includes both old and new social movements and non-governmental organisations, taking into account different arenas and levels of interaction, different agendas and objectives, and distinct modalities of mobilisation and political action in the local, national, sub-

regional and regional spheres, and not only in the global one. In this framework *new political spaces* are delimited, made up of networks based on economic, social and cultural relations that are occupied by the conscious association of actors in physically separated locations, who link up together as networks with particular political and social aims (Lipshutz 1996: 104)¹⁸ in the framework of world policy and not only the economic globalisation process.

This conception pulls together the globalising dynamic with the regional, national and local one and especially with the regionalisation spheres, eventually postulating as one of the existing levels in the new world social framework of *regional civil society*¹⁹ (Serbin 1997; Jácome & Serbin 1998). In the case of Latin America, this approach refers to all kinds of association, organisation or voluntary network both at a sub-regional, regional or hemispheric level, and with global projection and impact, in interlocution with, but with autonomy from, different actors—governments and their institutions, regional parliaments, inter-governmental bodies, transnational corporations and multilateral institutions. In the Latin American case, its origin basically goes back to the community and grassroots organisations and movements of the seventies and eighties, and to the human rights networks in the framework of the democratisation processes and currently in transition (Wils 1995; Béjar and Oakley 1996)²⁰.

The basic problem with these definitions is that they are based on a predominantly descriptive vision of national civil society which nonetheless transcends the domestic spheres in its current activities. In addition, the idea of the emergence of a transnational civil society is often associated with an optimistic vision of the role of agents in social transformation and the disqualification of the State's role, which is seen as antagonistic to civil society. In this regard it is necessary to establish some conciseness with respect to what transnational civil society is in the framework of globalisation, based on the evident fact that it is not analytically possible to compare the processes of domestic societies with those of transnational civil society.

TRANSNATIONAL CIVIL SOCIETY IN THE GLOBALISATION FRAMEWORK: SOME CONCEPTUAL CLARIFICATIONS

These clarifications must be placed in two specific conceptual contexts: one is that of the global socio-political dynamic which the traditional nation-State/market/civil society triad²¹ assumes by transcend-

ing the nation-State borders, and the second is that of the particularities of the complex dynamic of interconnection and interdependence that globalisation imposes. Let's look at these in greater detail.

In the first place, particularly in the framework of the global dynamic, transnational civil society takes on a series of unprecedented characteristics with respect to the traditional conception of domestic civil society as any form of social organisation that is not associated to either the State nor the lucrative businesses. In this regard, although it displays greater potential for helping regulate the market dynamic, together with the State, it also contributes to fencing in the State's action in the framework of an extremely complex scene of interrelated levels, spheres of interaction and actors. Transnational civil society is not encompassed within the State, unlike domestic civil society; it does not need to have the nation-State as its only objective and interlocutor; it does not respond to a specific territoriality or sovereignty and thus *is not State-centric* (Lipshutz). Nonetheless, despite the dominant anti-State discourse and the limitations of many States, particularly in the Third World, these States and their agencies continue to be fundamental interlocutors for transnational civil society's actors.

But this transnational civil society is also not encompassed within the market, as a third private sector that is non-profit and merely philanthropic, as certain neoliberal approaches postulate. In this regard, transnational civil society can be conceived of as a framework of networks of activities organised by groups or individuals, whether they provide certain services or try to influence and improve society as a whole, without being part of the government or of the businesses (Jorgensen 1996:36)²², but being a necessary interlocutor with both.

In this perspective, transnational civil society does not have the State or States as its only reference point, but has multiple reference points in the *multicentric framework* of the global processes, including the economic actors of the regional and global markets. In reality, it is characterised by multiple reference points with which it interacts. On the one hand, it interacts with different interlocutors at the level of the government (government agencies, various inter-governmental institutions, political decision-makers, functionaries, technocrats) which it tries to influence to increase its participation and promote public policies in accord with its interests, and at the level of the market (transnational corporations, multilateral finan-

cial institutions, the international private banks) in the search to constrain and regulate it in the framework of the traditional trilogy. On the other hand, it articulates the local, national, sub-regional, regional and global levels. But the interlocutors of civil society's regional and global expressions are predominantly inter-governmental when they are not supranational, as in the case of the institutions of the European Union.

Unlike the dynamic of domestic civil society, in turn, transnational civil society implies different spheres and spaces of interaction, particular modalities of advocacy and of "doing politics" as well as differentiated forms of linking up with political parties, unions, and national and regional legislatures in the framework of representative democracy. In this perspective, although transnational civil society denotes a greater degree of autonomy with respect to the domestic political spaces and more specifically with respect to the State, it continues to have the governments and inter-governmental institutions as privileged interlocutors, as well as different expressions of national political societies—regional parliaments and party internationals.

In the second place, transnational civil society in this perspective implies an *eminently socio-political dimension* of action by citizens in accord with the interaction, dialogue and confrontation with other relevant political actors of the international system around transnational themes and a global social agenda in the framework of promoting global forms of democratic governance. In this regard it generates the development of interconnected political spaces that transcend national and territorial borders and that are thus not contained—as is domestic civil society—by the national State or by a defined territoriality. As interconnected political spaces at a global and regional level, their development leans toward a *transnational democratic governance* in the framework of the globalisation process on behalf of promoting form of political *accountability* on the part of the transnational and national actors involved in the dynamic of the international system. Nonetheless, any socio-political dimension implies at the same time distinct positions and strategies with respect to the existing power structure, and significant variations in its possibilities of political advocacy in accord with the social or geographical position that it occupies.

In the third place, transnational civil society is not homogeneous either, but is made up of a very complex framework of networks and

actors that are not necessarily convergent and that frequently lead to their internal fragmentation and to the existence of tensions and contradictions within. Transnational civil society is not made up only of social movements ("old" ones like the worker or peasant movements; "new" ones like the environmentalists or women's organisations), nor can it be reduced to the NGOs,²³ among many reasons because even the union movement has *aggiornado* and become "new" with an emphasis on identity, the struggle for new life styles and a more diffuse search for power, and is starting to function like an NGO (Munck 1998). In addition, the agendas of these social actors in the framework of the developed countries frequently do not necessarily coincide with those of the developing countries.

Transnational civil society therefore includes diverse networks, frequently with very imprecise definitions: "new" and "old" social movements, NGOs, epistemic communities, communicators and media, etcetera. At the same time it is contradictory, heterogeneous and loaded with internal tensions, since it contains diverse actors and sectors (from the human rights or development NGOs to transnationally organised criminality), which address objectives that elude national negotiation. In face it is not possible to consider the process by which transnational civil society arises outside of the context of inequalities, exclusions and contradictions generated by the globalisation process itself, in both social and geographic terms, beyond the aspiration of the moments and organisations that make it up to promote the themes of a global agenda and consolidate the mechanisms of democratic governance on a world scale.

In this regard, their base is frequently and in no way exclusively the NGOs which tend to emphasise lobbying and high-level advocacy work rather than the mobilisation of masses or sectors as in the case of the traditional social movements. They do not seek access to power, but do seek to influence it; they take up specific issues and are closer to the new social movements in their identity demands.²⁴ For this process they require interlocution and multiple strategic alliances that could include both actors from the State and from political society and actors from the market in the development of the networks of transnational advocacy already cited.

In turn, an important component to take into account in the creation of transnational civil society is that of the media, in that they channel and express many of the demands of the different sectors of transnational civil society and help influence the political decision-

makers with respect to the issues of a regional or global social agenda (Shaw 1996).

In the fourth place, transnational civil society is more transnational than global because it includes sub-regional and regional networks and frameworks that are not necessarily associated with global proposals, and that articulate the global with the transnational, whether it be regional or global, in a particular way. In this regard, transnational civil society frequently reflects the characteristics of the domestic and local civil societies involved in accord with their relation to the State (political cultures), in that the global processes are processed through regional, national and local cultures in a way that puts into doubt any homogenising vision. In the framework of this heterogeneity, they imply a "globalisation from below" that seeks to regulate and regiment the performance of other actors from the international system, from which stems their predominant linkage to what Falk (1995a and b) calls the laws of humanity and their global imposition.

In the fifth place, this differential articulation at distinct levels and in different spheres also permits the emergence of a *regional civil society* as part of the dynamic of transnational civil society and the international system, but guided by regional objectives and themes, especially with respect to what concerns the sub-regional and regional integration processes, frequently propelled by the creation of free trade areas, but geared to the search for participation and political influence on the social agendas. Regional social agendas and issues are proposed in this framework, not necessarily articulated to the global agendas that are promoted in contexts not always antagonistic to the governments, seeking to influence the national agendas responsible for foreign policy and the inter-governmental institutions, particularly with reference to regional issues in the context of the regionalisation processes associated with globalisation. In addition, the greater weight of the respective national political cultures around the definition of the respective strategies and forms of "doing politics" should be pointed out in this framework.

SOME TENTATIVE CONCLUSIONS

As a whole these intersocietal initiatives—both those promoted from the various regional and sub-regional frameworks of civil society and those promoted from the inter-governmental institutions—are ex-

amples of the emergence of a series of networks of regional civil society, with distinctive characteristics, that push for greater participation in the inter-governmental processes over and above or in articulation with the national processes. Nonetheless, it should be noted that this is an incipient movement that is beginning to be articulated around some issues of the specific agendas with broader movements of transnational civil society and that does not necessarily follow their dynamic and orientation in the global arena.

In essence, the present conceptual layout basically postulates the need for a socio-political approach to the analysis of the arising and the development of transnational society in the framework of the current globalisation process, in that: a) globalisation itself is not conceived of exclusively as an economic process, but that it leans toward the creation of a global political space, so complex and heterogeneous that it makes way for an effective articulation of various political spaces at a world level (local, national, sub-regional and regional, hemispheric and global); b) that, in the framework of global democratisation (and beyond the critiques in vogue of its uniformising vision rooted in Western values) it requires the development of forms of democratic governance at a transnational level that increase the participation of civil society in decision-making, and c) that, from this perspective, the crucial impact of transnational civil society on the regulation and fencing in of the performance of both the nation-States and the market agents must be taken into account.

To conclude, it goes without stating that this brief mapping out leans more toward conceptually placing the current state of the debate than to point out some kinds of definitive conclusions. The speeding up of the global and regional changes, however, imposes the need for a progressive systematisation of this debate, both with an eye to seeking some conceptual precision in the framework of the uncertainty generated by the crisis of paradigms, which characterises the current social sciences, as well as the need to establish some points of orientation in the political work of numerous organisations that postulate demands and claims of a regional character, associated with particular strategies and modalities for influencing decision-making at both the sphere of the public policies and of the foreign policy of the Latin American and Caribbean States in the new world dynamic.

NOTAS

1. Cf. for example, the proposition of Tony Spybey, among others, in basically associating globalisation with the expansion of the "mass participation society" and its articulation to the mass production and consumption, greased and promoted by mass communication based on the development of global visions that are rooted in an native Eurocentric vision currently associated to the global promotion of the *American way of life*, without that being an obstacle to a particular articulation of globalisation with diverse national and global perspectives (Spybey 1996).
2. In other works we have analyzed these processes with more detail in the case of their impact in the Caribbean (Serbin 1996; 1998).
3. Or, as Robertson puts it, in terms of a dual process that "the interpenetration of the universalization of particularism and the particularization of universalism" (1992: 100) in that it reflects the interpenetration between worldwide cultural flows and local cultural patterns.
4. Susan Strange, in contrast, states: "Although it is hard to measure the process of globalisation, it is no myth. It exists, and it changes things, on several levels" (Strange 1996: xiii).
5. In this regard, some authors refer to the globalisation of the international system, the step from a state-centric system (centered in the nation-State as lead actor) to a multicentric one (characterized by the multiplication of relevant actors in the dynamic of the international system) as distinctive (Rosenau 1990; 1997^a and b).
6. See, for example, the volume of Spybey, *Globalisation and World Society* (Cambridge: Polity Press, 1996).
7. The sceptics postulate four critical observations basic to the existence of a globalisation process: 1) economic activity is still more based on national aspects than it would be if a globalised economy effectively existed; 2) the growth of international flows fundamentally represents an "internationalization" of the economy through the growth of interactions between well-defined national economies more than the emergence of a global economic activity; 3) the current levels of global flows are comparable or perhaps lower than those of the classic period of the gold standard (c. 1870-1914) and, as such, the growth of the postwar international transactions is little less than a return to the *status quo ante* following the crisis of the thirties and of the Second World War; and 4) a large part of the growth of the international activity reflects the emergence of regional groupings, differentiated and increasingly self-contained, which refer more to a global economic regionalisation process (Perraton et al. 1997: 257-258).
8. As Sidori points out: This globalist vision satisfies the anti-political liberalism of the right in that trade, the transnational companies and the

capital markets are freed of the constraints of policy and of the labor organizations; the operations become safer thanks to the emergence of a demilitarized world, consequently denying at the same time the need for a strong international governance and the possibility of actions at a national level. The globalist vision also satisfies the left in that "globalisation proves the reality of the world capitalist system and the illusory nature of national reformist strategies, so that intellectual certainty is bought at the price of political impotence" (Sidori 1997:73).

9. Hettne places regionalisation in the framework of the transition between a "Westphalian" world order—whose logic assumes that the nation-State is the guarantor of both the security and the social well-being of its citizenry and that whatever remains outside of this State is perceived as chaos and anarchy—and a "post-Westphalian" world order, whose rationality is supported in the idea that the nation-State has lost its utility and that the solution to the emerging problems must be found in transnational structures. In this perspective, the regionalist approach can be seen as the compromise between the Westphalian and the post-Westphalian political rationalities (Hettne 1997:84).
10. With respect to the irreversibility of the process, Beck puts forward eight basic reasons: "1 [1. The opening up of the geographic field and the increasing density of international exchange, as well as the global character of the network of financial markets and of the ever greater power of the multinationals; 2. The ongoing revolution in the terrain of information and the communication technologies; 3. The universally accepted requirement of respect for human rights—also considered as the principle of democracy; 4. The iconic currents of the global culture industries; 5. The post international and polycentric world policy; together with governments there are increasing numbers of transnational actors with increasingly greater power (multinationals, NGOs, United Nations); 6. The problem of world poverty; 7. The problem of global ecological damage and attacks; 8. The problem of the transcultural conflicts in a concrete place (T.N.)] (Beck 1998:29-30).
11. In this framework and with respect to the nation-State, the globalists see the sovereignty of States moving upward (supranationality) or downward (subnationality), with the inherent dangers of contradiction between the homogenization that globalisation imposes and the fragmentation that local nationalisms can impose. In its neoliberal version, global civil society emerges as a functional response to the increasing difficulty States have in assuming welfare policies (third sector); in the neo-marxist version, as a counterhegemonic force at a global level, articulated around the emergence of NGOs and social movements of a new ilk.
12. As a recent *Foreign Policy* article states, "In general terms, NGOs affect national governments, multilateral institutions, and national and mul-

- tinational corporations in four ways: setting agendas, negotiating outcomes, conferring legitimacy, and implementing solutions" (Simmons 1998:84).
13. In this perspective, the concept of *networks* is crucial for understanding the development of transnational civil society (Castells 1996; Serbin 1998). As Shaw notes, "mientras que de manera amplia la sociedad civil puede ser definida como 'la sociedad menos el Estado'—incluyendo de esta manera la economía—, una definición más focalizada y relevante es que la sociedad civil debe ser vista como una 'red de instituciones' a través de las cuales los grupos en la sociedad se representan a sí mismos—tanto entre sí como ante el Estado" (Shaw 1994:647). De esta manera, el concepto, en función del énfasis en las redes, fácilmente puede ser extendido a la sociedad civil transnacional, más allá de que se amplíe el número de interlocutores.
 14. This becomes particularly evident in the positions assumed by the governments of some Latin American countries with strongly "statist" orientations in the framework of Latin America's traditionally weak national civil societies.
 15. In this perspective, Colás states that international civil society is created in the arena of international policy, in that "international civil society is the international space created by the expansion of capitalist relations of production where modern social movements pursue their goals" (Colás 1997:269).
 16. Lipshutz uses two basic reasons to justify the notion of global civil society, conceived of as "the self-conscious construction of networks of knowledge and action, by decentered, local actors, that cross the reified boundaries of States as though they were not there": "The first is that there is not one, but many heteronomous transnational political networks being established by and among actors within civil society who themselves are, in a sense, 'imagined communities', and who are challenging and changing, from below, the nation-State system. The second reason is that the growth of global civil society represents an ongoing project of civil society to reconstruct world politics" (Lipshutz 1996:102). This coincides with Shaw, who states that "*global politics*" are what make for the existence of global civil society (Shaw 1994:655).
 17. An interesting element in this conception of advocacy networks is the fact that it is not reduced to NGO activities but can occasionally link government officials, politicians and media actors in an interaction around relevant themes that transcend the divisions between civil society and government as such (Keck and Sikkink 1998).
 18. And as the same author adds, "While the participants in the networks of global civil society interact with States and governments over particular policy issues, the networks themselves extend across levels of analy-

- sis and State borders, and are not constrained by the State system itself" (Lipshutz 1996: 104).
19. As Fowler points out, "Civil society is not a thing that can be found in the same form in different countries: dissimilarities in ecological and social preconditions, historical trajectories and their interruptions ensure a rich variation. At best one can talk of features which are similar between certain countries or within regions" (Fowler 1996:15).
 20. In correspondence with this perspective, it is characterized as follows in a recent volume about civil society in Latin America: "Civil society (i) encompasses a set of associative activities and initiatives, (ii) relatively autonomous of the State and the political system as well as of the "economic society," (iii) carried out by groups of primarily voluntary involvement and self-organized, (iv) that are geared to the articulation of values, the struggle for interests, the cultivation of sociability and of cultural manifestations, the promotion of an exchange of ideas and public debates". (Arocena 1999:467).
 21. "According to this interpretation, modern society is distinguished by three clearly defined spheres: State, market and civil society. Assuming that this distinction is evident, the space for civil society, an institutionalized and politicized space, has the dual function of clashing and collaborating with the other two spheres. It clashes when the central expectation of the modern State, which is democracy, is not fulfilled, *generating a democratic deficit*. By the same token, it clashes when market conditions and the absence of appropriate public policies generate inequality and social exclusion, *producing a social deficit*. On the contrary, it can collaborate with the state as a participant in the design, implementation and evaluation of public policies, as well as provider of services. It can also collaborate with the market as a mechanism of inclusion in areas where purchasing power is insufficient or nil" (García 1997:13). Or, as De Oliveira and Tandon add, "everywhere in the world, civil society interacts and exercises a power now to counteract that of the markets and government" (1995: 24), for which reason civil society necessarily requires the existence of democratic forms of government (Walzer 1998).
 22. It needs to be pointed out, however, the State, market and civil society trilogy has also been extensively criticized for being characterized by an ahistoric and cultural decontextualized vision that promotes a model of particular society based on the Western concepts of democracy (Trivedy and Charya 1996:58). As these authors point out: "In one sense, the trinity framework is an ideological expression of the globalisation of market economy. In trying to undermine the positive side of the role of the State in the South, it undermines the sovereignty of less developed nations. In trying to subsume everything under the Western-liberal notions of what is civil and democratic, it undermines local history, cul-

- ture and alternative paths of development. In so far as it obfuscates the structural distinction between the different social groups —classes, castes, ethnic groupings, gender differences and other dimensions and by submerging these differences under the rubric of civil society— it tends to undermine the poverty-focused and rights-based approaches which have been the avowed hallmark of many development agencies” (ibidem).
23. As Trivedy and Acharya note, NGOs are part of the gearworks that tend to strengthen civil society, but do not substitute for it (1996: 57-78). In fact, Uphoff (1996) clearly differentiates between NGOs, considered as a “subsector” of the private sector and identified with what is called the “third sector,” and the cooperative and “membership” organizations that are geared to self-help and are responsible to their members. Also, he establishes a clear difference between NGOs and grassroots organizations in that the former are conceived as providing services to non-members and the latter are not necessarily comparable to the former, since they provide services to their own members and eventually must account to them (19-20).
24. Scott points out that “a social movement can be defined in general as a collective actor constituted by individuals who understand themselves to have common interests and, for at least some significant part of their social existence, a common identity. Social movements are distinguished from other collective actors, such as political parties and pressure groups, in that they have mass mobilization, or the threat of mobilization, as their prime source of social sanction, and hence of power. They are further distinguished by other collectivities, such as voluntary associations or clubs, in being chiefly concerned to defend or change society, or the relative position of the group in society” (cited by Shaw 1994:651-652).

BIBLIOGRAPHY

- Arocena, Rodrigo (1999) "¿Cuál futuro para la sociedad civil de América Latina?" in Hengstenberg, Peter; Karl Kohut; Gunther Mailhold (eds.) *Sociedad civil en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad*. Caracas: ADLAF/FES/Nueva Sociedad, pp. 465-473.
- Bissio, Roberto (1997) "Ciudadanía y globalización," in Bissio, Roberto et al.: *Las dimensiones del desarrollo*. Montevideo, SERPAJ/CLAES, Biblioteca de Marcha, pp. 50-55.
- Colás, Alejandro (1997) "The Promises of International Civil Society," in *Global Society* (Canterbury), vol. 11, No. 3, September, pp. 261-278.
- Beck, Ulrich (1998) *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Paidós. Buenos Aires.
- Bernal-Meza, Raúl (1995) "La globalización: ¿un proceso o una ideología?" in: *América Latina en la era de la globalización*. Caracas: Instituto de Altos Estudios de América Latina, pp. 19-38.
- Bodemer, Klaus (1998) "La globalización. Un concepto y sus problemas," in: *Nueva Sociedad* (Caracas), No. 156, julio-agosto, pp. 54-70.
- Boyer, Robert (1997) "Les mots et les réalités," in *Mondialisation au-delà des mythes*. Paris: La Découverte, pp 13-49.
- Castells, Manuel (1996) *The Rise of the Network Society*, Malden: Blackwell
- De Oliveira, Miguel Darcy y Rajesh Tandon (1994) "Una sociedad mundial emergente," in: De Oliveira, Miguel Darcy and Rajesh Tandon (coordinators) *Ciudadanos en construcción de la sociedad civil mundial*. Washington: CIVICUS, pp. 21-49.
- Ferrer, Aldo (1997) *Hechos y ficciones de la globalización*. Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires.
- Falk, Richard (1995a) "The World Order between Inter-State Law and the Law of Humanity: the Role of Civil Society Institutions," in: Archibugi, Daniele and David Held (editors) *Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order*. Cambridge, UK: Polity Press, pp. 163-179.
- Falk, Richard (1995b) *On Humane Governance. Toward a New Global Politics. A Report to the World Order Models Project*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Fowler, Alan (1996) "Strengthening Civil Societies in Transition Economies: from Concept to Strategy: Mapping an Exit in a Maze of Mirrors," in: Clayton, Andrew (editor) *NGOs, Civil Society and the State*, Oxford: INTRAC, pp. 12-33.

- García, Sergio (coordinador) (1997) *Organizaciones No Gubernamentales. Definición, presencia y perspectivas*. México D.F.: Foro de Apoyo Mutuo/ IAP/ Demos.
- Giddens, Anthony (1994) *Consecuencias de la modernidad*, Madrid: Alianza Editorial.
- Giddens, Anthony (1998) *The Third Way. The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Grandi, Jorge and Lincoln Bizzozero (1997) "Mercosur: mercado en formación y sociedad civil en gestación," in: *Papel Político* (Bogotá), No. 6, noviembre, pp. 9-29.
- Goldblatt, David; David Held; Anthony McGrew and Jonathan Perraton (1997) "Economic Globalisation and the Nation-State: Shifting Balances of Power," in: *Alternatives* (Boulder), vol. 22, No. 3, July-September, pp. 269-286.
- Guéhenno, Jean-Marie (1995) *The End of the Nation-State*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Held, David (1995) "Democracy and the New International Order," in Archibugi, Daniele and David Held (eds.) *Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order*. Cambridge: Polity Press.
- Held, David (1997) *La democracia y el orden global*. Buenos Aires: Paidós.
- Hirst, Paul (1997) "The global economy: myths and realities," in: *International Affairs* (London), vol. 73, No. 3, Julio 1997, pp. 409-426.
- Hirst, Paul and Grahame Thompson (1996) *Globalisation in Question. The International Economy and the Possibilities of Governance*. Cambridge: Polity Press.
- Huntington, Samuel (1996) *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*. New York: Simon and Schuster.
- Jácome, Francine and Andrés Serbin (comps.) (1998) *Sociedad civil e integración regional en el Gran Caribe*. Caracas: Nueva Sociedad/ CRIES/INVEP.
- Jorgensen, Lars (1996) "What are NGOs Doing in Civil Society?" in: Clayton, Andrew (editor) *NGOs, Civil Society and the State*. Oxford: INTRAC, pp. 12-33.
- Keck, Margaret and Kathryn Sikkink (1998a) "Transnational Advocacy Networks in the Movement Society," in: Meyer, David and Sidney Tarrow (1998) *The Social Movement Society*. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers; pp. 217-238.
- Keck, Margaret and Kathryn Sikkink (1998b) *Activists Beyond Borders*. Ithaca: Cornell University Press.

- Kofman, Eleonore and Gillian Youngs (eds.) (1996) *Globalisation. Theory and Practice*. London: Pinter.
- Lipschutz, Ronnie D. (1996) "Restructuring World Politics: The Emergence of Global Civil Society," in: Fawn, Rick and Jeremy Larkins (editors) *International Society after the Cold War*. London: MacMillan, pp. 47-61.
- McGrew, Anthony G. (1998) "The Globalisation Debate: Putting the Advanced Capitalist State in its Place," in: *Global Society* (Canterbury), vol. 12, No. 3, September, pp. 299-321.
- Moncayo, Héctor-León (1997) "Los movimientos sociales entre la condicionalidad y la globalización," in: *Nueva Sociedad* (Caracas), no. 148, marzo-abril, pp. 52-69.
- Munck, Ronaldo (1998) "Trabajadores y globalización. Resultados y perspectivas," in: *Nueva Sociedad* (Caracas), No. 158, noviembre-diciembre, pp. 64-76.
- Ohmae, Kenichi (1995) *The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies*. New York: The Free Press.
- Pacha, Mustapha Kamal and David Blaney (1998) "Elusive Paradise: The Promise and Peril of Global Civil Society," in: *Alternatives* (Boulder), vol. 23, No. 4, Oct.-Dec. 1998, pp. 417-450.
- Perraton, Jonathan; David Goldblatt; David Held and Anthony McGrew (1997) "The Globalisation of Economic Activity," in *New Political Economy* (Sheffield), vol. 2, No. 2, pp. 257-277.
- Rosenau, James (1990) *Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity*. Princeton: Princeton University Press.
- Rosenau, James (1997) "The Complexities and Contradictions of Globalisation," in: *Current History* (Philadelphia), vol. 96, No. 613, November, pp. 360-362.
- Rosenau, James (1998) "Hurricanes Are Not the Only Intruders. The Caribbean in an Era of Global Turbulence," in: Desch, Michael; Jorge Domínguez and Andrés Serbin (eds.) *From Pirates to Drug Lords. The Post-Cold War Caribbean Security Environment*. Albany: State University of New York Press, pp. 11-32.
- Scholte, Jan Aart (1996) "Beyond the Buzzword: Towards a Critical Theory of Globalisation," in: Kofman and Youngs, *op. cit.*, pp. 43-57.
- Serbin, Andrés (1996) *El ocaso de las islas. El Gran Caribe frente a los desafíos globales y regionales*. Caracas: Nueva Sociedad/INVEP.
- Serbin, Andrés (1997) "Globalización, déficit democrático y sociedad civil en los procesos de integración," in: *Pensamiento Propio* (Managua) año I, No. 3, enero-abril, pp. 98-117.

- Serbin, Andrés (1998a) "Constitución práctica de una red regional," in *Cooperación internacional e integración regional: estrategias, gestión y generación de recursos*. Montevideo: CEFIR, pp. 37-68.
- Serbin, Andrés (1998b) *Sunset over the Islands. The Caribbean in an Age of Global and Regional Changes*. London: MacMillan.
- Serbin, Andrés (1998c) "La integración en el Gran Caribe," in *Pensamiento Propio* (Managua), año 3, No. 6, enero-abril, pp. 49-65.
- Shaw, Martin (1994) *Global Society and International Relations*. Cambridge: Polity Press.
- Sideri, Sandro (1997) "Globalisation and Regional Integration," in: *The European Journal of Development Research* (London), vol. 9, No 1, June 1997, pp. 38-81.
- Simmons, P.J. (1998) "Learning to live with NGOs," in *Foreign Policy* (Washington), No. 112, Fall 1998, pp. 82-95.
- Strange, Susan (1996) *The retreat of the state. The diffusion of power in the world economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strange, Susan (1997) "The Erosion of State," in: *Current History* (Philadelphia), vol. 96, No. 613, November, pp. 363-369.
- Trivedy, Roy and Jagabandhu Acharya (1996) "Constructing the Case for an Alternative Framework for Understanding Civil Society, the State and the Role of NGOs," in: Clayton, Andrew (editor) *NGOs, Civil Society and the State*. Oxford: INTRAC, pp. 12-33.
- Wahl, Peter (1997) "Tendencias globales y sociedad civil internacional: ¿una organización de la política mundial?" in: *Nueva Sociedad* (Caracas), No. 149, mayo-junio, pp. 42-50.
- Walzer, Michael (1998) "The Concept of Civil Society," in: Walzer, Michael (editor) *Toward a Global Civil Society*. Providence: Berghahn Books, pp. 7-27.
- Whiting, Jr., Van R. (1996) "Regional Integration, Sustainable Development and Popular Participation," presentation for the *Working Group of the Americas*. Lima: Universidad de Lima.

NODO NICARAO



- Conexión a Internet
 - Modo Gráfico
 - Modo Texto
- Cuentas de Correo Electrónico
- Herramientas para discusión y/o foros virtuales:
 - Listas de correo
 - Conferencias electrónicas
- Búsqueda de Información
- Diseño y Alojamiento de Páginas Web
- Cursos de Capacitación: Internet, Diseño en Web
- Soporte Técnico
- Cabinas Públicas de Lunes a Viernes, 8am a 12pm.

Iglesia El Carmen 1c. al norte, 1/2c. al Oeste
Aptdo. Postal 3516, Managua
Teléfonos: (505) 268-2362 - 222-5137
e-mail: nicarao@nicarao.org.ni
<http://nicarao.org.ni>

**LA COMUNICACION
AL SERVICIO
DEL PENSAMIENTO**



How the Sociology of the North Celebrates Itself*

HEINZ R. SONNTAG

Inequality or asymmetry is always a point for debate, although not of the same intensity in every field. As far as economic relations within the historical world-system are concerned, it is widely known and accepted that their main characteristic is their asymmetry which benefits the centre, prejudices the periphery and does both (simultaneously and in parallel) with the semi-periphery. It is also generally acknowledged that such asymmetry, although cyclical, has become progressively deeper over the history of this system, especially in these times of what many like to call "globalisation". Equally, it is recognised that the balance of power in the inter-state system always favours the countries of the centre, even at times of rivalry where there is no clear hegemony of one or various countries belonging to it, or even if semi-peripheral nations can ascend to positions of power which permit them to compete for such hegemony.¹ Finally, the tendency towards cultural homogenisation, especially strong today, is also known to be dominated by one culture in particular: western culture, with its (up until now) great success in presenting itself as the *universal culture*.

In the field of the production of knowledge in basic sciences, technology and engineering, such asymmetries have been and are assumed to be "normal", in the sense that it is accepted that some countries or regions participate in such production more actively and with greater potential for innovation than others. This is shown, firstly, by the fact that asymmetries appear only marginally among the themes worked on by sociologists and historians of science and technology. Secondly, such "normality" is seen not as the eventual result of a determined international division of labour, although this interpretation is gaining ever more acceptance (which is related to the growing number of researchers coming from developing countries). With honourable exceptions it is still seen as a quasi-natural phenomenon, as if there existed peoples, societies in general, nations and other social conglomerations (such as that which Galbraith named the *military-industrial complex*) innately more apt for the production of knowledge in this field than others.

Where the axis centre-periphery seems to be less clear cut, apart from the wide contours of artistic creation (literary, musical, etcetera)² is in the field of social thought and social science. Here, more than in the other fields indicated, a kind of hypocrisy exists: we are all equal. In the end it turns out that some are more equal than others, because the social representations, research results, theorisations and reflections of some are more widely diffused than others. The dividing line is often that which separates the north from the south and the countries in transition, the centre from the periphery and the semi-periphery. One excuse why this should be so has been (and is) the difficulties of language: the social science conceptualisations and narratives, in theory and metatheory, of the periphery and semi-periphery, at least those of Latin America, the Arab and Asian regions and of the countries in transition, are difficult and costly to translate, as much as into our *lingua franca*, English, as into other languages with more "prestige" in these areas.³

This excuse is not entirely valid. Many of those engaged in social science in these countries and regions know that the results of their scientific endeavours are of interest only to a relatively reduced circle, those from their own language group (and those in a wider area with interests in comparative sociology), for which reason they often try to make their work known through English and other languages. A common practice is to add summaries in English or French to articles in the language of origin. Attempts are also made to publish in

these and other languages with a greater prestige in the social sciences (Italian or German), and to give papers at international meetings and congresses (frequently with papers translated through personal economic sacrifice). All of this has as its objective not only to foster personal prestige but also the desire to contribute to discussions about what is scientifically valid, current, urgent and real.

However, the institutional and organisational forms of our scientific endeavour do not help very much. As in the political and economic areas and in the contours of basic science and technology, there exist severe asymmetries in the field of social thought and social science, silently fomented and supported.

In what follows I aim to demonstrate, through an analysis of the programme of the 14th World Congress of Sociology of the International Sociological Association (ISA),⁴ that there is an overwhelming domination by northern countries of the presentations in the different collective modes of working associated with an event of this nature. For the analysis I will rely basically upon the data provided in the official Congress programme (ISA, 1998), interspersed with personal reflections. Finally, I will present a number of proposals on how modifications could be introduced into the structures of the ISA and the organisation of its Congresses, so that this situation, inadmissible from the point of view of the world academic community⁵ and unbearable from the point of view of the scientists and thinkers from the periphery, the semi-periphery and countries in transition, might not continue to be reproduced. We cannot continue to allow ISA congresses to be events in which northern sociology celebrates itself.

Before presenting this analysis, however, it is necessary to make two clarifications. The first refers to the use of the concepts "northern countries", "southern countries" and "countries in transition". Henceforth, I shall follow the custom which has increasingly been adopted by international organisations (UNESCO, WHO, ILO, etcetera), according to which the northern countries are those with a high level of development, with highly diversified economic structures, with a *relatively* egalitarian social structure,⁶ generally with democratic or representative governments, with an important degree of sociocultural cohesion (although elements exist which point towards different forms of multiculturalism): from Germany to New Zealand, that is to say the countries of the former First World. Those of the south are those of the Third World,⁷ including those recently industrialised and those which today belong to what has been termed

the Fourth World: the whole range of countries running from Afghanistan to Zimbabwe and including among others Brazil, China, India, Chile, South Korea, Indonesia, Venezuela, Nigeria, Algeria, Tunisia, Mexico, South Africa and Zambia. The countries in transition are those which belong to what was the Soviet Union and the bloc dominated by it. The only criterion for the categorisation of the different session presidents, programme officials, authors, etcetera to one of these groups is the institutional affiliation which they themselves indicate.⁸

The second clarification is of a personal nature. I wish to make it clear that I do not believe, either in macro or in micro, and least of all in our intellectual proceedings, in *conspiracy theories*. That is to say: I do not think that things are the way they are because some people conspire, for example that underdevelopment exists because some bankers, international capitalists and executives have made (or are permanently making) agreements to maintain it, or that the asymmetry in the ISA Congress exists because northern colleagues have plotted to undermine the efforts of those of us working in southern or transitional countries. Rather, I think (and will attempt to demonstrate) that it is a question of mechanisms of communication and institutional relations, of language, of personal ties, of intellectual origins, mechanisms which function in a quasi-automatic and therefore unconscious way. I hope therefore that nobody feels offended, and that what follows is taken as a warning that has been necessary for a long time, that Immanuel Wallerstein recognised this and made the issue his during his four year presidency of our Association,⁹ and that what follows is an invitation to look for ways to overcome the situation which underlies it.

THE INEQUALITIES START RIGHT AT THE TOP

I believe that all of us members of the ISA are conscious that the forms of election of our authorities could hardly be described as democratic. The facts that a) the president and the four vice-presidents are chosen indirectly, by a joint assembly of the representatives of national associations and of research committees (RC) and that b) eight of the members of the executive committee are elected by an assembly of national associations and another eight by research committee delegates, would cause more than one colleague, and not only the specialists in the sociology of democracy, to protest were they

to occur in other spheres, above all if to this we add that the national associations cannot vote if they are not up-to-date with their quota payments. All attempts to change this anachronistic electoral system have failed.

According to data supplied by the executive secretary of the ISA, by 1998 there were 70 affiliated national associations, of which 53 were up-to-date with their annual quota payments. Of them 24 were from northern countries, 16 from southern and 13 from societies in transition. Of the delegates of the 50 research committees, supposedly democratically elected, 47 principals came from the north, three from the south and none from the countries in transition, and all of the alternate delegates in the committees where they existed (18), were from the north. Of the non voting observers, that is of the eight delegates from the working groups and the four from the thematic groups, not one came from a southern or transitional country.

Upon the election as president of ISA of a North American sociologist known for his commitment to the sociology of the periphery and semi-periphery,¹⁰ the electoral bodies of the Association accompanied him —dare I say naturally?— with three (out of four) vice-presidents from the north and 12 out of 16 executive committee members (three of the remaining four came from the south and the other one from a country in transition). Formally therefore, in the highest governing body of ISA (president, vice-presidents and members of the executive committee), as against 16 members from the north there were four from the south and one from a country in transition. I say formally because certainly some of the northern representatives were open to the social science of the south and transitional countries, although many others were known for their exclusive concern with northern affairs, a kind of “northern fundamentalists.”

The situation was no different on the two occasions when southern sociologists occupied the presidency. Between 1990 and 1994, the ISA president, Prof. T.K. Oommen, from India, was accompanied in the executive committee by 12 from the north, 2 from the south and 3 from the countries in transition. Between 1982 and 1986, the Brazilian Fernando Henrique Cardoso worked with 14 colleagues from the north, two from the south and two from the then socialist bloc (Platt, 1998, 65 ss.).

In this context, it is also significant that none of the editors of the official publications of ISA has been a colleague from the south,

from the former socialist bloc or from the countries in transition. Current Sociology from 1953 on, Sage Studies in International Sociology from 1976 on and International Sociology from 1984 on have had only editors from countries of the north (Platt, 1998, 70-71).

The membership of the programme committee for the 14th Congress, just as that of the previous ones, was the result of complicated negotiations between the executive committee of ISA and the event's organising committee (composed, as it must be, by representatives of the universities in Montreal: Université de Québec a Trois-Rivieres, Concordia University, Université de Montreal, McGill University and the University of Ottawa). The programme committee was made up of nine representatives from the north, five from the south and two from countries in transition.

The composition of this committee, and I would repeat, there is no attempt to personalise here, allows us to formulate the hypothesis that the organisers of the six symposia, the most important high profile working groups at the ISA Congresses, were carefully and politically selected. Five of the six symposia had joint north-south coordination, with only one with three from the north and one from the south. Nevertheless, 63 presenters were from the north, 29 from the south and 4 from the countries in transition.

In presenting this figures it is worth pointing out a first irony: having to do with such current and pressing themes as Social Order and Changing Identities, Work and Technology, The Quality of Modern Life: Advantages and Disadvantages, Unequal Development: Causes and Consequences, The Social Parameters of Social Existence and Social Science and Power: Knowledge For What?, it would seem little less than surprising that almost 65% of the contributions were from the north, 30% from the south and less than 5% from the transitional countries. If in these last two regions there is such a sparse reflection on such central themes as this distribution might suggest, what exactly are we working on in terms of research, theorisation and conceptualisation? Or is it that the quality of our work does not meet the highest standards of academic rigour? Would it not be more sensible to think that selection through proximity, a mechanism which I will discuss below, is operating here?

Another irony: despite the fact that since the 13th Congress at Bielefeld, Germany, ten regional seminars have been held concerning the general theme of the congress (three in the north, six in the south and one in a region of transition) and the fact that the correspond-

ing books,¹¹ one more from a gender perspective) and a video on the deliberations of the integrating colloquium held in November 1997 in Montreal have been published, none of the approximately 15 editors or more than 100 authors had any special role in the event, despite having dedicated themselves to the theme for a significant period. Did the intellectual, organisational and financial efforts of many people and institutions involved in this enterprise serve only for the private consumption of those who bought the books and the video, whilst having no importance in the public deliberations of the Congress?

THE CONGRESS "FILLET": THE SESSIONS OF RESEARCH COMMITTEES (AND OF THE WORKING AND THEMATIC GROUPS)

As was noted above, the ISA develops its activities through 50 research committees, each one of which is present in congresses with between 10 and 16 working sessions (with even more in exceptional cases). The working groups held an average of 10 sessions and the five thematic groups held 5.

Of the principal delegates of the 50 committees, 29 were also programme coordinators and thereby in charge of the whole of the series of session of their respective units, without taking into account that the alternate delegates also figured in significant numbers among those in a position to determine the programme content of their committee during the Congress. In other words: the delegates (and alternates) not only decide on the programme of activities of their respective committees in the period between congresses, but also in the majority of cases (be it the delegates or their alternates) on what will be discussed in their sessions in the next congress. That gives them substantive power to shape the prevailing sociological discussion, a discussion which hardly reflects the wide range of themes and preoccupations which inspire us in our fields of interest.

Let's look at the figures. The fifty committees held a total of 739 sessions. These were run by a total of 923 presidents and co-presidents. Of them, 781 —no less than 84.6%, came from the north; 109, or 11.8% from the south and 33, that is 3.4% from countries in transition.

A total of 3927 papers were presented. Seventy-four per cent of them (2766) were by authors, individual and collective, based in the north whilst 19% (716) were by colleagues from the south and 7% (247) by participants from countries in transition.

In the middle of this overwhelming presence of the north there were exceptions to the rule: research committees (RC) with a more equitable distribution. Worthy of mention are the RC12 on Sociology of Law, with 13 organisers or presidents and 25 papers from the north, 7 and 26 from the south and 1 and 7 from the countries in transition respectively, the RC32, (Women in Society) one of the few committees with a person from the south as delegate, with 16 presidents and co-presidents and 48 papers from the north, 10 presidents and 38 papers from the south, with six papers by presenters from countries in transition. Other Committees which made efforts to achieve greater balance were committees 21 (Urban and Regional Development), 29 (Deviation and Social Control), 30 (Sociology of Work), 31 (Sociology of Migration), 34 (Sociology of Youth), 40 (Agricultural Sociology), and 41 (Population Sociology).

On the other hand, certain committees had an "exaggerated" preference for papers presented by colleagues coming from countries in the north. Particularly worth pointing out are committee 03 (Research on Local Communities) with 50 presidents and co-presidents from the north, 1 from the south and 1 from a country in transition, with 105, 17 and 4 papers respectively, committee 39 on Sociology of Disasters with a distribution 12:1:0 of presidents and 66:3:4 of papers, committee 42 on Social Psychology, with 14 out of 14 presidents from the north and a 36:5:3 distribution of papers, committee 45 on Decision Theory (Rational Choice), with 18 presidents and 45 papers from the north and just one paper from a transitional country, committee 48 on Social Movements, Collective Action and Social Change, whose 17 sessions could not count with a single president from outside the north, and had a 51:10:6 distribution of papers; and committee 49 (Mental Health and Mental Illness) with 11 presidents from the north and a 47:5:1 breakdown of papers.¹¹

It is impossible to believe (at least I refuse to do so), that the programme coordinators of the research committees, work and thematic groups and the presidents and co-presidents of the working sessions could ignore the research and reflection in their respective fields being done in countries of the south and countries in transition. I believe therefore that it is more a case of the mechanism of selection by proximity: the coordinator of a programme knows what is being done and by whom in the particular area in his/her regional scientific community, for which reason he/she chooses members of the community to organise and to preside sessions, who in turn

choose colleagues of the same community for the sessions, including somebody of the south or the countries in transition more often than not for their "by the way" knowledge about what is done there.

Another mechanism would appear to be selection through prolonged collaboration: certain research committees are dominated by colleagues who obviously have a long history of working together, for which reason it is difficult to enter or be co-opted into the circle.

One aspect which is especially surprising is the poor representation of colleagues from the south and transitional countries in fields in which the contributions from such countries have achieved worldwide recognition in sociology and social science in general. For example, the development and dependency theories associated with Latin America and the Caribbean have made a substantial contribution since their appearance at the end of the forties and the sixties respectively. Other important contributions have been made in the following fields: armed forces and their role in modern society (RC 01), the relation between economy and society (RC 02), sociology of education (RC 04), ethnic, race and minority relations (RC 05), futures research (RC 07), social practice and transformation (RC 09), communication, knowledge and culture (RC 14), sociological theory (RC 16), political sociology (RC 18), comparative sociology (RC 20), urban and regional development (RC 21), the sociology of science and technology (RC 23), social stratification (RC 28), sociology of work (RC 30), sociology of migration (RC 31), concepts and terminology (RC 35), agricultural sociology (RC 40), population sociology (RC 41), social psychology (RC 42), labour movements (RC 44), social classes and social movements (RC 47), collective action and social change (RC 48). These contributions are in no way reflected in terms of the qualitative or quantitative presence of Latin American or Caribbean colleagues within the research committee programmes. I am sure that similar charges, with equal justification, could be made by colleagues in Africa, Asia (with particular emphasis upon the Indian subcontinent), Oceania and numerous countries in transition.

The six working groups held a total of 47 sessions with 45 presidents and co-presidents from countries in the north, six from the south and three from countries in transition. 427 papers were presented, 341 by colleagues from the north (just under 80%), 61 by author from the south (14%) and 25 from the region in transition (6%). The five thematic groups held 18 sessions with 14 presidents

and co-presidents from the north and five from countries in transition, during which 95 presentations were made, 75 (80%) by colleagues from the north, 9 (9%) by colleagues from the south and 11 (11%) from countries in transition. These figures amply corroborate what was found in the case of the research committees.¹²

I am not proposing, of course, a mechanistic distribution of authors in every committee with a particular quota of members from the three regions, nor a division of labour in which certain sub-themes are somehow reserved for colleagues from underprivileged regions. I suggest rather an elaboration of the programme in each committee which take duly into account the contributions of colleagues from the south and from regions in transition. One measure could be that the "calls for papers" (the page-and-a-half abstracts) should be done early, for example as much as 24 months in advance of the respective congress, for the full version to be ready 12 months in advance. Another measure could consist in the papers presented to each committee being evaluated by some type of jury made up of one member per region, which would select the articles which finally make it through to be discussed in the various sessions of the committees and groups during the Congress.

Those who head up the research committees, and those responsible for the programmes of each committee should assure that every session has mixed presidencies or two organisers: one colleague from the north and one from a country in transition for example, or one from a country in transition and one from the south, to ensure thereby the development of a more lively interchange and argument.

Finally, care has to be taken in the selection of the discussants. They must come in equal proportions from the respective regions and should be neither presidents nor co-presidents nor programme coordinators.

FINAL REFLECTIONS

One of the arguments which could be used against what I sustain in this piece is that the vast majority of people who attended the 14th Congress, as was the case in previous congresses, came from the north, that is to say North America, Europe and other developed countries. But this is an argument of dubious validity, since it is precisely our point that the ISA must effectively internationalise itself in order to be able to accommodate in its highest echelons the different currents and schools of sociological thought and the numer-

ous fruits of the research and reflection which it generates, without privileging any particular region or country. No less dubious would be the "argument" that the disproportion between the countries of the north, the south and those in transition is the result of the lesser availability of funds for travel to international congresses in the last two groups of countries. Once again, it is an obligation of the ISA to struggle to ensure that genuine internationalisation does not fail for financial reasons.

So, what could be proposed to reduce over time this clearly demonstrated asymmetry? I believe that various measures, in addition to those already proposed for the research committee and the working groups and thematic groups, could be taken.

1. The initiation of a campaign throughout the international social scientific community to get colleagues to become members of ISA, beyond their adhesion to a national association (which is now easier because of the favourable weighting or membership fees);
2. A decisive democratisation of the election of the ISA authorities, starting with the direct election, by all of the members attending each congress, of the president and the four vice presidents, the election of 8 members of the executive committee by the plenary assemblies of the national associations and the remaining 8 by the plenary assembly of the members of the research committees;
3. The creation of a special fund, with seed-corn funding from UNESCO, to facilitate subsidies for colleagues from the south and the region in transition to attend congresses;
4. To accept and make a reality all the recommendations of the Bureau de Sociologie Internationale, directed by Alain Touraine, on the question of the official languages of ISA;
5. To ensure simultaneous translation at least in the official languages of ISA of all the collective forms of working during congresses;
6. To build a number of genuinely international research programmes as part of the activity of the research committees, seeking out international financing for this purpose;
7. To achieve a more significant editorial role for ISA members from the south and from countries in transition;
8. The stimulation of initiatives and facilities which permit the coming together, in a more informal working organisation, of

colleagues from different linguistic backgrounds, as much between congresses as during them (for which the ten regional seminars running up to the 14th Congress, with the participation of one or two colleagues from other regions can serve as a paradigm); and

9. The democratisation (and therefore diversification) of the membership of the central programme committee and of the coordinations of the symposia, research committees, the thematic and working groups, ad hoc groups and all other collective forms of work, either through consultations with national associations and research committees or through consultations via e-mail, to avoid the duplication and accumulation of responsibilities and power in few hands.

I am conscious that these proposals, as well as those referring to the way the different committees and groups should work, can only be implemented gradually. But I am also convinced that we must continue and deepen debate on this theme and start thinking about how we can put into practice solutions which have been formulated by others before now and which appear here as a set of proposals. It is this conviction, in light of the experience of the 14th Congress, which stimulated me to write this paper.

** This paper was presented at the XIVth World Congress of Sociology, held in July, 1998, in Montreal, Canada.*

NOTES

1. Apart from the Soviet Union between 1940 and its implosion in 1991, good examples are the United States from the start of the C19th, Japan at the end of the C19th and the start of the present one, and China from the mid-1970s onwards.
2. I am not sure, but throw out as a working hypothesis, that such an analysis has not been done because it would turn out to prove a greater innate creativity in the peoples of the periphery and semi periphery.
3. This domination is not quantitative: there are as far as I know more humans around the world who communicate in Chinese and even Spanish than in English.
4. The event took place in Montreal, Canada, between 26 July and 1 August 1998, inclusive of both dates. The organisation was excellent, apart from the lack of simultaneous translation available in the symposia, research committees, ad hoc groups and other meetings for the third official language of ISA, Spanish.
5. Here it is fitting to paraphrase Hegel's famous dictum on the master/slave relationship, but I do not wish to take such analogies and metaphors too far.
6. This does not mean to say that there are not marked differences in income, security of employment, education, social security etcetera between the sectors, classes, groups and strata. There are, but what is important is that such difference do not pass a determined limit.
7. It is beyond the reach of this paper to discuss whether or not this term is still valid.
8. Obviously, there are colleagues and institutions in the countries of the north whose intellectual efforts are identified with those which we are taking forward in the south and in countries in transition, just as there are colleagues who live and work in the south whilst still belonging structurally to the north; I know some of both types. Not entering into such subtleties is the price which has to be paid in the attempt to be clear, statistically straightforward and fair at the same time.
9. He did so to the extent that he dedicated one of his presidential letters to the "internationalisation of the ISA". (Wallerstein, 1996).
10. Immanuel Wallerstein had not only worked on development problems in Africa in the sixties but also, from the seventies onwards, in his historical sociology, incorporated important elements derived from Latin American, Asian and African social science, as he himself has acknowledged on more than one occasion.

11. A further strange fact I would like to point out is that in the round table on globalisation within CR 35 (Conceptual Analysis and Terminology), there were 13 participants from the north, two from the south and one from a country in transition, although there has quite a lot of work been done in the south and the transition regions on this theme and the processes it implies.
12. Something which does not seem logical is the simultaneous existence of research committees and working and thematic groups on the same theme and indeed with very similar titles. I believe that it would be worthwhile to make an effort to integrate the institutional working formats, in order to unify criteria and to avoid duplication.

REFERENCES

- International Sociological Association, 1998, "Program of the XIVth World Congress of Sociology". Montreal (ISA).
- Platt, Jennifer, 1998, A Brief History of the ISA: 1948-1997. Montreal (ISA).
- Wallerstein, Immanuel, 1996, On the Internationalisation of the ISA. Madrid, (ISA).



Central America: What is in store for us?*

ALVARO DE LA OSSA

One of our daily concerns is the realisation that our everyday lives, tasks, and momentary worries leave no time for considering the future, and for designing actions that would address tomorrow's problems right now. Of even greater concern is the fact that this future is increasingly uncertain and excluding. In addition, many believe that what they do in the present is more than sufficient; they are enamoured by today's achievements. This attitude keeps them from seeing what could happen, just a short time from now.

Finally, we need to recognise that economic fundamentalism—and not only our limited positions—has gradually cornered us, almost imperceptibly, after having lived through the dramatic circumstances of the 80s and having been left even poorer than in previous decades. In other words, it would appear that our vision of the world, our ideology, is limited to a few aspects of the reality that surrounds us and the environment that oppresses us.

For this and other reasons, CRIES and its affiliated centres have begun a process of progressively creating their own, more comprehensive view of today's reality. The goal of this series of colloquia is to expand our conception of the world, and thereby design more effective policies, strategies and lobbying approaches that are better adapted to the violent economic fundamentalism that surrounds us.

My goal here is to contribute some ideas about this new world vision, which is so very needed. They are just a few ideas to begin a discussion about those aspects that we think are the most substantive for study and discussion.

MAIN ELEMENTS BEYOND CENTRAL AMERICA'S BORDERS

Two key elements from the outside world influence the Central American region: profound marginalisation, and absolute dependency. These qualities have developed over time, especially following the wars of the 80s and the coming of neoliberalism, which is, essentially, economic fundamentalism.

Everybody recognises that the region's marginality stems from the rest of the world's increasing loss of interest in our part of the world. A lack of interest in its development, in its human evolution, in its political refinement, despite official declarations from third countries or groups of nations.

For a brief moment, hurricane Mitch re-ignited international interest in the region. One can imagine that the region will only be important in the future when subjected to tragedies, whether due to natural or human causes.

In other words, the region is a suffering strip of land that awakens the interest of others not out of humanity or solidarity, but rather because of a scandalous interest in exploiting its resources.

Dependency is a phenomenon that was consolidated in the 1940s, with industrial development based on the technology of wealthier nations. Our region has not achieved a sufficient capacity to invent and create our own technologies, nor are we expected to in the future, for numerous reasons. Much of the existing technology is the private property of foreign businesses and international consortiums. Thus it is used as a private resource, without any general proliferation. Even worse, the technological gap is of such dimensions that it is hard to imagine even reducing it (much less achieving a point of equilibrium), and anyone who proposes such a policy di-

rection is simply deluded. Thus, from the technological viewpoint, we are forced to use technologies that we must purchase at the prices set by the countries who invent, patent and regulate them.

Other aspects of dependency include the continuous need for external financing, the lack of development of our own markets, dependency on the demand of third countries, and the use of services that are granted—"oligopolistically"—by other nations. In other words, dependency is not only technological but also financial, commercial and in terms of services.

Finally, consolidating a vicious circle of absolute dependency, the Central American nations have achieved an astonishing cultural dependency. This phenomenon is not only reflected in the loss of our own historical, cultural and human values, but is also (unfortunately) manifested in the development of an "I need you to help me" attitude, and a "we have to accept what the big guy says" world view. There are no more reactions of self-defence, or dignity.

Added to this is the fact that the region's governments have generally accepted that development policies should be designed and applied jointly with foreign governmental advisors and technicians from international organisations.

Since the 80s, a new element has appeared in this structure of absolute dependency, which is the role played by Mexico, Argentina, Chile and Brazil. Their growing influence in the Central American economies, their notable negotiation capacities with third nations, and their proposals to "represent" the region in relation to new modalities of international organisation mean that they are no longer Latin American "sister nations," but instead sub-empires of a new mould, whom the most developed nations have authorised to control Central America. It is a phenomenon whose traits are still not precisely defined, but which tends to become stronger over time. Perhaps it is a new system for dividing the world that goes beyond zones of influence, and that nurtures this region's marginality.

MAIN ELEMENTS WITHIN CENTRAL AMERICA'S BORDERS

The internal environment is so multifaceted that it cannot be examined in-depth here. Nor is it sufficiently understood to be precisely defined. Thus, we will try to present a general overview of some key elements.

We should also clarify that the following analysis is not linked to any of the well-known "isms" (socialism, communism, fundamentalism, or capitalism). Today, an analysis of the Central American situation has nothing to do with such political approaches, but instead with each nation's internal situation. Whether ideologically we like it or not, the region is mainly characterised by deep divisions between the different "human estates" which make up our societies. This is a significant divergence from approaches that have been used in designing and applying policies (in function of the interests of dominant groups, via their representatives or public servants), and a functional social structure that limits possibilities for criticising and controlling public operations, and helps dominant groups exert pressure. Thus, a permanently unstable social system exists in the region—recurrently operating between peace, turbulence and chaos—that regulates the daily lives of Central Americans. It is political cycles, rather than the ideology of any current administration, that lead to such constant instability.

With this background in mind, it could be said that the following factors—among numerous others—make up the internal environment of the Central American region: the hegemonic group and its recent historical changes; the progressive destruction of the State; labour flexibility; opening up the market; and the weakness of civil society.

The Hegemonic Group

What was formerly known as the "oligarchy" was the original hegemonic group, dating from the times of Colonialism. It exercised its economic and political power through control over and possession of land and its products. The oligarchy were landowners. This socio-political hierarchy has changed radically. One of the elements that made this change possible was the economic integration of the 1951-1979 period. The second generation dominant group—which received tacit support from the landowners—was the newly formed business class, which consolidated itself along with the increase in Central American trade. With this new group, a stage of exporting more than just basic agricultural products to third markets began, particularly during the 1970s.

With the death of real integration in the 1970s, the violent entry of economic fundamentalism, and in the context of the peace

generated by the Esquipulas Accords, the dominant group was again mutated. The old oligarchic class—now almost completely devoid of power—and the decadent entrepreneurial group that arose with integration were now replaced by a third hegemonic group, characterised by its control of capital and its financial power.

Currently the dominant group, it remains strong and is unified around capital. Its leaders promote a “court-like” political system, adapted to its own needs. The rest of society is left doubly marginalised, especially civil society.

The Progressive Destruction of the State

Economic fundamentalism is, in itself, a strategy aimed at controlling the world, in a new, more advanced stage than capitalism. It has been consolidating itself since the fall of the Berlin Wall, but its development and application had been underway since the 1970s, backed by the seven most powerful nations of the world, in particular following the Helsinki meeting. This neo-liberalism is also characterised by the fact that it is not based on any respectable or profound development of economic science. Instead, it is a minimalist system of formulas for consolidating capitalism, based on Keynesian practices.

Capital's total freedom of action—as the highest expression of this new stage—takes place through the progressive and aggressive elimination of all governmental norms, dispositions and regulations that had oriented investments and the use of capital. With such total and absolute freedom of action, capital can mobilise itself and invest itself as required by the interests of those who own it. The presence of such regulatory norms, and the State as such, only serve to disrupt their goals.

In our poor and politically weak nations, the task of international lending agencies and representatives of governments from which this capital originates, has basically consisted of eliminating norms that regulate capital through a system of pressures and demands known as “conditionalities.” A substantial part of this goal has been achieved, which clearly also favours local investors. What remains is to destroy the State's ability to regulate capital's behaviour and the greed of capital's owners to earn as much as possible from their investments.

The destruction of the State has taken place in many ways. First, its capacity to regulate capital is eliminated. This means that deci-

sions about investments and economic behaviour fall to investors, whose particular interests are clearly not the same as society as a whole.

Secondly, the efficient economic activities that the State had once managed are transferred to private hands. A so-called process of "privatisation" begins, which delivers private capital to the businesses and services that had previously been in State hands. In this way, society as a whole loses at least three basic aspects of social stability: support from the earnings of these businesses that had previously financed the State, a substantial change in labor relations, which are now subject to the dictates of international business groups, and the guarantee that such services are provided in a permanent and obligatory manner. Instead, privileges, advantages or benefits to specific people or groups of people are generated, who now establish prices and decide who will be covered. And, of course, other manipulations—both in the mechanisms and modalities through which purchases are made and services are provided—should not be discarded either. In any case, the earnings of these businesses remain in private hands, without generating any social benefits whatsoever.

In the third place, State services and spending geared toward fulfilling minimum social obligations are progressively eliminated. Such is the case of health care and public health services, education, social services and benefits, pensions and other state support, and the services that assist production and the provision of services to micro, small and medium scale producers. In some cases, such services have been replaced by others from private businesses, substantially raising their costs. Thus, many substitute services do not reach most of the population, who cannot pay for them. Essentially, these and other measures are aimed at reducing the tax burden of entrepreneurs.

In the fourth place, a highly discriminatory tax and fiscal policy is adopted, which adversely affects those with the least income. In effect, the adjustment of tax revenues, in addition to reducing pressure on spending, has been carried out through various strategies that benefit businessmen and investors. On the one hand, the income taxes of businesses and stockholders are reduced. On the other, as mentioned earlier, basic public spending is also reduced. Moreover, taxes on foreign trade are eliminated, and internal indirect taxes are increased. Since the State needs financing, it issues bonds with attractive interest rates to sell in the financial market. With these earn-

ings it pays interest to investors for payments they should have made in the form of taxes, without any cost whatsoever to the State. The additional consequence of all of this is that those who receive the fewest services have to pay the most to finance the State, whose real goal has become reducing the contribution of those with the greatest economic capacity.

We shouldn't fail to mention that the dominant group's use of the State as its own tool does not end with this ingenious adaptation of tax policies and evident discrimination. Most surprising is the use of direct subsidies, exonerations and exemptions, to support and finance businessmen at the expense of those who have nothing. For it is the have-nots who provide most of the State's fiscal revenues, representing increasingly higher percentages of their incomes, and who also pay the high prices of privatized businesses with significant portions of their incomes.

Labor Flexibility

Another essential element of economic fundamentalism is establishing a new system of relations between capital and labour in these already poor nations. This has been labelled "labour flexibility." Essentially, it signifies substantially reducing labour costs but not labour's contribution, in order to guarantee greater earnings (either more income or more sales at lower prices). In either case, the process being used is reducing the amount paid for services and labour, while increasing technical efficiency.

In the first place, labour's contribution to both the public and private sectors is reduced, establishing widespread unemployment. Secondly, the different forms in which workers organise and defend their rights are progressively destroyed. There are many and varied forms through which this takes place. In this way, their capacity to negotiate is reduced. Thirdly, current labour legislation is modified and weakened, or simply violated given the State's indifference. The goal is to destroy all of the advantages and benefits that have been achieved during the past 40-50 years, through a long and painful struggle. Finally, conceptions of stable employment are replaced by precarious or limited employment. Added to this are reductions in pensions, reducing the incomes of retirees. Alongside State indifference, extensive "free trade" zones and maquila industries are set up and promoted, whose labour norms violate the most elemental norms

of basic human treatment (this has been well-documented in hundreds of studies). In addition, the privatised businesses begin to restructure themselves—in the manner of private enterprises—substantially modifying labour relations.

Thus, agreed upon and constitutionally adopted labour conditions have taken on more arbitrary forms. The goal here, as indicated by the World Bank, is for workers to reach agreements only with their employers. A labour modality of high underemployment is being established, guaranteeing a large reserve of unemployed and allowing employers to negotiate extremely low salaries.

Opening Up the Market

“Opening up the market” should be understood in terms of two key aspects: the elimination of protective barriers for internal production (tax barriers or others), and the elimination of price regulations. This last aspect is also known as price deregulation.

In the first case, the most important effects observed have been the national and regional market’s access to products from third countries, and prices more closely determined by exporters. In the second case, the producing company is given the discretion to determine the price of his product in the market, without any State interference.

As a result, a range of phenomena have occurred, the most noteworthy of which are: the elimination (through sales to third parties or bankruptcy) of national and regional enterprises, and an increase in the prices of goods, as a result of the influence that businesses exert on the market. The main consequences of this situation is reduced employment, the promotion of production in third countries, the formation of monopolistic or oligopolistic structures, and the absolute freedom given to businesses in determining the prices of goods, without imposing any social criteria whatsoever.

Both in the case of privatisations and here, the establishment of large international consortiums is being promoted, which control the production, distribution and marketing of goods. Simultaneously, the internal operations of economies are becoming more and more dependent upon foreign investments. In addition, labour relations tend to adapt to the newer and stronger interests of businesses. Central American economic integration is destroyed and eliminated. Thus, any capacity for joint negotiations with third parties is lost,

something which could have been consolidated if integration had continued.

The Weakness of Civil Society

The strength exercised by this political group—which uses the State as a personal tool to benefit its interests and those it represents—makes the State an instrument of the dominant group, and not an instrument serving the subsistence and stability of all of society. As a consequence, the State becomes a new instrument of today's dominant group, subjecting the rest of society to its interests. This situation, posing the State against its citizens, is the seed of State impunity vis-à-vis civil society and its discriminatory treatment of this sector. It becomes neo-liberalism's repressive tool par excellence. Thus, just as in the era of a landowning oligarchy (when the mechanisms for maintaining the system were essentially armies and brutally repressing the peasantry), or the period of entrepreneurs and integration (protected by a combination of State forces and paramilitary groups exercising all forms of terror), a new, more sophisticated and effective form of directly controlling civil society has been introduced as our century comes to a close: economic repression and poverty. We must take a closer look at these mechanisms that will be used in the 21st century to guarantee the hegemonic role of the new dominant class—the financial group—in the societies of Central America.

Civil society manages a series of conflictive relations that do not provide access to mechanisms linked to power structures, which would allow it to influence the social structure that seeks its exclusion. The individualised nature of the struggles of each organisation or centre—based on the immediate interests being pursued, or the group's own survival (social or financial), and the generalised conception that their successes surpass their aspirations—keep civil society from forming any effective union. National realities continue to weigh heavily on this sector.

For their part, third party interests play a direct and permanent role in maintaining this situation. These interests include political parties, international political organisations, external non-governmental organisations that provide financial and technical support, and governments themselves. Also worthy of mention—as we have seen in some of the oldest organisations in Central America—is the

influence of personal preferences, corruption (that goes unchallenged) and hegemonic control that impedes internal democracy.

SOME ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Although what is written here is just a selection of some key elements that characterise the Central American reality today, some general consequences of these should also be considered.

Firstly, the new style of development—based on economic fundamentalism—generates a new, vicious circle in which poverty and wealth are simultaneously increasing. Thus, what is actually taking place is an increased concentration of wealth.

The concentration of wealth is reaching such extremes—due to this new dehumanising social style—that it is generating a new power among the dominant class that incites social and political positions which could be called a sort of pre-fascism, in the sense of seeking the consolidation of this very favourable model through increasingly stricter forms of controlling social behaviour.

Added to this is the fact that destroying the State's role as "social stabilizer" not only generates a system through which the State becomes an easily malleable tool in the hands of the dominant group, but also becomes an instrument of social control that favors the system. Even when it appears that this is not a new phenomenon, what is in fact noteworthy is the perfecting of social repression. In essence, the forms used today are much more sophisticated than those of the past. Reductions in employment, reductions in real incomes, the elimination of services, the violent contraction of education and basic health services, and the continued destruction of modalities of social organisations are some of these negative elements.

It is this outlook for the 21st century, in fact, that leads us to ask "what is in store for us?"

CONCLUSIONS

These reflections can serve as an initial contribution to a fuller debate about the future of civil society in Central America. Also, they can help design possible scenarios within which civil society may hope to create a new form of behaviour and advocacy in the future.

In the past, one scenario was civil war. It was the option of "armed-struggle." The author believes that this route is not viable

given current and future circumstances, and for a variety of reasons. Among these are the political accommodation of insurgent groups, the search for new forms of social participation in a context of peace, and the collective need to return to tranquillity and recover from the wounds of war. Moreover, an international climate supporting this type of alternative no longer exists.

A second scenario could be that of accepting the situation as it is, without any sort of change, accommodating survival to the alternatives offered by the cyclic fluctuations of economic fundamentalism. Choosing this option would mean tacitly accepting a modality that could be labelled the “collective subservience” of the 21st century.

A third scenario could be created around some experiences observed throughout history, and which have reappeared in more recent times. This would be deliberate and calculated peaceful resistance to the established system. Today, there are many ways this can be achieved, from the substantive political experience of Mahatma Gandhi in India, to groups that reject State authority in Denmark, and today in Australia. This alternative of progressive civil disobedience and the consolidation of alternative forms of survival—without any relationship whatsoever to the “system” and the State—could be designed and organised according to the idiosyncrasies and possibilities of Central American civil society. Its application could take some time, until a unified regional civil society is consolidated and alternative systems of controlling and exerting social behaviour can be created and projected.

A fourth scenario, which would grow out of the current behaviour of most grassroots organisations in the region, would consist of forming a regionally organised civil society power bloc, to establish substantive mechanisms for directly and effectively influencing the rest of society and the State. Even in its incipient state, and constrained by numerous problems, this (along with the previous scenario) would be a reasonable option.

It would be interesting to explore the possibility of either establishing or recognising an already existing scenario that has the characteristics—in one form or another—of these last two alternatives. Essentially, a range of modalities for pressuring and influencing could be used—with a wide spectrum of resistance and alternative actions—to achieve specific goals. This appears to be not only a more reasonable alternative, but also one with a higher degree of viability.

What is important now is that any scenario that we create be based on two, essential, substantive elements: a unified regional civil society, and the generation of a substantial capacity to lobby and exert influence.

** This document was presented at the Meeting of CRIES's Central America Centers, which was held in Guatemala City in July, 1999.*



Mexico and the Greater Caribbean

Traditional Governmental Arenas, and the Citizen Alternative

ROSALBA ICAZA

International relations between Mexico and the Greater Caribbean nations during the past 70 years—that is, during the post-revolutionary period—have had their ups and downs, though Mexico has generally tended to neglect its relationship with these nations. In defining its foreign policy agenda, Mexico has prioritized bilateral relations with the United States, and concentrated governmental activities on the strongest Latin nations such as Argentina, Brazil, Chile and Colombia, further reinforcing this neglect.

Although Central America represents a natural zone for Mexican influence and leadership in relation to integration (not just economic and trade integration, but also social given common cultural and historical backgrounds), as a medium-sized power in the region (González, 1983) it has clearly oriented and defined its activities in the zone according to the criteria of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the first stage in the US trade integration project.

In contrast, there are few cultural, political and economic historical links that have facilitated Mexico's relationship with the nations of the Greater Caribbean, with the exception of Cuba and Haiti with whom—like the countries of Central America—it shares some cultural and social similarities.

At this point in time, Mexico's international relations with the Greater Caribbean are being defined within a context of forming "blocs", and are characterized by a certain polarization of the regional integration process (Serbin, 1998). On the one hand we have NAFTA, and on the other the MERCOSUR, as basically governmental and entrepreneurial initiatives. Moreover, at the beginning of the decade, the Association of Caribbean States (ACS) emerged in the Caribbean Basin as an initiative to expand and deepen the *entire* Caribbean region's integration with Central America, and eventually with the regional powers: Mexico, Venezuela and Colombia (Serbin, 1998).

CATEGORIES FOR ANALYZING MEXICO'S INTERNATIONAL RELATIONS WITH THE GREATER CARIBBEAN

International relations, as a discipline that studies the international context and its dynamics based on global views and proposals, is distinguished by having "been born and developed in direct relation to changes in international society, which has progressively lost some of its previous characteristics and has assumed new ones, giving rise (continuously) to a new international society (Del Arenal, 1993)." In this dynamic of change, Mexico's international relations with the Greater Caribbean can be characterized according to this discipline's basic categories of analysis: actors, processes and results. In this article, two main variables will be highlighted: *time and actors*. Our characterization will be based on these.

With respect to the time variable, the elements that have defined the traditional sphere of relations will be presented, emphasizing the United States' presence and actions in the region, key moments in Mexico's national development, and the global dynamics of the international context.

With respect to actors, we will highlight two arenas—two actors—which have influenced international actions in a parallel manner: the Nation-State, through its foreign policy, and international civil society, through citizen diplomacy. For the purpose of this ar-

ticle, we will focus on the role played by these actors during the past two decades of Mexico's relationship with the Greater Caribbean. This does not imply that these are the only actors, since they share the political arena with transnational companies, armed groups, political parties, etcetera. However, they are key actors who help to explain the recent "alternative space" that has been created in opposition to traditional governmental spheres of action.

Once these elements have been established, we will characterize Mexico's international relations with the Greater Caribbean according to two different theoretical viewpoints, so that each of the variables identified will correspond to a specific theoretical framework.

To analyze Mexico's governmental policies toward the Greater Caribbean, the classical theory of international relations provides a precise orientation for the privileged space held by the Nation-State and its power dynamics in the international arena of political action.

From a classical-realistic viewpoint, the history of State actions within the foreign policy realm is relevant, as is the distribution of power amongst key actors at different moments in history. This theoretical framework allows us to center our analysis in both the Mexican government's internal and external contexts, which define the nature of its relationship with the Greater Caribbean region.

The United States' geopolitical influence plays a key role in determining the "criteria" for Mexico's foreign policy actions. Through this, the weight of US national interests—defined in terms of economic, political, military and ideological power, as well as its position as a hegemonic power—is projected onto its bilateral relations with Mexico and, accordingly, onto the Mexican government's actions toward the Greater Caribbean.

Moreover, given the current dynamic of Mexico's international relations with the Greater Caribbean, where the presence of Nation-States—represented by governments—converges with international civil society¹—in a more relevant and marked form (albeit not very visibly in past relations)—it is possible to employ theoretical approaches that differ from those used by classical realism. Institutional neoliberalism and critical theory make room for international phenomena—such as the globalization of interdependencies and the diversity of thematic interests—to respond to diluted national interests. Above all, they allow us to understand international civil society actions that are manifested through citizen diplomacy and the

creation of international relations within the sphere of transnational actions.

Thus, in a parallel manner, this article will discuss two spheres where Mexico's international relations with the Greater Caribbean can be characterized: traditional governmental arenas, and the citizen alternative.

THE TRADITIONAL SPHERE OF MEXICO'S INTERNATIONAL RELATIONS WITH THE GREATER CARIBBEAN.

A classical approach to the theory of international relations utilizes the Nation-State and its foreign policy as the fundamental elements for analyzing and defining this first sphere of relations, which we will call the "traditional sphere." The dominant shadow cast by the United States as it exerts its power in the region will be a fundamental element in determining the direction of Mexican foreign policy. This came more clearly into focus in 1988, at the moment when "Mexico's non-foreign policy" was consolidated (Garza Elizondo, 1990).

In this section, our analysis will center on the characteristics of Mexican foreign policy, as the framework for actions toward the Greater Caribbean. It is important to note that for purposes of international relations, the Mexican government defines the Caribbean as "the insular arch formed by the Greater Antilles and the continental portion made up of the Yucatan coast, Quintana Roo, Belize, Central America, Colombia, Venezuela, Guyana, French Guyana, Suriname, the Turks and Caicos;"² later, in addition to the insular zone and Central America, this would include the regional powers, with Mexico and Cuba playing key roles.

This official Mexican perception of the Caribbean contrasted with that of the United States, who in geographical terms only considered the "Caribbean Basin" as Florida, the insular Caribbean zone, Central America, Guyana, French Guyana and Suriname, while it excluded the regional powers (Mexico, Colombia, Venezuela and Cuba).

In this traditional sphere, some of the main characteristics that have distinguished Mexican foreign policy over time might be called "enlightened moments," (Pellicer) such as the expropriation of oil deposits, the position toward the Cuban Revolution, third-world leadership and opposition to nuclear proliferation. However, exter-

nal dynamics and events have been joined by a certain reactive character—a passive and non-proactive character lacking continuity, going beyond dependency on North American orientations and direction—that has influenced decisions involving the region. We should also add to this the strong attachment to “the fundamental principles of Mexican foreign policy”—non-intervention, peaceful solutions to controversies, legal equality between nations, the self-determination of peoples, etcetera—that have characterized the rhetoric and discourse of Mexican foreign policy.

The Mexican government’s international relations with the Greater Caribbean region have been based on the historical context and specific trends that have characterized the post-revolutionary period.

THE FIRST STAGE OF OFFICIAL RELATIONS: 1930-1958

MEXICO IGNORES THE GREATER CARIBBEAN

According to Jurgen Buchenau (Buchenau, 1996), Sandino’s exit from the Yucatan Port in 1930 signaled the end of an era of Mexican interest in the Caribbean and Central America, an interest that had been generated by the revolutionary process and the consolidation of nation States in the region.

In subsequent decades, the Mexican government would not seek opportunities to play an active role in the region, instead finding itself involved in building an internal consensus around its post-revolutionary project. This situation did not respond solely to Mexico’s own particular dynamics, but rather a historical moment when domestic policies were favored over world politics.

Buchenau considers the years between 1930-1944 as “an inactive time for official Mexican policy in the region,” since foreign policy was oriented toward that moment’s priority: bilateral relations with the United States.

In these decades, Mexican foreign policy would be dominated by a rapprochement with the US government—both friendly and non-friendly—at specific historical moments: the Great Depression, the oil expropriation of 1938, the expanded framework for trade and migratory negotiations provided by the Second World War, and renewed involvement in a regional system under the guise of the North American “good neighbor policy,” which proscribed the United States’ use of force in Latin America.

Mexican foreign policy would be designed according to world dynamics and the requirements of the current context. Such was the case of President Lázaro Cárdenas, who responded astutely to a world political situation that saw the rise of the masses and popular and socialist regimes.

Within Mexico, the 1929 crash had eroded popular alliances; reestablishing these was an essential task for the Cárdenas administration. The oil expropriation, the agrarian reform, and nationalist policies—despite their social content and the political and ideological consequences they would pose for modern-day Mexico—allowed the process of import substitution and the nation's industrialization to take place, but above all enabled new internal alliances to be restored and generated. Even authors such as Javier García Diego and Lorenzo Meyer³ view the Cárdenas foreign policy as a break with the traditional principle of neutrality, in favor of a more openly critical stance vis-à-vis the world situation.

Added to the internal factors conditioning different traditional spheres during this stage was the United States' use of the global conflict to promote the creation of a Pan-American system, as a consequence of the post-war situation. This idea was promoted during a series of meetings involving all of the countries of the region, and culminated with the creation of the Organization of American States (OAS) in 1948. This US achievement did not specifically refer to military intervention, but essentially codified its hegemony throughout the continent.

The Mexican Government celebrated this initiative as the instrumentation of a long desired Pan-American multilateral forum, where international disputes would be resolved. However, the OAS was constituted as a North American vehicle for its new interventionist policies during the Cold War. As a result, it was the central element in constraining Mexican policies and initiatives. We need only remember Cuba's expulsion and the solitary defense of the Mexican Government. Moreover, the existence of stable dictatorships cleared the way for armed US intervention, and made it impossible for the Mexican government to voice any objections.

During these years, the positions of Mexico and the United States grew increasingly similar. Such was the case during the Avila Camacho presidency (1940-1946), whose policies of reducing land distribution, slowing the nationalist economic policies promoted by Cárdenas and eliminating the left-wing's influence within the ruling

party signified great stability for North American capital. All of this took place within an anti-Communist context that once again became official Mexican policy. Later, President Miguel Alemán (1946-1952) would continue US President Truman's discourse about containment, and proclaim communism incompatible with Mexican politics.

Neither of these two administrations continued the Cárdenas project, since the post-war international climate left no room for a proactive or autonomous Mexican foreign policy, except for the disenchanted Mexican left that expressed itself through artistic and social movements.

What is true is that Mexican actions in foreign arenas would be constrained by an international dynamic in which Washington assumed leadership of the Pan-American institutions it had created. Internally, it would be constrained by the nation's need for industrial development. There was no room for thinking about the Caribbean and Central America.

THE SECOND STAGE OF OFFICIAL RELATIONS (1960-1978): A RENEWED GOVERNMENTAL "ACTIVISM"

In the 1960s and 1970s, in a world characterized by strong social agitation and the existence of two different development projects that would generate a period of great international activism, the Mexican government's foreign policy toward the Greater Caribbean began to change.

In 1960, the López Mateos administration (1958-1964) began to send a clear message: Central America and the Caribbean were important to Mexico. This was a time when Mexico was seeking greater diversification of its international trade relations, and even promoting Latin American integration.⁴ By 1967, the change in North American policies in Central America and changes in national policies facilitated the resurgence of Mexican international initiatives. Internally, the López Mateos administration began a period of social and economic reform. From 1958 to 1964, large amounts of land were distributed, women gained the vote, and foreign electric companies were purchased. Different authors indicate that this was an assertive, affirmative and active period in Mexican foreign policy.

Foreign policy took on a more proactive character, in the sense that Mexican positions maintained a certain autonomy, responding

to the expectations of Mexican citizens despite the nation's dependency upon the United States (Ojeda, 1990). This explains the third world militancy that consolidated the change from "traditional and conservative Mexican diplomacy to a multilateral diplomacy." (Anguiano, 1977).

By the mid-1970s and early 1980s, Mexico's position as a regional power was confirmed. Its foreign policy acted as a buffer between the North and the South, helping restrain hegemonic policies. This was possible because the shape of the world was changing in the 1970s, but also "because there was a willingness to act as a regional power." (González, 1983) It was a period that was easy to conceive of but difficult to maintain (Ojeda, 1990), above all because Mexican foreign policy during this stage sought to maintain stability and political legitimacy internally, while avoiding direct confrontations with the United States externally. It was the United States, in fact, who during the Luis Echeverría administration (1970-1976) placed limits on Mexican efforts to promote solidarity in the underdeveloped world and diversify the export market (Pellicer).

Given these conditions, this "assertive and active" policy actually only existed in discourse. This was confirmed, for example, during the López Mateos administration (1956-1964) when Mexican sympathy toward Fidel Castro and his revolution were identified as a risk factor for bilateral relations with the United States. Mexican policy that had supported the Cuban revolution was transformed into defending "the international principles of Mexican foreign policy." (Buchenau, 1996).

Finally, "as was the case during the Porfirio Díaz regime and revolutionary periods, Mexico astutely shifted its diplomacy in response to US pressure," (Buchenau, 1996, p.199) consolidating its *de facto* dependency—though never altering its discourse or rhetoric—in accordance with the direction of US policy in the Greater Caribbean.

As in the case of López Mateos, the Echeverría policy was based on the dominating rhetoric for the purposes of internal cohesion, but never in action. This explains the good relations maintained with dictators such as Somoza in Nicaragua, despite their conflicting discourses.

The Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) and Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) administrations would confront the height of the bipolar international crisis; thus, a re-dimensioned diplomacy was

needed, above all one that would project bold decisions, independent of the United States, to calm internal social pressures. We should remember that during both of these administrations, the Mexican government responded to social agitation with internal repression and censure. Luis Echeverría saw the need to make substantial concessions to those promoting reforms (who sought much more radical changes than those he was willing to offer) while also shifting attention through his foreign policy, to help control internal discontent.

THE THIRD STAGE OF OFFICIAL RELATIONS (1978-1999):
FROM AN ACTIVE POLICY TO CONSOLIDATING MEXICO'S
"NON-FOREIGN POLICY".

The year 1979 was characterized by the sensational rupture between the Somoza dictatorship and the José López Portillo (1976-1982) administration. At that moment, the Mexican government was in a favorable position to pursue an active foreign policy in the region, particularly given the favorable conditions for oil exporting nations.

This decade was most known for the Mexican government's support to Central America, recognizing the Sandinistas in Nicaragua as a legitimate government, and consolidating a bloc opposed to North American intervention in the zone due to favorable geopolitical and geo-economic (oil) circumstances. The Mexican position also benefited from US President Jimmy Carter's recognition of the human rights violations committed by the Somoza regime.

With the election of President Reagan—framed by the second Cold War that flared up the bipolar confrontation—the Nicaraguan Sandinistas were viewed as subversives. In Mexico, the José López Portillo administration funded and promoted talks between the Sandinistas and the United States. Once again, Mexico was able to carry out a proactive policy.

After 1982, the conditions favoring this proactive foreign policy disappeared. The United States decided to pressure the Sandinista government at a time when a drop in oil prices had thrown the Mexican economy into a downward spiral. Internal conditions contradicted Mexico's foreign policy activism, and the arrival of the Miguel de la Madrid presidency (1982-1988) ended the previously promoted foreign policy interests and principles. "Mexico began its return to the traditional boundaries of foreign policy." (Castañeda, 1988, p.183). Such is the case of the Contadora Group, formed initially by

Mexico, Venezuela, Colombia and Panama as a mediator between the United States and the Sandinistas which with time, would give way to a free trade zone project (the G-3, or the Group of Three).

A transition began in the international arena during the De la Madrid administration, where the United States and Central America would play key roles.

The "peace process" in Central America represented a high point for Mexico's multilateral policy toward the region. This quality of Mexican policy would collapse, and be replaced by the theme of the debt and a more "timid" attitude on the part of the government.

The debt and the Mexican initiative to unilaterally negotiate it "increased International Monetary Fund (IMF) and World Bank influence, enabling them to impose an economic program in Latin America known as the Washington Consensus. This was focused on policies to stabilize the means of production and large public enterprises, to free capital flow and international trade, and also to deregulate private activities and fiscal austerity. These formulas would be applied throughout a process of negotiation and re-negotiation," (Saxe, 1998, p.109), in a unilateral manner due to the confused state of the Mexican government.

CONSOLIDATING MEXICO'S "NON-FOREIGN POLICY"

The beginning of economic deregulation promoted by Miguel de la Madrid, and its expansion with Carlos Salinas (1988-1994), situated Mexico in a new position vis-à-vis the region.

Carlos Salinas developed the Mexican government's foreign policy based on an erroneous reading of the international climate (Golab, 1993). He argued that the economic integration—logical, quiet and explicit—that already existed with the United States assumed the need to seek formal guarantees and regulations for joint trade. During this administration, NAFTA was proposed as the only option, and its approval was hastened⁵ without negotiating the key sectors or forms of investment. This could have avoided spending such huge political capital, and perhaps compromising national sovereignty to such a great extent.

The consequences of NAFTA's passage should be evaluated on two levels. In terms of Mexico's foreign policy and the characterization of traditional spheres of action, it represented an accentuation of interdependency—or rather dependency—in that it generated new

channels for interchange and vulnerability in bilateral relations with the United States. "With NAFTA, we became a sphere of influence that could be categorized as an informal protectorate." (Saxe, 1998, p.105). With respect to present and future relations with the Greater Caribbean, the costs should be assessed in terms of Mexico's rupture of any non-trade commitments with the region.

Ernesto Zedillo's current government "has adopted economic and international policies that not only preserve the US guidelines accepted during the De la Madrid and Salinas eras" (Saxe, 1998, p.106), but also consolidate a new relationship, a new emphasis and a new priority: Mexico's economic presence in the zone through trade, but in a manner that favors US interests and its integrationist agenda.

AN ALTERNATIVE SPHERE OF MEXICAN INTERNATIONAL RELATIONS WITH THE GREATER CARIBBEAN

The second sphere of Mexican relations with the Greater Caribbean is conditioned by the current political/economic climate and dynamics,⁶ which have promoted alternative forms of actions by international civil society.

Along with the defining elements of the new world order—such as globalization, increasing interdependency, the unlimited reach of the mass media—that have questioned the validity of traditional institutions such as the Nation State, new actors have emerged on the world scene who make up what we refer to as the "international civil society."

This international civil society is comprised of "citizens organized as such (in voluntary associations, social movements and informal groups) who act in benefit of common interests (with a common objective), in public and social arenas, at the national and/or international levels, without reaping personal benefit, without dependency upon governmental institutions, and without adhering to the line of a particular political party."

"It is not a homogeneous or unified structure, but instead a non-territorial transnational force that acts through citizen diplomacy. In other words, the actions of private citizens of a particular country and the groups or associations to which they belong, [which] implies assuming roles that were previously considered the exclusive domain of governmental actors, that are carried out in foreign or transnational realms." (Thourup, 1993).

Thus, we are referring to an alternative sphere of action where international civil society plays an active role, converging around actions to influence public policies, and strengthened and consolidated by the elements of a new international reality.

The restructuring of traditional institutions such as the State and its sovereignty, the reformulation of "national interest" as a concept defining international governmental actions vis-à-vis particular themes of interest that depend upon new priorities—drug traffic, integration, trade, democracy—and above all the Mexican government's adaptation to the new dynamics of contemporary international relations has signified a marked emphasis on cooperation with the United States in its relations with the Greater Caribbean, for reasons that are not necessarily based on its own priorities.⁸

Thus, Washington's hegemonic pressures have grown stronger, since in principle all of America—both Latin and Non-Latin—is the region where the US faces the challenges posed by regionalization processes taking place in other parts of the world, particularly Western Europe.

Given the conditions that determine the Mexican government's actions and the characteristics of the international context that have been highlighted here, a traditional approach to analyzing Mexico's relations with the Greater Caribbean is insufficient for assessing civil society's sphere of "alternative action." This is confirmed when international civil society—as an actor that influences the establishment of international regimes⁹ (supranational consensus and norms for social, political, economic and cultural behavior)—is incorporated into an analysis of the region's international relations.

International civil society utilizes a logic of communicative interaction¹⁰ based on social agreement, but does so in the transnational arena through international structures created by wide-reaching and formal forums—such as the Women's Summit in Peking, the Social Development Summit in Copenhagen, the Río Summit on the Environment, the People's Summit in Chile, the Civil Society Forum of the Greater Caribbean—or more non-formal frameworks—such as citizen diplomacy in Europe and the United States in relation to Chiapas, the Mexican national consult on indigenous rights with participation from civil society representatives from other countries, and Latin American and European citizen diplomacy in relation to the Pinochet case.

As a counterpart, the traditional sphere of Mexican relations

with the Greater Caribbean lacks autonomous proactive participation, since any participation takes place within a pragmatic and instrumental logic dictated by commercial priorities.

Thus, the Mexican state's agenda may be characterized by its disarticulation, its dependency and its passivity, and the consolidation of "a non-foreign policy" in relation to key themes affecting the region and the entire continent: drug traffic, immigration, poverty, unemployment, and the external debt. The Mexican State has demonstrated its incapacity to act independently of US directives or constraints. Moreover, having manifested that its main priority is dominating trade in the region, it is clear that it is not even interested in doing so.¹¹

According to González Souza, added to this foreign policy logic is a reaction that cedes our sovereignty under the pretext of modernization and tends to exacerbate polarization and backwardness (González Souza, 1998).

In this way, two parallel agendas exist: that of Mexican civil society—which tries to influence change through the creation of international consensus—and that of the Mexican government, at the service of the United States. A duality of agendas that are linked to and oriented by contrasting and non-complementary positions on integration, debt elimination, immigration, the environment, human rights, social development, Chiapas, and gender.

While the Mexican government constructs a strategy based on pragmatic criteria, Mexican civil society and that of other countries raise the possibility of change through their involvement in international circles and the media.

In response to the subduing and dominant dynamics of the international context, we find that international civil society is capable of transforming and providing critical orientation. As an agent of social change, it proposes an alternative globalization: "democratic, non-elitist, humanist, non-mercantile, ethical and non-immoral. A citizen globalization, from below." (González Souza, 1998).

IN CONCLUSION

To allow a characterization of Mexico's international relations with the Greater Caribbean in a context that requires understanding not only the past and present, but also the elements that condition the Mexican government and the other governments of the region, and the

other influences at play (arenas and actors), it is essential that we consider the two main variables proposed in this work: time and actors.

Both categories allow for an adequate reading of the direction of international relations in the region. Thus, we may affirm that while traditional relations will need to be specified in light of the "determinant" relationship between the United States and Mexico and the Greater Caribbean, a citizen alternative is being consolidated that challenges the Mexican government's current emphasis on an economic presence in the zone via trade, and favoring US interests and its integration agenda.

Thus, it is national and international civil society which can create an alternative sphere for transnational action, and for rethinking not only what type of relations Mexico should develop with the Greater Caribbean, but rather how to expand the social dimension of international relations in an arena that has traditionally been defined in terms of power. In this way, it can link with a regional integration project centered on our communities, our people, and our cultures, through creating consensus at the local and international levels.

NOTES

1. Using the classical conception of civil society as defined within a Gramscian theoretical framework, the possibility of theorizing about an international civil society would assume the existence of a political society of the same nature. However, the manner in which the term "international" is used here to typify civil society should be understood in two senses: a) from the broadest view of international, which assumes the relationships between all actors that make up the international reality (territorial and non-territorial), in contrast to the traditional view which would focus on the relationships between States (political societies) defined according to territorial terms; b) In the second place, we think of civil society from a theoretical posture—also Gramscian—in terms of the consensus generated in public opinion. Following this logic, we broaden this in terms of an international order—or international consensus—that promotes changes in international relations.

2. Secretary of International Relations. Protocol of Activities for Mexico and the Greater Caribbean. Mexico, D.F., 1997.
3. Historia Mínima de México. Colmex.
4. This took place in a competitive and not complementary context that would be sustained by cooperation to promote regional integration.
5. We remember President Salinas de Gortari's personal interest in signing NAFTA, with the main purpose of seeking reelection in Mexico, or alternatively obtaining the WTO's presidency.
6. Although this sphere of relations was not absent in the past for this reason, for purposes of this work we are examining most recent times, given their relevance.
7. This definition was presented by Dr. Enrique Brito at the Seminar on Regional Integration and Civil Society in Central America and the Caribbean, Mexico, March, 1998.
8. We refer to the example of the need for a framework agreement about immigration in NAFTA, a subject that was completely left out of negotiations.
9. The authors of institutional neoliberalism imagine the existence of international regimes as a grouping of interdependent relations which frequently occur within the networks of rules, norms and procedures that regulate behavior and control its effects. They also indicate that international regimes are groupings of norms, rules, and procedures for making decisions—either implicit or explicit—around which the expectations of actors converge, in an area of international relations. Finally, it is noteworthy that international regimes have the function of restricting and guiding States and their conduct, according to common norms and rules, allowing for orderly conduct. See Baldwin, David A. (ed.) (1993): *Neorealism and Neoliberalism. The Contemporary Debate*. N.Y., Columbia University Press. The following articles: Stein, Arthur: *Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World*; Axelrod, Robert: *Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategies and Institutions*; Minler, Helen: *The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique*.
10. This logic may be found in the conceptual framework of Jürgen Habermas's theory of communication, where instrumental action and communicative interaction are the planes where different social relations are understood. A functional rationality predominates in instrumental action, in other words a rationality oriented by a determined means of obtaining a specific end. Instrumental action is understood as the State and market spheres, oriented toward power and utilities, respectively. The goal is to integrate the system where the two will interact and thereby guarantee their reproduction. Communicative interaction

guided by a logic of understanding and agreement develops a rationality where the reciprocal expectations of conduct—inter-subjectively understood and recognized—generate social integration. International civil society is situated in the logic of this action, achieving the objective of social integration through its organizations that act with consensual rationality.

11. We need only remember the strategic and economic “take off” during the Carlos Salinas administration, linked to free trade agreements and treaties signed with the Greater Caribbean, the Pacific, the United States and Europe. These included:

- The Complementary Economic Agreement between Mexico and Chile, 1991.
- The Economic Liberalization Agreement with Costa Rica, Colombia, Venezuela, and Bolivia, 1994.
- The Caribbean Development Bank.
- The Third Generation Framework Agreement on Cooperation with the European Union, 1991.
- The General Treaty on Friendship and Cooperation with Spain.
- The North American Free Trade Agreement (NAFTA) in 1992.
- Association with the OCDE in 1994.
- Member nation of the Pacific Basin Economic Council, the Pacific Economic Cooperation Council, the Asia-Pacific Economic Cooperation Mechanism, and the Asia-Pacific Cooperation Forum.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Alponte, Juan María (1993): *La política exterior de México en el Nuevo Orden Mundial. Antología de principios y tesis*. Mexico. Fondo de Cultura Económica.
- Anguiano, Eugenio (1977): “México y el Tercer Mundo: racionalización de una posición,” in: *Foro Internacional*, Vol. XVIII, Num. 1 (69), July-September, 1977, pp. 32-53.
- Axelrod, Robert (1993) “Achieving cooperation under anarchy: strategies and institutions,” in: Baldwin, David A., (ed.) *Neorealism and Neoliberalism. The contemporary debate*. N.Y. Columbia University Press.

- Baldwin, David A., (ed.) (1993) *Neorealism and Neoliberalism. The contemporary debate*. N.Y. Columbia University Press.
- Buchenau, Jurgen (1996). *In the shadow of the giant. The making of Mexico's Central America Policy, 1876-1930*. University of Alabama.
- Castañeda, Jorge G., & Pastor, Robert A. (1988) *Limits to friendship. The United States and Mexico*. New York, p. 183.
- Castañeda, Jorge G., (1996) "América Latina y la terminación de la guerra fría: un ensayo sobre la frustración", in: Lowenthal, Abraham F. and Treverton, Gregory F (comp). *América Latina en un mundo nuevo*. Mexico. Fondo de Cultura Económica.
- Del Arenal, Celestino (1993) *Introducción a las Relaciones Internacionales*. REI, Mexico.
- Golab, Stephanie R., (1993) "¿Un nuevo orden internacional? La decisión de México respecto al libre comercio". *Quarterly Report, CIDE*, Vol. III, Num. 1. United States.
- Garza Elizondo, Humberto (1990) *Política Exterior de México*. El Colegio de México.
- González, Guadalupe (1983) "Incertidumbres de una potencia media regional: las nuevas dimensiones de la política exterior mexicana", in: Olga Pellicer (comp.) *La política exterior de México: desafíos en los ochenta*. Mexico. CIDE.
- González, Guadalupe (1989) "Tradiciones y premisas de la política exterior de México". In: Rosario Green and Peter H. Smith (comps.) *La política exterior y la agenda México - Estados Unidos*. FCE, Mexico.
- González Souza, Luis (ed.) (1998) *Reconstruir la soberanía. México en la Globalización*. Instituto de Estudios de la Revolución Democrática/ Fundación Demos, Mexico.
- Heller, Claude (1990) "Tendencias generales de la política exterior del gobierno de Miguel de la Madrid", in *Foro Internacional*, Vol. XXX, Num. 3, January-March, 1990, pp. 380-397.
- Méndez, José Luis (comp) (1998) *Organizaciones civiles y políticas públicas en México y Centroamérica*. Miguel Angel Porrúa, Mexico.
- Minler Helen (1993) "The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique". In: Baldwin, David A., (ed.) *Neorealism and Neoliberalism. The contemporary debate*, N.Y. Columbia University Press.
- Palmer, Ransford (ed.) (1997) *The repositioning of US-Caribbean Relations in the New World Order*, United States.
- Ojeda, Mario (1990) *Principios de la Política Exterior de México*, Colmex, Mexico.

- Pellicer de Brody, Olga. *Luces y Sombras de la Política Exterior de México*. Different sources.
- Rosas, María Cristina (1996) *México ante los procesos de regionalización económica en el mundo*. UNAM, Mexico, p.153.
- Saxe Fernández, Carlos (1998) "Redefinición de los vínculos con Estados Unidos". In: González Souza, Luis. (coord.) *Reconstruir la soberanía. México en la Globalización*. Instituto de Estudios de la Revolución Democrática/ Fundación Demos. Mexico, p.109.
- Secretaría de Relaciones Exteriores (1997) *Protocolo de Actividades de México y el Gran Caribe*. Mexico.
- Serbin, Andrés (1998) "Situación actual en el proceso de integración regional. Visión general y perspectivas". Presented at the seminar "Civil Society and Government.". Mexico, May, 1998.
- Serbin, Andrés y Jácome, Francine (1998) *Sociedad civil e integración regional en el Gran Caribe*. Venezuelan Institute of Social and Political Studies / Regional Coordinator for Economic and Social Research / New Society. Caracas, Venezuela.
- Stein, Arthur (1993) "Coordination and Collaboration: regimes in an anarchic world". In: Baldwin, David A., (ed.) *Neorealism and Neoliberalism. The contemporary debate*, N.Y. Columbia University Press.
- Thourup, Cathryn L., (1993) *Redefining Governance in North America: The impact of Cross Border Networks and Coalitions on Mexican Immigration into the United States*. Rand Corporation, DRU-219, March, 1993.
- Valero, Ricardo (1985) "Contadora: la búsqueda de la pacificación centroamericana". *Foro Internacional*, Vol. XXVI, Num. 2 (102), October-December, 1985, pp. 468-480.



Rio de Janeiro Declaration

CIVIL SOCIETY FORUM FOR EUROPEAN,
LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN DIALOGUE

The Civil Society Forum for European, Latin American and Caribbean Dialogue was held on June 28,29, 1999 in the city of Rio de Janeiro, Brazil. The Forum approved the following declaration, expressing the position of social and labour organisations of Latin America and the Caribbean with regard to the Leaders' Summit:

1. In repetition of the model of their previous meetings, the European, Latin American and Caribbean Leaders' Meeting, held simultaneously, reduced the people of our region to being mere spectators of official decisions. There is no justification for events with such international scope not to incorporate representative bodies from civil society. The foundations of any agreement involving Latin America, the Caribbean and the European Union must be anchored in trans-

parency, participation and information available to the general public as the basis for cooperation amongst our peoples. The official declarations on themes such as education, poverty eradication, development cooperation and protection of social rights which are habitually adopted in these governmental meetings tend to remain dormant while the trade negotiations advance, driven by the interests of investors and the transnational corporations.

2. Genuine international cooperation is the hallmark of democratic societies and must be characterised by promotion of human, economic and social rights, promoted alongside the broadening and deepening of democratic participation. International rights to organise freely and negotiate collectively must be respected. Our peoples, who preserve a strong cul-

tural and historical identity, consider putting an end to social exclusion and poverty as the principle goal to be attained. International cooperation must promote sustainable development, which necessitates protection of the environment and a broadening and deepening of the rights of working men and women. Economic logic must take social justice into account. This model of cooperation and international solidarity necessitates consideration of the following aspects:

Free trade is creating more social and economic exclusion. Intellectual property rights and services are the new sectors incorporated by international capital. Any agreement between the European Union, Latin America and the Caribbean must give centrality to the right to economic and social development. The asymmetries that exist among the diverse countries must be taken into consideration, with establishment of mechanisms to overcome them. Trade policies must be instruments for the promotion of development and come accompanied by instruments to protect labour, social and environmental rights. Social welfare and food security for our peoples cannot be submitted to the logic of trade competition, condemning our region to an eternal role as exporter of primary products in the agricultural and mining sectors, at the cost of sustainable development. It is completely unacceptable to use the super-exploitation of labour through child labour and discrimination against women as a factor in trade competition. The peoples of the European Union, Latin America and the Caribbean gain nothing from negotiations which try to play one bloc of countries off against another.

Creation of mechanisms which minimise international economic instability must take priority on the agenda for inter-regional and international cooperation. Financial liberalisation must be reversed with implementation of controls on the flux of international capital by means of a tax to control international investors for the benefit of our peoples. International cooperation must reject multilateral schemes for financial deregulation, such as the MAI, whether in the OECD or the WTO. Other forms of democratic control must be defined. A reduction of the burden of foreign debt for the least developed countries is fundamental if there is to be any genuine cooperation among our peoples. We consider positive the conversion of part of this debt into financing scholarship programmes aimed at the eradication of child labour. In the same way, the European union must carry out its commitment to channel 0,7 percent of its GNP to international development, and must ensure the social and solidarity dimensions in the uses of these resources. Rigorous controls on multinational companies must be defined in inter-regional agreements.

The bases for dialogue and cooperation between the European Union, Latin America and the Caribbean must take as their foundations democracy, participation, tolerance, respect for human rights, cultural diversity and peace amongst our peoples. Processes of integration are incompatible with violence and war, such as the war which NATO carried out against Yugoslavia. Peace and international security must be regulated and negotiated within the context of the United Nations. The Security Council must be reformed



to ensure greater democracy. In the same spirit, the blockade of Cuba is unacceptable and the Helms-Burton law is in contradiction with the right to self-determination of peoples.

It is necessary, albeit insufficient, to include democratic clauses in the agreements with the European Union, such as those in the agreement with Mexico. These clauses must be accompanied by effective mechanisms for the promotion of human rights. Mechanisms for social dialogue cannot be used as mere instruments to legitimise agreements which lack effective participation from our societies in the decision-making process. The construction of democratic governance based on citizen participation must be the starting point of any agreement. The men and women who are citizens of our countries must have the right to participate in the decisions and also the processes of formulating and implementing decisions and policies of cooperation. Parliaments and local government must be included in all steps of the negotiations.

Support for development must consider the most vulnerable groups in society. Eradication of child labour must be a priority task based on mechanisms and defined targets. Discrimination on the basis of gender is not compatible with social justice and development. Women constitute one of the sectors most exposed to the perverse consequences of globalisation. Cooperation must have as one of its objectives the definition of mechanisms able to promote gender equity in our societies. Migrant workers must be assured of access to labour rights wherever they may be employed. Our societies must be

committed to respect for the self-determination of indigenous peoples.

Preservation of bio-diversity and vital eco-systems is under threat by the logic of economic growth and unregulated trade since these facilitate access to irrational consumption of natural resources. Free trade is contradictory to the promotion of sustainable development and food security. The concentration of land and vital resources such as bio-diversity and water threaten the natural capital on which not only future generations depend but also numerous local communities and cultures. Trade in food products must take food security into consideration and eliminate the production of genetically altered food. Small-scale family production, which is the base of traditional local cultures, must be given specific attention in relation to the impact of integration. Cooperation between the European Union and Latin America and the Caribbean must establish social and environmental limits to growth, based on sustainability and equity.

The Civil Society Forum for Europe, Latin American and Caribbean Dialogue constitutes part of a larger process of articulation between social and labour organisations in Brazil and other countries of the Americas. It is called the Hemispheric Social Alliance. This unprecedented initiative emerged and is being consolidated as a response to the Free Trade Area of the Americas. We are convinced that organisations representing civil society need to formulate alternative agendas and proposals in counterpoint with the official processes, placing the social dimension as a fundamental priority. We

are convinced that the absence of channels for participation in the official agreement reduces the legitimacy of the decisions adopted. Parliaments and national governments themselves which have, until now, been submissive to the supposed

inevitability of globalisation, must react and reaffirm national sovereignty. Civil society must proceed, pressuring and formulating alternatives based on social justice, international solidarity and peace.

*Civil Society Forum for European, Latin American and Caribbean Dialogue
Encounter of Latin American Parliamentarians
Rio de Janeiro, June 29, 1999*



Elements of Regional Integration: The Way Forward

CRITICAL ISSUES IN CARIBBEAN DEVELOPMENT, NUMBER 6

Peter Wickham, Neville Duncan, Judith Wedderburn, Peggy Antrobus & Andaiye, Andrés Serbin, Francine Jácome, Kertish Augustus. Ian Randle Publishers in association with the Caribbean Policy Development Centre, Jamaica. ISBN 976-8123-75-3.

The book is a collection of seven articles and essays on the theme of Caribbean regional integration. Though not a new subject, the issue of regional integration has taken on a new impetus in recent times partly as a reaction to globalisation processes and the potential integration offers for the regional economic development of the States within the region.

The book is a good introduction to the institutional and administrative history and politics of Greater Caribbean regional integration processes and considers potential future developments. As is suggested in the introduction to the book by Mark Lee "they do not speak of political union, monetary or customs unions nor do they even remotely consider military strategising as Bolívar must have". Indeed, other

key elements of regional integration such as the potential differential economic and developmental impacts of the integration process are not considered. Rather, the book considers the political and international relations aspects of integrationist movements and focuses on intellectual strategies and the role and potential contribution of social movement groups and NGOs, which comprise the civil society sector within the integration process.

There is a lack of any grounded theoretical basis in many of the articles from perspectives such as the neoconservative, pluralist or post-Marxist. Each of which view the role, significance and meaning of civil society in different ways, as is noted by MacDonald (1997) in her book *Supporting Civil Society: The Political Role of*



Non-Governmental Organisations in Central America. From the neoconservatives perspective NGOs are seen as private sector actors, a view which some suggest advocates the privatisation of both democracy and development. The liberal pluralist perspective views the organisations of civil society as focal points for individual political participation countering the power of authoritarian States. The post-Marxists see NGOs as able to challenge State power in creative new ways through their links to the growth of social movements, allowing issues of power dynamics in households and women's participation in civil society to be addressed.

The chapters of this book are principally written by academics, NGO practitioners, and labour activists. A key theme running through many of the articles in the book is the political articulation between State, market and civil society and the potential for better governance and democratic development if mechanisms for the greater participation of civil society in the integration process can be achieved. All the papers seem to arrive at this similar general conclusion regarding the way forward, but for different reasons depending on the approach taken. The main approaches taken consider the issue of civil society involvement in regionalisation from the point of view of sovereignty, new models of democracy and governability, labour and social movements, gender and the regional democratic deficit posed by globalisation processes.

The first article by Peter Wickham entitled "Towards recapturing popular sovereignty in the Caribbean through integration" begins by considering the main characteristics of globalisation trends and discusses the means by which popular sov-

ereignty is being eroded in the Caribbean and how this loss disempowers local people and social movements. It suggests ways in which integration and the pooling of sovereignties might act to retard or even reverse this erosion. Central to this is the role of NGOs in participating in the integration process. The inclusion of their opinion along with that of government and the private sector is thought to increase the sovereignty of some of the more marginal sectors of society. The article discusses some of the shortcomings of NGO sector augmented governance as it exists, and future structures for NGO sector participation in Caribbean unity.

This latter theme is further developed by Neville Duncan in the following article entitled "Anglophone Caribbean non-State sectors in national integration: vital step in Caricom and Greater Caribbean integration". It considers the nature of the contributions of State, local government and non-state sectors in a new system of governance and how specifically the roles of these sectors could be combined nationally and regionally. However, given the structural and institutional limits the non-State sector demonstrates they should not be allowed to supersede the responsibility of the State for social welfare and development. The main point according to this author is that to produce better development and government the non-State sector needs to collaborate with the government in a new system of governance in order for the expertise and experience of the non-State sector to be released.

At the Greater Caribbean and international level the inability of non-State sector to come together with a common voice on a range of issues is noted, due to



the number and complexity of the different activity and interest groups in this sector. He considers that the only real answer to be the widening and deepening of regional networks of the non-State sector organisation by strengthening national co-ordination and integrative organisations.

The interesting vision of the way forward presented is one of the movement from national to regional organisations in order to reach national and then regional consensus on a range of issues from poverty eradication, trade and monetary union. At the national level the ideal suggested is of a national forum embracing central government, local government, business, labour, NGOs/CBOs, church and professional organisations. This would create a space for the articulation and possible integration of different interests and feed into the policy making process making the efforts towards regional integration both a bottom up as well as a top down process. The difficulties of this strategy are noted as being enormous and will need financial and human resources outside the capacity of existing NGOs to support. Despite the practical difficulties this also begs the question of which types of organisations are going to financially support such a development?

Judith Wedderburn's chapter describes the history, experience and role of NGOs working through the Caribbean Policy Development Centre (CPDC) against the background of institutional mechanisms of Caricom and Association of Caribbean States (ACS). It analyses how the interests of regional civil society might be best served through this regionalisation process. She considers how they have sought to have Caribbean NGOs recognised as social partners and given joint consultative status

along with trade unions and the private sector within Caricom. While governments agree that the NGO community should be represented they are yet to agree who this body should be.

It is suggested that with the tendency of the World Bank and international lending agencies to court NGO alliances, there is further need for NGOs to become more focussed by refining their practice and strengthening the theoretical and analytical basis of their work.

One consequence of globalisation and regional economic conditions noted is the growing cynicism with national governments as being the main channels through which the expression of demands and alternatives are presented. Thus NGOs are becoming more of a vehicle through which participation in decision making at different levels for people can be achieved. However, she warns that only with emergent regional civil society that is representative and internally coherent can it be a driving force in the regionalisation process. However, how this is to be achieved is not discussed.

The article by Peggy Antrobus and Andaiye looks at gender issues in regional integration and looks toward a vision of the future. This article is somewhat dated but included in this collection given that the gender message is as pertinent today as it was when it was written and since its recommendations were largely ignored by the commissioning agents. The article considers women in the popular process of regional integration, the nature of gender inequality and how it retards West Indian development, recommendations for action in support of gender equality and a vision towards a future Caribbean.

It points to the importance of a de-



velopment strategy which is anchored to the goal of meeting the needs and aspirations of the region's people, through participation and consultation at the community level and not just merely increasing the interests of small sectors of the population.

The article highlights women's central position in the family and their concerns for family relationships and survival. These "have led them to build on relationships of kinship and friendship to establish networks of mutual support which have helped them to cope with economic and social decline as well as the impacts of natural disasters". It is argued that these networks can provide sound foundations on which more formal structures of Caribbean integration might be built.

The vision to emerge from the regional women's movement is described as "a Caribbean integrated across language boundaries in a world where men and women work to transform the relationships and structures that perpetuate the subordination of nation, class, race and gender and the exploitation of the natural environment".

The article by Andrés Serbin entitled "Globalisation, democratic deficit and civil society in the Greater Caribbean integration process" considers the contradictory nature of globalisation and phenomenon that are antagonistic and fragmentary within its development. He traces the emergence of a global civil society, in opposition to and autonomous from the State, to the globalisation process. He considers the attempts and experience of emergent regional civil society in the Caribbean and Central America to limit and influence the decisions and interests between States and transnational corpora-

tions as a way of overcoming the overall democratic deficit posed by such processes. Having reviewed the organisation process of civil society in two sub-regions of the greater Caribbean and their achievements regarding participation in the regionalisation process he poses a series of tentative conclusions and also a series of questions for the future.

It is suggested that the greater participation of NGOs in the Caribbean than in Central America in the regionalisation process signifies a growing development of this sector, but not its participation beyond a consultative nature. While the growing presence of regional networks of social actors could promote a regionalisation from below (rather than from above) he notes the limited links regional civil society at present have with sub-regional political bodies such as the Caribbean and Central American Parliaments. The article closes with a series of questions regarding the extent to which sub-regional experiences can be channelled to overcome differences of history, language, ethnicity and political and social barriers in the formation of a regional civil society. He questions the extent to which these differences can give rise to common positions in defining mechanisms of participation in institutional regionalisation frameworks.

The article by Francine Jácome considers "Democracy and governability in integration and regionalisation processes in the wider Caribbean". It begins by reviewing the political theoretical literature on governability before addressing the question of how can changes be made which allow for greater governability within the framework of the current regional economic and political crisis. The article then raises Foley and Edwards (1996) "par-



adox of civil society" (p142), where the positive democratic effects on governability of civil societies role as a pressure group is contrasted against a potentially damaging situation where a strong politically independent civil society can create conflicts by putting forward interests and excessive demands on the State which are not consistent with democracy and governability of the political system.

She goes on to review literature on the recent political history of the wider Caribbean, and Central America from the perspective of democratic consolidation and governability in addressing the question on the prospects for democracy and its institutions in these regions in the longer term. She concludes that for Caricom countries the signs are not encouraging with the danger being that in economic development terms they may "become offshore appendages to the United States" pressurising social stability. For Central America with the 80s characterised by political negotiations in search of peace an important element in democratic consolidation is the emergence of popular social forces which have an influence on the political system. It is suggested that these emergent social forces, by changing the traditional alliances between the agricultural oligarchy, the military and external forces, should be encouraged in order to consolidate democracy and avoid the return to "reactionary despots" particularly in Nicaragua, Honduras, and Guatemala.

In discussing the question of what is the role of governability and democracy in integration and regionalisation, she concludes around a number of key needs. Apart from the need for new concepts and models of the State, there is a need to discuss

new mechanisms and institutions which will allow regional democratic governability, democratise integration through mechanisms and institutions allowing social actors greater participation through new channels and the consolidation of a regional identities which respects and tolerates diversity as a key aspect of unity.

The final article in the book is by Kerist Augustus entitled "The role of the Caribbean Congress of Labour and labour in regional integration". It considers the regional integration process from the point of view of the labour movement. It catalogues the policy statements by this organisation with regard to the type of regional integration they support, one in which the advances made by labour movement are not threatened and at least maintained in a more integrated region.

While the articles together make a good case for greater involvement of civil society in regional integration processes this is not surprising given it is published in association with the Caribbean Policy Development Centre. The articles mainly concern the external sectoral relations of civil society in relation to governmental organisations and the private sector in the integration process. More articles written from the perspective of other actors in this debate such as governmental and business groups would also have been of interest in this collection.

A further important element of the way forward mentioned but not addressed to any great extent in the book, is the highly differentiated internal composition of the NGO/civil society sector itself. While the immense problems of building regional civil society institutions from local and national organisations are noted by some authors, the limitations could have use-



BOOK REVIEW

fully been explored further. In order to play a greater role in the regional integration process alongside the other main actors, issues internal to the civil society sector itself also need to be addressed in relation to practices and structures, democracy, accountability, transparency, limitations and issues of external funding. The theme of the book is an important one and will

be of interest to politicians, government officials, NGOs, social movements, researchers, academics and students interested and involved in the Caribbean and wider Caribbean basin integration and regionalisation processes.

BRIAN LINNEKER



Contributors for this issue

ALVARO DE LA OSSA is a Costa Rican economist who has been a UN official (ECLAC, UNCTAD, UNDP) in Latin America, the Caribbean and Africa, and a university professor in Costa Rica, Guatemala, Mexico and Colombia. He is currently a member of the *Fundación Centroamericana para la Integración* (FCI), for which he has also served as president.

ROSALBA ICAZA is a young professor of international relations in the *Departamento de Estudios Internacionales* of Mexico's *Universidad Iberoamericana*, and author of various articles about civil society and its theoretical conception in international relations. She is currently collaborating in the Mexican *Foro de Apoyo Mutuo* research area, where she is in charge of the CRIES project "Regional Integration and Civil Society."

BRIAN LINNEKER has a PhD. from the London School of Economics and Political Science where he normally works as a lecturer, research officer and consultant. He is currently working in Nicaragua for the Commission for Information and Evaluation; Civil Coordination for the Emergency and Reconstruction of Nicaragua.

GERT J. OOSTINDIE studied history and social sciences at the Vrije Universiteit of Amsterdam and graduated at Utrecht. He directs the Department of Caribbean Studies at the KITLV/Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden, and hold a chair as professor of Caribbean studies at Utrecht University. He is the managing editor of the *New West Indian Guide*.

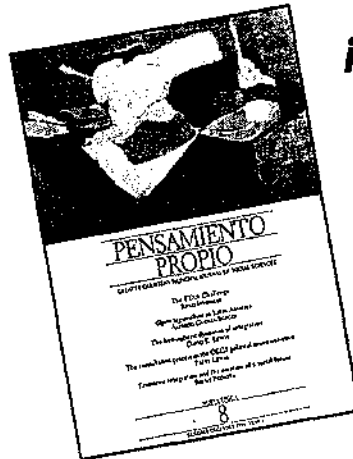
ANDRÉS SERBIN is an anthropologist and doctor of political science. He is president of the *Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)*, and of the *Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP)*, as well as head professor of political and economic sciences at the *Universidad Central de Venezuela*. He has published numerous books and articles on issues of security, international relations and inter-ethnic relations in the Caribbean and Latin America.

HEINZ R. SONNTAG is professor of sociology at the Venezuela's Central University. Senior researcher at *Centro de Estudios del Desa-*

rrollo, CENDES. Past president of the Latin American Sociological Association (*Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS*).

PETER VERTON is a sociologist. The author of several scholarly books and articles on politics in Curaçao and previously a professor at the University of the Netherlands Antilles, he has since continued his career as a consultant in the field of human resource management, working particularly in the Caribbean and Latin America. He has conducted many research projects in the Netherlands Antilles and Aruba.

blicado numerosos artículos y libros sobre temas de seguridad, relaciones internacionales y relaciones interétnicas en el Caribe y en América Latina.



CRIES / Pensamiento Propio
Apartado 3516
Managua, Nicaragua
Tels: (505)268- 2362, 268-2367
Fax: (505)268-1565
cries@nicarao.org.ni

¡No lo piense más! ¡Piense con Pensamiento Propio!

Pensamiento Propio, la revista bilingüe de análisis socioeconómico sobre la región del Gran Caribe, es una publicación semestral de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)

Suscripción anual, incluyendo gastos de envío
Centroamérica, México y el Caribe US\$ 30
EEUU, Canadá y América del Sur US\$ 31
Europa US\$ 36
Asia y Australia US\$ 38

***SUSCRIBASE HOY Y AHORRE...
RECIBA 6 POR EL PRECIO DE 3***